

Ciudades VS multinacionales



ENCO
EUROPEAN NETWORK OF
CORPORATE OBSERVATORIES



ritimo

Ciudades VS multinacionales

La Colección Passerelle

La colección Passerelle nació en el marco de la Coredem (Comunidad de Sitios de Recursos Documentarios para una Democracia Mundial), un espacio para compartir conocimientos y prácticas para y por los actores del cambio. Tiene como objetivo poner en debate temas de actualidad, a través de análisis, propuestas y experiencias basados en trabajo de terreno y de investigación. Cada número dialoga, en un tema dado, con contribuciones de asociaciones, ONGs, movimientos sociales, medios de comunicación, sindicatos, investigadores, etc. Todos los números están disponibles en la página: www.ritimo.org Y se pueden descargar gratuitamente en el sitio: www.coredem.info

Ritimo, el editor

La asociación Ritimo es editora de la colección Passerelle. Ritimo es una red de información y documentación para la solidaridad internacional y el desarrollo sostenible. En 75 puntos en Francia, Ritimo acoge al público, difunde campañas ciudadanas y propone eventos y formaciones. Ritimo está comprometido con la producción y difusión de una información plural y crítica, que privilegia las fuentes asociativas, alternativas y autónomas.

Los coordinadores de la publicación

ENCO (European Network of Corporate Observatories) es una red europea de organizaciones de la sociedad civil y de medios, dedicadas a investigar empresas transnacionales y el poder corporativo.
<https://corpwatchers.eu>

Corporate Europe Observatory (CEO), basado en Bruselas, es un grupo de investigación y de presión que trabaja para desvelar el acceso privilegiado y la influencia de las grandes empresas y sus lobbies en las instituciones europeas.
<https://corporateeurope.org>

Transnational Institute (TNI), basado en Amsterdam, es un instituto internacional de investigación y promoción de políticas que trabaja por un mundo más justo, democrático y sostenible.
<https://www.tni.org>

Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), basado en Barcelona, está dedicado al análisis crítico de procesos complejos y/o estructurales, para mostrar los impactos y riesgos visibles (y no visibles) del sistema económico y político.
<https://odg.cat>

L'Observatoire des multinationales, basado en París, es una página de investigación, difusión y referencia acerca de las multinacionales francesas, y más allá, sobre la democracia económica.
<https://multinationales.org>

Introducción

En todo el mundo, y sobre todo en Europa, las ciudades se han convertido en un importante campo de batalla contra el creciente poder de las multinacionales y los males que estas acarrearán a la sociedad y al medio ambiente.

Este hecho se hace más patente en sectores urbanos tradicionales, como la construcción y los servicios públicos, pero también en el sector turístico, cada vez más destructivo, en las “irrupciones” causadas o programadas por las multinacionales tecnológicas y negocio de plataforma, y en la adquisición de espacios vitales de nuestras ciudades con fines especulativos. También se hace evidente en los innumerables obstáculos que las multinacionales y sus aliados ponen a los ayuntamientos, comunidades, movimientos sociales y grupos urbanos que buscan abordar la emergencia climática con acciones decisivas o crear alternativas para ofrecer servicios básicos, proteger derechos o garantizar suministros resilientes de energía o alimentos.

Desde la privatización del agua hasta Airbnb y Uber, pasando por la lucha contra la contaminación provocada por el diésel y el tráfico, hasta el fomento de una economía “relocalizada” —que no suponga otra vía para llenar los bolsillos de accionistas remotos—, en Europa se está gestando una batalla que enfrenta a las ciudades y a la ciudadanía contra multinacionales y el poder del mundo financiero.

También es una lucha de la que cada vez son más conscientes las ciudades y los movimientos urbanos que buscan aunar fuerzas a través de redes y alianzas para intercambiar experiencias y desarrollar estrategias comunes. El movimiento “municipalista”, particularmente fuerte en el Estado español, pero ya presente en todo el planeta, plasma perfectamente esa conciencia (aunque es un término que no todos los grupos y personas incluidos en esta colección de artículos usarían de manera espontánea).

Esta publicación pretende ofrecer una mirada holística del enfrentamiento entre ciudades y el poder de las multinacionales, que está teniendo lugar en muchos sectores y de distintas maneras. Incluye artículos escritos por activistas, periodistas,

personas funcionarias y personal docente universitario de diferentes países europeos. Cuenta historias de resistencia y construcción, de un despertar colectivo y de movimientos ciudadanos, de líderes políticos y sociales que han demostrado su valor. No son solo historias de alcaldes, alcaldesas y ayuntamientos, sino también historias de movimientos sociales urbanos, grupos de la sociedad civil organizada, comunidades y personas trabajadoras empobrecidas que han decidido posicionarse y reclamar su “derecho a la ciudad”. Nos hemos limitado a Europa por razones prácticas y para destacar la experiencia que vienen compartiendo algunas ciudades de este continente en los últimos años. Obviamente, hay historias como estas, o parecidas, en todos los rincones del planeta.

Somos conscientes de que “ciudades” es un término muy controvertido, desde un punto de vista tanto científico como político. Cuando hablamos de ciudades, no nos referimos a su designación administrativa o configuración urbana, sino que las definimos como un espacio político de lucha y articulación de mayorías sociales que, en la era actual, ha facilitado la estructuración de nuevas prácticas y formas de frenar el poder de las multinacionales. También somos conscientes de hasta qué punto dependen las ciudades de la obtención de recursos del mundo rural. No se pueden idealizar las ciudades como un espacio de transformación política sin realizar un análisis que tenga en cuenta esta realidad.

Por último, esta publicación versa sobre el enfrentamiento que existe entre democracia y poder corporativo. En Europa está cobrando fuerza la sensación de que el sistema político actual, basado en el modelo de controles y contrapesos heredado de las revoluciones liberales, ha perdido su legitimidad. Las multinacionales y su influencia política y económica sin precedentes carecen de unos mecanismos válidos de responsabilidad y rendición de cuentas en los actuales procesos de toma de decisiones de nuestras democracias. Ese poder desmesurado tiene enormes consecuencias en nuestra forma de vivir como personas individuales y como habitantes urbanos, así como en nuestra capacidad de decidir colectivamente para conducir nuestras expectativas e intereses comunes.

Democracia versus austeridad

¿Por qué se han convertido las ciudades en un campo de batalla tan crucial? Buena parte de la respuesta tiene que ver con la crisis económica internacional que estalló en 2008 y sus impactos en Europa. Debería haber sido una oportunidad de frenar el poder de las corporaciones y los grupos financieros, de obligarles a rendir cuentas y cumplir con las normas democráticas y las necesidades sociales. Sin embargo, acabó convirtiéndose en una oportunidad para que no solo ampliaran su influencia incontrolada sobre instituciones nacionales y de la Unión Europea (UE) —argumentando una consolidación fiscal, creación de puestos de trabajo y capacidad competitiva—, sino también para desvirtuar todo lo que se les pusiera por el camino: derechos básicos, el gasto social, el sector público y la propia democracia... como quedó claro en Grecia.

Sin embargo, la crisis también creó un espacio para que la gente se organizara y se moviera hacia un objetivo común de cuidarse entre sí y se opusiera a las medidas de austeridad impuestas que venían de la mano de una creciente precariedad de los servicios públicos y las condiciones laborales. Fue en la calle, a nivel local, donde las consecuencias de esas medidas de austeridad se hicieron más evidentes. Los políticos locales, como suelen sentir una mayor responsabilidad democrática ante las personas de a pie que los distantes tomadores de decisiones asentados en Bruselas o en las capitales nacionales, no podían ignorar las inevitables consecuencias humanas y sociales de esas políticas, que afectaban especialmente a las mujeres, a las personas migrantes y a las poblaciones más vulnerables. Así, muchos ayuntamientos y movimientos sociales pasaron a ser baluartes democráticos de la lucha contra la austeridad y el neoliberalismo.

A partir del año 2011, las plazas de ciudades de todo el mundo, desde Egipto hasta el Estado español y los Estados Unidos, se convirtieron en lugares de concentración de la ciudadanía que protestaban contra los gobiernos despóticos y corruptos, las ganancias ilegítimas de las corporaciones y el principal problema de fondo: la gran confabulación entre las autoridades públicas y los intereses privados. Este movimiento urbano internacional sigue vivo, desarrolla propuestas centradas en las personas y el entorno y se opone al poder corporativo, a veces, ganando poder a nivel local y desarrollando programas “municipalistas” (como viene sucediendo en el Estado español desde 2015).

Una vez más, esto se hizo evidente en la llamada “crisis de refugiados”, cuando ciudades y gente de todo el continente tuvieron que intervenir para ofrecer refugio y defender una Europa inclusiva y solidaria, mientras la mayoría de los gobiernos nacionales se dedicaban a perseguir y criminalizar a migrantes, bien abiertamente o de maneras más hipócritas.

Aumento de las presiones

Al mismo tiempo, tras la crisis económica, hubo un aumento espectacular de las presiones económicas y corporativas sobre las ciudades. Se hizo que el peso de la deuda recayera en muchas de ellas, una medida que se empleó como mecanismo de extorsión para reducir drásticamente sus recursos y su margen de maniobra. Se las forzó a vender bienes, privatizar servicios y reducir el gasto. A la vez, el sector financiero dirigió la atención a nuevas formas de crecimiento tales como promociones inmobiliarias, grandes proyectos de infraestructuras y un sector turístico en auge, lo que tuvo consecuencias nefastas para el coste y la calidad de vida en muchas ciudades, particularmente en la periferia europea. Vecinos y ayuntamientos tuvieron que enfrentarse a unos nuevos y poderosos actores globales que contaban con el apoyo de gobiernos nacionales y organizaciones internacionales. Todos defendían el mismo paradigma que enfrentaba a las ciudades entre sí para atraer a “inversores” y “talento”, y ser “interesantes” y “competitivas”.

Entraron en escena nuevos actores, las empresas de plataforma y big tech y, una vez más, las ciudades volvieron a ser un objetivo clave para empresas como Airbnb, Uber, Deliveroo, Google y Amazon. Todos sus modelos empresariales se basan en destruir y sustituir a los actores económicos locales consolidados, sortear las normativas locales y convertirse en las fuerzas que definan la vida en las ciudades, dictando cómo se mueve la gente, qué come, dónde vive, cómo trabaja y qué hace. Los de mayor peso también promocionaron su visión de “ciudad del futuro”, privatizada y con una fuerte presencia de tecnología patentada, a través de sus centros, oficinas y sedes distribuidas por todo el planeta. De nuevo, muchas veces estos gigantes digitales contaban con el respaldo de los gobiernos nacionales, dejando a las ciudades lidiar con las consecuencias.

Creación de alternativas

Sean nuevas o las de toda la vida, las multinacionales que invaden las ciudades están haciendo muy poco por abordar los crecientes problemas medioambientales que van acumulándose en todo el mundo y cuyo efecto ya se hace sentir en esas mismas ciudades: olas de calor o contaminación del agua y del aire, entre otros. Los proyectos de infraestructura, el turismo y la economía digital acarream un consumo aún mayor de recursos y la generación de ingentes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero. La apropiación empresarial de muchos gobiernos nacionales e instituciones supranacionales (mediante puertas giratorias, lobbies financiados por multinacionales, centros de pensamiento o think tanks, medios de comunicación y, a menudo, la financiación directa de partidos políticos) ha impedido que se adopten medidas decisivas para abordar la emergencia climática. Muchas veces, a las ciudades no les ha quedado más remedio que tomar ellas mismas la iniciativa para proteger el interés público general. Esto también demuestra que muchas soluciones reales a cuestiones climáticas y medioambientales son, en realidad, intrínsecamente locales.

El fomento de una transición hacia unos sistemas energéticos democráticos y descentralizados, la prohibición o reducción de sistemas de movilidad contaminantes, el desarrollo de un suministro de alimentos locales, orgánicos y justos, en pro del objetivo “basura cero”, o la regulación del mercado de alquiler y las multinacionales big tech, son algunas de las políticas introducidas por muchos ayuntamientos, bien por iniciativa propia o en respuesta a la presión ciudadana. Las más de las veces, estas políticas representan una amenaza directa para el modelo empresarial establecido de las grandes corporaciones, que toman medidas activas para intentar desbaratarlas presionando a las instituciones nacionales y de la UE o recurriendo a los tribunales.

Remunicipalización y relocalización

Muchas de las historias mencionadas en esta publicación tienen un elemento común: la necesidad de cambiar de rumbo y avanzar hacia la “relocalización” de nuestras

economías. Durante muchos años, la deslocalización ha sido la tendencia predominante, es decir, se ha optado por poner las propiedades o servicios públicos en manos de empresas privadas, intentar atraer a inversores extranjeros o cadenas de distribución internacionales, o realizar contrataciones públicas al precio más bajo posible, sean cuales sean las consecuencias sociales y medioambientales. Todo esto ha generado un goteo (a veces un torrente) de dinero para corporaciones lejanas, incluso para sus accionistas más distantes, a menudo domiciliadas en paraísos fiscales, y ha dado lugar a que las ciudades dependan del capital extranjero. En un contexto de austeridad y crisis climática, cada vez es más evidente que este modelo ya no es viable.

Por esa razón, muchas ciudades pioneras, como Preston, en el Reino Unido, han optado por “redirigir” sus contrataciones públicas para favorecer a las cooperativas y negocios locales, ofreciendo mejores condiciones sociales y medioambientales. Y también por esa razón, otras ciudades pioneras han decidido “remunicipalizar” sus servicios públicos y fijarse unos objetivos sociales y medioambientales, sin la presión de tener que generar beneficios económicos. Es el caso de París y muchas otras ciudades de Europa y el resto del mundo. A menudo, los nuevos modelos innovadores desarrollados por ciudades, comunidades y actores locales para mejorar su entorno y reducir el impacto medioambiental van de la mano con dicha relocalización de la economía, bien mediante el desarrollo de un sistema local de separación de residuos (que no sea una incineradora), colaboraciones con el sector agrícola local para proteger la calidad del agua y contar con productos de calidad (en vez de depender de cadenas internacionales de suministro y costosas depuradoras), o la creación de proveedores y productores de energía que sean de titularidad municipal o ciudadana, para evitar depender de gigantes corporativos ansiosos por entorpecer la transición y favorecer grandes proyectos energéticos que cuentan con importantes subvenciones.

Enfrentando las limitaciones del poder municipal

En toda Europa, ciudades y residentes han aceptado el reto de trabajar por la justicia climática y un cambio social progresivo, pero no se puede ignorar el hecho de que tienen muy poco poder, aunque estén al frente de los ayuntamientos; sus adversarios son increíblemente poderosos. La presente publicación también se basa en las lecciones aprendidas, en este caso, con las experiencias de las “ciudades rebeldes” o las “ciudades de cambio” en el Estado español. Las nuevas plataformas municipalistas que llegaron al poder en Barcelona, Madrid y muchas otras ciudades, enseguida han tenido que afrontar un número creciente de demandas sociales y las limitaciones de su verdadero poder. Se enfrentan a gigantes corporativos internacionales con muchísimos más recursos y sin ningún reparo en imponer sus intereses. Peor aún, los responsables políticos y las regulaciones nacionales y de la UE están posicionándose a favor del sector privado y contra dichas plataformas.

Con diferentes matices, sucede lo mismo en todas las ciudades dentro y fuera de Europa. Hacerse con el poder a nivel local no sirve de mucho si todas las normativas nacionales e internacionales buscan limitar tu margen de maniobra y favorecer los intereses corporativos. Por ejemplo, los reglamentos de la UE sobre contratación pública, incluso después de su reciente revisión para incluir unos objetivos sociales y medioambientales, siguen obstaculizando todo intento de fomentar el desarrollo económico local, o *community wealth building*, como lo llaman en Preston. Pasa lo mismo con los acuerdos de libre comercio. Airbnb ha logrado que un tribunal de la UE fallara a su favor, evitando así que las ciudades puedan, de algún modo, regular sus actividades. Los círculos financieros y empresariales conocen muy bien el peligro potencial de las políticas progresistas a nivel municipal para sus intereses, y están al contraataque. Actualmente, la Comisión Europea (CE) está planeando hacer una revisión de la Directiva sobre servicios que podría dar lugar a más limitaciones y obstáculos para los ayuntamientos que buscan remunicipalizar sus servicios públicos, regular los abusos de las corporaciones o desarrollar políticas innovadoras en materia social y medioambiental.

Por suerte, las ciudades y comunidades no tienen por qué trabajar cada una por su lado. A través de redes e iniciativas comunes, están aunando fuerzas y cada vez tienen más ganas de llevar la lucha a nivel nacional y europeo para cambiar la legislación y profundizar su espacio democrático. También están creando alianzas con otras fuerzas que se encuentran plantando cara al modelo liderado por las multinacionales, por ejemplo, con movimientos sociales, defensores de los comunes y el sector económico social y solidario. Las ciudades, en su esencia, son un espacio donde la gente puede juntarse en torno a unos intereses y aspiraciones comunes. Si queremos tener la oportunidad de acabar con el dominio de un sistema social y económico cada vez más destructivo, es importante que no lo olvidemos.

Contenidos

Introducción 5

RESISTIR 14

#RavalVsBlackstone

El "derecho a la ciudad" contra el poder financiero-inmobiliario y la industria turística 15

MAX CARBONELL

Ciudades y activistas alemanes se rebelan contra la industria del automóvil 26

DÉBORAH BERLIOZ

"¿En qué se ha convertido Dubrovnik?"

Un campo de golf, los acuerdos de libre comercio y la lucha por el alma de una ciudad 35

IGOR LASIĆ

Recuadro: Airbnb presiona en Bruselas: o de cómo doblegar a las ciudades desde arriba 44

KENNETH HAAR

Deuda

El grillete que aprieta al municipalismo 45

YAGO ÁLVAREZ

"Paremos el 5G"

Ciudadanos, médicos y jueces se oponen en una Italia obsesionada con los teléfonos móviles 55

MARIA MAGGIORE

De la negativa pública al interés privado

¿De verdad necesita Belgrado una costosa incineradora de construcción privada? 62

BENOÎT COLLET

Gigantes tecnológicos, industria del armamento y privatizadores	
<i>La lucha contra la smart city en Francia</i>	68
OLIVIER PETITJEAN	

<i>Recuadro: El barrio berlinés que echó a Google</i>	77
RACHEL KNAEBEL	

RELOCALIZAR **79**

El "modelo Preston"	
<i>Una ciudad británica pionera en contratación pública progresista</i>	80
HAZEL SHEFFIELD	

Loos-en-Gohelle: del carbón a las renovables	
<i>¿Tiene futuro una pequeña ciudad sin recursos?</i>	89
MAXIME COMBES	

<i>Recuadro: Rennes, la ciudad francesa que protege sus aguas impulsando la agricultura local</i>	98
BARNABÉ BINCTIN	

Ciudades escaparate, ciudades plaza	
<i>Una visión de Barcelona construida sobre la solidaridad</i>	101
GUERNICA FACUNDO	

Buenas noticias desde el borde del abismo	
<i>La historia de Horní Jitín, una humilde localidad del norte de Bohemia, que desafió a la industria del carbón</i>	110
RADEK VRABEL	

Transición energética	
<i>Un pequeño distrito alemán señala el camino</i>	116
DÉBORAH BERLIOZ	

Ciudades con causa	
<i>¿Podría la normativa de la UE ser un obstáculo al avance de la contratación pública progresista?</i>	122
OLIVIER HOEDEMAN	

<i>La contratación pública del Ayuntamiento de Barcelona, propuestas para asumir la responsabilidad extraterritorial y actuar ante la vulneración de los derechos humanos y del medio ambiente en el Sur Global</i>	133
MÓNICA VARGAS, LINA MARÍA GONZÁLEZ	

(RE)MUNICIPALIZAR 136

- Dejando atrás la privatización del agua**
París, Grenoble y la llegada del movimiento por la remunicipalización del agua en Francia 137

OLIVIER PETITJEAN

- Ciudades contra poderes establecidos**
Neomunicipalismo en Nápoles 146

ELEONORA DE MAJO

- Las luchas feministas en defensa de la vida en las ciudades**
Quitar los servicios de cuidados de las manos corporativas 151

BLANCA BLAYAS

- Los ciudadanos de Berlín en pie de guerra por el derecho a la vivienda** 160

RACHEL KNAEBEL

- Apagar el oligopolio eléctrico en el Estado español**
Tres propuestas para dismantelar el poder corporativo de las grandes eléctricas españolas 166

ALFONS PÉREZ

- Los nuevos "granjeros municipales" de Francia** 172

BARNABÉ BINCTIN

MÁS ALLÁ : PERSPECTIVAS SOBRE EL MUNICIPALISMO 181

- Municipalismo público-comunitario para la defensa de los bienes comunes** 182

LAIA FORNÉ

- Democracia local y feminismo: herramientas claves contra el neoliberalismo** 192

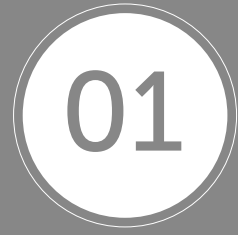
NURIA ALABAO

- Autores** 195

- Bibliografía** 197

- Sitografía** 198

- Los últimos números de la colección Passerelle** 199



RESISTIR

#RavalVsBlackstone

El “derecho a la ciudad” contra el poder financiero-inmobiliario y la industria turística

MAX CARBONELL

Barcelona se ha convertido en uno de los objetivos clave, y víctima, de la industria mundial del turismo y la propiedad, impulsada por empresas financieras como Blackstone. A pesar de ello, los y las habitantes y los movimientos sociales se están defendiendo.

Contaba el SubComandante Marcos del Ejército de Liberación Nacional (EZLN), un año después del levantamiento contra el Estado mexicano 25 años atrás, en una carta que le mandó al (ahora) difunto Eduardo Galeano, que “uno es tan grande como el enemigo que escoge para luchar, y que uno es tan pequeño como grande el miedo que se tenga. Elige un enemigo grande y eso te obligará a crecer para poder enfrentarlo. Achica tu miedo porque si él crece, tú te harás pequeño”. Más de 25 años más tarde, en el barrio El Raval de Barcelona, uno de los más empobrecidos de la ciudad y bajo una enorme presión gentrificadora, una pequeña comunidad de vecinas que luchan desde el movimiento por la vivienda en el Sindicat d’Habitatge del Raval (SHR)¹, escogieron también a un gran enemigo —Blackstone— y demostraron lo grandes que eran.

La especulación financiero-inmobiliaria se esconde bajo el rostro oscuro y difuminado de fondos buitres como el gigante Blackstone, la multinacional con más propiedades —o “activos financieros”— del mundo. Blackstone desembarca los últimos años en la ciudad cargado de capital internacional y compra muchas propiedades, la mayoría a bajo precio de mercado. Una de ellas es un edificio en el que viven unas 10 familias desde hace años. Lo compra como un activo financiero

[1] <https://twitter.com/ravalsindicat?lang=es>



FOTOMOVIMIENTO, CC BY-NC-ND

con el que pretende especular y para ello se dispone a echar a las familias para así poder venderlo —o realquilarlo— a precios mucho más altos. La historia de siempre, unos pocos ganan mucho y la mayoría es la que pierde mucho. Pero esta vez se toparon con un barrio bien organizado que les plantó cara.

El reto era grande: Blackstone había conseguido un desahucio abierto, una práctica de cuestionada legalidad que han comenzado a imponer algunos jueces ante la efectividad de la desobediencia civil para parar los desahucios. Consiste en establecer una orden de desahucio por un período de quince días o más, en vez de señalar un día y hora concretos, lo que complica enormemente la convocatoria a gente para evitarlo y favorece a la propiedad.

Una victoria contra un gigante del mundo financiero

Sin embargo, las vecinas del SHR decidieron pasar a la ofensiva y hacer una gran campaña también “abierta” durante esos quince días para forzar una negociación y conseguir que las vecinas afectadas se quedaran en el edificio. Así nace la campaña #RavalVsBlackstone², que movilizó al barrio El Raval y a todo el movimiento popular por la vivienda de la ciudad. Comunicativamente, se usó un lenguaje descarado, irreverente, popular, “de barrio” —y se difundió a través de vídeos, ruedas de prensa y multitud de artículos—, que tuvo más impacto en la gente más joven que la retórica tradicional. Ocuparon la calle durante las dos semanas en defensa preventiva y la llenaron de programación cultural y musical gracias a la solidaridad de artistas y colectivos. Se presionó al gobierno municipal de Barcelona en Comú (BEC) con la campaña #BlackstoneEnComú³ para forzar su implicación, y se consiguió el apoyo público de varios partidos y representantes⁴. Además, se

[2] <https://twitter.com/hashtag/RavalVsBlackstone>

[3] <https://twitter.com/hashtag/BlackstoneEnComú>

[4] Estos incluyen al presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, o a la Relatora Especial de Naciones Unidas para la vivienda adecuada, Leilani Farha.

hicieron manifestaciones y acciones de presión directa —escraches— sobre directivos de la compañía en los barrios altos, e incluso manifestaciones de solidaridad en ciudades como Londres o Berlín.

Solidaridad y trabajo en red: Raval-Barcelona-Mundo. Sin perder esta perspectiva, se buscó una victoria que tuviera impactos concretos en la vida de las familias y que reforzara a la vez al movimiento en su conjunto. ¡Y se ganó!⁵ Blackstone tuvo que negociar y aceptar que las familias se quedaran pagando un alquiler social, que en parte financiará también el Ayuntamiento. La victoria del SHR fue la victoria de las clases populares en un barrio maltratado de una ciudad acosada por la especulación. Fue la victoria de un movimiento que ha trabajado mucho y que, sin olvidar de donde viene, se atreve a ensayar nuevas formas de lucha, que acepta las contradicciones con una ética que nos recuerda a la de los zapatistas y su dignidad rebelde. Ha sido una victoria de una grandeza tal como la del enemigo que escogieron.

Las ciudades, campo de batalla entre el capital y la vida

Este conflicto local —concreto— se inserta en dinámicas globales de fondo que hacen que las ciudades concentren cada día más valor económico y que en ellas viva cada vez más gente (hay previsiones de que en 2050 las ciudades acojan al 68 por ciento de la población mundial). <https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html>. No sorprende, pues, que hoy en día muchos de los conflictos “capital-vida” se den en las ciudades, espacios cada vez más grandes de desposesión; pero tampoco sorprende que en ellas se hagan fuertes las luchas de resistencia y construcción de alternativas (Lefebvre, 1975; Harvey, 2007; Purcell, 2014).

David Harvey, reflexionando sobre esto en un artículo publicado tras la crisis de 2008, invocaba el “derecho a la ciudad” como derecho colectivo que tiene toda la ciudadanía a (re)definir las ciudades con libertad, a (re)tomar el control colectivo y democrático sobre ellas y sus recursos, cada vez más en manos del capital financiero global (Harvey D, 2008; IDHC, 2011). Harvey ponía como ejemplo la ciudad de Nueva York, que en las últimas décadas ha sido re-diseñada conforme a los intereses del capital autóctono y transnacional, y señalaba a personajes como el multimillonario Michael Bloomberg, que además de empresario fue su alcalde de 2002 al 2013. Él representa a una pequeña élite político-económica que promueve la ciudad como destino turístico y de negocios y que concibe este “derecho a la ciudad” solo para sí mismo.

De todos modos, Nueva York, bajo la lógica del sistema capitalista, no es muy diferente de lo que son actualmente Londres, París, o Barcelona. Son oportu-

[5] <https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20190715/blackstone-acepta-regularizar-seis-de-los-nueve-pisos-okupados-en-hospital-99-7554414>

nidades de negocio, espacios dónde especular con la vivienda para obtener alta rentabilidad sin importar lo que ello implique a sus vecinas. Y es en estas ciudades donde el conflicto aflora en forma de subidas de alquileres desorbitadas y desahucios constantes, con espacios públicos saturados de turistas y ruido, con procesos de gentrificación que suben el coste de la vida hasta niveles insostenibles, y con trabajos en condiciones cada vez más precarias y sueldos a la baja.

Tras todo esto encontramos el binomio que conforman el negocio turístico con el inmobiliario, ambos con dimensiones —e impactos— globales muy importantes. El peso del sector inmobiliario, por un lado, quedó patente tras desencadenar la crisis financiera global en 2008. Una década después, los procesos de especulación financiero-inmobiliaria que la

desencadenaron siguen aún en marcha, aunque bajo nuevas formas o mecanismos de financierización de la vivienda, como la burbuja de los alquileres, y con nuevos actores multinacionales como Airbnb o la misma Blackstone (RLS, 2018; Fresnillo, 2019). La industria turística global, además de la devaluación de salarios y la precarización creciente de las personas trabajadoras, ha sido uno de los motores de la (falsa) recuperación de la economía tras la crisis en el Estado español, y ha adquirido un peso económico y social cada vez mayor⁶.

The Blackstone Group

Activos gestionados: 554.000 millones de dólares (septiembre de 2019)

Presidente: Stephen A. Schwarzman (CEO y presidente)

Sede central: Nueva York, EE.UU.

Fundación: 1985

Sectores: finanzas, bienes inmuebles

Empleados: 2500 (2018)

Datos clave:

* El CEO Stephen A. Schwarzman es simpatizante y socio de Donald Trump. Financió su campaña y presidió el “Foro de Estrategia y Políticas” (Strategy and Policy Forum por su sigla en inglés) de Trump, entre 2016 y 2017.

* Los activos administrados por Blackstone se han multiplicado por cinco desde la crisis económica de 2008. Ello le ha permitido adquirir propiedades inmobiliarias a precios bajos y ejercer la especulación financiera que los grandes bancos estaban abandonando debido a los riesgos.

* En un informe de marzo de 2019, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la vivienda adecuada, Leilani Farha, criticó directamente a Blackstone por su papel en la crisis mundial de la vivienda y por sus métodos agresivos en Estados Unidos y varios países europeos.

Los fondos buitres y los especuladores inmobiliarios detrás de la industria del turismo

Estamos ante un escenario en el que ciudades de todo el mundo compiten unas con otras en el mercado global por más turismo y más negocio financiero-inmobiliario

[6] (Ill-Raga M, 2019)

(y sus derivados). No es casualidad, pues, que el World Travel and Tourism Council (WTTC) publique con la segunda mayor empresa de servicios inmobiliarios del mundo, JLL, un informe titulado *Destination 2030. Global Cities' Readiness For Tourism Growth*⁷ donde presenta, selecciona y clasifica en diferentes categorías 50 ciudades del mundo según sus opciones de crecimiento turístico, y Barcelona está entre ellas. Traducido: venden ciudades, venden nuestra ciudad a posibles inversores del sector turístico e inmobiliario. Y no se acaba aquí. El mismo WTTC, presenta otro informe⁸ en el que expone como la emergencia y consolidación del capitalismo de plataforma tiene un papel importante en la industria turística.

El ejemplo de Airbnb es aquí paradigmático: se trata de una multinacional que con su modelo de negocio ha propiciado la especulación inmobiliaria de la mano del auge turístico y que es responsable, como sugieren diferentes estudios, de subidas de alquileres en ciudades como Barcelona (García-López, 2019). De hecho, cada vez más puestos de trabajo caen bajo el paraguas de estas plataformas y hay predicciones que apuntan a que en pocos años más de la mitad de las personas trabajadoras en EEUU ya formarán parte de la *independent workforce* —serán (falsos) autónomos—, con todo lo que esto supone en cuanto a precariedad laboral y desigualdades asociadas (Fontana J, 2019). Hablamos, pues, de un conflicto global con dimensión de clase que enfrenta a ciudadanos y personas trabajadoras frente al capital internacional y sus intereses.

El Estado español, tras su incorporación a la Unión Europea (UE) y una pérdida de competitividad industrial y agrícola, se ha ido especializando cada vez más en la producción urbano-turística, situándose en el centro del capitalismo financiero-inmobiliario y turístico a escala global. Ante una creciente competitividad interterritorial, el turismo se ha convertido en una de las principales estrategias de acumulación del capital para salir de la crisis (Murray I, 2015). Y ha sido así no solo en zonas turísticas litorales o a golpe de megaproyectos urbano-turísticos, sino también en muchas ciudades que han sido convertidas en mercancía turística. Barcelona y la #MarcaBarcelona constituyen un ejemplo paradigmático (Murray I, 2014). El modelo que empezó a tomar fuerza con los Juegos Olímpicos del 92 la ha ubicado como una de las principales ciudades turísticas europeas junto a Londres, París o Berlín.

Actualmente, es el principal destino de cruceros del Mediterráneo, su aeropuerto es el séptimo de Europa con más de 55 millones de pasajeros al año, y ha pasado de tener 3,7 millones de pernoctaciones en 1990 a más de 31 millones en 2016. Y los números crecen; las consecuencias y los impactos, también. En El Raval, barrio sujeto a gran presión turística y gentrificación, las vidas de vecinos y vecinas han empeorado: se pierde el tejido comunitario, los precios de los alquileres se

[7] <https://www.wttc.org/publications/2019/destination-2030/>

[8] <https://www.wttc.org/publications/2019/megatrends-2019/>

disparan, el comercio se orienta y especializa en el turismo, la contaminación ambiental y acústica es insoportable, la movilidad es más densa y difícil, etc. Sin embargo, los vecinos le hacen frente de forma creciente: paran desahucios a diario, recuperan espacio público con acciones o consiguen el cierre de pisos turísticos que no les dejan dormir y que generan inseguridad constante.

Fondos buitres, multinacionales de servicios, grandes empresas inmobiliarias o de viajes y bancos, con la complicidad directa de los principales poderes internacionales (UE, BM, FMI) y estatales, están detrás de este conflicto (o guerra) con dimensión sistémica. Blackstone es un ejemplo, pero hay otros como Divarian, que tiene relación directa con bancos como el BBVA. En todo caso, su forma de operar es similar: buy it, fix it, sell it (cómprelo, arréglole, véndalo). Gracias a figuras como las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMIs) o reformas/leyes favorables como la de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), compran edificios, expulsan a su gente y los venden o realquilan para sacar grandes márgenes de beneficio pagando impuestos irrisorios.

Se trata de un problema global que hunde sus raíces en las dinámicas profundas del sistema, pero necesita de colaboradores y ejecutores. La lista de nombres vinculados al desarrollismo urbanístico de Barcelona de las últimas décadas es larga. En ella encontramos a políticos de diferentes colores sentados junto a banqueros, empresarios hoteleros o promotores inmobiliarios⁹. Una íntima relación entre lo público y lo privado que está explícitamente presente en organismos importantes como Turisme de Barcelona¹⁰, un consorcio público-privado (CPP)¹¹ dedicado a

Airbnb

Ingresos: 2.600 millones de dólares (2018)

Presidente: Brian Chesky (CEO)

Sede central: San Francisco, EE.UU.

Fundación: 2008

Sectores: hostelería, tecnología

Empleados: 12.376 (2019)

Datos clave:

- * La plataforma de alquiler digital, que cuenta ahora con más de 6 millones de anuncios en todo el mundo, anunció su salida a bolsa para 2020.
- * Está en el punto de mira por su papel en el aumento de los precios de alquiler y en la gentrificación, y se enfrenta a un número cada vez mayor de ayuntamientos que buscan limitar su crecimiento. Ha respondido con una estrategia de presión de abajo hacia arriba, organizando grupos de usuarios y reclamando a los tribunales y gobiernos (nacionales e internacionales) que eviten que las ciudades controlen sus actividades.
- * La plataforma es famosa por su actitud arrogante hacia las leyes locales de alquileres turísticos y por negarse a ceder sus datos a las autoridades públicas.

[9] Hablamos de alcaldes como Pasqual Maragall, Joan Clos o Xavier Trias de un lado, y de empresarios como Isidre Fainé, Joan Gaspart o Josep Lluís Núñez del otro.

[10] No es casualidad que este organismo fuera dirigido durante muchos años por el empresario hotelero Gaspart, quien además recibió numerosas alabanzas del entonces alcalde socialista Joan Clos.

[11] <https://www.barcelonaturisme.com/wv3/en/>



© SIRA ESCLASANS I CARDONA

la promoción y defensa de los intereses del empresariado turístico con dinero público (Aznar L, 2017).

Los límites del poder municipal

Y así llegamos a 2015, cuando BeC¹², un partido surgido de los movimientos sociales del 15M/indignados¹³, se hizo con el gobierno de la ciudad. Apupado por la fuerte ola de movilizaciones vividas a partir de 2011, consiguen llevar sus propuestas programáticas al Ayuntamiento. Lo que siguió fue una legislatura de cuatro años en la que impulsaron un Plan Estratégico de Turismo 2020 destinado a hacer “sostenible” el turismo en la ciudad; orientado a gestionarlo mejor, controlarlo y mitigar sus efectos negativos, promoviendo una aproximación más social y con cierta sensibilidad ecologista y feminista, aunque para muchas personas y colectivos, de forma insuficiente. Por ejemplo, en los temas de vivienda, tan relacionados con la industria turística, se promovió el “Plan Especial Urbanístico de Alojamiento Turístico” (PEUAT) para tratar de frenar, limitar y (re)ordenar el problema de los alojamientos turísticos en barrios como el Raval. Sin embargo, pese a esta y otras medidas, el problema persiste, aumenta y se extiende por la ciudad, ahora por barrios que antes no estaban afectados e incluso municipios del área metropolitana.

En Barcelona se producen decenas de desahucios cada día. El barrio El Raval es uno de los más afectados, y el Ayuntamiento se encuentra muchas veces entre la ciudadanía y corporaciones como Airbnb o la misma Blackstone. Intentan hacer de “mediadores”, pero los resultados son más bien decepcionantes. Aún y teniendo en cuenta que gobiernan en minoría y con competencias limitadas, la realidad es que el desequilibrio de poder entre unos (poder corporativo) y otros (clases populares) es tan grande que la única opción es tomar partido con valentía por los segundos, asumiendo las consecuencias que de ello puedan derivar, incluso si son legales.

[12] <https://barcelonaencomu.cat/es>

[13] https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-austerity_movement_in_Spain

Tras las pasadas elecciones municipales (2019) entramos en un nuevo ciclo político y BeC consigue mantenerse al frente del gobierno, pero lo hace compartiendo responsabilidad con un PSC-PSOE que, además de ser responsable originario de la #MarcaBarcelona, se dedica a abonar desde los despachos del gobierno un discurso criminalizador de la pobreza y unas políticas securitarias y del miedo propias de la derecha más rancia¹⁴. Todo ello conforma un panorama nada halagüeño si la idea es esperar a que desde el Ayuntamiento se haga frente a los poderes financiero-inmobiliarios y turísticos como Blackstone o Airbnb. La correlación de fuerzas difícilmente le será favorable a la ciudadanía. Y menos aún a nivel estatal, donde el gobierno del Estado alterna entre dos partidos de régimen, PP y PSOE, ambos responsables de medidas de profundo impacto antisocial como el “rescate” a la Banca, la priorización del pago de la deuda sobre cualquier gasto social o la aprobación de las SOCIMIs¹⁵.

Luchar desde abajo

Por suerte, la ciudad cuenta con un potente tejido social para hacer frente a los problemas que causa el embate del capital sobre la vida. La ciudadanía se organiza y moviliza a través de múltiples movimientos sociales y plataformas ciudadanas (anti-turistización, ecologistas, feministas, por el derecho a la vivienda, entre otras), en colectivos de barrio, en asociaciones de vecinas o sindicatos de clase. Muchos de estos espacios y colectivos ya hace tiempo que denuncian injusticias y desigualdades, señalan a los responsables y ponen sus cuerpos para defenderse. El movimiento por la vivienda o los movimientos anti-turistización son un buen ejemplo de ello.

Con la crisis hipotecaria de hace una década nació también la famosa Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)¹⁶, un ejemplo de organización popular y lucha. Años después, ante la nueva coyuntura post-crisis y sus consecuencias, aparecen también nuevos espacios como el Sindicato de Inquilinas¹⁷ y una gran variedad de grupos y sindicatos de vivienda —como el SHR— que trabajan desde los barrios. Todos ellos aportan mucha fuerza, ideas y prácticas políticas¹⁸, y generan una potencia comunitaria imprescindible en unas ciudades que bajo el capitalismo nos llevan cada día más hacia la soledad y el individualismo.

[14] No hay que olvidar, además, que ambos partidos necesitaron la ayuda —en forma de abstención— de Manuel Valls, exministro de interior francés, responsable de la expulsión de gitanos en Francia y cuya campaña fue financiada por directivos de Blackstone.

[15] Las SOCIMIS (un mecanismo financiero que facilita la especulación inmobiliaria de fondos buitre), junto a la reducción de los contratos de alquiler a solo tres años (ahora revertido nuevamente a cinco, aún insuficientes), han sido elementos clave que, sumados a la presión turística actual, han causado la tremenda burbuja de alquileres.

[16] La PAH es una organización descentralizada que practica la desobediencia civil para parar desahucios, a la vez que hace propuestas legislativas y pone en marcha alternativas como la “obra social”, es decir, “re-ocupar” vivienda vacía de la banca. <https://afectadosporlahipoteca.com/>

[17] <https://sindicatdellogateres.org/>

[18] Ayudan a visibilizar los impactos de la burbuja de alquiler, a parar desahucios, a forzar a grandes propietarios a ofrecer alquileres sociales y/o a ocupar pisos para garantizar un techo a la gente.



FOTOMOVIMIENTO, CC BY-NC-ND

Más allá de las victorias concretas, todo este movimiento popular por la vivienda —y el derecho a la ciudad— ha logrado cambiar el relato hegemónico y hacer entender que la vivienda es un derecho y no un privilegio. Además, han creado fuertes consensos en torno a medidas como la necesidad de regular el precio de la vivienda, aunque sin traducción legislativa o gubernamental por el momento. Ante esta situación, surgen propuestas tan interesantes como el Primer Congreso Catalán de la Vivienda¹⁹, que fue impulsado por el movimiento popular y tuvo lugar en otoño de 2019. En él se trabajó para tejer alianzas y construir unidad de acción, (re)pensar una estrategia y táctica comunes, actualizar y mejorar prácticas de lucha y compartir conocimientos y referentes. Todo ello, con la idea de fondo de pasar a la ofensiva y conseguir victorias más estructurales— como la regulación de los alquileres— que blinden derechos y hagan más sostenible la vida.

Acceder al gobierno municipal desde la base para hacer políticas progresistas sigue siendo un objetivo legítimo, pero la finalidad no puede ser mantenerse en él a riesgo de renunciar a demasiados objetivos y principios y desmovilizar a las bases, sino todo lo contrario: debería ser un lugar desde el que evidenciar las contradicciones de un sistema injusto, potenciar los contrapoderes de las calles y denunciar desde dentro qué actores hay, qué papel tienen y qué mecanismos usan en cada conflicto en que el derecho a la ciudad de todas es cuestionado.

La acumulación de fuerzas que actúan como contrapoderes es esencial. Es por este motivo que también es muy necesario trabajar las alianzas con otros movimientos y espacios de lucha(s) de la ciudad. Otro ejemplo es el caso del turismo, que tiene muchos elementos de convergencia con la lucha por la vivienda. En Barcelona existe la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico (ABDT)²⁰. Llevan años denunciando el modelo turístico y sus impactos, organizando charlas, lanzando

[19] <https://congreshabitatge.cat/>

[20] <https://assembleabarris.wordpress.com/>

campañas y haciendo propuestas para cambiar el modelo y frenar y revertir sus impactos negativos. Trabajan conjuntamente con otros movimientos y colectivos de la ciudad, no solo en torno a la vivienda sino también en temas como el ecologismo y la lucha contra el cambio climático. Denuncian, por ejemplo, el impacto negativo de los cruceros²¹ o la aviación, y forman parte de espacios de coordinación más grandes, como la red europea StayGrounded²², que promueve un decrecimiento de la aviación y denuncia su relación con un modelo turístico nocivo, o de otros espacios nuevos que surgen, como los que se agruparon en torno a la pasada Huelga Mundial por el Clima del 27 de setiembre, de gran éxito en Barcelona²³. Otro ejemplo actual es el de la campaña en red #LaFiraOLaVida²⁴.

El trabajo en red forma parte del ADN del tejido social de la ciudad y es lo que le da tanta fuerza; también abarca la dimensión internacional. La ABDT por ejemplo, forma parte de la red SET (una red de Regiones y Ciudades de Europa contra la Turistización)²⁵. Y lo mismo pasa con el movimiento por la vivienda. La campaña contra Blackstone, como hemos visto antes, despertó la solidaridad de muchos otros colectivos, y hasta llegó a ciudades como Berlín y Londres. El fenómeno es global, y como tal, requiere también una respuesta global.

Los recursos económicos con que cuentan todos estos movimientos y colectivos son pocos y autogestionados, pero su tarea es ingente e imprescindible²⁶. La historia del barrio El Raval nos enseña cómo, aún y con pocos recursos, la lucha común, la inteligencia colectiva y la solidaridad pueden poner contra las cuerdas a los gigantes del sistema. La politización que hacen del espacio público y de sus propias vidas es imprescindible, pues visibiliza el conflicto inherente a un sistema que solo ofrece codicia mientras alumbran nuevos mundos más justos y ofrecen prácticas emancipatorias y de lucha. #RavalVsBlackstone es un aliento de aire fresco en tiempos de espesor y oscuridad. En estos momentos, el terremoto que hizo temblar a Blackstone ya tiene réplicas en otros territorios. En Madrid, más de 200

[21] https://cat.elpais.com/cat/2018/03/28/catalunya/1522261045_973059.html

[22] <https://stay-grounded.org/>

[23] https://twitter.com/f4f_barcelona/status/1178343556454465536

[24] La campaña #LaFiraOLaVida agrupa más de 50 entidades y colectivos que pretenden dar uso habitacional y social a unos terrenos públicos que gestiona La Fira, promotora del “turismo de congresos” en la ciudad. Se trata de otro consorcio público-privado que gestiona de “forma autónoma” —tal y como ellos mismo reivindican— fondos y espacios públicos para celebrar eventos, ferias y congresos, que promueven un determinado modelo económico y productivo, y que además gentrifica aún más otra zona de la ciudad. <http://www.lafiraolavida.cat/>

[25] Es una alianza de ciudades del sur de Europa como Venecia, Valencia, Lisboa, Malta o la misma Barcelona, por poner algunos ejemplos, que promueve encuentros presenciales y a distancia y que se coordina para hacer frente a un problema común, global, especialmente acusado en sus territorios. <https://assembleabarris.wordpress.com/2018/04/26/roda-de-premsa-resentacio-de-la-xarxa-setnet-del-seu-manifest-fundacional-i-del-2n-forum-veinal-sobre-turisme-18-i-19-de-maig/>

[26] La creciente criminalización a la que se ven sometidos todos estos movimientos de resistencia es la otra cara de este éxito. Un ejemplo claro es la creación y divulgación de conceptos como turismofofia, acuñado por el lobby turístico para dañar a los movimientos contra la turistización. Otro es la larga estigmatización y criminalización que hacen las élites capitalistas del movimiento “okupa” por poner en cuestión la “sacrosanta” propiedad privada al defender el derecho de la gente a proveerse de un techo mediante ocupaciones.

familias en situaciones parecidas se han organizado con el Sindicato de Inquilinas de Madrid y otros colectivos en torno a la campaña #MadridVsBlackstone²⁷ para seguir el ejemplo de Barcelona.

La ofensiva del capital no se va a detener, las fuerzas que le hacen frente tampoco. El caso de #RavalVsBlackstone es un ejemplo que ilustra la necesidad de crear y reforzar contrapoderes políticos que se autorganizan desde abajo para organizar el conflicto y vencer. Los zapatistas siguen también en ello, construyendo comunidad y autonomía, y defendiendo sus vidas desde las trincheras de la Selva Lacandona, abajo y a la izquierda. En el barrio El Raval, las clases populares también construyen trincheras y pelean. Luchar es vencer. Y como dicen en Latinoamérica: “la lucha continúa”.

REFERENCIAS:

- Lefebvre, H. (1975). El derecho a la ciudad. Barcelona: Península.
- Harvey D (2007). Breve historia del neoliberalismo. Akal
- Purcell, M. (2014). Possible worlds: Henri Lefebvre and the right to the city. *Journal of Urban Affairs*, 36(1), 141-154.
- Harvey, D. (2008). The Right to City. *New Left Review*, (53), 23-40.
- IDHC, & Observatori DESC. (2011). El dret a la ciutat, un dret humà emergent. *El Dret a La Ciutat*, 16-27.
- Rosa Luxemburg Stiftung. (2018). Housing Financialization: trends, actors, and processes.
- Fresnillo, I. (2019). El dret a la ciutat en mans del capital. *Sentit Critic*.
- Ill Raga, M. & Observatori del Deute en la Globalització.(2019). La falsa solució turística: concentració de beneficis i deute social.
- García-López, M. A., et al. (2019). Do Short-Term Rental Platforms Affect Housing Markets? Evidence From Airbnb in Barcelona. *IBE Working Paper*, (96131).
- Josep Fontana. (2019). ‘Capitalismo y democracia 1756-1848. Cómo empezó este engaño. Edicions 62.
- Murray-Mas, I. (2015). Del Spain is different a la globalización turística de “marca española.” In *Capitalismo y turismo en España del “milagro económico” a la “gran crisis”* (pp. 197-339).
- Murray Mas, I. (2014). Bienvenidos a la fiesta: turistización planetaria y ciudades-espectáculo (y algo más). *Ecología Política, Ciudades*, 87-91.
- Aznar, L. (2017). El consorci de turisme: la marca Barcelona en mans privades. *Sentit Critic*.

[27] <https://www.elsaltodiario.com/especulacion-urbanistica/madridvsblackstone-cientos-familias-afectadas-lanzan-campana-gigante-inmobiliario#>

Ciudades y activistas alemanes se rebelan contra la industria del automóvil

DÉBORAH BERLIOZ

Muchas ciudades alemanas están tomando medidas para enfrentar los problemas que plantean los vehículos, como prohibir los coches diésel antiguos o impulsar las infraestructuras de bicicletas. En un país donde los fabricantes de automóviles son los reyes de la economía y su influencia política es incuestionable, se está gestando una pequeña revolución.

"La historia de amor entre el pueblo alemán y el automóvil viene de lejos", publicó el semanario alemán *Die Zeit* a principios de 2019. "Sinónimo de calidad, fiabilidad, poderío económico y un próspero mercado de exportaciones, el automóvil alemán es también un símbolo del resurgimiento nacional tras la Segunda Guerra Mundial". De allí que cualquier crítica se vea como un atentado contra la identidad germana. El país tiene una pujante industria automotriz con gigantes como Volkswagen, Daimler y BMW, archiconocidos en Alemania, Europa y el resto del mundo.

Sin embargo, un número cada vez mayor de ciudades y ciudadanía alemana se están rebelando contra el sagrado automóvil. "Proliferan las iniciativas locales para lograr ciudades libres de automóviles", apunta Tina Velo. "Muchas personas están comprometidas con mejorar la infraestructura de las bicicletas, mientras que otras trabajan por un transporte público gratuito, como en Giessen, Alemania Occidental", añade esta portavoz treintañera del grupo Sand im Getriebe (que literalmente significa "grano de arena en el engranaje"). Este grupo vinculado con Attac tiene como meta lograr que las ciudades de Alemania estén completamente libres de automóviles. La tarea de Tina Velo (no es su verdadero nombre) es luchar por el planeta. "El transporte es el único sector donde las emisiones de CO2 no han disminuido desde los años 90, uno de los motivos por los que Alemania no cumplirá con sus objetivos climáticos".



JAKOB HUBER/CAMPACT, CC BY-NC

Aumentan las emisiones de los automóviles

En 2007, Alemania se había fijado el objetivo de reducir las emisiones de CO₂ un 40 por ciento para 2020 respecto a los niveles de 1990, y un 55 por ciento para 2030. Pese al gran desarrollo de las energías renovables, el país todavía está muy lejos de cumplir con estos objetivos. Al día de hoy, la tasa de reducción de emisiones es del 32 por ciento. Y aunque los coches emiten menos CO₂ que en los años noventa, hay más en las carreteras. Según la Oficina Federal de Medio Ambiente, las emisiones de los autos de pasajeros aumentaron un 0,5 por ciento entre 1995 y 2017.

Para difundir el mensaje, Tina Velo y unos mil más activistas boicotearon la Exposición Internacional de Automóviles de Frankfurt el 15 de septiembre de 2019. El día antes, entre 18.000 y 25.000 personas marcharon contra lo que Tina Velo llama “la industria de la destrucción”. Parece que el amor incondicional de Alemania por el automóvil ha sufrido un serio revés. El escándalo de las emisiones “Dieselgate” ha tenido mucho que ver en ello, pues mermó y mucho la imagen del gran emblema de la economía de Alemania.

La historia comenzó en 2015 cuando la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. destapó que el grupo Volkswagen (propietario de Volkswagen, Audi y Porsche) utilizó varias técnicas para manipular la cantidad de emisiones de partículas finas durante los ensayos reglamentarios: millones de vehículos se habían equipado con un software que mostraba menos emisiones de las reales. La bola de nieve fue creciendo a medida que se descubría la implicación de todos los fabricantes de automóviles alemanes, que se vieron obligados a retirar cientos de miles de automóviles en EE. UU. y Europa, y comenzó el rosario de procedimientos legales.

En América del Norte se interpuso una demanda colectiva. En agosto de 2019, Volkswagen acordó pagar 96.5 millones de dólares (88 millones de euros) en concepto de indemnización a 98.000 clientes estadounidenses. En Alemania, los directivos más importantes fueron llevados ante los tribunales. En abril de 2019, el ex presidente del Grupo fue acusado de fraude por el tribunal de Braunschweig. En julio le tocó el turno a Audi, cuando su ex presidente Rupert Stadler y otros tres ejecutivos de la compañía fueron llamados al banquillo. También emprendieron medidas legales 400.000 clientes alemanes (el juicio comenzó a fines de septiembre de 2019).

Un gobierno reacio a tomar medidas

Pese a las decisiones judiciales, se avanza despacio. Según las cifras publicadas el pasado junio por la organización Transport et Environment, solo se ha retirado una cuarta parte de los vehículos trucados para cambiarles el software amañado. El gobierno de Angela Merkel se lo ha tomado con calma: a fines de 2017 se celebró una primera reunión de urgencia a la que siguió otra el año pasado. Tras ella se anunció un plan de mejora de la calidad del aire en las ciudades dotado de un presupuesto de 1.500 millones, parte del cual se destinará en ayuda a las ciudades más contaminadas de Alemania para que inviertan en autobuses y automóviles eléctricos.

“Es un buen comienzo, pero estamos pagando los errores de los fabricantes de automóviles con el dinero de los contribuyentes”, dice Harald Moritz, miembro de los Verdes de la Cámara de Representantes de Berlín. Incluso Karsten Schulze, miembro del Comité Directivo de Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC), la Asociación de Automóviles de Alemania, reconoce que las medidas del gobierno son insuficientes: “Lo único que se ha hecho es obligar a los fabricantes a reemplazar el software amañado, pero eso no basta. Se deben instalar nuevas piezas, como un filtro reductor de emisiones. La industria del automóvil ha violado la ley, por lo que a los implicados se les deben exigir responsabilidades y obligarles a pagar los daños y perjuicios”. Aunque Daimler y Volkswagen se han comprometido a pagar hasta 3.000 euros por vehículo modificado, BMW se ha negado.

Volkswagen

Ingresos: 235.8 mil millones de euros (2018)

Directivos: Herbert Diess (consejero delegado)

Principales accionistas: Porsche family holding y Baja Sajonia Land

Sede: Wolfsburg, Alemania

Fundación: 1937

Sector: automóvil

Empleados: 302.554 (2018)

Datos clave:

- * Es el grupo de automoción más grande del mundo desde 2016, con más de 10 millones de vehículos vendidos al año bajo diversas marcas como Volkswagen, Porsche, Audi, SEAT, etc.
- * Lleva décadas implicado en escándalos medioambientales y por presionar contra las normas más estrictas en Europa y Estados Unidos. En 2015, Volkswagen se vio salpicada por el escándalo Dieseldieselgate.

La presión de los lobbies

“No nos interesa debilitar el sector del automóvil hasta el punto de que ya no tenga fuerza para invertir en su futuro”, declaró la canciller Angela Merkel en el Bundestag en 2018. Las cifras hablan solas: en 2017, la industria del automóvil facturó casi 426.000 millones de euros, el 64 por ciento de los cuales procedían de exportaciones, y empleaba a más de 830.000 personas. “El gobierno alemán mantiene estrechos lazos políticos con la industria automotriz, sobre todo el círculo íntimo de Angela Merkel”, apunta Christina Deckwirth, politóloga de LobbyControl. “La canciller nombró a Joachim Koschnicke, antiguo líder de un lobby de la casa Opel, director de su campaña electoral de 2017. Varios políticos han cambiado de aires y han engrosado la plantilla de compañías de automóviles, como el político conservador Eckart von Klaeden, que fue fichado por Daimler en 2013 después de trabajar en el despacho de la canciller Angela Merkel”.

Según la revista *Der Spiegel*, Eckart von Klaeden no tuvo reparos en aprovechar sus contactos políticos para impedir la realización de pruebas de emisiones más estrictas. En marzo de 2015, cuando la Comisión Europea quiso reforzar las pruebas en condiciones de conducción reales, el jefe del lobby envió un correo electrónico a la Cancillería. “Lo que a primera vista puede parecer una decisión técnica menor”, escribió, “podría tener graves consecuencias para la industria del automóvil, especialmente en lo que respecta al futuro de los motores diésel”. Y añadió, “La propuesta de la Comisión Europea no debe ser aceptada en modo alguno”.

Tras este correo electrónico, el gobierno cambió de táctica y eliminó cualquier mención a la fecha en la que se podrían realizar pruebas en condiciones de conducción reales.

“No olvidemos que los partidos políticos reciben las donaciones más generosas de las compañías de automóviles”, declaró Christina Deckwirth. Entre 2009 y 2017, la industria del automóvil y sus fabricantes, subcontratistas, proveedores de servicios y asociaciones profesionales donaron más de 17 millones de euros a los partidos conservadores (CDU y CSU), socialdemócratas (SPD), al partido liberal (FDP) y a los Verdes (Grünen). BMW

BMW

Ingresos: 97.500 millones de euros (2018)

Directivos: Oliver Zipse (consejero delegado) y Norbert Reithofer (ex consejero delegado y presidente)

Principales accionistas: Stefan Quandt and Suzanne Klatten, herederos de la familia fundadora

Fundación: 1916

Sede: Munich, Alemania

Sector: automóvil

Empleados: 134.682 (2018)

Datos clave:

* Entre 2010 y 2019, BMW y sus dos accionistas principales (Stefan Quandt y Suzanne Klatten, herederos de la familia fundadora) donaron más de 3 millones de euros a partidos políticos.

* A diferencia de Volkswagen y Daimler, BMW se negó a financiar la sustitución de un software que manipula las emisiones de sus automóviles diésel.



JAKOB HUBER/CAMPACT, CC BY-NC

y sus dos accionistas principales, los hermanos Stefan Quandt y Suzanne Klatten, donaron más de tres millones de euros a varios partidos (sobre todo al CDU y al CSU, al FDP y, en menor medida, al SPD) entre 2010 y 2019. Daimler hizo donaciones por valor de más de dos millones al CDU y al SPD, repartiendo las cantidades entre ellos equitativamente¹. Entre 2014 y 2017, Volkswagen donó más de 650.000 euros a distintos partidos, incluidos los Verdes.

Un problema de salud pública

Aunque estas cifras pueden explicar la inacción del gobierno, el Dieselgate no solo persigue indemnizar a los clientes engañados. Su principal cometido es velar por la salud pública. Según un estudio publicado a principios de este año, la cantidad de óxido de nitrógeno que emiten los vehículos diésel causa cada año más de 13.000 muertes prematuras en Alemania. Desde 2008, los Estados miembros están obligados a controlar la calidad del aire en virtud de una directiva europea que pone límites a quince contaminantes del aire, como las partículas finas y el dióxido de nitrógeno. Pero diez años después, la calidad del aire de 57 ciudades germanas todavía supera los límites.

Ante la desidia del gobierno para tomar medidas, la sociedad civil ha tenido que tomar cartas en el asunto. Desde 2011, la organización ambiental Deutsche Umwelthilfe (DUH) ha presentado 35 denuncias contra ciudades alemanas en las que exigen que cumplan con las normas europeas. Otras organizaciones ambientales como BUND han seguido su ejemplo y ya han conseguido interesantes victorias: en Berlín, por ejemplo, el Tribunal Administrativo falló a favor de DUH en octubre

[1] Fuente: Bundestag

de 2018 y la ciudad se vio obligada a aprobar un plan de aire limpio, que incluye la ampliación de las zonas con límite de velocidad de 20 km/h y más parkings de pago. La capital alemana también se ha visto obligada a prohibir la circulación de vehículos diésel antiguos en el centro urbano, donde los niveles de contaminación son más altos. Esta prohibición, que solo afecta a 2.9 kilómetros de carreteras de Berlín, entró en vigor a principios de octubre de 2019.

Prohibición polémica

Aunque los conductores de Berlín no se inmutaron con la noticia, sí lo hizo la Cámara de Industria y Comercio de Berlín. “Tres cuartas partes de los vehículos de empresa funcionan con diésel”, asegura Hauke Dierks, experto medioambiental de la Cámara. “Prohibiciones como esta entorpecen el funcionamiento de algunos establecimientos y negocios, y perjudican a los clientes, los empleados y las entregas”. Karsten Schulze, del ADAC, también considera que “estas medidas son ineficaces: la gente evitará las calles prohibidas y la contaminación se concentrará en otros sitios”.

Sin embargo, Berlín no es la única urbe que impone prohibiciones. También en algunas zonas de Hamburgo y Darmstadt se ha prohibido la circulación de vehículos diésel más antiguos. Y en todo el centro de la ciudad de Stuttgart. Las mismas prohibiciones entrarán en vigor en Colonia, Bonn y Essen. Algunos ayuntamientos, en cambio, han decidido recurrir las sentencias judiciales. El gobierno federal tiene la intención de evitar medidas draconianas. El pasado marzo votó a favor de enmendar la Ley Federal de Emisiones de Automóviles en el Bundestag. El texto establece que “las prohibiciones de tráfico [...] solo se aplicarán cuando las emisiones medias anuales excedan los 50 microgramos de dióxido de nitrógeno por metro cúbico de aire”, pese a que el límite establecido por la directiva europea es de 40 microgramos.

“Cambiar la ley no va a frenar las prohibiciones”, advierte Harald Moritz. “Es la manera que tiene el gobierno de hacernos creer que está protegiendo a sus ciudadanos de los malvados ayuntamientos que intentan poner en peligro su libertad. Es una cortina de humo para disimular que no están haciendo nada para frenar a los fabricantes de automóviles”. Pero el concejal de Berlín es bien consciente de que las prohibiciones serán difíciles de aplicar. “No es tan fácil saber si un automóvil es diésel y antiguo sin mirar su documentación”. Presiona para que el gobierno federal imponga la colocación de pegatinas azules en los vehículos diésel, lo que facilitaría los controles. “El gobierno se niega a hacerlo”, repone irritado “puede que porque teme que se facilite la prohibición de los vehículos diésel en todos los centros urbanos”.

La industria del automóvil apoya el coche eléctrico

“No estamos en la Edad Media, no necesitamos murallas rodeando las ciudades”, argumentó Joachim Damasky, director general técnico y ambiental de la Asociación



JÖRG FARYS/BUND, CC BY-NC

Alemana de la Industria del Automóvil (Verband der Automobilindustrie, VDA), el lobby de la industria automotriz. En su opinión, prohibir los automóviles es no tener en cuenta a una parte muy importante de la población. “¿Qué pasa con las personas que tienen que desplazarse para ir a trabajar porque no tienen recursos para comprarse un piso en el centro? Más transporte público es positivo, pero es caro y lleva tiempo”. Opina que el futuro es el coche eléctrico. Y la industria del automóvil está preparada para formar parte de él: “En los tres próximos años, nuestras compañías invertirán 40.000 millones de euros en automóviles eléctricos y métodos alternativos», asegura el portavoz del sector del automóvil.

Así, no sorprende que el automóvil eléctrico fuera el gran protagonista del Salón del Automóvil de Frankfurt de 2019. Pero para Tina Velo, no es más que un lavado de cara verde. “En primer lugar, estas inversiones han llegado demasiado tarde. Y en segundo, no se trata solo de la contaminación: los vehículos personales ocasionan muchos otros problemas. Carreteras, aparcamientos..., los coches ocupan demasiado espacio en nuestras ciudades, por no mencionar los accidentes. Los coches eléctricos no van a cambiar la situación, por eso abogamos por ciudades sin automóviles”.

Aunque Karsten Schulze del ADAC no comparte la opinión de Tina Velo, admite que los automóviles ocupan demasiado espacio en las ciudades alemanas. Pero para tener menos automóviles en las ciudades, necesitamos “un mejor transporte público”. Su idea es construir grandes aparcamientos en la salida de las estaciones de metro. “Llevamos años hablando de este modelo, pero requiere grandes inversiones de capital y los ayuntamientos no están por la labor”.

Berlín invierte en alternativas sin coche

Tras años de austeridad, la capital alemana está lista para rascarse el bolsillo. A principios de enero, la senadora de transporte de Berlín, Regine Günther, anunció que en los próximos 15 años se invertirían 28.000 millones de euros para ampliar y modernizar el transporte público. Esta decisión se enmarca en la ley de movilidad aprobada en 2018 por la Cámara de Diputados de Berlín. Otro logro que hubiera sido imposible sin la movilización de la sociedad civil. “Durante mucho tiempo, el gobierno local no mostró interés alguno en apoyar el uso de la bicicleta”, explica Heinrich Strössenreuther, ecologista y ciclista aficionado berlinés. “La ciudad solo gastaba 3.70 euros por habitante al año en infraestructura para bicicletas, el precio de una jarra grande de cerveza. Es una cantidad ridículamente pequeña en comparación con el dinero que se destina a los automóviles, que ronda los 80 euros por habitante al año”. Decidido a hacer algo al respecto, redactó, junto con varios otros activistas, un proyecto de ley en 2015 sobre el tráfico de bicicletas con el fin de que se apruebe mediante referéndum de iniciativa ciudadana. La iniciativa obtuvo más de 100.000 firmas en pocos meses.

“Esta iniciativa hizo que moverse en bicicleta estuviera en la boca de todos los políticos en Berlín. Todos los partidos políticos empezaron a interesarse”, señala Heinrich Strössenreuther. En otoño de 2016, los socialdemócratas ganaron las elecciones en Berlín y formaron una coalición de gobierno con los Verdes y el partido de izquierda Die Linke. En el pacto de coalición, se comprometieron a aprobar una ley de movilidad que priorizaría los carriles bici, a los peatones y al transporte público. Se pidió a Heinrich Strössenreuther y a sus compañeros activistas que ayudaran a redactar la parte relativa a las bicicletas y carriles bici.

Objetivo 2025: uno de cada tres desplazamientos en bicicleta

A partir de 2019, la capital alemana destinará 51 millones de euros al año al desarrollo de la infraestructura de bicicletas. La ciudad cuenta con un número cada vez mayor de carriles bici, y para 2025 se habilitarán 100.000 nuevos estacionamientos de bicicletas, la mitad de los cuales estará cerca de las estaciones de metro. También se prevé construir 100 kilómetros de autopistas de bicicletas. El objetivo es que, de aquí al 2025, uno de cada tres desplazamientos se realice en bicicleta, frente a uno de cada siete en la actualidad.

“Por primera vez nuestra política de transporte no gira en torno a los automóviles”, dice el concejal de los Verdes Harald Moritz. Aunque a su grupo le gustaría llegar todavía más lejos. “Nos gustaría instalar peajes en la entrada de la ciudad con diferentes tarifas: cuanto más contaminante sea un automóvil, mayor será la tarifa que pague”. El objetivo es la total prohibición del motor de combustión interna de aquí al 2030.

Si bien una cierta revolución puede estar en marcha en Berlín, Christina Deckwirth de LobbyControl no ve cambios en la mentalidad: “En el medio rural sigue ha-

biendo una fuerte dependencia del coche y la gente está muy molesta con todas las prohibiciones de tráfico. Es un tema que altera mucho a la gente”.

El gobierno cierra filas en torno al coche

Dieselgate no es ni mucho menos el único escándalo que ha dañado la reputación de los automóviles alemanes. En 2017, Der Spiegel destapó que BMW, Daimler y Volkswagen se confabularon para evitar la competencia en materia de tecnologías de reducción de emisiones. En septiembre de 2018, la Comisión Europea puso en marcha una investigación exhaustiva a los tres fabricantes de automóviles por presunto incumplimiento de las normas anticompetencia europeas. En abril de 2019, la Comisión Europea envió a los fabricantes de automóviles el pliego de acusaciones. Si la Comisión no queda satisfecha con su respuesta, las empresas podrían recibir una sanción de hasta el 10% de su facturación.

Pese a todo, “el gobierno federal todavía tiene la intención de defender los intereses de los grandes fabricantes de automóviles”, se lamenta Christina Deckwirth. “Pero todos los escándalos que han puesto de manifiesto el poder que detenta el lobby de la automoción en Alemania han propiciado un serio debate. Es el primer paso hacia el cambio político”.

Nota del editor

Este artículo tuvo que ser retirado de Internet durante varios meses, a raíz de amenazas de demandar a ritmo por difamación, incluyendo una solicitud de indemnización de 20,000,000€, de parte del estudio legal que representa al señor Aaron Frenkel, mencionado varias veces en el artículo.

Después de haber consultado con nuestra abogada, decidimos publicar de nuevo el presente artículo, a fin de darle toda la difusión que se merece.

"¿En qué se ha convertido Dubrovnik?"

Un campo de golf, los acuerdos de libre comercio y la lucha por el alma de una ciudad

IGOR LASIĆ

Una larga batalla legal y política por un controvertido proyecto de campo de golf e inmobiliario en Dubrovnik (Croacia) se ha convertido en el símbolo de la lucha contra la industria del turismo que ahoga a la ciudad. Ante la resistencia de la sociedad civil, la promotora privada ha denunciado a Croacia ante un tribunal de arbitraje de inversiones (ISDS). ¿Pueden los acuerdos de libre comercio privar a las ciudades y a sus habitantes del derecho a decidir su propio futuro?

A principios del tercer milenio una postal del Adriático podría ser así: hordas de turistas atestando Stradun, la calle más conocida de Croacia, mientras la élite empresarial y política se frota las manos con satisfacción en una esquina de la foto. En otra se rueda la escena de una película de



© MARIO ERCEGOVIC

espadas al pie de la muralla medieval de Dubrovnik, mientras los ciudadanos se manifiestan frente al Ayuntamiento portando carteles con palos de golf ensangrentados.

¿En qué se ha convertido Dubrovnik? Ni siquiera los habitantes de esta bella urbe, apodada “La joya del Adriático”, saben responder a esa pregunta, y mucho menos los turistas, aunque conozcan su pasado y su presente. Y, sin embargo, es una de las ciudades croatas más reconocidas internacionalmente. En el siglo XXI es, ante todo, una gran marca, con un valor de mercado propio. Y esta popularidad mundial ha transformado su valor comercial, determinando casi todos los aspectos de la ciudad.

Una ciudad asfixiada por el turismo

Para comprender mejor la “marca” Croacia, tendríamos que retrasar el reloj varias décadas. Antes de la actual invasión de cruceros y la tiranía de las inmobiliarias, la recién nacida Croacia pasó por una transición post-socialista hacia la restauración del capitalismo. Para Dubrovnik significó poner toda su riqueza natural y cultural al servicio del banal objetivo de recaudar la mayor cantidad posible de beneficios lo antes posible. El turismo era evidentemente la solución ideal. Ya desde la República Socialista Federal de Yugoslavia, la prefectura de Croacia, la más meridional, era un destino turístico muy popular. Hoy pernoctan en Dubrovnik más de cinco millones de visitantes al año.

Pero la guerra que asoló Croacia en 1991 cambió las reglas del juego. En la economía socialista, la industria del turismo se basaba principalmente en hoteles bien

desarrollados y de propiedad pública. La guerra, que destruyó los hoteles y los medios de subsistencia de la mayoría de las familias, jugó un rol importante en la posterior venta de gran cantidad de casas y apartamentos en la ciudad. Muchos propietarios, arruinados por el aumento del coste de vida, se vieron obligados a aceptar los precios ofrecidos.



© MARKO ERCEGOVIC

Y tras la venta de los pisos y las casas, también se pusieron a la venta espacios públicos de propiedad municipal y estatal a potenciales compradores. Al mismo tiempo, la infraestructura pública, los recursos naturales y las prioridades sociales se orientaron a responder a las asfixiantes necesidades de la industria del turismo.

A comienzos del milenio, un nuevo tipo de promotor inmobiliario, mucho mayor, apareció en escena. No le bastaba acumular pequeños hoteles. Su modelo de negocio era mucho más ambicioso. Uno de estos inversores se las ingenió para adquirir una extensa parcela en una colina de Dubrovnik con la intención de construir cientos de propiedades de alquiler, hoteles y villas de lujo. Para hacer realidad este proyecto, la idea era construir primero un campo de golf, deporte sin tradición en Dubrovnik. Un campo de golf ocupa cientos de hectáreas de terreno, algo que, unido a su relación con promotores depredadores, ha hecho que este deporte sea muy impopular en todo el mundo.

Pero volvamos a nuestra pregunta, ¿en qué se ha convertido Dubrovnik? Dubrovnik es una marca, un destino turístico, un mercado inmobiliario lucrativo y, por último, pero no menos importante, un set de rodaje. La ciudad ha sido sede de los tiroteos de Juego de Tronos, La Guerra de las Galaxias o Knightfall, por mencionar solo tres ejemplos recientes. Sin embargo, tras los éxitos de taquilla se esconde una realidad social mucho menos espectacular: habitantes brutalmente sometidos a las exigencias de empresas que, en connivencia con unas autoridades locales distanciadas de lo fundamental, explotan sus recursos naturales, históricos y sus infraestructuras. Además, las necesidades básicas de la población local, desde la electricidad y el transporte hasta la educación y la atención médica, se pasan por alto con demasiada frecuencia.

Cuando un campo de golf se convierte en símbolo del expolio público

El campo de golf encarna mejor que nada esta situación; es el símbolo del triste destino del espacio público y de los recursos de Dubrovnik. Ya nadie recuerda el

nombre del primer inversor ni del segundo, que se hizo cargo del proyecto solo para venderlo a un tercer inversor años después. Para una ciudad pequeña en términos demográficos (solo unos 50.000 habitantes), pero con un papel tan importante en la historia, ha sido un punto de inflexión en la memoria colectiva de la ciudad.

Al principio, el proyecto del campo de golf se consideraba aceptable: ocupaba solo 100 hectáreas en la meseta del monte Srđ, una montaña de 450 metros de altura justo detrás de la ciudad. Pero a finales de 2005, se había extendido a 310 hectáreas según los documentos de planificación urbanística, y abarcaba la mayor parte de la meseta. Las autoridades locales y nacionales dieron luz verde a la ampliación, pese a que el plan de desarrollo vigente en ese momento preveía las 100 hectáreas iniciales.

Además del centro urbano de Dubrovnik, el monte Srđ es la única zona que permitiría la expansión de la ciudad. Cualquier otra zona está demasiado lejos, como el distrito de Nova Mokošica, un enclave construido a principios de los años 80 pero que se encuentra a varios kilómetros del centro. Esto se debe a su situación: estar enclavada entre una estrecha franja de costa y empinadas colinas, con muy poco espacio para cualquier solución alternativa de desarrollo urbano. Sin embargo, las autoridades locales, regionales y estatales han decidido privar a Dubrovnik de cualquier posibilidad de expandirse, y todo en nombre del golf.

Razvoj Golf

Directivo: Aaron Frenkel, propietario

Sectores: turismo, inmobiliaria

Sede: Zagreb, Croacia

Fundación: 2006

Datos clave:

- * Aaron Frenkel, residente en Montecarlo, se enriqueció como agente e intermediario de la industria aeronáutica en países del antiguo bloque soviético.
- * Razvoj Golf ha demandado a Croacia ante un tribunal internacional de arbitraje de inversión, a través de una empresa de los Países Bajos, Elitech.

Injerencias políticas

El campo de golf y sus instalaciones de alojamiento han contado con el entusiasta respaldo de dos alcaldes de Dubrovnik, tres presidentes de Croacia, cuatro primeros ministros y una larga lista de ministros y políticos de centro-derecha y de centro-izquierda. El primer nombre famoso de esta nutrida lista fue el primer ministro Ivo Sanader, quien expresó su apoyo justo después de que se ampliara la superficie del proyecto de golf e inmobiliario. Tres años y medio más tarde dimitiría de forma repentina antes de ser condenado por corrupción. Sus palabras todavía se recuerdan: “El proyecto Srđ era de gran interés para la República de Croacia”. Pero el interés no era para Croacia en realidad. Al aumentarse la superficie, el valor del proyecto se disparó. En 2006, el segundo propietario vendió el proyecto al polémico empresario israelí Aaron Frenkel. A día de hoy sigue siendo el dueño.

El valor inicial del proyecto Srđ era de entre 70 y 80 millones de euros. Las últimas cifras publicadas rondan los 1.100-1.200 millones, una parte de la cual, al parecer, ya se desvió en dudosos asuntos de lobbies y relaciones públicas. Uno de los primeros ejemplos se remonta a la fase inicial en la que se concedió la propiedad del proyecto a Frankel, cuando el diario croata Vecernji list, en conexión con el Fiscal público, denunció de que cierto bufete de abogados vinculado al empresario habría sufragado los gastos de la hija de Sanader mientras estudiaba en los Estados Unidos.

Entre tanto, los planes de desarrollo urbanístico se adaptaban a las necesidades del proyecto de golf, aprovechando la disolución del consejo del condado y el nombramiento de un representante del gobierno para Dubrovnik. No solo se legalizaron procesos ilegales, sino que resultó que el representante carecía de poder jurídico para cambiar los planes como lo había hecho. Varias organizaciones de la sociedad civil recurrieron al tribunal constitucional.

En los años siguientes, jueces de varias instancias declararon ilegales proyectos como el plan de desarrollo urbanístico enmendado, la evaluación de impacto ambiental y el permiso de uso del terreno, pese a las presiones ejercidas por varias autoridades para dar luz verde al campo de golf. Pero las autoridades nacionales y locales pasaban por alto las decisiones del juez, y elaboraban nuevos proyectos igualmente cuestionables, lo que supuestamente les permitiría continuar con el proyecto con renovado entusiasmo.

En la primavera de 2007, el presidente croata Stipe Mesić nombró a Aaron Frenkel Cónsul Honorario de Croacia en Israel. Año y medio después, el Parlamento croata votaba una ley sobre el campo de golf que favorecía a las grandes empresas sobre los intereses de la sociedad en general y de los pequeños propietarios, en su mayoría agricultores, todos quienes se verían perjudicados por el proyecto. Aunque la ley fue anulada cuatro años después, los planes de gestión territorial de toda Croacia ya se habían modificado para ponerla en práctica.

En 2009, el alcalde de Dubrovnik firmó un contrato con la empresa inversora “Razvoj golf” (“Desarrollo de golf”) por el que vendió 47.000 metros cuadrados de

Booking Holdings

Ingresos: 14.500 millones de dólares (2018)

Directivo: Glenn Fogel (consejero delegado)

Sede: Delaware, EE. UU.

Fundación: 1997

Sectores: turismo, tecnología

Empleados: 24.500 (2019)

Datos clave:

- * Booking Holdings es dueño del sitio web booking.com y de varios otros buscadores online relacionados con el turismo. En 2017, se reservaron 673 millones de noches de hotel a través de sus sitios web.
- * Booking.com se ha visto inmersa en numerosos litigios con propietarios de hoteles y autoridades públicas tanto en su país como en la Unión Europea por sus métodos anticompetitivos.



© MARKO ERCEGOVIĆ

propiedad municipal en Srđ al irrisorio precio de menos de ocho euros el metro cuadrado. El mismo inversor había comprado el terreno aledaño a propietarios privados por 20 euros el metro cuadrado. Este alcalde perdió las elecciones siguientes y fue reemplazado por un político contrario a la construcción del campo de golf. Pero su oposición duró hasta su victoria electoral y sus primeros días en el cargo, después cambió de opinión: su justificación fue que: “El valor del espacio y la tierra de Dubrovnik ha aumentado tanto que ya no podemos controlarlo”.

“No construyan un campo de golf junto a esta ciudad, ni junto a ninguna otra”

La campaña ciudadana Srđ je naš (“Srđ es nuestro”) que nació en ese momento se iba a convertir en la fuerza que combatiría la usurpación de los bienes públicos de Dubrovnik. Los grandes medios de comunicación croata, incluido Euopress (más tarde rebautizado Hanza), el mayor grupo de comunicación privado del país, apoyaron abiertamente al inversor e incluso anunciaron un aumento de la superficie del campo de golf a 410 hectáreas. Los cambios de poder político a nivel regional y nacional sacaron a la luz aspectos bastante controvertidos del proyecto de golf, entre ellos varios conflictos de intereses y empresas de relaciones públicas que trabajan tanto para Razvoj Golf como para partidos políticos.

La famosa arquitecta Zaha Hadid recibió el encargo de proyectar algunas de las 400 villas previstas para el Srđ, junto con un hotel y 1.600 apartamentos destinados a la venta. Pero las principales empresas de arquitectura croatas y de Dubrovnik se opusieron al proyecto del campo de golf. Incluso Taleb Rifai, por entonces Secretario General de la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas, luego de haber veraneado en Dubrovnik, sintió la necesidad de declarar: “No construyan un campo de golf junto a esta ciudad, ni junto a ninguna otra.”

En 2012, el inversor se las ingenió para presentar una evaluación de impacto ambiental positiva, pero solo tras la tercera ampliación del plazo inicial (pese a que la ley solo permitía una ampliación). La comunidad local, sin embargo, no se rindió. Srđ je naš convocó a un referéndum contra el campo de golf. El proyecto City Above the City no solo era una confiscación clamorosa de un bien público en aras de beneficios privados, sino que constituía también una grave amenaza ecológica: estudios científicos revelaron que el complejo previsto, en el que se plantarían especies vegetales no nativas que exigen grandes cantidades de pesticidas, fertilizantes y agua limpia, alteraría gravemente el equilibrio del ecosistema mediterráneo de Srđ y alrededores.

El referéndum se celebró en 2013 en medio de un ambiente político plagado de mentiras y de medios de comunicación cómplices que amedrantaban a los ciudadanos con la astronómica indemnización que habría que pagar al inversor. Casi un tercio de la población acudió a las urnas y el 85 por ciento votó contra el proyecto, pero el resultado no fue vinculante; para serlo debería haber participado al menos un 50 por ciento. Así lo establece la ley en Croacia. Sorprende bastante teniendo en cuenta que en el referéndum de 2011 sobre la adhesión de Croacia a la Unión Europea (UE) hubo menos del 50 por ciento de participación, pero el deseo expresado por dos tercios de esos votantes de entrar en el bloque se consideró suficientemente representativo...

La lucha da el salto internacional

Hasta la UNESCO se unió a la lucha: Dubrovnik llevaba cuarenta años inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Pero había presiones internacionales en ambos sentidos: el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Barroso, tras una reunión con el presidente israelí Shimon Peres, informó al primer ministro croata, Zoran Milanović, que estaba al tanto de los “problemas de difícil comprensión” que Aaron Frenkel estaba sufriendo en Dubrovnik.

Los políticos croatas profetizaban lo que pasaría si fracasaba el proyecto de golf. El vicepresidente del gobierno, Branko Grčić, sin ir más lejos, había declarado en 2013: “¡Si no sale adelante el proyecto, los inversores demandarán a Dubrovnik o a la República de Croacia y nos reclamarán una indemnización astronómica ante tribunales extranjeros! (...) Si se ha aprobado el plan de gestión territorial, si se han adoptado planes locales de desarrollo urbanístico respetando un proceso democrático, y si el inversor ha adquirido legalmente la tierra, parcela por parcela, gastando 40 millones de euros y enriqueciendo a ciertas personas en el proceso, ¿quién tiene derecho a interponerse en su camino?”. De hecho, en 2017, la compañía de golf Razvoj denunció a la República de Croacia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en Washington y reclamó una indemnización de 500 millones de euros por impedir la continuidad de su negocio en Dubrovnik.

La presión política y mediática se recrudeció. A finales de 2017, Zelena Ackija de Green Action, la principal ONG croata de protección del medio ambiente, y su socio, la iniciativa Srđ je naš, llegaron a ser amenazados con demandas judiciales por un cartel elaborado por Zelena Akcija que mostraba un palo de golf goteando pintura roja con un lema que rezaba: “Palos, no golf”. El diario de Hanza, Slobodna Dalmacija, interpretó como antisemita el mensaje contra el inversor de Srđ, pese a que ni Zelena Akcija ni ninguna otra organización habían sugerido tal cosa. Fue un golpe bajo, un nuevo intento de influir en la opinión pública.

Por si fuera poco, se ha descubierto que se han desviado fondos públicos de Dubrovnik a beneficio de inversiones privadas. En varios casos, los principales costos de infraestructura (carreteras y transporte, energía o suministro de agua) del campo de golf y sus instalaciones serán sufragados por el presupuesto municipal, es decir, por los contribuyentes, y en cantidades que rondan decenas de millones de euros.

El pueblo se levanta

Pese al grave desequilibrio de poder y de los procesos antidemocráticos que los líderes políticos y económicos han instigado, la batalla se sigue librando. La ciudad de Dubrovnik también se enfrenta a otras consecuencias dolorosas de la industria turística. Es cierto que el gobierno municipal actual no parece estar tan abiertamente a favor de los campos de golf y de los cruceros como los anteriores, pero tampoco parece muy dispuesto a contrarrestar la destructiva avaricia por los bienes públicos. La privatización y la reconstrucción del puerto de Gruž para albergar más cruceros, con consecuencias predecibles, se ha paralizado de momento debido a defectos procesales. Pero no seamos ingenuos: el grupo turco-francés Global Ports Holding y Bouygues Bâtiment International, que casi obtuvo luz verde para la construcción de colosales terminales megalómanas, no dejará pasar la oportunidad.

Mientras, Dubrovnik se asfixia poco a poco por el crónico abandono de su patrimonio público. Atascos infernales, estacionamiento y carriles peatonales mal organizados, infraestructura municipal abandonada y la reciente liberalización del sector del taxi son solo algunos ejemplos. En los últimos años, parece que la salud ecológica de la ciudad también está amenazada: la contaminación de la bahía de la ciudad ha alcanzado niveles extremos en varias ocasiones debido a los vertidos de aguas residuales de los numerosos alojamientos turísticos que jalonan de la costa. Y no es casualidad que la vivienda sea uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los habitantes de Dubrovnik. La tendencia es que los precios de alquiler sean dictados por plataformas de alojamiento turístico como Airbnb y Booking.com que, por supuesto, no pagan impuestos en Croacia.

Los lugareños están sufriendo las consecuencias de las actividades de estas empresas y de las malas políticas de vivienda social de Croacia. Hay escasez de médicos y enfermeras en el Hospital General de Dubrovnik (30 médicos y 60 enfermeras) y

algunos departamentos del hospital se han cerrado y otros se han fusionado. Casi no hay candidatos para las vacantes del sector público. Y la mano de obra barata que se importa tampoco está por la labor de dejarse casi todo su salario en alquiler.

Otro efecto de la invasión turística de Srđ y del mercado inmobiliario no regulado que amenaza con convertir un paisaje singular en un complejo de lujo, es que la comunidad local se ha visto obligada a movilizarse y a luchar contra estas invasiones descaradas que ponen en peligro siglos de trabajo y cuidado por el medio ambiente. Cómo terminará esta historia es imposible de predecir. Pero hay motivos para la esperanza: además de las iniciativas y los progresos que hemos citado en este artículo, Dubrovnik se ha convertido en una ciudad vibrante en materia de activismo colectivo, lo que ofrece una imagen mucho más hermosa de ella que cualquier postal turística.

Airbnb presiona en Bruselas: cómo doblegar a las ciudades desde arriba

KENNETH HAAR

Hace cinco años, Airbnb se encontraba en un buen y en un mal lugar al mismo tiempo. En los años anteriores había asistido a un despegue en su sitio web, con un número vertiginoso de listados de alojamientos para alquilar. Por otro lado, ciudades como Ámsterdam, Barcelona, Berlín y París reaccionaban imponiendo límites en el alquiler estilo Airbnb con el fin de proteger paisajes urbanos y la asequibilidad de las viviendas. Para ello introdujeron normas tales como permisos obligatorios para ser anfitrión, límites en el número de noches o la obligación de compartir datos.

A principios de 2015, Airbnb y otras empresas similares apelaron a la Unión Europea (UE). Desde entonces, mientras Airbnb y sus aliados oficiaban como grupos de presión, la Comisión Europea (CE) viene coaccionando a los Estados miembros en dos sentidos:

- Se advirtió a los Estados miembros de que la aplicación de restricciones excesivas podía infringir la normativa de la UE, en concreto, la Directiva de servicios.
- Se decretó que los Estados miembros no pueden pedir a Airbnb datos de sus actividades para hacer cumplir las leyes locales. Según la Directiva de comercio electrónico, las ciudades no pueden solicitar a la empresa que les ayude a detectar actividades ilegales sistemáticamente.

Aunque Airbnb puede haber ganado la batalla, la guerra no ha terminado. En este año surgirán nuevos debates, que podrían dificultar aún más a las ciudades el control sobre Airbnb.

PARA SEGUIR LEYENDO:

“UnFairbnb. How online rental platforms use the EU to defeat cities’ affordable housing measures”. Informe de Corporate Europe Observatory (CEO), mayo de 2018. <https://corporateeurope.org/en/power-lobbies/2018/05/unfairbnb>

Deuda

El grillete que aprieta al municipalismo

YAGO ÁLVAREZ

Uno de los principales objetivos de los “municipios del cambio”, elegidos en 2015 en el Estado español, era abordar el problema de la deuda. Basándose en la experiencia de la sociedad civil, buscaron desarrollar enfoques tales como “auditorías ciudadanas”, pero se encontraron a sí mismos enfrentando el poder de las finanzas.

Más de 300.000 familias desahuciadas; enormes recortes en los presupuestos sociales; la única modificación de nuestra constitución y cambios legislativos que han recentralizado el poder —tanto en Madrid como en Bruselas— robando la soberanía a los ciudadanos... Todo ello ha sufrido el Estado español en los últimos años y tiene un factor en común: la deuda como principal herramienta de sometimiento.

¿De qué hablamos cuando hablamos de deuda?

Posiblemente la respuesta a esta pregunta, tan difícil de hallar, se corresponde con lo difícil que ha sido para el movimiento antideuda del Estado español conseguir la transversalidad y el alcance social para aunar las fuerzas necesarias en esta lucha tan importante. La deuda es la principal herramienta de sometimiento y dominación de quienes han ejercido y controlado el poder durante toda la historia. Pero no se agota allí. También es un sustento moral que ha impregnado todas las fases de la evolución antropológica del ser humano y de las sociedades; un pilar básico para sostener el status quo de aquellas personas que ocupan escalones privilegiados en sus estructuras sociales.

Esa situación no solo no ha cambiado, sino que el mantra social tan anclado en el imaginario colectivo de “las deudas se pagan” o el señalamiento al deudor que no



FOTOMOVIMIENTO, CC BY-NC-ND

cumple con su “deber” como si se tratara de un “pecador”, sigue instaurado en el canon y el imaginario moral y ético de la sociedad actual.

Ante el creciente ateísmo y pérdida de poder de las creencias religiosas que, en muchas ocasiones, son las encargadas de atemorizar al deudor, se han creado nuevos dioses. Bajo la batuta del capitalismo, estas nuevas deidades son quienes imponen ahora la ley de la deuda —de la mano de otros mandamientos sagrados de esta creencia depredadora: el libre comercio o el rechazo del intervencionismo estatal en la economía— e impiden que las decisiones democráticas se impongan a su religión.

Vestidos con trajes negros, los dioses del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o la Organización Mundial del Comercio (OMC) se encargan de imponer su religión y castigar al pagano que ose contradecirla. El sistema financiero mundial, como brazo ejecutor de dicha creencia, se ha ocupado de atraer nuevos feligreses a su dogma mediante el esparcimiento de su tela de araña, el crédito.

De todos modos, esta iglesia también pierde adeptos. Y entre esos profanos se está tejiendo una red de personas por todo el planeta que han decidido plantar cara al “sistema de la deuda”, a sus consecuencias y a los que la controlan y utilizan como herramienta de desposesión y sometimiento. Se trata de un movimiento global que muta y se transforma según el territorio y el contexto de cada lucha, pero que tiene un denominador común: el rechazo a las deudas ilegítimas, aquellas contraídas a espaldas de la ciudadanía y en favor de una minoría.

El Estado español, que tiene más de 20 años de activismo en repudio a la deuda tanto desde la posición de acreedor como de la de deudor, y aprovechando los vientos de cola como el movimiento social 15M/Indignados, nacido en 2011, y las candidaturas municipalistas ciudadanas (nuevas plataformas políticas de base

ciudadana), ha conformado uno de los movimientos antideuda más estables y desarrollados del globo.

Un millón de personas contra la deuda

El domingo 12 de marzo del 2000, al mismo tiempo que el candidato de la derecha española, José María Aznar, obtenía una mayoría absoluta en el Parlamento, en las calles de más de 500 localidades del país unas urnas y unas papeletas con tres preguntas mostraban otra cara de la democracia. “¿Está usted a favor de que el Gobierno del Estado español cancele totalmente la deuda externa que mantienen con él los países empobrecidos?”, rezaba la primera de ellas.

Se trataba de la Consulta Social por la Abolición de la Deuda Externa. El hito más importante, que no el primero, de la lucha social contra la deuda. Más de 20.000 voluntarias y voluntarios, coordinados en más de 1.400 colectivos, llevaron a cabo un ejercicio de desobediencia civil para visibilizar aquella emergencia mediante un ejercicio de democracia directa.

Aquella consulta dio otro resultado que perduró en el tiempo: la creación del primer movimiento social antideuda en el Estado español. Nació en el año 2000 la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE), aglutinando diversas vertientes de activistas para trabajar de manera conjunta. En 2005, la RCADE se transforma en la campaña ‘¿Quién debe a quién?’, y se amplía el foco para poder debatir y desarrollar una visión que fuera más allá de lo económico.

Se empiezan a trabajar y discutir los términos de deuda histórica, ecológica, social y algo más tarde, deuda de género. Si hoy en día los términos “deuda ecológica” o “deuda de género” (la deuda histórica que se tiene con las mujeres por el sostén de la vida) son utilizados con normalidad por movimientos sociales y partidos políticos en el Estado español es, sin duda, gracias al trabajo del movimiento antideuda durante aquella época y los años siguientes.

De acreedores a deudores

El contexto social y económico, el de una burbuja inmobiliaria y financiera que elevaba los sueldos y reducía el paro, constituyó un factor de desmovilización para la gran mayoría de los movimientos sociales durante aquellos años. Hasta que la burbuja estalló y, como en ocasiones anteriores, las deudas cayeron sobre los de abajo mientras los de arriba eran rescatados y salían ilesos. La deuda volvió a ser utilizada como esa herramienta de sometimiento, pero esta vez nos tocaba a nosotras y nosotros. Mientras miles de personas perdían sus casas ante los bancos por no poder pagar sus deudas y el país veía incrementar su deuda pública externa (que escalaba desde el 40 al 100 por ciento del PIB) con los correspondientes recortes sociales para subsanar y rescatar a esos mismos bancos, se fraguaba un nuevo sentir

general de protesta y rebeldía. Pasamos de ser acreedores a deudores, a sentir en nuestras propias carnes aquel dolor que años antes el movimiento antideuda había denunciado que causábamos a los países del Sur como acreedores. Aquella rabia y descontento se cristalizó el 15 de mayo de 2011; nació el movimiento 15M para decir “No debemos, no pagamos”.

La deuda y las auditorías ciudadanas fueron una de las principales líneas discursivas del 15M. La gente —que abarrotaba aquellas plazas— identificaba los síntomas económicos y sociales de gobiernos e instituciones supranacionales plegados al neoliberalismo con un sistema financiero que salía prácticamente ileso de la crisis que ellos mismos habían fraguado y provocado. El dogma “las deudas son lo primero” fue

el causante de los recortes sociales; de la modificación de la Constitución Española y de que miles de personas perdieran sus hogares mientras se rescataba a los banqueros. También significó que los países poderosos condenaran a los países del nuevo sur, los de la periferia de Europa, a un retroceso en todos los derechos que se habían conseguido con mucho esfuerzo.

El 15M había llegado para romper esos dogmas y exigir responsabilidades. El rechazo al pago de las deudas consideradas ilegítimas y las auditorías con participación de la ciudadanía eran fines comunes y globales de todo el movimiento. Muchos de los activistas que habían participado en ‘¿Quién Debe a Quién?’ o en la RCADE ahora se encontraban con otras personas para dar forma a la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD)¹. El nuevo movimiento social, que en un breve tiempo creaba nodos territoriales en más de 10 ciudades de todo el Estado, exigía lo que el gobierno no estaba dispuesto a hacer por razones obvias: analizar las causas de la crisis y las políticas aplicadas antes y después del endeudamiento

Bankia

Activos: 207.400 millones de euros (2019)

Presidente: José Ignacio Goirigolzarri Tella (presidente ejecutivo)

Sede: Madrid, España

Fundación: 2010

Sector: banca

Empleados: 15.924 (2018)

Datos clave:

* Banco creado en 2010 a partir de la fusión de siete cajas de ahorro regionales, se encontró de la noche a la mañana al borde de la quiebra debido a la mala gestión, la crisis económica y la acumulación de activos inmobiliarios. La UE lo rescató con varios miles de millones de euros de la UE, a cambio de que el gobierno español impusiera duros recortes a la ciudadanía. En enero de 2020, solo se había recuperado alrededor del 13 por ciento del monto del rescate.

* Rodrigo Rato, presidente de Bankia entre 2010 y 2012, había sido ministro de economía conservador y presidente del FMI. Fue procesado y finalmente condenado a prisión en 2018 por malversación de fondos, gracias al trabajo de la plataforma ciudadana 15MpaRato.

[1] <https://auditoriaciudadana.net/>

público provocado, entre otras cosas, por el rescate al sistema financiero; señalar qué deudas debían ser repudiadas y depurar responsabilidades.

El “No Debemos, No Pagamos”, lema de la PACD, resonaba desde los megáfonos y se leía en las pancartas de las manifestaciones casi diarias de aquellos meses posteriores al 15M. Las charlas, debates y talleres sobre deuda se multiplicaban. Las asambleas de la PACD contaban con decenas de personas de todo el Estado y se desarrollaban informes, herramientas y discursos que repudiaban el sistema deuda. Sin duda fue uno de los mayores logros hasta la fecha del movimiento antideuda español: aquellos conceptos económicos, tan complicados a veces de entender, eran traducidos a un idioma que todas y todos podían comprender.

El imaginario moral y dogmático sobre las deudas se rompía ante una ciudadanía cansada de ser quien paga las consecuencias. Se rompía el relato neoliberal ante un montón de gente que estaba harta y que ya no caía en los cantos de sirena que nos intentaban convencer de que habíamos “vivido por encima de nuestras posibilidades”. Otro de los lemas decía “no es una crisis, es una estafa”, y la PACD consiguió visibilizar que la herramienta principal de aquella estafa era la deuda.

Ya no solo se quería repudiarla, se exigía conocer cómo habíamos llegado a tal situación. Se exigían responsabilidades y se necesitaba una herramienta que, desde abajo, desde la gente, armara de argumentos y empoderara la lucha para repudiar las deudas ilegítimas. Contagiados por procesos similares y movimientos sociales en otros rincones del planeta, se propuso y abrazó la idea de las auditorías ciudadanas.

Desde el 15M, las auditorías ciudadanas de la deuda han sido la principal propuesta por parte del movimiento antideuda encabezado por la PACD, concebidas como un proceso de empoderamiento ciudadano para conocer mejor cómo funciona el sistema y no como un simple análisis y estudio de lo ocurrido.

Se trataba de que la ciudadanía comprendiera cómo funcionaban esas redes clientelares, la corrupción, los mecanismos de endeudamiento y las presiones por parte del



EMMA AVILÉS ET PACD, CC BY-SA

capital financiero, de las grandes corporaciones y de las instituciones neoliberales: todo ello puesto al servicio del poder. Se buscaba aprender cómo se había llegado a tal situación para diseñar entre todas y todos un futuro en el que fuera más complicado volver a usar los mismos meca-

nismos, y fuera más fácil para los de abajo repudiar esas técnicas y las deudas ilegítimas usadas para tal fin.

Sin duda, el mayor logro del movimiento antideuda del Estado español encabezado por la PACD, ha sido que se escuche tan a menudo la exigencia de realizar auditorías ciudadanas de la deuda en programas políticos, proclamas, debates, artículos, en diferentes sectores (sanidad, educación o energética) o en las voces de personas ahora sentadas en el Congreso de los Diputados. Es un legado que posiblemente perdure y sea adoptado por otros movimientos sociales en el futuro.

El trabajo de la PACD durante esos años posteriores al 15M fue frenético. Las y los activistas del movimiento antideuda realizaron decenas de charlas y talleres y se tejieron redes internacionales con movimientos antideuda de otros países hasta crear la International Citizen Audit Network (ICAN por su sigla en inglés, y que en español puede leerse como Red Internacional por las Auditorías Ciudadanas)², en la que se dan cita plataformas ciudadanas de países como Reino Unido, Bélgica, Portugal, Grecia o Francia. Otra de las líneas de trabajo reseñables fue el desarrollo y creación de los Observatorios Ciudadanos Municipales (OCMs)³. Con el desarrollo de un software programado en código abierto y una metodología estandarizada, las y los activistas de la PACD guiaban a grupos de la ciudadanía organizada que emulaban a un portal de transparencia y participación ciudadana municipal. Por este medio, se invitaba a la población del municipio a implicarse en las cuentas de su ayuntamiento y a exigir mayor transparencia y explicaciones sobre el funcionamiento de la economía pública local.

También se crearon otros grupos relacionados con el movimiento, como el grupo 15MpaRato, que consiguió sentar en el banquillo al exministro de Economía y exdirector del FMI Rodrigo Rato, implicado en la salida a bolsa de Bankia (entidad que surgió de la fusión de varias cajas y que tuvo que ser rescatada) o grupos sectoriales como Audita Sanidad.

Asaltar los cielos, pero empezando desde abajo

Mientras en aquellas plazas se hablaba de deuda externa, mercados financieros o grandes cifras económicas, era bastante difícil encontrar soluciones, de ser posible a corto plazo, a los problemas y contexto más inmediato. La demanda del no pago de las deudas ilegítimas era el objetivo final, la meta utópica que permitía seguir luchando, pero hacía falta una nueva estrategia intermedia. La PACD necesitaba elaborar un plan más estratégico que, aunque quizás abandonaba temporalmente objetivos más globales, pudiera alcanzar y seducir a mucha más gente en aquel momento de explosión política ciudadana.

[2] <http://www.citizen-audit.net/>

[3] <http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Sabes-que-es-un-Observatorio>

Entonces, el movimiento cambió su estrategia y viró gran parte de sus fuerzas hacia el plano municipalista. Era necesario que la ciudadanía entendiera la mecánica de la deuda a un nivel más local para luego poder entender y aprender entre todas y todos cómo luchar contra la deuda en otros niveles superiores. Un enfoque que, por otra parte, era mucho más propicio a la coyuntura política que estaba fraguando un asalto a las instituciones del Estado español por parte de la ciudadanía.

El salto municipalista de la ciudadanía

El salto municipalista de la ciudadanía

En mayo de 2015, cientos de agrupaciones electorales ciudadanas se presentaron a las elecciones municipales. El auge de participación política y el “no nos representan” del 15M (unido a la decisión de Podemos de no acudir a la cita electoral municipal) desembocaron en una ola de creación de partidos políticos integrados por la ciudadanía que colapsaron al Ministerio de Interior.

Estos partidos que se creaban recogían las exigencias y necesidades sobre las que se hablaba y debatía en las plazas y manifestaciones en años anteriores, para dar voz a la ciudadanía cansada de ser “mercancía en manos de políticos y banqueros”. La práctica totalidad de los programas políticos presentados por aquellas agrupaciones electorales planteaban una exigencia común: “Realizar una auditoría ciudadana de la deuda”. El discurso y la herramienta principal del movimiento antideuda entraba en las instituciones de la mano de muchos de aquellos partidos; entraba en los ayuntamientos y se abría un abanico de posibilidades en el nuevo escenario del municipalismo.

Los meses siguientes a aquel asalto ciudadano a la vida institucional municipal volvieron a poner al movimiento antideuda en la agenda política de muchos de esos nuevos partidos, embebidos de aquel espíritu 15M. En aquel escenario tan enriquecedor se abría una pregunta que recorría las reuniones de aquellos nuevos partidos: “¿Cómo se hace una auditoría ciudadana de nuestro ayuntamiento?”. Las y los activistas de la PACD pasaron a ser reclamados por los partidos políticos municipalistas. Las charlas políticas o presentaciones de informes de análisis se transformaban en talleres más prácticos a los que asistían ya no solo activistas, sino concejales, alcaldes y personal técnico de la administración local afín a dichos partidos.

Aquellos talleres llevaron a la práctica todo el conocimiento adquirido durante años por las y los activistas antideuda y en los nodos territoriales que la PACD había promovido por municipios de todo el Estado. La teoría se transformaba en realidad, en grupos de personas organizadas que abrían los cajones de sus ayuntamientos para auditar las políticas, gasto y endeudamiento de décadas anteriores; se convertía en empoderamiento ciudadano para rechazar aquellas deudas. Todo aquel trabajo acabó plasmándose en un libro, escrito por la autora de este artículo: “Descifra tu deuda. Guía de auditoría ciudadana municipal”. Este texto

recoge las dimensiones práctica y teórica de las auditorías ciudadanas municipales, pero también el carácter y enfoque político necesario para seguir promoviendo la cultura antideuda.

El municipalismo se organiza contra la deuda

Sin embargo, aquel escenario y aquellos talleres mostraban una carencia: a los nuevos partidos políticos les faltaba una estructura común que les permitiera compartir experiencias y conocimiento, así como aunar fuerzas. Se necesitaba una mayor colaboración, formación y debate sobre las estrategias comunes. Vernos las caras, reconocernos y sumar fuerzas. Así fue como en noviembre de 2016, la PACD, junto al Comité de Anulación de las Deudas Ilegítimas (CADTM) y la agrupación electoral Somos Oviedo, organizan el primer Encuentro Municipalista contra la Deuda Ilegítima y los recortes en la ciudad asturiana. Allí se presentó el Manifiesto de Oviedo⁴.

Este texto rechazaba frontalmente las políticas de austeridad impuestas a las corporaciones locales; reclamaba auditorías ciudadanas de la gestión de gobiernos anteriores como herramienta para depurar responsabilidades y repudiar las deudas ante un sistema financiero corrupto; exigía el fin de los recortes. Asimismo, señalaba el enemigo común de las corporaciones locales y autonómicas: la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera —también conocidas como Leyes Montoro—, en honor al ministro de Hacienda del Partido Popular en aquel entonces, Cristóbal Montoro. Estas leyes llevaban el austericidio de las políticas europeas al plano local usando la deuda de los ayuntamientos y el poder financiero para poder intervenir las cuentas municipales y, del mismo modo que con las reestructuraciones del FMI, obligar a las corporaciones locales a recortar y privatizar sus servicios.

Al concluir el encuentro, se decidió en la última asamblea la constitución de la Red Municipalista Contra la Deuda Ilegítima y los Recortes⁵. Se daba un nuevo paso en la lucha antideuda en el Estado español. A ese encuentro le siguió un fortalecimiento de dicha red. Más de 300 agrupaciones electorales, partidos políticos y movimientos sociales se adhirieron y firmaron el Manifiesto. Políticos de todos los niveles institucionales, activistas y personalidades de la cultura también lo firmaron. Al de Oviedo le siguieron otros tres en las ciudades de Cádiz, Rivas, Vacía Madrid y Córdoba. Se realizaron campañas y grupos de trabajo para tratar temas como el repudio al coste del rescate bancario, la denuncia de mecanismos legislativos perversos y otras campañas y temas relacionados con el municipalismo y las consecuencias de que el sistema deuda se haya apoderado también de la administración pública, el escalón más cercano a la ciudadanía.

[4] <http://www.cadtm.org/Manifiesto-de-Oviedo>

[5] <http://municipioscontraladeuda.org/>

Los muros contra los que chocamos

Ese proceso del neoliberalismo de apoderarse de las administraciones públicas y la deuda como su herramienta, que viene desde la época de Thatcher y Reagan, estaba “atado y bien atado”, como dijo el dictador Francisco Franco en su lecho de muerte. Las administraciones públicas están conformadas por esos mismos poderes, por esa misma telaraña jurídica y legal que actúa como muro para entorpecer las acciones de aquellas personas que entran en la política con intenciones de cambiar las cosas. La burocracia, la legislación, los órganos ejecutivos, sus mecanismos, todo está organizado para que la maquinaria liberal no encuentre freno. La deuda y los contratos mercantiles están por encima de los derechos humanos. Los bancos están por encima de los partidos políticos. El neoliberalismo está por encima de la democracia.

Nuestra Grecia municipal, el Ayuntamiento de Madrid, gobernada por Ahora Madrid durante la legislatura 2015-2019 y con un activista antideuda a la cabeza de la Concejalía de Economía y Hacienda, dio batalla contra la Ley Montoro y el gobierno central para revertir las nefastas consecuencias de esta regulación sobre la ciudadanía y para recuperar la soberanía económica y social que reclamaba la Red. El Ayuntamiento de Madrid se convirtió en la punta de lanza de la Red Municipalista contra la Deuda y todo el movimiento municipalista antideuda, antiausteridad y antirecortes. El Ministerio de Hacienda, gobernado por la derecha, lo sabía y puso la maquinaria estatal y el foco mediático en aquella batalla. Aquellas leyes prohibían a los municipios gastar el superávit de sus cuentas en inversión o gasto social, y obligaban a amortizar deuda de manera anticipada. Con ello favorecían, nuevamente, al sector financiero.

La palabra “desobediencia” sonaba mucho en aquellos encuentros municipalistas, pero aquel marco legislativo, utilizado como espada de Damocles contra los ayuntamientos insurgentes, no daba muchas opciones. La jerarquía del poder administrativo, ayuntamiento / Estado / Unión Europea, otorga un margen de acción cada vez menor al escalón inferior para centralizar el poder en las altas esferas, donde el poder corporativo y sus lobbies campean a sus anchas.

Tras dos años de enfrentamientos mediáticos y políticos, Ahora Madrid cedía ante las presiones del Partido Popular, aceptaba sus condiciones (un Plan Financiero Económico que penalizaba el gasto social en favor de amortizar deuda con los bancos) y destituía al concejal. Al igual que ocurrió con Grecia, la punta de lanza de la lucha contra la deuda era derrotada por una máquina burocrática de poder centralizado y con ella se debilitaba el movimiento y la Red. Las estructuras del poder legislativo y financiero mostraban su poder y el movimiento municipalista parecía incapacitado para romper el corsé legislativo que ata a los ayuntamientos.

El movimiento quedó afectado, pero no hundido. La Red Municipalista perdió algunas de las ciudades importantes en las siguientes elecciones locales, pero el

relato contra la deuda ilegítima y el poder corporativo, financiero y recentralizador de Europa, ha impregnado la política municipal ciudadana y el imaginario social. Las nuevas luchas lo tienen claro: los movimientos contra la privatización de la sanidad o contra los fondos buitres señalan la deuda como una de las principales herramientas del poder contra la que luchar. Los dos movimientos que ahora mismo tienen poder articulador global, el ecologismo y el feminismo, rescatan las luchas contra la deuda ecológica y de género. El futuro traerá nuevas crisis de la deuda, pero en esta ocasión, el movimiento tendrá más experiencia que nunca y estará preparado para librar una nueva batalla.

"Paremos el 5G"

Ciudadanos, médicos y jueces se oponen en una Italia obsesionada con los teléfonos móviles

MARIA MAGGIORE

Las instituciones europeas, las empresas de telecomunicaciones y los gobiernos nacionales se apresuran a implementar el 5G en el continente. Esta tecnología se anuncia como un motor de crecimiento y empleo, pero los interrogantes sobre sus beneficios económicos reales para las personas siguen sin respuesta. Hay quien se preocupa por los efectos de instalar docenas de antenas nuevas en la salud y el medio ambiente. ¿Tiene alguna posibilidad la resistencia al 5G?

"Los instaladores llegaron a mediados de agosto cuando estábamos de vacaciones. Tres días tardaron en colocar esta antena de 35 metros de altura que nos ha arruinado la vida". Paolo¹ vive en la cima de una colina del pueblo de Pagliare di Sassa, una pedanía de L'Aquila, en el centro de Italia. Y asegura que: "Desde que la antena está funcionando, todos tenemos dolores de cabeza cuando estamos en casa, hemos perdido visión e, inexplicablemente, nuestros electrodomésticos ya no funcionan".

La casa de Paolo se alza en una colina que domina los bloques de apartamentos que se construyeron deprisa y corriendo tras el terremoto que asoló la región en 2009, y que se cobró la vida de 309 personas y dejó a otras 65.000 sin hogar. Construidos con materiales baratos y de mala calidad, algunos de los bloques se han vuelto inseguros y sus residentes los han abandonado. Otras familias con menos recursos no han tenido más remedio que quedarse en estos apartamentos en ruinas. Apenas recuperados de la tragedia del terremoto que obligó a los lugareños

[1] El nombre se ha cambiado.

a arreglárselas por su cuenta, ahora tienen que lidiar con los efectos secundarios de la antena 5G: la región fue elegida para experimentar la nueva tecnología 5G, con la que el gobierno italiano está muy entusiasmado. Pero la gente que tiene su hogar en esta región no renuncia a la lucha.

“¡No queremos ser conejillos de indias!”

El 2 de diciembre de 2018, se reunieron en la plaza de la iglesia de L'Aquila varios firmantes de una petición que exigía al ayuntamiento el desmantelamiento de la antena 5G. La petición ha sido firmada por casi 1900 personas, entre ingenieros locales, médicos y habitantes. “Ya hemos sufrido la tragedia del terremoto, ¡no



© MARIA MAGGIORE

queremos ser conejillos de indias de ningún experimento!” declaró Gianmaria Umberto, un médico que firmó la petición. Giulio Pace, presidente de la organización Creonlus y coordinador de la campaña contra la antena, cuenta que en 2009 se instaló una primera antena como medida de emergencia para que las líneas telefónicas volvieran a funcionar tras el terremoto. “Se suponía que solo debía estar aquí seis meses. Pero esos seis meses se convirtieron en doce, los doce en dieciocho...” La torre de la antena

acabó quedándose nueve años.

Hace dos años, el alcalde del momento, Massimo Cialente, aprobó una resolución confirmando que la antena se quedaría para siempre. “Y ahora nos traen esta nueva atrocidad en nombre del futuro 5G”, se lamenta Pace. Ahora el pueblo de L'Aquila tiene dos antenas bloqueando su horizonte, a solo dos metros una de otra.

Investigate Europe habló con el actual alcalde de extrema derecha (Hermanos de Italia), Pierluigi Biondi, quien asegura que “todos los involucrados han dado su consentimiento” a la antena 5G. El alcalde se refiere a la consulta entre la Superintendencia (departamento encargado de proteger el sitio monumental donde se encuentra la antena) y el organismo de sanidad local y ARTA que mide la exposición a la radiación electromagnética.

Ninguna de estas tres entidades era contraria a la antena en un principio. Y había una razón: “ARTA vino a medir los niveles de emisión a las 10 de la mañana”, explica el presidente de la campaña de resistencia, “cuando todo el mundo está trabajando y la radiación electromagnética es más débil. No se midieron durante un período

de 24 horas como lo exige la ley”. La Superintendencia explicó que le dijeron que la antena era el único medio de devolver la red telefónica a los habitantes después del terremoto. Desde entonces, ha enviado una carta al ayuntamiento recomendando el traslado de la antena a otro lugar.

La antena sigue ahí

Al final, el organismo de sanidad local decidió optar por la precaución y publicó un aviso legal definitivo: “Nadie debe estar cerca de la antena más de cuatro horas y si es posible debe moverse como medida de precaución”.

La presión sobre el ayuntamiento se saldó con una votación el 28 de febrero de 2019 para mover la antena a “otro lugar”, en un plazo de treinta días. La campaña de resistencia local se valía del argumento de que era inevitable: en la prisa por instalar la antena, el ayuntamiento había olvidado incluirla en el plan de desarrollo local, algo que es ilegal.

Y, sin embargo, desde la decisión del ayuntamiento en febrero, no ha pasado nada. Se han celebrado elecciones europeas, después elecciones regionales y el gobierno de Italia ha cambiado, pero la antena de 35 metros de altura todavía se encuentra, para vergüenza de todos, entre las casas de la bonita colina de Pagliare di Sassa.

Italia se lanza de cabeza al 5G

La victoria contra el 5G se ve muy lejana en esta región. «Se deben instalar siete antenas en L'Aquila para fin de año», dice Lucio Fedele, operario jefe de ZTE, la empresa china que fabrica equipos de telecomunicaciones y que abrió su centro de investigación europeo en 5G en esta ciudad capital de la región de Los Abruzzos y en la que viven unas 72.000 personas. Y es solo la punta del iceberg: parece que los gigantes de las telecomunicaciones italianos como Vodafone, Wind Tre y Tim (Telecom Italia) planean instalar nuevas antenas... ¡cada cien metros! No son las mismas antenas que las de L'Aquila, sino antenas de retransmisión 5G más pequeñas que formarán la mayor parte de la red.

“En esta segunda fase, responderemos a la demanda y procederemos gradualmente”, promete Stefano Takacs, director de operaciones de Wind Tre, la empresa de telecomunicaciones responsable de las pruebas de 5G en L'Aquila. La tecnología 5G se considera en Italia, como en toda Europa, una oportunidad para reactivar la economía y crear empleo². Hay mucho en juego para las empresas italianas que han invertido 6.500 millones de euros en obtener la mayor parte del espectro 5G, batiendo récords europeos (13.600 millones han invertido las empresas británicas y 14.100 millones las españolas). Una cantidad astronómica que ayudará a reducir

[2] Véase el informe de Investigate Europe sobre el 5G: <https://www.investigate-europe.eu/publications/the-5g-massexperiment/>

la deuda pública de Italia. Pero la industria de las telecomunicaciones obviamente quiere amortizar su inversión...

El gobierno no dudó en probar el 5G. En 2017, Roma designó cinco ciudades de prueba: L'Aquila, Bari, Milán, Prato y Matera. Las empresas de telecomunicaciones invirtieron en el desarrollo de las redes y se asociaron con pymes y universidades locales, mientras que los ayuntamientos no ocultaban su entusiasmo con estas nuevas antenas. La Sociedad Internacional de Médicos para el Medio Ambiente pidió al Ministerio del Medio Ambiente un estudio del impacto medioambiental y humano de la tecnología 5G, pero no se le hizo caso.

La Cámara de Diputados italiana finalmente llevó a cabo una investigación en 2018, dentro de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, cuyos principales invitados fueron Vodafone, Tim y Fastweb. Pocos responsables italianos están dispuestos a frenar el 5G.

Las pequeñas localidades contraatacan

Los únicos que luchan contra la invasión del 5G son las pequeñas localidades (de entre 10.000 y 50.000 habitantes). Marsaglia, a 100 km de Turín, fue la primera ciudad pequeña que votó contra cualquier experimentación del 5G “como medida de precaución”, explica la alcaldesa de la ciudad, Franca Biglio, quien también preside la Asociación de Pequeños Ayuntamientos de Italia. “Ni siquiera sabíamos que nuestras ciudades habían sido seleccionadas para pruebas de 5G; que no nos digan que es una gran oportunidad, es ridículo”. Ahora no se pueden instalar antenas 5G en Marsaglia. Después de dar el paso en Piamonte, otras pequeñas ciudades de toda Italia se unieron a la revuelta, como San Gregorio Matese y Scanzano Jonico en Campania, Cogne cerca de Aosta, Cervia cerca de Ravenna, Caorle en Véneto; también ciudades de Emilia, Calabria y Cerdeña.

Los ayuntamientos han declarado que los experimentos del 5G constituyen un riesgo para la salud y la seguridad de los habitantes, y exigen al gobierno que les ponga fin. Hasta la fecha, trece ciudades italianas elegidas para pruebas del 5G por el gobierno italiano se han negado. Otras setenta ciudades han votado mociones alertando sobre los riesgos del 5G.

Sesenta representantes del gobierno local presentaron un recurso al parlamento italiano en un congreso contra el 5G celebrado en junio de 2019. Es una ironía que la base política del Movimiento Cinco Estrellas reclama el fin del 5G a un



gobierno cuyo partido mayoritario es el mismo Movimiento Cinco Estrellas. Incluso un distrito de Roma, la Zona XII, votó recientemente en contra de las pruebas del 5G, lo que puso a la alcaldesa del partido, Virginia Raggi, en una posición muy incómoda.

Por ahora, es solo una gota en el océano teniendo en cuenta el furor que los smartphones causan entre los consumidores italianos. Italia tiene el tercer porcentaje de uso de teléfono móvil más alto del mundo (83%) después de Corea del Sur y Hong Kong. El italiano medio pasa dos horas al día

en las redes sociales y otras dos horas con el teléfono. Fantástica noticia para las empresas de telecomunicaciones, todas privatizadas en Italia, que luchan a brazo partido por llevarse una cuota de este mercado tan lucrativo.

Solo algunas voces alertan sobre los peligros potenciales de la radiación electromagnética. Amica (Asociación de Enfermedades Crónicas y Contaminación Ambiental) de Turín es una de ellas y está presionando por el desmontaje de la antena que instaló la compañía Tim en el centro de la ciudad con el beneplácito del Consejo Municipal. “Los experimentos con seres humanos atentan contra la ética y se consideran un crimen contra la humanidad”, dice Francesca Orlando de Amica. Además de los alcaldes de las pequeñas ciudades que presionan de abajo arriba, varios jueces han tomado acciones legales para que los peligros de la radiación electromagnética se reconozcan en las más altas esferas.

Los tribunales sientan precedente

Italia ya es el primer país de Europa donde tres decisiones judiciales han relacionado el uso del teléfono móvil con los tumores cerebrales. “Por un lado, los responsables políticos se están saltando a la torera los principios de precaución, y, por otro, los jueces están llamando cada vez más la atención. Están dando ejemplo a los políticos de la importancia de tomarse en serio la radiación electromagnética”, afirma el biólogo italiano Angelo Levis, presidente de la Asociación para la Prevención y Control de la Radiación Electromagnética (APPLE, por sus siglas en italiano).

Telecom Italia (Tim)

Ingresos: 18.900 millones de euros (2019)

Directivo: Luigi Gubitosi (consejero delegado)

Principales accionistas: Vivendi, Cassa de depositi e prestiti

Sede: Rome y Milán (Italia)

Fundación: 1994

Sector: telecomunicaciones

Empleados: 54.423 (2018)

Datos clave:

* El mercado de las telecomunicaciones de Italia está dominado, como en el resto de Europa, por un reducido número de grandes empresas, la mayoría de las cuales (como Tim) son antiguas empresas públicas: Orange, Vodafone, Deutsche Telekom... Estos gigantes de las telecomunicaciones tienen una enorme influencia en las instituciones de la UE.

En 2012, en Brescia, cerca de Milán, un ex directivo ganó un juicio cuando el tribunal reconoció que su tumor lo causó una enfermedad profesional que le dejó discapacitado en un 80%. El tribunal dictaminó que el tumor fue causado por el uso excesivo del teléfono móvil, al que estaba pegado varias horas al día.

El último fallo judicial se remonta a 2017: el tribunal de Ivrea condenó a Telecom Italia a pagar una indemnización de por vida a un antiguo empleado que pasaba entre tres y cuatro horas al día con el teléfono móvil. «La idea es hacer lo mismo que contra las grandes empresas tabacaleras: demandar a los fabricantes y distribuidores de teléfonos móviles», explica el abogado Stefano Bertone, quien ganó el caso Ivrea. «Pero tenemos que ir paso a paso porque el público todavía está demasiado apegado a sus smartphones y las aplicaciones».

Animado por esta victoria, el abogado decidió en 2018 unirse a la APPLE y llevar ante los tribunales a los Ministerios de Salud, Medio Ambiente, Educación y Desarrollo Económico de Italia, acusándolos de no informar debidamente al pueblo italiano sobre los riesgos asociados con los campos electromagnéticos, como establece la ley italiana Protección contra los campos electromagnéticos, de 2001.

A principios de 2019 el tribunal administrativo les dio la razón condenando a tres de los cuatro ministerios, en una decisión histórica en Europa. Los jueces también ordenaron a los ministerios poner en marcha una campaña de información pública en el plazo de seis meses explicando los riesgos asociados al uso del teléfono móvil y del WI-FI. Pero nuestro abogado no va a detenerse allí. Y asevera: “No tardaremos en llevar ante los tribunales a toda la industria de los teléfonos móviles”.

Otros ejemplos de resistencia al 5G en Europa

Aunque no son muchos, en Europa hay varios movimientos liderados por ciudadanos contra la instalación de antenas 5G.

- En la ciudad de Patras (Grecia), un comité de ciudadanos ha echado abajo los planes del Ministerio de Gestión Digital de convertir a esta ciudad, la tercera más grande del país, en un campo de pruebas del 5G. La campaña de resistencia local denunció el proyecto que pretendía instalar “50.000 antenas más en la ciudad”. Tras meses de reñidos debates, el alcalde dio carpetazo al proyecto en julio de 2018, alegando posibles riesgos para la salud.
- En Gliwice (Polonia), elegida por Orange, Telekom y Huawei como campo de pruebas para los primeros experimentos 5G, treinta o cuarenta ciudadanos salieron a la calle el 29 de septiembre de 2018. La protesta, que tuvo mucho eco en los medios, obligó al ayuntamiento a actuar. El portavoz del Concejo Municipal, Marek Jarzabowski, se apresuró a negar cualquier implicación afirmando que no se le había informado oficialmente de los experimentos y, por tanto, “no podían ser responsables”. Tras la protesta, las pruebas de 5G se hicieron cada vez más escasas hasta desaparecer por completo.
- En septiembre de 2017, los científicos presentaron una petición europea en la que pedían una moratoria del lanzamiento del 5G [<http://www.5gappeal.eu/about/>]. Doscientos sesenta y tres científicos y médicos habían firmado la petición al 27 de noviembre de 2019.
- En noviembre de 2018 se lanzó un llamamiento internacional [<https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal>] para parar el 5G en la tierra y en el espacio. El 27 de noviembre de 2019, la petición había sido firmada por 183.000 ciudadanos, organizaciones y científicos de al menos 208 países.

De la negativa pública al interés privado

¿De verdad necesita Belgrado una costosa incineradora de construcción privada?

BENOÎT COLLET

Uno de los vertederos al aire libre más grandes de Europa lleva 50 años contaminando el suelo y el aire en las afueras de Belgrado. Suez, multinacional francesa especializada en los sectores de aguas y residuos, ha firmado un importante contrato con las autoridades de la capital serbia para construir una incineradora que convierta los residuos en energía. Muchos temen que la privatización de la gestión de los residuos municipales salga cara para la ciudad y sus habitantes, tanto desde el punto de vista económico como ecológico.

A pesar de que la zona está a 700 kilómetros de la costa, grandes bandadas de gaviotas oscurecen el cielo. Entre las colinas tapizadas de cultivos, a centenas de metros del Danubio, uno de los vertederos al aire libre más extensos de Europa ocupa un valle de las afueras de Belgrado, la capital de Serbia. Durante medio siglo, los servicios municipales han acumulado aquí la basura doméstica de la ciudad, más de 500.000 toneladas cada año. Ahora la basura se ha transformado en una nauseabunda montaña de plástico, muebles rotos, chatarra y desechos orgánicos de 40 metros de altura. Una hilera de camiones de basura de Gradoscka čistoća, la empresa municipal encargada del vertedero, viene a descargar la basura del día. Los camiones excavadores empujan los residuos a los lados de la excrecencia urbana, que está rodeada por un arroyo negruzco que recuerda al foso de un castillo medieval. Alrededor, miles de bolsas de plástico penden de las ramas de los árboles.



© BENOÎT COLLET

“Durante 50 años nadie ha hecho nada para mejorar la situación en Vinca. Es un desastre ecológico sin paliativos... Cada seis meses, las bolsas de metano provocan incendios en los vertederos”, se lamenta Dragan Đilas. Como ex alcalde de Belgrado (2008-2013), lidera la oposición al presidente conservador Aleksandar Vučić. Cuando se desempeñaba en el cargo, tenía planes de construir una incineradora municipal de residuos, pero no fue posible debido a la falta de apoyo económico de donantes privados. Al final habrá una incineradora, pero llevará la bandera francesa.

En septiembre de 2019, la multinacional francesa Suez, líder del consorcio internacional Beo Clean Energy Limited, firmó un contrato de 300 millones de euros con el ayuntamiento de Belgrado para construir la incineradora a escasa distancia del vertedero. “Me temo que esto no resolverá los problemas en Vinca. Suez solo quemará la nueva basura de Belgrado. Los viejos desechos seguirán pudriéndose poco a poco y contaminarán el suelo y el Danubio”, asegura el ex alcalde, mientras bebe un vaso de Coca-Cola en las oficinas de la Alianza para Serbia, una coalición de partidos políticos de izquierda y derecha opuestos a las políticas neoliberales y clientelistas del presidente Vučić.

El gigante francés del agua y los residuos ha prometido generar biogás con las viejas basuras del vertedero y electricidad utilizando la nueva incineradora, que se estima quemará 43 toneladas de residuos por hora, convirtiéndolo en 103 MW de energía. El ayuntamiento se ha apuntado una victoria política pues ello supondrá el cierre de uno de los mayores vertederos de Europa además del “desarrollo de un sistema de gestión de residuos de vanguardia”, como lo define el vicealcalde Goran Vesić. Por su parte, Suez se ha asegurado unos beneficios estables durante 25 años, mientras afirma haber resuelto el problema ambiental de Vinca.

Una factura de 1.600 millones de euros

Pero esta victoria política puede salir muy cara a los ciudadanos de Belgrado. Suez tiene la intención de amortizar al máximo su inversión en Vinca (que asciende a varios cientos de millones de euros). La ciudad se ha comprometido a pagar a la compañía por la futura incineradora casi 1.600 millones de euros en 25 años, hasta 2043. Ello representa una cantidad astronómica, en un país cuyo PIB es de 40.000 millones de euros.

“Somos nosotros, los ciudadanos, los que vamos a pagar la cuenta. Las tarifas de recogida y gestión de residuos aumentarán. Estas asociaciones público-privadas que anteponen los intereses privados de las empresas extranjeras al bien común se han convertido en norma, provocando un aumento del coste de vida”, dice Aleksa Petkovic, portavoz del grupo ciudadano Ne Davimo Beograd (que significa algo así como “Belgrado no se vende”). En la pared de su oficina cuelga una foto de un pato gigante flotando en el Danubio, símbolo del movimiento al que pertenece desde las grandes protestas contra el Belgrade Waterfront, un proyecto inmobiliario financiado por los Emiratos en ambas orillas del río, en 2016. Desde entonces, Ne Davimo Beograd se ha opuesto a otros proyectos urbanos liderados por empresas, incluida la futura incineradora de Vinca.

“Este tipo de asociación es en extremo controvertida porque endeuda enormemente a las autoridades locales durante muchos años”, asegura Pippa Gallop de la ONG Bankwatch, que se dedica a vigilar a las instituciones financieras internacionales de Europa del Este. “Sin embargo, son promovidas por el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) y por la Corporación Financiera Internacional (CFI)”.¹

En el suelo de Vinca se acumulan las capas de plástico. En todo el país proliferan los consejos sobre eliminación de residuos no oficiales, el sistema de clasificación y reciclaje de desechos es casi inexistente y el sistema de recogida es muy deficiente. Todos los desperdicios de Belgrado acaban en Vinca, el único vertedero de la ciudad, para festín de las gaviotas. La ciudad nunca ha invertido en gestión de residuos. El escaso reciclaje que existe lo realizan algunas compañías privadas que recurren a recogedores de desechos electrónicos, en su mayoría personas de etnia gitana en situaciones de gran precariedad.

El proyecto inicial de incineración de Dragan Đjilas no solo suponía generar electricidad para cubrir las necesidades de la ciudad, sino también empleo para los recogedores de basura. “Los 1.600 millones de euros que pagaremos a Suez son siete veces más que lo que hubiera costado mi proyecto. Teníamos dos opciones: invertir 300 millones de euros de nuestro propio bolsillo para producir electricidad propia o pagar más de 1.000 millones de euros a una corporación extranjera,

[1] Organización filial del Banco Mundial.

mientras nos veíamos obligados a comprar electricidad por encima del precio de mercado. Adivina lo que elegimos...”.

Convertir el plástico en energía “verde”

El ayuntamiento se ha comprometido a comprar durante los próximos 25 años la electricidad generada por la incineradora de Suez al doble del precio de mercado, según la primera versión del contrato publicada por Transparency Serbia. “Estos precios tan altos difícilmente evitarán que la gente siga usando carbón para calentar sus hogares”, declara Aleksa Petkovic. Las subvenciones que concede el ayuntamiento a Suez para la producción de “energía renovable” han aumentado la factura de energía de los habitantes unos pocos céntimos por kWh. Una cifra que podría parecer insignificante, si no fuera porque el salario medio en Serbia no supera los 300 euros al mes.

La etiqueta de “energía verde” es muy cuestionable. En realidad, es incompatible con la legislación europea, que Serbia ha integrado parcialmente en su legislación nacional con vistas a una futura incorporación a la UE. Un informe reciente de Bankwatch sobre las irregularidades del contrato entre Belgrado y Beo Clean Energy Limited revela que el acuerdo sobre el precio de la electricidad vulnera las normas de la UE, quien no considera que la electricidad generada a partir de la quema de plástico sea “renovable”. Al quemar 340.000 toneladas de plástico al año, la

ciudad también corre el riesgo de poner en peligro el objetivo del país de reciclar el 50 por ciento de los residuos municipales de aquí al 2030, y adherir así a la legislación de la UE. La etiqueta verde de la incineradora de Suez no se sostiene tan bien. “En la licitación, ninguna compañía propuso una solución para impulsar la clasificación y el reciclaje de residuos”, recuerda Pippa Gallop.

Suez

Ingresos: 1730 millones de euros (2018)

Presidente: Bertrand Camus (consejero delegado)

Principales accionistas: Engie, La Caixa

Fundación: 1880 (Lyonnaise des eaux)

Sede: París, Francia

Sectores: agua, residuos

Empleados: 90.000 (2019)

Datos clave:

- * Suez es, junto con Veolia, líder mundial del sector privado del agua y los residuos. Gracias a su largo predominio con afán de lucro sobre el mercado francés, ambas compañías comenzaron a expandirse internacionalmente en la década de los 80. Su actividad principal se basa en la privatización y en las alianzas público-privadas.
- * Suez perdió varios contratos importantes de agua a causa del movimiento mundial contra la privatización. Actualmente, el ayuntamiento de Barcelona está tratando de anular el contrato de suministro de agua con Agbar, ahora filial de Suez.
- * En el sector de los residuos, Suez da prioridad a las tecnologías de incineración y conversión de residuos en energía y a las futuras tecnologías de reciclaje, por encima de la reducción de residuos o del objetivo Cero Basura.



© BENOÎT COLLET

Solo unos pocos envases de plástico dan testimonio de los esfuerzos de reciclaje de Vinca. En el vertedero, este trabajo se ha relegado a la comunidad gitana. Trabajando en condiciones muy precarias y sin protección, los trabajadores de la chatarra esperan a que los camiones de Gradoscka čistoća terminen de descargar antes de mirar qué se puede recuperar: restos de metal, losas de hormigón, muebles, electrodomésticos rotos... Cargan todo lo que pueden en sus viejos vehículos, o a veces en sus destartalados camiones Yugo, y se dirigen a la aldea vecina, donde se encuentran los almacenes. Allí, cortan el metal para venderlo por piezas y recuperar repuestos de dispositivos electrónicos.

Miles de personas viven de la recogida informal de residuos en la zona. La empresa pública Gradoscka čistoća ha otorgado permisos a algunas de ellas para trabajar en el vertedero. Incapaz de crear un sistema propio de procesamiento y reciclaje de residuos, el ayuntamiento ha optado por externalizar parte del trabajo a poblaciones vulnerables que se envenenan lentamente recogiendo plástico que venden a treinta céntimos los tres kilos. El evidente fracaso de la gestión de residuos públicos de Belgrado se refleja en el resto del país: solo el 5 por ciento de los residuos se procesa y se recicla.

Por el contrario, Eslovenia, otro país de la antigua Yugoslavia, se ha convertido en un campeón europeo en el área de los residuos sin tener que recurrir al sector privado. Cada año, el centro público de tratamiento de la capital Liubliana convierte 166.600 toneladas de desechos en compost, biocombustible o nuevos objetos, lo que supone casi el 98 por ciento de los desechos que recibe. Para Aleksa Petkovic es una prueba clara de que el objetivo “Basura Cero” es posible en los Balcanes Occidentales y explica: “Lo único que hace falta es que el gobierno serbio mejore

el proceso de recogida y clasificación, lo que permitiría al menos hacer un mejor uso de los desechos orgánicos”.

Dioxinas y furanos

“Con las asociaciones público-privadas siempre es difícil decidir quién gana: ¿la corporación o el interés general?” declara Nemanja Nenadic, de Transparency Serbia. Se sigue haciendo esta pregunta incluso después de participar en el comité encargado de analizar las ofertas de empresas preseleccionadas para Vinca. Tampoco lo tienen fácil los miembros del Concejo Municipal, con pocos días para leer un contrato de más de 1.000 páginas que no se ha traducido al serbio. El Banco Europeo de Inversiones (BEI), otra institución financiera de la Unión Europea, iba a costear parte de la inversión inicial de Suez, pero finalmente retiró su apoyo al considerar que el proyecto era incompatible con las normas ambientales de la UE. Sin embargo, esto no impidió que el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), cuyo objeto facilitar la transición de la Europa del Este hacia una economía de mercado, diera luz verde al proyecto.

Alex Reiserer, portavoz del BERD, afirma que: “Esta alianza con el sector privado supone una nueva forma de financiar al sector público en Serbia, menos expuesta a la inestabilidad política” y que “El contrato permitirá a Belgrado reducir los riesgos de contaminación y evitar la destrucción de los ecosistemas”. Sin embargo, al externalizar la gestión de residuos a una empresa privada durante 25 años, la ciudad corre el riesgo de perder el control de la gestión de los riesgos medioambientales. Aun así, es innegable que esta circunstancia no ha sido una prioridad para el gobierno ni para el ayuntamiento, más preocupados por atraer inversores extranjeros que por crear empleo y reactivar un sector industrial en declive.

“¿Cómo se conocerán las emisiones de dioxinas y furanos de la futura incineradora? No hay ningún laboratorio en Serbia que pueda hacerlo”, señala Aleksa Petkovic. Hasta ahora, no ha habido muchas opciones para los habitantes de la capital que tengan quejas del vertedero municipal. Pero habrá muchas menos una vez que Beo Clean Energy Limited tome el control.

“Apelaremos al BERD para que se retire de este proyecto perjudicial”, continúa el activista de Ne Davimo Beograd. Pese a su firme determinación, ¿puede este movimiento oponer resistencia a un proyecto de más de mil millones de dólares. Si alguna vez vuelve al poder, Dragan Đilas también tiene la intención de poner fin a la alianza público-privada. “Y si Suez nos demanda ante un tribunal de arbitraje de inversiones, alguien de la administración acabará hablando y sabremos quién en el Concejo Municipal lucró con este absurdo contrato”.

Gigantes tecnológicos, industria del armamento y privatizadores

La lucha contra la smart city en Francia

OLIVIER PETITJEAN

Multinacionales y políticos de todo el mundo nos venden las bondades de la smart city, pero ¿qué hay detrás de este concepto tan en boga? ¿A qué intereses sirve? Sus detractores proliferan como setas ante el temor a la privatización, al aumento del control y a su impacto ambiental y social.

A juzgar por la cantidad de conferencias y exposiciones sobre el tema, su omnipresencia en los documentos empresariales y administrativos, y la cantidad de proyectos que se le han dedicado, las smart cities (ciudades inteligentes) son la moda del momento. Muchas ciudades del mundo afirman estar trabajando por ser “más inteligentes” y ya prevén varios proyectos con diversos alcances y objetivos. Aunque curiosamente atraen el interés de empresas muy variopintas, en un principio fueron compañías como IBM y Cisco (y ahora Huawei) las que se implicaron y las que acuñaron el término smart cities. Les siguieron gigantes de la tecnología como Google, Uber y Airbnb. Los actores municipales tradicionales, tales como las empresas de servicios públicos y los promotores inmobiliarios, no tardaron en subirse al tren de la “ciudad inteligente”. Y ahora, de forma menos notoria pero no menos influyente, la industria de la seguridad también está llamando a la puerta.

Entonces, ¿por qué tanto alboroto? ¿Y qué es exactamente una “ciudad inteligente”, aparte de una vaga promesa de que con tecnología y datos todo funcionará con más fluidez y eficiencia? La etiqueta se ha colocado a muchos proyectos e inicia-



ITU/R/FARRELL, CC BY

tivas políticas de diversa índole: desde transporte y energía hasta preparación de desastres y mantenimiento de carreteras. Lo único que tienen en común es el uso de la tecnología digital para dar solución a problemas urbanos. Para las empresas, el atractivo de las ciudades inteligentes es obvio: otro sello más que lucir en sus productos, un medio de atraer más contratos y dinero público, y de crear nuevos mercados. Para los políticos, es un concepto que “convence” (al estilo de “atractivo”, “creatividad” o “excelencia”) a la hora de maquillar las políticas urbanas neoliberales. Pero, ¿qué pasa con la gente real en las ciudades reales? De momento se habla mucho pero no ha habido proyectos concretos que traigan cambios. ¿Significa esto que no tenemos nada de qué preocuparnos? Posiblemente no.

Aunque los proyectos reales pueden ser pocos y de alcance limitado, la “ciudad inteligente” conlleva una serie de implicaciones bastante preocupantes en muchos sentidos. Aparte de poner en riesgo la privacidad y las libertades fundamentales de los habitantes, plantean graves problemas ecológicos. También presagian un futuro en el que las autoridades locales y los ciudadanos cederían a empresas privadas el poco control que tienen sobre las estructuras, la gestión y la evolución de las ciudades. La industria siempre querrá promocionar las bondades de los avances tecnológicos entre los ciudadanos y las autoridades públicas, sin darles tiempo a considerar sus riesgos y consecuencias. La “ciudad inteligente” es solo un ejemplo. Ahora mismo, las nuevas tecnologías y herramientas de recopilación de datos están invadiendo las ciudades en nombre de objetivos aparentemente nobles como la eficiencia, la sostenibilidad y la transparencia. Pero hay razones sobradas para dudar que estas tecnologías ayuden a alcanzar estos objetivos.

El principal problema de las “ciudades inteligentes” es el despilfarro de ingentes cantidades de dinero público en proyectos empresariales de escaso interés, que

además impiden que los políticos apliquen políticas más ambiciosas o efectivas para abordar los mismos problemas. Dicho con claridad: son “soluciones falsas” que nos venden las empresas privadas. Y, por si fuera poco, toda esta tecnología puede tener un fin mucho más siniestro: la vigilancia generalizada por parte de gobiernos o corporaciones.

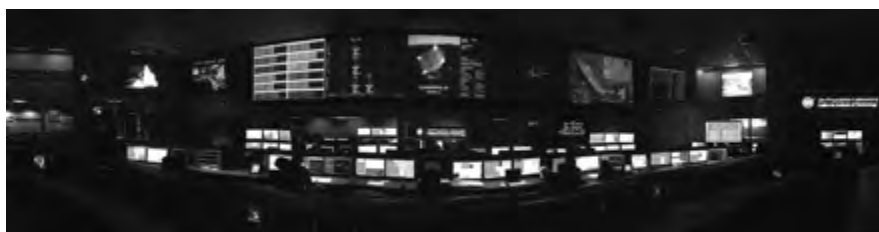
De los servicios privatizados a las ciudades privatizadas

“Ciudad inteligente” y ciudad privatizada son lo mismo, por muchos motivos. El término fue acuñado con el objetivo de vender nuevos servicios y sistemas de gestión a las autoridades locales. Bajo el eslogan de “ciudad inteligente”, muchos imaginan un centro de control estilo militar, desde el cual los gerentes pueden controlar toda la ciudad en tiempo real mediante un flujo constante de datos sobre el clima, la contaminación, el tráfico de peatones y vehículos, las infraestructuras, etc., con el fin de anticiparse a los problemas o detectarlos cuando ocurren e intervenir de forma oportuna. Esto es más o menos lo que quiere vender IBM con su “centro inteligente de operaciones” que dio a conocer en Río para los Juegos Olímpicos de 2014.

En Europa, las empresas especializadas en servicios públicos privatizados como Suez y Veolia (que operan principalmente en los sectores del agua y los residuos) fueron de los primeros en apropiarse de la etiqueta “ciudad inteligente” para sus propios intereses. Según lo anuncian, una “ciudad inteligente” es una forma de integrar los servicios públicos locales como el agua, los residuos, el transporte público, la calefacción colectiva, la iluminación y la gestión de instalaciones, etc., para que todo sea más “eficiente”. A corto plazo, no es más que privatización disfrazada de buenas intenciones: los servicios públicos llevan mucho tiempo utilizando tecnologías digitales, y los servicios locales citados son tan distintos en su forma de administración y difieren tanto de una ciudad a otra que integrarlos en una sola plataforma es casi imposible o no ofrece ninguna ventaja concreta.

Hasta los aspectos aparentemente más simples de la “ciudad inteligente” despiertan serias dudas, como la iluminación inteligente que solo se encendería cuando hay personas cerca. Angers, una ciudad de tamaño medio al oeste de Francia (290.000 habitantes) acaba de poner en marcha uno de los planes de “ciudad inteligente” más ambiciosos del país y lo ha subcontratado a un consorcio de empresas que incluye a Engie y Suez. En toda la ciudad se instalarán miles de sensores y otros dispositivos conectados a un coste de 178 millones de euros durante 12 años para lograr el objetivo de “huella de carbono cero”. Los ahorros previstos para la ciudad en un período más largo (25 años) son de poco más de 100 millones de euros, lo que plantea la cuestión de si este plan es rentable comparado con otros que persiguen idénticos objetivos.¹

[1] https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/11/15/angers-investit-178-millions-d-euros-pour-devenir-un-territoire-zero-carbone_6019288_3234.html



RADIOFUN, CC BY-SA

A largo plazo, este modelo de “ciudad inteligente”, controlado por las tradicionales empresas de servicios urbanos, corre el riesgo de favorecer aún más la privatización. La propiedad de la información y de los datos siempre ha sido un escollo para las ciudades que han querido anular sus contratos con empresas privadas y remunicipalizar la gestión de servicios públicos. En general, suele haber bastante asimetría de información entre las empresas privadas y las autoridades locales sobre el servicio público, lo que da ventaja a las primeras a la hora de negociar las condiciones y tarifas. La llegada de soluciones de “ciudad inteligente” de mayor alcance, aún más centradas en la recopilación de datos, empeorará la situación.

También existe el riesgo de que los servicios públicos evolucionen de manera que los haga más fácilmente integrables con vistas a satisfacer las necesidades de las empresas privadas. En Dijon, otra ciudad francesa de tamaño medio y muy dada a promocionarse como pionera de la “ciudad inteligente”, la misma empresa que ya gestiona los servicios de agua y residuos, Suez, se ha hecho cargo del nuevo “centro de control” que supervisará todos los sistemas eléctricos de la ciudad (alumbrado, semáforos, estaciones de carga de vehículos eléctricos) y algún día podría integrar todos los servicios públicos. ¿Se convertirá Dijon en una ciudad totalmente controlada por una empresa privada?

¿Se volverán las empresas de tecnología dueñas de las ciudades?

Proyectos como este explican por qué la idea de una ciudad completamente privatizada y controlada por la tecnología viene a la mente en un país como Francia donde Alain Damasio, un famoso escritor de ciencia ficción, publicó en 2019 una novela, *Les furtifs*, que presagiaba un mundo parecido. En la novela, la ciudad de Orange, al sur de Francia, es adquirida por una empresa de telecomunicaciones del mismo nombre e invadida por tecnología de control individualizado que da acceso a servicios e incluso a zonas diferentes de la ciudad en función de cuánto pueden pagar los habitantes (al final este régimen es derribado por activistas y por revueltas populares).

En algunos países, este escenario de ciencia ficción no está tan lejano. Por las razones apuntadas, los proyectos de smart cities más avanzados serían en ciudades construidas de cero en países de Oriente Medio o Asia. India, que ya tiene ciudades

privadas reservadas a ricos, está planeando construir docenas de ciudades nuevas e inteligentes, un mercado de enorme potencial por el que compiten empresas de Estados Unidos, Europa y China. Se podría argumentar que los proyectos como los mencionados en Francia están destinados a experimentar prototipos y tecnologías que las mismas empresas venderían después a mercados extranjeros mucho más lucrativos.

Otro ejemplo muy sonado y controvertido de “ciudad privada” son los planes de Google (o más concretamente, de Sidewalk Labs, otra filial de la empresa matriz de Google, Alphabet) para la costa de Toronto (el llamado Waterfront). Cuando se encargó a Sidewalk Labs la tarea de imaginar un barrio completamente nuevo cundió el pánico ante la posible privatización del espacio público y la protección de la privacidad de los ciudadanos, sobre todo cuando varios expertos en privacidad abandonaron el proyecto por falta de garantías suficientes. En la primavera de 2019, Sidewalk Labs publicó un plan maestro para Toronto Waterfront que causó una enorme conmoción. Resultó que la empresa tenía su vista puesta en un área mucho más grande de lo que se suponía y planeaba construir y controlar el futuro barrio, detentando la propiedad de la tecnología y de los datos. También exigía normas muy concretas y un control sobre los órganos de gobierno de la nueva zona. Finalmente, Sidewalk Labs tuvo que dar marcha atrás y hoy se negocia un nuevo acuerdo. Esta vez se habla de una zona más reducida, no hay normas especiales, los datos son de propiedad pública y se acordó que no se encargaría de su gestión.

Pase lo que pase con los proyectos de Google para Toronto Waterfront, todo ello apunta a un problema mayor. La expansión de empresas plataforma como Google (Google Maps y Waze), Uber, Amazon, Airbnb o incluso Deliveroo no solo les permite la recopilación masiva de datos sobre hábitos de particulares y tendencias urbanas, sino también la capacidad de influir en el futuro de la ciudad (por ejemplo, sus normas de tráfico, el desarrollo económico de los barrios) sin ningún control por parte de las autoridades locales. En este caso, la smart city ya no sería una ciudad en la que las autoridades públicas confían en las empresas privadas para lograr sus objetivos, sino donde las autoridades públicas y los movimientos urbanos deben hacer frente a fuerzas con poder para influir en la ciudad de manera profunda e interponerse a objetivos políticos tales como viviendas asequibles o la protección de espacios públicos no comerciales “libres”.

La guerra francesa contra los medidores inteligentes y otras revueltas urbanas anti-smart

Muchas ciudades europeas y no europeas, así como los movimientos urbanos, tratan de luchar contra las nefastas consecuencias de estas nuevas empresas plataforma, comenzando con Airbnb y sus efectos sobre la vivienda en ciudades como Barcelona, Ámsterdam y París. Junto a los conflictos similares con Uber y el creciente movimiento por los derechos de los gig workers o trabajadores por



BENOÎT PRIEUR, CC-BY-SA

proyecto, es una señal de que la ciudad del futuro soñada por Silicon Valley se está topando con una resistencia popular y política cada vez mayor. Lo mismo podría decirse de los nuevos y exitosos movimientos contra el proyecto Amazon HQ2 en Nueva York y contra la nueva sede de Google en Berlín, ambos ejemplos no solo de propiedades corporativas subvencionadas, sino también de una cierta visión de la ciudad.

En su mayoría, estas revueltas se anuncian como una lucha contra los especuladores privados y la privatización. Pero también revelan una conciencia cada vez mayor de que la propiedad de la información y la “soberanía tecnológica” tienen una importancia crítica para las ciudades y de la necesidad de modelos alternativos. La negativa de Airbnb a ceder sus datos a las autoridades locales, por ejemplo, se está convirtiendo en un tema clave de debate, lo que será decisivo en la capacidad de estas últimas para regular a esta empresa de alojamientos y su impacto..., o no.

En Francia, la creciente oposición a la “ciudad inteligente” se ha estado gestando por otro motivo. En 2014, tras varios proyectos de prueba, el gobierno francés instaló medidores de electricidad inteligentes “Linky” en viviendas de todo el país. El proyecto pronto se encontró con enormes problemas cuando muchos usuarios e incluso ayuntamientos rechazaban los medidores Linky. La razón más esgrimida para rechazar el medidor inteligente Linky son las posibles consecuencias para la salud de sus ondas electromagnéticas. Aunque existe poca evidencia de riesgos graves, este medidor inteligente está mal diseñado desde ese punto de vista. El plan también suscita recelos de privacidad debido a los datos que genera el medidor. Se le critica por su elevadísimo coste (los usuarios deben pagar miles de euros en sus facturas de electricidad), por ser de iniciativa privada patrocinado por el estado, por

su imposición a las personas, y por causar riesgos potenciales sin beneficios reales. Las pruebas demuestran que el motivo argumentado para instalar los medidores inteligentes (ahorrar energía mediante un consumo individual “más inteligente”) no se traduce en la práctica.

La reacción contra Linky, como símbolo de “falsa solución” tecnocrática y privada, ha sido inesperadamente ferviente en Francia, con centenares de alcaldes que decidieron, por su cuenta o presionados por los votantes, prohibir el medidor inteligente. Algunos grupos ya planean convertir esta revuelta en un movimiento más amplio contra las ciudades inteligentes en general y contra todo lo que las acompaña: Internet de las Cosas, vigilancia, trabajo “uberizado” y capitalismo verde. Al fin y al cabo, las ciudades inteligentes tienen los mismos problemas de privacidad y salud (como la exposición a altos niveles de radiación electromagnética), sobre todo por la instalación de antenas 5G, que los medidores inteligentes, solo que a mayor escala. Y además viene con el problema añadido de la privatización (como hemos explicado) y la vulnerabilidad a los ataques cibernéticos, sin ningún beneficio evidente salvo para las empresas que los van a instalar. Ni siquiera la afirmación de que

las ciudades inteligentes serán “más ecológicas” y más eficientes energéticamente convence, a la luz de las enormes cantidades de minerales y electricidad necesarios para hacer posible el almacenamiento de datos y la informática necesaria para hacer posible el tipo de ciudad inteligente que nos pintan las empresas.

Thales

Ingresos: 15.900 millones de euros (2018)

Presidente: Patrice Caine (consejero delegado)

Principales accionistas: gobierno francés, Dassault

Sede central: París, Francia

Fundación: 2000 (1968 para su predecesora Thomson-CSF)

Sectores: armamento, seguridad, electrónica

Empleados: 80.000 (2018)

Datos clave:

* Especializado en electrónica para la industria del armamento, Thales desarrolla tecnologías de vigilancia y radar, sistemas de comunicación e información y sistemas de misiles. Recientemente, Thales ha realizado importantes inversiones en el desarrollo de drones.

* Thales considera la “ciudad inteligente” como una forma de expandirse en los sectores civiles, concretamente en los servicios de seguridad. Además de Francia, Thales ha vendido sus soluciones de “ciudad segura” a autoridades públicas de México y África. Para ampliar su oferta de servicios, adquirió recientemente Gemalto, líder mundial del sector biométrico.

Seguridad urbana e industria del armamento

Este claro rechazo a las ciudades inteligentes se explica por el hecho de que, en Francia, al igual que en otros países como Estados Unidos, la industria del armamento y la seguridad suele estar detrás de las ciudades inteligentes. Entre los principales clientes del “Centro de Operaciones de Inteligencia” de IBM se encuentran

organismos de orden público de Estados Unidos. También en Francia la “ciudad inteligente” se asocia cada vez más a objetivos de seguridad, es decir, a la llamada “ciudad segura”. Ciudades como Niza y Marsella ya experimentan con sistemas de videovigilancia de reconocimiento facial “inteligentes” en institutos y transporte público. Marsella va a crear un “centro de control” dedicado a la seguridad urbana, que se supone se alimentará de datos de los servicios públicos, la policía, las redes sociales y los ciudadanos. Otras ciudades como Saint-Étienne proponen instalar cámaras de video o sensores de ruido en las farolas.

Detrás de estos proyectos están empresas como IBM o Cisco y otras de la industria del armamento que pretenden entrar en el mercado de la seguridad nacional. El principal promotor del centro de control de Marsella es Ineo, una filial de Engie y proveedor desde hace tiempo del ejército francés. Tras los experimentos de vigilancia “inteligentes” de Niza se esconde Thales, el gigante del armamento y la electrónica. El proyecto de “ciudad segura” de Saint-Étienne está promovido por un consorcio llamado Serenity, tras el cual se encuentra un fabricante local de armas y municiones. Todo ello forma parte de una estrategia más amplia de la industria del armamento, cada vez más interesada en los lucrativos mercados de seguridad interna, y está logrando difuminar la diferencia tradicional entre las tecnologías y los materiales utilizados para operaciones externas y los utilizados para la seguridad interna².

El contrato de experimentación entre Niza y Thales ejemplifica bien esta cosmovisión que mezcla la “urbanización galopante”, los “riesgos naturales” como las catástrofes climáticas, y los “riesgos humanos” como la delincuencia y el terrorismo en un paisaje de potenciales “incidentes y crisis” que deben predecirse y evitarse “en tiempo real” con la “máxima cantidad de datos existentes” en un “centro de hipervisión y control”³.

El desarrollo de tecnologías de “vigilancia inteligente” y su experimentación en Francia cuenta con el apoyo expreso del gobierno francés, como una forma de ayudar a los pioneros y a las soluciones nacionales que luego podrán exportarse a otros países, evitando así la dependencia de tecnologías extranjeras. Los proyectos de Thales en Niza han recibido un inmenso apoyo financiero, tecnológico y comercial de varias entidades estatales de Francia.

Grupos de la sociedad civil como la Liga de los Derechos Humanos y la ONG en defensa de los derechos de los internautas La Quadrature du Net⁴ son los únicos que se oponen claramente a estos planes que suelen contar con el apoyo de políticos nacionales y locales. La CNIL (Comisión Nacional de Informática y Libertades),

[2] Véanse los informes “Border Wars” del Transnational Institute y sus socios: <https://www.tni.org/en/publication/border-wars> and <https://www.tni.org/en/publication/border-wars-ii>.

[3] Félix Tréguer, “La « ville sûre » ou la gouvernance par les algorithmes”, *Le monde diplomatique*, junio de 2019, <https://www.monde-diplomatique.fr/2019/06/TREGUER/59986>

[4] Véase el sitio web Technopolic: <https://technopolic.fr/>

organismo independiente que regula la privacidad, ha cuestionado algunos de los proyectos, pero sigue siendo tibio a la hora de ejercer su escaso poder. El reducido número de proyectos operativos concretos y el secreto que rodea a algunos de ellos explica la ausencia de una movilización popular generalizada en su contra. Pero según La Quadrature du Net el peligro es real, incluso con proyectos de “ciudades inteligentes” que aún no tienen un objetivo de seguridad claro. Cuando todos los sensores estén instalados y cuando se recopilen todos los datos -aseguran-, los líderes empresariales y los políticos no reconocerán que estas soluciones no ayudan a alcanzar los objetivos de sostenibilidad y buscarán otra justificación. En cierto modo, la instalación de todas estas tecnologías de smart city inevitablemente abrirá la puerta a una mayor vigilancia y a posibles abusos.

¿Es posible una ciudad inteligente municipalista?

¿Deberíamos, pues, oponernos por completo a las ciudades “inteligentes” y “seguras”? La postura antitecnológica predomina en muchos grupos activos en Francia, mientras que otros ven cierta utilidad en algunas soluciones de “ciudad inteligente”. La expansión de las tecnologías digitales en el tejido urbano es inevitable por muchos motivos, pero la pregunta es: ¿cómo pueden las ciudades, los grupos urbanos y los movimientos sociales hacerlo de manera diferente? Por fortuna, tanto en Europa como en otros lugares del mundo se está reflexionando mucho sobre esta cuestión.⁵

Aunque no existe una solución política universal, dado el alcance de los problemas y el poco control que las ciudades tienen sobre ellos, al menos conocemos algunos de los problemas más importantes. La propiedad de la información es obvia. En lugar del modelo de extracción de datos que muchas empresas están imponiendo a las ciudades, debemos promover un modelo basado en datos públicos abiertos o, si es posible, datos como un bien común, con el fin de proteger la privacidad. Otra cuestión es la soberanía tecnológica (no depender de la tecnología de las corporaciones ni estar sujeto a sus restricciones). Otro objetivo podría ser desarrollar alternativas municipales, remunicipalizadas o cooperativas que presten los servicios que proporcionan las corporaciones que buscan tomar el control de las ciudades, con el fin de fomentar una genuina economía colaborativa.

Puede que las ciudades sean demasiado pequeñas para luchar solas contra gigantes de la talla de Google o Airbnb, sobre todo porque estas compañías están respaldadas por los gobiernos nacionales. Sin embargo, pueden encontrar aliados en la sociedad civil o en los movimientos en defensa de la economía solidaria y el bien común. La ciudad verdaderamente “inteligente” está por hacer, pero debe servir a las necesidades reales de las personas y a los principios democráticos, no a los intereses de las grandes empresas.

[5] Véase, por ejemplo, “Rethinking the smart city. Democratising urban technology”, Evgeny Morozov and Francesca Bria, January 2018. <http://www.rosalux-nyc.org/rethinking-the-smart-city/>

El barrio berlinés que echó a Google

RACHEL KNAEBEL

Google está haciendo lo mismo en todo el mundo: en Varsovia, Madrid, Tel Aviv o São Paulo. Construye “campus” de similares características: un espacio de trabajo abierto en la planta baja, oficinas para start-ups tecnológicas en el segundo piso y oficinas para el personal en la última planta. Pero en esencia, estas oficinas son incubadoras de start-ups con la opción de que el gigante digital compre las que le interese. En 2016, Google anunció su intención de abrir un campus de este tipo en Berlín. Por esta razón, la compañía adquirió un antiguo complejo industrial de ladrillo rojo que antaño albergó una central eléctrica en Kreutzberg, un área gentrificada donde el precio de los alquileres se ha disparado, pero que políticamente permanece vibrante.

El proyecto generó un movimiento de resistencia masivo, con reparto de octavillas en los bares y cafeterías del barrio y colocación de carteles en las paredes. Se celebraron varias juntas públicas mientras los activistas recorrían las tiendas y negocios locales. El movimiento ganó impulso en 2017 de la mano de la coalición “Fuck Off Google”, que congregaba a anarquistas, organizaciones vecinales y partidarios de una internet abierta. Las primeras “protestas ruidosas” comenzaron a principios de 2018 y se celebraban el primer viernes de cada mes. “No

avisamos a la policía. Hubo miembros de dos organizaciones vecinales que al principio eran reacios a venir, pero al final también lo hicieron”, asegura uno de los activistas del grupo que prefiere permanecer en el anonimato. Y concluye:

Alphabet (Google)

Ingresos: 136.800 millones de dólares (2018)

Directivos: Sundar Pichai (consejero delegado), Larry Page y Sergey Brin (fundadores)

Accionistas principales: Larry Page y Sergey Brin y fondos de inversión como BlackRock y Vanguard

Sede: Mountain View, EEUU

Fundación: 1998 (Google) 2015 (Alphabet)

Sector: Tecnología

Empleados: 103.549 (2018)

Datos clave:

- * Muchas de las actividades de Google y su matriz se dirigen a ciudades: algunos ejemplos son Sidewalk Lab y sus proyectos en Toronto, Google Maps y Waze, y los automóviles autónomos de Google.
- * Google, como otros gigantes tecnológicos, está en el disparadero por sus métodos monopolísticos y anticompetitivos. Al igual que otras grandes empresas de tecnología, se le ha acusado de evadir ingentes cantidades al fisco, lo que priva a las autoridades públicas de los fondos necesarios para financiar los servicios públicos y la asistencia social.
- * Los edificios de oficinas y los “campus” de Google también promueven una cierta visión de la ciudad corporativizada y controlada por la tecnología.

“En dos años, todos coincidimos en el hecho de que no negociaríamos con los políticos y mucho menos con Google”.

En septiembre de 2018, lograron ocupar el sitio (que por entonces todavía estaba en construcción) durante varias horas, antes de que la policía los desalojara. Pero los esfuerzos valieron la pena: aunque las obras de construcción del edificio se completaron, Google anunció en otoño de 2018 la renuncia al campus. El edificio se alquilará a dos empresas sociales para la acogida de personas sin hogar en los próximos cinco años. Aun así, el activista califica esta victoria como “meramente simbólica”. La empresa ha adquirido para su campus otros edificios en el distrito comercial central de Berlín, una zona monopolizada por oficinas.

En este caso, el problema de la gentrificación, favorecida por las tecnologías digitales y las grandes multinacionales que se han establecido en la ciudad, se sumaba a la necesidad de combatir el control masivo y las ambiciones totalitarias de Google y de su empresa matriz Alphabet. “Desde las primeras semanas del movimiento, comenzamos a recibir mensajes de apoyo de colectivos de San Francisco, San José, Toronto...”, declara el activista berlinés. Todos esos grupos luchan contra el dominio de Google-Alphabet en sus ciudades. En la metrópoli canadiense, Alphabet pretende construir un barrio entero a través de su filial Sidewalk Labs. Una “ciudad inteligente del control”, como la definiera la revista digital *The Intercept*, que suscita no pocos recelos entre sus habitantes. En Berlín, la movilización contra el campus de Google ha brindado “una oportunidad para dar a conocer el tema de las comunicaciones y la descentralización de datos”, comenta el activista. Y la lucha no ha terminado: el “café anti-Google” sigue reuniéndose en Berlín, pero esta vez en el barrio de Mitte, a pocas calles de distancia, donde el gigante tecnológico ha trasladado sus oficinas.

02

RELOCALIZAR

El “modelo Preston”

Una ciudad británica pionera en contratación pública progresista

HAZEL SHEFFIELD

Preston, al norte de Inglaterra, duramente castigado por la desindustrialización, y más recientemente por las políticas de austeridad impuestas a los ayuntamientos tras la crisis económica, ha optado por no depender más de inversores externos para su “desarrollo” y dar un giro radical en su contratación pública para mejorar la situación social y económica de la localidad y no de las grandes empresas. Ya se ha convertido en un modelo en el resto del país e incluso en el extranjero.

Una tarde de primavera de 2013, dos concejales de izquierda entraron en The Gray Friars, un pub cavernoso de Preston, ciudad posindustrial del norte de Inglaterra, para conversar mientras bebían una cerveza. Matthew Brown y su colega Martyn Rawlinson buscaban nuevas ideas para Preston, cuya pobreza se expandía debido a los brutales recortes. Aunque no conocían a Neil McInroy y Matthew Jackson, que habían viajado desde Manchester, donde trabajaban para un grupo de expertos llamado Centro de Estrategias Económicas Locales (CLES por su sigla en inglés), Brown sabía quiénes eran por las caricaturas que acompañaban sus artículos sobre regeneración económica.

Los cuatro hombres se encontraron y se dieron la mano. Esa noche en el pub trazarían los principios de una nueva forma de canalizar el gasto de la ciudad, que protegiera a las pequeñas localidades como Preston de los peligros de la globalización, al tiempo que serían pioneros con las nuevas normas ambientales y sociales para las empresas licitadoras.

El “Modelo Preston”, como se le bautizó, constaba de dos partes. McInroy y Jackson llevaban años defendiendo que se podría retener más dinero en la economía local si colegios, concejos, hospitales y otras instituciones cívicas destinaran sus

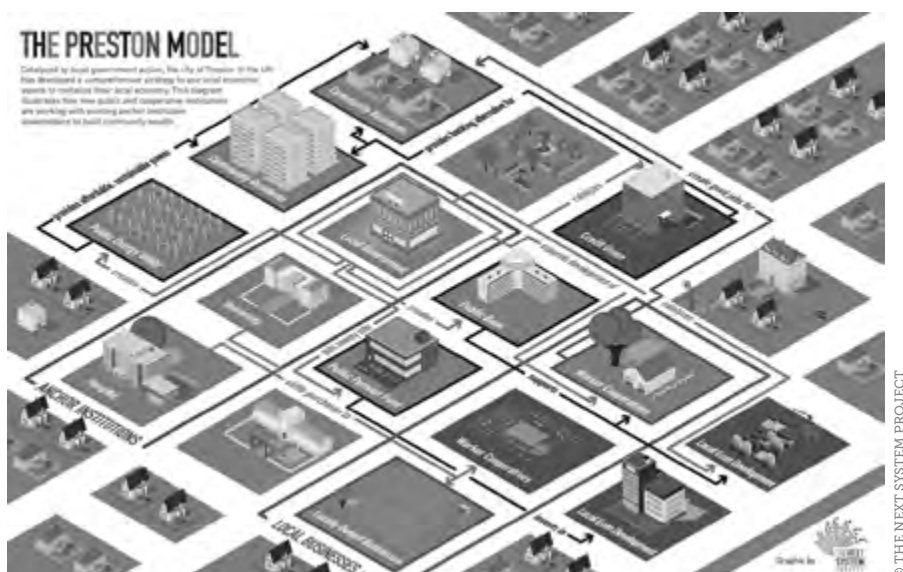
presupuestos a comprar bienes y servicios a empresas locales, en lugar de hacerlo a multinacionales que pueden obtener ganancias en otros sitios. Matthew Brown creía que esas empresas tenían que ser cooperativas de trabajadores, para que los beneficios fueran a sus bolsillos y no a los accionistas. El Modelo se basa en gran medida en elementos técnicos del análisis del gasto, el ajuste de los contratos públicos, la educación de nuevos proveedores y la creación de cooperativas. Pero en el fondo subyace una idea más radical: que la economía no es una esfera tecnocrática aparte ni un conjunto de fuerzas extrañas que juegan al margen de todo, sino que la construye la ciudadanía con sus decisiones y que pueden usarla para hacer realidad la sociedad en la que quieren vivir.

Según Martin O'Neill, profesor titular de Filosofía Política de la Universidad de York, esta propuesta hace que la contratación pública pase de ser un mero proceso financiero a un motor que los gobiernos pueden utilizar para lograr una serie de valores, de manera similar al poder redistributivo del sistema tributario. Y precisa: "Tengo la sensación de que la contratación pública, que de primera suena como algo aburrido y tecnocrático, tiene una vertiente política, y que hemos subestimado la importante función del gobierno para mejorar la vida de las personas al no verla desde este punto de vista. Necesitamos mejorar el lenguaje que la define".

En Estados Unidos, el grupo de expertos Democracy Collaborative acuñó el término "creación de riqueza comunitaria", que describe la estrategia del grupo de atraer y retener el dinero en la comunidad: primero evitando que los recursos financieros locales "escapen" de la región; y segundo, aprovechando para beneficio comunitario la contratación y las inversiones de las *anchors* (anclas) locales como hospitales, universidades, fundaciones, instituciones culturales y el gobierno municipal. En 2007, la Fundación Cleveland encargó a este grupo de expertos con sede en Washington DC que realizara un análisis de gastos en Cleveland, Ohio. Cleveland se enfrentaba a los mismos problemas que otras ciudades posindustriales: su población mermaba y muchas empresas que cotizan en bolsa se marchaban debido a años de falta de inversiones y al declive de las industrias tradicionales. Sin embargo, aún tenía instituciones arraigadas, como la Clínica Cleveland, la Universidad Case Western Reserve y los hospitales universitarios.

Democracy Collaborative descubrió que estas "anclas" gastaban 3.000 millones de dólares al año, aunque muy poco de ese dinero beneficiaba a la economía local. El Hospital de Cleveland y otras instituciones sanitarias estaban rodeados de barrios donde el 40 por ciento de los habitantes vivía por debajo del umbral de pobreza. "¿Cómo es posible que circulen esos millones en un lugar donde solo hay pobres?" preguntó Ted Howard, su director ejecutivo.

Democracy Collaborative realizó un análisis para saber qué compraban estas "anclas" en México o Chicago y estudió si esos contratos podrían transferirse nuevamente a organizaciones locales. Después buscó lagunas en el mercado que



podieran ofrecer oportunidades a nuevos proveedores. Durante varios años defendió la creación de una lavandería y una granja en régimen de cooperativa propiedad de los trabajadores, para que se repartieran los beneficios. También intentaron que las cooperativas fueran tan ecológicas como fuera posible para ayudar a las “anclas” a alcanzar sus objetivos medioambientales, y contrataron empleados de zonas donde predominaba el desempleo debido al tiempo pasado en prisión (hasta el 50 por ciento de la población en algunos barrios). “Es una estrategia de transformación de la comunidad”, comenta Howard. Y agrega que “la idea es que todas estas empresas contribuyan a la economía local, y las cooperativas son el vehículo para lograrlo”.

En 2013, cuando tuvo lugar la reunión en el pub, Preston necesitaba urgentemente una transformación. Los efectos de la crisis económica de 2008 se habían visto agravados en el Reino Unido por un programa de austeridad del gobierno central puesto en marcha por el gobierno en manos de una coalición conservadora que había llegado al poder en 2010. En nombre de la austeridad, el gobierno recortó la financiación a los concejos para conseguir un reajuste radical de la relación entre el estado y sus ciudadanos, inspirándose en el neoliberalismo de Margaret Thatcher de los años ochenta. Se calcula que entre 2010 y 2016 los concejos en Inglaterra perdieron 60 peniques por cada libra del gobierno central.

A medida que se recortaban los presupuestos, los concejos primero redujeron gastos despidiendo empleados con sueldos elevados o vendiendo edificios abandonados. Pero después, los recortes tomaron un cariz más feo. Desde 2018, el concejo de Preston eliminó 1,25 millones de libras en servicios para niños y familias, y otros millones más del presupuesto destinado al aprendizaje, la discapacidad y el autis-

mo. El precio del autobús para los ancianos se duplicó, pasando de 50 peniques a 1 libra. Las plagas de ratas proliferaron después de que el concejo redujera a la mitad su plantilla de fumigadores.

Mientras tanto, ciudades más pequeñas como Preston luchaban por atraer inversiones externas. En 2008, el Concejo de Preston firmó un proyecto de rehabilitación (bautizado como Tithebarn) por valor de 700 millones de libras esterlinas. Con éste los promotores Grosvenor y Lendlease rehabilitarían 13 000 hectáreas de la ciudad con restaurantes, cafeterías, cines, tiendas y calles peatonales. Pero los establecimientos minoristas fueron perdiendo interés hasta que todo el esquema se hundió en 2011, no mucho tiempo después de la retirada de John Lewis, una importante cadena de centros comerciales.

Ese mismo año, el Centro de Estrategias Económicas Locales invitó a Ted Howard a hablar con una audiencia procedente de su red en Londres. “Nos inspirábamos en los conceptos e ideas de [Democracy Collaborative]”, señala McInroy. “Pero había aspectos del contexto que indicaban que el Modelo Cleveland tenía que ser diferente”. El primero en la lista: la ley europea de contratación pública. En Estados Unidos, si una universidad u otra institución local quiere adjudicar un contrato de ropa de cama a una cooperativa local, no hay nada que lo detenga. En Reino Unido, como en el resto de Europa, la ley de contratación obliga a sacar a concurso la adjudicación de contratos de empresas con autoridades locales que superen las 181.302 libras y los contratos de obras de más de 4.551.413 libras para garantizar que el proceso sea transparente y competitivo.

En esa época, McInroy y CLES llevaban años poniendo a prueba varios principios de contratación pública con la colaboración de ciudades como West Lothian y Swindon. Querían hacer un análisis de gastos, pero se dieron cuenta de que Manchester, la ciudad donde CLES tiene su sede, era demasiado grande. La cercana Preston, con una población de 141.000 habitantes, tenía un tamaño más adecuado, con suficientes instituciones públicas (incluidos dos concejos, un hospital y varias universidades) para probar un análisis de gastos ambicioso que ayudara a saber por dónde se estaba escapando el dinero. Además, los concejales tenían ganas de probar algo nuevo tras el fracaso del proyecto Tithebarn.

Tras su primera reunión en el pub, Brown y Rawlinson convencieron al Concejo de Preston de encargar a CLES un análisis de gastos de la ciudad. CLES identificó las instituciones “ancla”, incluidos los concejos municipales y de condado, la Universidad de Lancashire Central (UCLan), la policía y una asociación local de vivienda. Entre las seis organizaciones tenían un potencial adquisitivo anual de 750 millones libras. Pero en 2012/13, solo una libra de cada 20 gastadas se quedaba en Preston. CLES trabajó con las “anclas” para reconducir este gasto. En 2013, los seis organismos públicos locales gastaron 38 millones de libras en Preston y 292 millones en todo Lancashire. Para 2017, el gasto había aumentado a 111 millones

y 486 millones de libras respectivamente, pese al recorte general en el presupuesto del concejo. Las “anclas” también recibieron apoyo para pagar salarios dignos, lo que mejoraba las condiciones del personal y los contratistas.

Y todo esto lo lograron dentro de la legislación de contratos públicos de la UE. “No ha habido grandes problemas”, reflexionó Matthew Brown en 2019. “[Los umbrales] de los contratos de obras son bastante altos. Podrían obstaculizar nuestros planes, pero [en este momento] tienen poca influencia”. Preston fragmentó contratos grandes, como el de presupuesto de alimentos del restaurante del concejo por valor de 1,6 millones de libras, en lotes más pequeños. De esa manera, los pequeños agricultores de Lancashire podían presentar su candidatura para, por ejemplo, vender yogures.

El concejo eligió a Conlon, una empresa de construcción local, para rehabilitar el mercado de Preston (de una lista limitada de nueve empresas locales y nacionales) porque se habían comprometido a mejorar sus prácticas de contratación. Así lo establece la Ley de Valor Social (Social Value Act), una ley de 2013 que obliga a que los organismos que convocan concursos tuvieran en cuenta beneficios sociales, económicos y ambientales más amplios e innovadores, por ejemplo, recurriendo a contratistas que requieran menos desplazamientos y por tanto tengan una huella de carbono menor. Los cambios a la ley de contratación pública de la UE en 2014 también lograron que la adjudicación de servicios diera prioridad a empresas con buen palmarés social y ambiental.

Entre tanto, el Concejo de Preston estudiaba cómo coordinar otras fuentes de capital para invertir en proyectos locales. Decidió utilizar el Fondo de Pensiones del Condado de Lancashire de 5.500 millones de libras para invertir 100 millones en Preston e idéntica cantidad en Lancashire, en proyectos que incluían la reapertura del Park Hotel y el fomento de pisos para estudiantes por valor de 18 millones de libras. Los pagos de pensiones por valor de 100 millones de libras se han dejado a un fondo de inversión local que se destinará a financiar un banco local. Al concejo se le ocurrió la idea de crear un banco de propiedad comunitaria tras trabajar con el Hampshire Community Bank, que se inspira en la red alemana Sparkassen de bancos de ahorro público de propiedad local. Juntos planean impulsar una red propia de bancos regionales “rivales” de Lancashire, para fomentar el espíritu empresarial y apoyar a las pequeñas empresas.

Los primeros resultados de estos cambios prometen: entre 2010 y 2015, Preston mejoró notablemente su posición en el Index of Multiple Deprivation (Índice de regiones desfavorecidas) (Liverpool City Region Combined Authority, LCRC 2018). En noviembre de 2018, Preston fue nombrada la ciudad que mejor progresaba del Reino Unido según el Good Growth for Cities Index, que mide el empleo, el salario de los trabajadores, los precios de la vivienda, el transporte, el medio ambiente, el equilibrio trabajo-vida privada, y la desigualdad. Para septiembre de

2019, el Ayuntamiento de Preston se estaba acercando a los 20 millones de libras que necesitaba para solicitar una licencia y así crear su banco regional del Noroeste. Según Brown “Hemos asumido que si el dos por ciento de los ciudadanos transfieren sus cuentas al nuevo banco o abren cuentas con nosotros podemos prestar 500 millones de libras a la población local. Pero si recibiéramos un verdadero impulso de base, se apoyara nuestra idea y se animara al 10 por ciento de la gente a realizar operaciones bancarias con nosotros, podríamos inyectar 4.000 millones de libras a la localidad”.

Brown, que desde 2018 lidera el concejo de Preston, considera que el banco comunitario es una parte más de la estrategia para democratizar la economía, junto con la política de contrataciones, entre otras. “Las contrataciones con ‘anclas’ no lo son todo. El banco comunitario es una parte más. Es el mismo principio, es localizar la inversión y hacer que la comunidad tenga más control sobre las economías locales”. Brown centra su atención en la próxima fase del Modelo Preston, que consiste en el centro educativo cooperativo y en el fondo inicial de la Open Society Foundation para impulsar la creación de diez empresas nuevas de propiedad de trabajadores.

McInroy y CLES han hablado de crear riqueza comunitaria con más de 40 concejos locales del Reino Unido, desde Birmingham a Wigan, y de Southampton a South Ayrshire en Escocia, e incluso con concejos municipales de Londres, como Islington, donde los métodos deben adaptarse a un contexto económico muy diferente. Según McInroy: “Son combinaciones muy diferentes. En Preston nos centramos en las contrataciones, pero hicimos mucho en materia de terrenos, propiedades y activos, y ahora ellos se están enfocando en democratizar la fuerza laboral. En Islington estamos haciendo menos en contrataciones y más en propiedad cooperativa de la economía y de la tierra”. En su opinión, todo este trabajo forma parte de una creciente red mundial de ciudades pioneras en un nuevo tipo de municipalismo. Las llamadas “ciudades sin miedo” creen en la propiedad democrática de los servicios públicos por parte

Lendlease

Ingresos: 10,2 billones de euros (2018/2019)

Dirigente: Stephen McCann (DG)

Sede Central: Sydney, Australia

Fundación: 1958

Sectores: BTP, inmobiliario, infraestructuras

Emplados: 13 000 (2018/2019)

Datos claves:

* Lendlease, empresa australiana de BTP y de inmobiliaria, se especializa en proyectos de “regeneración urbana” basados en asociaciones público-privadas, como el proyecto tithebarn en Preston, que nunca vio la luz. Varios de estos proyectos son criticados por sustentarse en la gentrificación de los barrios “regenerados” y el alza del precio de los alquileres, como es el caso de los barrios de Haringey y Elephant & Castle en Londres.

* Presente también en los Estados Unidos, Lendlease ha sido uno de los principales socios de Donald Trump para sus proyectos inmobiliarios.



CLIVE VARLEY, CC BY

de organizaciones que quizás algún día reemplacen a las autoridades locales. Han descubierto que la ciudad es el laboratorio perfecto para probar ideas.

Mientras, Matthew Jackson ha abandonado CLES y está trabajando con el Ayuntamiento de Preston, que lidera el grupo de siete ciudades del Programa URBACT de la Unión Europea Making Spend Matter (Haciendo que el gasto valga la pena). El programa analiza cómo usar el análisis de gastos para demostrar que mejorar el impacto de las contrataciones por parte de instituciones públicas o “anclas” puede traer beneficios económicos, sociales y ambientales a la economía local y a sus ciudadanos. Operativo desde mayo de 2018 hasta diciembre de ese mismo año, su principal objetivo fue difundir las buenas prácticas de Preston en la región. Las ciudades asociadas, incluidas Pamplona en España, Kavala en Grecia, Bistrita en Rumania y Koszalin en Polonia, dedicaron seis meses a investigar acciones en torno a criterios sociales y ambientales y otros 12 meses a elaborar su propio análisis de gastos de la ciudad. Ahora están estudiando cómo mejorar las estrategias de contratación y adaptarlas a diferentes situaciones. “Es un momento muy interesante”, dice Jackson. “El único problemilla es qué pasará cuando salgamos de la UE: si el Ayuntamiento de Preston podrá seguir al frente y si todavía podrá trabajar con ellos como experto”.

Los euroescépticos llevan mucho tiempo defendiendo que las decisiones de adquisiciones serán más fáciles de tomar para los concejos del Reino Unido cuando el país salga de la Unión Europea (UE), porque ya no tendrá que cumplir con las actuales leyes de contratos. Sin embargo, los investigadores advierten que no es la

ley de la UE, sino la actitud de los concejos y otras “anclas” lo que impide que las políticas de fomento de riqueza comunitaria se apliquen más ampliamente. Tom Sasse, investigador del Institute for Government, opina que, contrariamente a la información errónea de la prensa, siempre que las autoridades pongan en marcha un proceso justo, pueden elegir las ofertas basándose en una serie de criterios que incluyen el precio, la calidad, el riesgo y el valor social, entre otros: “La oferta más baja no siempre gana porque a veces es también la menos valiosa”, dice Sasse.

Los estudios del Institute for Government han revelado que el Gobierno del Reino Unido logró en principio aumentar el gasto a pequeñas empresas mediante la introducción de medidas tales como la eliminación de los cuestionarios previos a la licitación. Pero este aumento alcanzó su máximo en 2014/15 y desde entonces ha descendido. En los últimos cinco años, las grandes empresas que reciben más de 100 millones de libras anuales del gobierno se han adjudicado una parte cada vez mayor de las obras públicas. “Lo fácil es culpar a la normativa de la UE, pero lo que hace falta es que los adjudicatarios corrijan sus prácticas”, declara Sasse.

Un gobierno laborista en el Reino Unido podría hacer mucho por fomentar la creación de riqueza comunitaria y por ayudar a otras ciudades a adoptar políticas de contratación más radicales. Según Martin O'Neill, Preston ha demostrado lo valiosa que puede ser la creación de riqueza comunitaria para impulsar la regulación de la economía cuando el gobierno no está de su lado: “Estas estrategias han sido útiles para proteger regiones vulnerables en entornos más duros cuando el gobierno no está a favor de crear condiciones económicas más favorables. Pero este movimiento rebelde es la semilla de un gran árbol que, con el apoyo de un gobierno nacional, podría ser más ambicioso”.

Desde 2018, Neil McNroy se ha sentado junto a concejales y parlamentarios laboristas y Ted Howard de Democracy Collaborative, en la Unidad de Creación de Riqueza Comunitaria del Partido Laborista, que ha analizado cómo incorporar estos principios a las políticas futuras. Y aunque hasta ahora han podido hacer mucho “desde fuera”, en palabras del concejal Matthew Brown, hay quien cree que se conseguirían reformas más radicales si se incumpliera la legislación de la UE. Costas Lapavitsas, ex miembro del parlamento de Syriza en Grecia y profesor de economía en la Escuela de Estudios Orientales y africanos, ha declarado que si un gobierno laborista quisiera adoptar plenamente los principios del Modelo Preston se encontraría con la barrera de la legislación de contratos de la UE. “La selección de empresas se vería directamente afectada por las leyes de la UE. Eso está claro. La única cuestión aquí es cuán radical quiere ser el Partido Laborista. Si quieren ser realmente radicales, no podrán hacerlo dentro de la UE”.

Jackson, sin embargo, cree que las directivas de contratación pública de la UE seguirán afectando al Reino Unido incluso después de dejarla. Aunque piensa que el Brexit podría animar a las ciudades a incorporar más plenamente los principios de

la Ley de Valor Social. “Las [autoridades] tendrán más oportunidad de incorporar los valores sociales que hasta ahora. Todavía creo que las autoridades locales del Reino Unido tienen miedo de incluirlos en la política por culpa de las leyes de la UE”.

La Ley de Valor Social sitúa al Reino Unido por delante de Europa en cuanto a intenciones de incorporar principios sociales y ambientales en los contratos públicos, asegura Jackson, quien piensa que la UE podría hacer mucho más por facilitar la aplicación de las directivas de contratos de 2014. “Se supone que las directivas de 2014 debían incorporarse a la ley de compras de los estados miembros, pero lo que considero está faltando es la implementación, flexibilidad para las pymes y objetivos sociales y ambientales para las ciudades. Siempre hay barreras porque hay leyes que debemos cumplir, porque no podemos ser anticompetitivos, pero no nos damos cuenta de que las contrataciones pueden servir para responder a muchos desafíos sociales y ambientales”.

Jackson asegura que muchas ciudades europeas no están dispuestas a ir más allá en cuanto a principios sociales y medioambientales. Señala que la falta de estudios de ciudades con políticas progresistas alimenta la escasa disposición para experimentar. “Es más fácil elegir en base al precio. Inculcar una contratación progresista en siete ciudades es solo el comienzo. Se debe invertir mucho en la creación de capacidades y ejemplos de prácticas en toda la UE”.

Loos-en-Gohelle: del carbón a las renovables

¿Tiene futuro una pequeña ciudad sin recursos?

MAXIME COMBES

Loos-en-Gohelle, antigua localidad minera de carbón del norte de Francia, ha demostrado que es posible librarse de la dependencia de los combustibles fósiles mediante la participación democrática, siempre que se empiece por atender las necesidades reales de los habitantes.

Mucho se habla del fin de los combustibles fósiles. Pero pocas ciudades lo han hecho realidad. Loos-en-Gohelle, un pueblo francés de tradición minera, es la excepción. Tiene 7.000 habitantes y está situado al norte de Francia, donde se descubrió carbón en 1855. Desde entonces, la minería dio forma a cada elemento de la localidad: a sus viviendas, sus habitantes, sus estructuras sociales y económicas e, incluso, a su paisaje. Pese a su fuerte dependencia del carbón, treinta años después del cierre de la última mina, Loos se ha convertido en un caso digno de estudio de cómo una ciudad puede prescindir de los combustibles fósiles. Antaño una de las principales fuentes de carbón de la cuenca minera de Nord-Pas-de-Calais, es hoy un centro experimental de políticas de transición energética y un ejemplo para ciudades de todo el mundo. No rene-



© MAXIME COMBES

ga de su pasado minero, ha aprendido a vivir con él, y ahora se instalan paneles solares en las escombreras que quedan.

La dependencia del carbón y la ruina de las ciudades

Antes de hablar de los logros de Loos, no está de más recordar lo que significa depender de la minería del carbón. En un pueblo minero, este mineral se convierte en el factor determinante de casi todo. Significaba trabajo para miles de personas. Su industria era la mayor fuente de empleo de la región y en torno a ella se estructuraba toda la economía y se configuraba el tejido social, tanto en términos de estatus socioeconómico como de formas de vida. También la política giraba en



© MAXIME COMBES

torno al carbón, y se suponía que la actividad política y sindical era la expresión de los intereses de los mineros y sus familias. Los espacios públicos y privados se adaptaron a esta roca negra de origen vegetal: caminos, viviendas, iglesias, colegios, hospitales, lugares de los trabajadores e instalaciones deportivas se diseñaron pensando en la salud de los mineros y en la proximidad a las minas.

Esta minería incluso transformó el paisaje: las escombreras y los edificios abandonados ahora se pierden en el horizonte y han cambiado el campo húmedo y frío. Asimismo, el carbón era la principal fuente de energía: como las viviendas de los mineros se calentaban con él, casi de forma gratuita, no tenían aislamiento. Y no menor, esta minería tenía un fuerte impacto en el ambiente, al contaminar el agua y el suelo durante décadas.

No es de extrañar que el cierre de la mina del carbón en la región trajera consigo la ruina económica, social, política y urbana. La conocida estampa de pueblos abandonados ilustra bien la situación: cierre de fábricas, angustia social, desempleo masivo, pobreza, distritos marginados, contaminación del suelo y las aguas, agotamiento de los recursos públicos, descenso de la población y ninguna perspectiva de cambio. Evitar el inminente desastre social y económico era un desafío formidable que obligaba a imaginar una forma de sustento alternativa. Pero Loos estaba llamada a demostrar que los pueblos mineros no tienen por qué convertirse en pueblos fantasma contaminados, heridos de muerte por el alto desempleo. Hay quien se plantea si este colapso es necesario para iniciar la transición hacia una economía verde. ¿Puede la historia de este pueblo que se liberó de su dependencia del carbón servir de ejemplo para otros? ¿Se puede conseguir en otros lugares lo que se consiguió en Loos?

Loos, un pueblo construido en torno al carbón

La historia no ha sido compasiva con Loos-en-Gohelle. Fue destruida varias veces por las guerras que se sucedieron entre los siglos XIII y XVII. A cinco kilómetros al noroeste de Lens, Loos volvió a ser arrasada en la Primera Guerra Mundial. La primera batalla de Loos en 1915 fue una masacre, y más de 20.000 soldados británicos murieron entre 1915 y 1918. Sin embargo, la minería del carbón le permitió recuperarse rápidamente en la década de 1920. Reconstruirse y reinventarse forma parte de su historia. Donde se mire, existen vestigios de esta historia minera. El suelo se ha hundido más de quince metros desde que se empezó a explotar el carbón. Muchas de las casas eran viviendas de mineros, algunas en muy malas condiciones. Si se alza la vista, se atisban altísimos montones de escoria recortándose en el horizonte, a 185 metros sobre el nivel del mar. La autopista que parte la localidad en dos se construyó sobre una antigua vía de ferrocarril utilizada para el transporte de carbón, que se debe cruzar para llegar a los pozos 11 (1891) y 19 (1954). El primero tiene un almacén y el segundo una torre de extracción de hormigón de 66 metros de altura (con 10.000 toneladas de peso). Esta instalación exclusiva, mucho más potente, extraía el carbón de varios pozos circundantes. La mayoría de los edificios mineros siguen allí. Desde la base 11/19, los visitantes pueden caminar sobre montones de escoria o visitar los centros de desarrollo sostenible de edificios administrativos renovados.



"No podemos construir el futuro si renegamos de nuestro pasado"

El 31 de enero de 1986, el cierre del pozo 19 puso fin a 113 años de minería de carbón. En 1966, 5.000 de los 8.000 habitantes de Loos trabajaban en ella. El cierre de la mina se vivió como un trauma económico, social y cultural. Junto con el desempleo masivo, había un sentimiento de abandono y un cuestionamiento del estilo de vida y las prácticas heredadas de un siglo y medio, en un contexto social y político paternalista. La duda era si esta herencia minera debería ser borrada para seguir adelante o ser reajustada para tomar otro camino. Lo tentador era lo primero. Muchas ciudades han renegado de su pasado minero, pero sin cambiar la mentalidad económica y social que les legó. Los líderes políticos compiten por atraer a las pocas grandes empresas interesadas en venir, mientras que los trabajadores no pierden la esperanza de trabajar en otras empresas.

Pero Loos no eligió este camino. El ex alcalde Marcel Caron decidió promocionar su pasado minero para reclamar el orgullo colectivo. La base 11/19, adquirida por el ayuntamiento en la década de 1990, rápidamente organizó un teatro nacional, “Cultura Común”, y poco después organizó actividades de desarrollo sostenible y transición hacia una economía verde. La asociación Chaîne des Terrils, fundada en 1989 y establecida en la base 11/19 desde 1995, se dedica a proteger y honrar el patrimonio minero del pueblo. Con los esfuerzos suyos y de los líderes políticos fue inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2012. “No podemos construir el futuro si renegamos de nuestro pasado”, dice Jean-François Caron, quien sucedió a su padre como alcalde de Loos en 2001. Parece que haber hecho del patrimonio minero del carbón la base de un nuevo orgullo colectivo fue el factor decisivo del éxito de Loos.

Pensar en las necesidades del pueblo y en la economía local

«No sufrimos el síndrome de Toyota», declaró Jean-François Caron cuando se le preguntó cómo solucionaría el elevado índice de paro (alrededor del 20 por ciento). Loos no ha establecido ni ampliado las “áreas de negocio”, esperando la llegada de una gran empresa industrial, como lo hizo Toyota en Valenciennes, a 70 km al este. Aunque la mayoría de los habitantes de Loos trabajan en el sector del automóvil (en la ciudad vecina de Douvrin), en el sector hospitalario (Lens) o en el sector servicios (área metropolitana de Lille), Caron da prioridad a las actividades que se pueden desarrollar localmente: “Aplico los principios de la economía funcional, que se centra en las necesidades de las personas, y en las prácticas y actividades locales”.

Con la desaparición de la minería, cientos de familias se encontraron viviendo en casas mal aisladas, sin carbón gratis para calentarlas. Una de las primeras medidas del Concejo fue aprobar un plan de renovación energética. En uno de los distritos emblemáticos de la localidad, las casas se renovaron completamente siguiendo los nuevos estándares de energía, aisladas y equipadas con paneles solares, calefacción solar de agua, etc. Todo ello ha marcado una gran diferencia para los lugareños, que han visto cómo se reducía su factura eléctrica al menos a la mitad. También se han construido nuevas viviendas energéticamente eficientes (45 kWh/m² anuales en comparación con la media de Francia de 240 kWh/m²) con un coste mínimo de calefacción (200 euros al año). En 2019, el 15 por ciento de los apartamentos y casas fueron “eco-renovados” o construidos siguiendo los nuevos estándares. Los edificios públicos y el alumbrado se han renovado para reducir las necesidades de calefacción y el importe de la factura de electricidad y la flota de automóviles urbana es ahora ecológica. El municipio ha reducido su consumo de electricidad una cuarta parte. Una vez pagadas las inversiones, supondrá un ahorro de 100.000 euros al año, una cifra considerable teniendo en cuenta que el presupuesto del Concejo ronda los seis millones de euros.

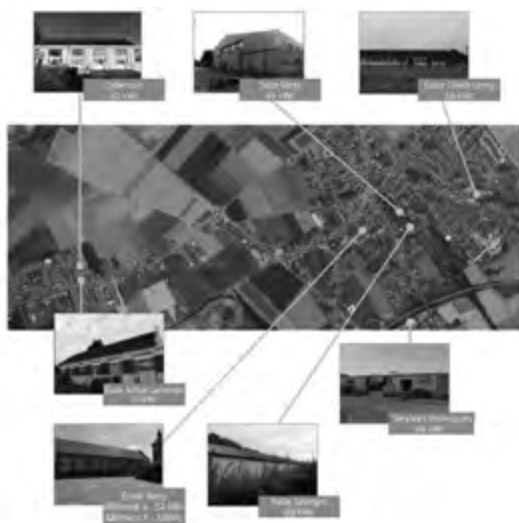
Medidas concretas y una estrategia sistémica

“Si hablo únicamente del calentamiento global, solo estaríamos interesadas cuatro personas (tres buenos amigos y yo). Pero si hablo de lo mucho que podríamos ahorrar en calefacción, mucha gente querrá implicarse”. Las palabras de Caron resumen la estrategia política de su equipo: para implicar a las personas hay que empezar dando solución a sus necesidades. Y no hacerlo en su nombre, sin su contribución, sino con ellos y de una manera que resuelva sus problemas. Doscientas veinte reuniones públicas se celebraron durante su primer mandato (2001-2008) y casi 150 en el segundo (2008-2014).

La atención se ha centrado en los procesos participativos y en hacer que el pueblo sea parte de las decisiones políticas, lo que supone distanciarse de los principios tecnocráticos.

Otro aspecto clave del enfoque de Caron es el énfasis en las “medidas concretas” que reflejan un objetivo político más amplio: convertir un territorio devastado por el desarrollo insostenible de la minería del carbón en un modelo de desa-

arrollo sostenible. Demostrar que “se puede” marca el camino a seguir, hace que las personas se sientan orgullosas y genera un cambio de actitud en un proceso de aprendizaje colectivo. El reto es más o menos el siguiente: cada año, la localidad, los hogares, las tiendas y las empresas locales gastan 14 millones de euros en calefacción, iluminación y transporte. Es el doble del presupuesto de gasto total del Concejo. Por tanto, la idea es destinar parte de este gasto a financiar actividades locales en sectores emergentes, que generen empleo y riqueza en la zona al tiempo que protege al planeta.



El plan solar

Hay quien no podía creer que un humilde pueblo del norte de Francia con fuerte dependencia del carbón durante décadas se fijara como objetivo para 2050 el uso de energía 100% renovable. La primera medida de las autoridades locales fue revertir el discurso dominante y demostrar que el norte también era capaz de generar energía solar. El techo de la iglesia estaba en malas condiciones y con cada tormenta había que repararla. Tras estudiar varias opciones, se instalaron paneles solares. Desde 2013, se han instalado más de 200 m² de paneles solares en el techo de la iglesia que han producido 32 MWh, el equivalente al consumo de energía de doce hogares, lo que ha permitido al pueblo ahorrar 5.000 euros al año. Aunque puede parecer

insignificante, para un pueblo pequeño como Loos, significó un gran paso hacia adelante.

Los paneles solares en la iglesia eran la prueba irrefutable de que el municipio podía cambiar de dirección, y no pasó mucho antes de que se instalara una plataforma solar llamada Lumi-Watt en la base de un montón de escoria¹. Se compone de 22 paneles fotovoltaicos de 3 kW, que están poniendo a prueba diez tecnologías distintas. Se realizan estudios para evaluar el rendimiento, la resistencia y la adaptación al terreno y determinar qué tecnologías son las más adecuadas para la región. LumiWatt ha ayudado a concienciar a los ciudadanos, difundir conocimientos y experiencia y proporcionar datos reales sobre la producción fotovoltaica. Loos-en-Gohelle se ha convertido así en un nuevo escaparate de energías renovables, demostrando que el cambio puede venir de un pueblo que antaño fue el centro neurálgico de una región minera del carbón.

EDF

Ingresos: 69 mil millones de euros (2018)

Presidente: Jean-Bernard Lévy (presidente y consejero delegado)

Principal accionista: gobierno francés

Sede central: París, Francia

Fundación: 1946

Sector: Energía

Empleados: 154.845 (2017)

Datos clave:

* EDF, la antigua empresa nacional de electricidad de Francia, todavía es propiedad del gobierno francés en un 84%, pese a sus numerosas actividades en el extranjero.

* EDF se ha especializado desde siempre en la energía nuclear, y sigue siendo el líder mundial en la generación de electricidad nuclear. Esta especialización en energía nuclear, con sus enormes requisitos de capital, ha frenado el desarrollo de las renovables en Francia, y también explica el uso generalizado en todo el país de calefacción eléctrica ineficiente desde el punto de vista energético.

* Aunque recientemente EDF ha empezado a trabajar en el desarrollo de las energías renovables, incluso en Francia, su principal interés sigue siendo la electricidad nuclear, y sigue promoviendo un sistema altamente centralizado, que va en contra de las aspiraciones de muchas ciudades de impulsar planes de energía descentralizadas (en parte).

Loos consiguió poner en marcha un plan solar para “avanzar en la transición hacia una economía verde”, convirtiéndose en “un pueblo valioso desde el punto de vista energético”². Se identificaron doce edificios públicos con gran potencial, algunos de los cuales necesitaban obras adicionales. La primera fase del plan solar (2017-2020) ha generado una capacidad de producción doce veces mayor que los paneles solares del techo de la iglesia: 440 MWh generan los ocho primeros edificios públicos que

[1] En un principio el proyecto fue financiado por la ciudad, la aglomeración de Lens-Liévin, CD2E (un centro de creación y desarrollo de eonegocios) e inversores privados (como EDF).

[2] Documento público: <https://www.loos-en-gohelle.fr/wp-content/uploads/2019/07/Mise-en-page-Tepos-2019-07Web.pdf>

se han equipado con energía solar (2.500 m² de paneles solares), y abastecen más del 90 por ciento de la energía consumida por los edificios municipales³.

¿Solos o en compañía de las corporaciones?

La inversión que necesita un pequeño municipio de 7.000 habitantes para renovar el alumbrado público y los edificios públicos, instalar paneles solares y financiar proyectos y adquisición de habilidades en su ambicioso plan de “energía positiva” supera los recursos financieros disponibles. El Concejo tenía un plan aún más ambicioso y quería implicar a Electricité de France (EDF), por ejemplo, almacenando energía en pozos mineros. Pero EDF no estuvo por la labor. Aunque el motivo de su negativa no está claro, hay quien dice que no tiene interés en los experimentos locales dirigidos por ciudadanos destinados tanto a ahorrar energía como al desarrollo de la energía solar.

Aumentar y ampliar el equipo del Consejo fue un reto considerable. El alcalde contrató a más personal y recurrió a pequeñas empresas privadas para la gestión de proyectos. Para llevar a cabo el plan solar, una empresa de propiedad mixta (Société d'Économie Mixte o SEM) parecía la mejor opción, pero era necesario que Loos tuviera al menos un 50 por ciento de participación en el capital. El Concejo decidió por fin operar bajo una concesión: el concesionario, seleccionado de acuerdo con las normas de contratación pública, es responsable de llevar a cabo el plan solar, que incluye la explotación y el mantenimiento de los paneles solares. Pero es un concesionario único. Esta especie de consorcio está formado por una compañía local privada, una compañía mixta de propiedad regional, Loos y los ciudadanos. Un préstamo cubrirá el 80 por ciento de los 560.000 euros que necesita el proyecto y el 20 por ciento restante se autofinanciará (el 10 por ciento por parte del pueblo, y el 35% por ciudadanos y actores locales). La participación ciudadana es clave para el éxito del proyecto, sobre todo porque la compañía recién creada, SAS Mine de Soleil, espera expandirse a otras regiones.

Involucrar a los ciudadanos

Conseguir que la gente se implique en el cambio energético para reducir la factura fue una cosa, pero hacer que un municipio bastante pobre se interesara en las energías renovables fue otro desafío. Desde el principio, el Concejo trabajó de la mano con los ciudadanos interesados. Su papel fue clave en las etapas de diseño e implementación, y el plan solar está dirigido por un equipo compuesto por concejales, ciudadanos y profesionales⁴. Ahora los ciudadanos pueden ser accionistas directos de SAS Mine de Soleil y la comunidad ha demostrado bastante interés.⁵

[3] Dado que el autoconsumo es muy bajo en Francia, la electricidad generada se devuelve a la red. EDF la compra al precio fijado por las entidades públicas con una garantía de 20 años.

[4] Sitio web del plan solar: <https://plansolaire.loos-en-gohelle.fr/site/>

[5] “Mines de soleil”. Formulario de inscripción: <https://energethic-asso.fr/appeal-a-financement-loos-en-gohelle/bulletin-dintention-de-souscription-mine-de-soleil/>

“Los ciudadanos y los empleados del Concejo se están convirtiendo en los primeros embajadores de nuestra transición energética”, señala Jean-François Caron. También se creó un programa de ayuda financiera para la adquisición de equipos, lo que ayudó a que 31 hogares fueran autosuficientes en electricidad. El Concejo también ha aprobado un plan por el que se dona un panel solar por cada bebé nacido en el pueblo. Y todo ello se ha logrado sin EDF y sin la ayuda de ninguna otra empresa importante.

Trabajar con “energía” en lo que puede hacerse localmente

Al alcalde no le duelen prendas en reconocer que lograr un mejor sistema de transporte público es un gran desafío. La cuenca minera carece de una ordenación urbana, lo que dificulta enormemente crear un sistema de transporte público eficiente. Además, la aglomeración (y no el pueblo) es la que tiene jurisdicción sobre el transporte público, y ha subcontratado el servicio a la empresa privada Transdev. La petición de Caron de equipar a los autobuses con portabicicletas para quienes carecen de parada de autobús cerca de su hogar o centro de trabajo se desestimó. Solo ha podido construir 10 km de carriles bici, 15 km de vías verdes y comprar siete vehículos comerciales de gas natural comprimido.

El Concejo intenta intervenir sistemáticamente siempre que puede. Una de sus medidas es estructurar y desarrollar el sector de las renovables mediante la creación de empleos, el apoyo a las pequeñas empresas y la formación. La base 11/19 alberga varios centros de I+D: un Centro de Recursos para el Desarrollo Sostenible (CERDD), un Centro para la Creación y Desarrollo de Negocios Ecológicos (CD2E) y ahora un Centro de Formación y Aprendizaje para Nuevos Trabajos de Construcción Ecológica. Se han creado alrededor de 150 empleos. “El centro de investigación y desarrollo de materiales ecológicos y energía renovable es todo un referente en Francia”, apunta Caron. “Nuestro método coherente nos ha unido a muchos socios técnicos y financieros tanto de la región como del país, así como en toda Europa, a la vez que hace más atractiva nuestra región”. Ahora la economía de Loos se basa principalmente en el sector de servicios, con un centenar de tiendas y artesanos. La actividad económica del pueblo se ha visto impulsada por estos nuevos sectores “ecológicos”, permitiendo que prosperen también las actividades tradicionales (como los restaurantes, etc.).

Hace ocho años, se empleaban métodos de cultivo orgánicos en menos del dos por ciento de la extensa área agrícola de Loos. La mayoría de los agricultores recibieron con escepticismo los proyectos ecológicos del alcalde, ya que el uso de pesticidas estaba muy extendido en cultivos de campo abierto (papas, remolachas, calabazas y zanahorias) destinados a la venta a grupos agroalimentarios como McCain o Bonduelle. En 2010, el Ayuntamiento compró una docena de hectáreas de terreno y convocó una licitación con tres condiciones: métodos orgánicos, proyectos colectivos y por cada hectárea recibida, el agricultor tenía que utilizar



cultivos orgánicos en una hectárea de su propia tierra. Esta tercera condición ha favorecido el cambio gradual de los métodos de los agricultores. Hoy, 100 de las 800 hectáreas del pueblo están en proceso de conversión, y varias otras granjas grandes lo están considerando.

“Innovar es una desobediencia que ha tenido éxito”

Gracias a su firme voluntad política, Loos-en-Gohelle ahora brilla como un diamante en la transición “verde” de Francia. Pero Caron reconoce que “lo difícil es hacer las cosas a mayor escala”, y es una lucha diaria tratar de difundir los cambios sociales o medioambientales. El organismo de transición energética de Francia, ADEME, ha calificado a Loos como un “modelo de ciudad sostenible” y cree que se pueden aprender lecciones de esta experiencia que posibiliten enriquecer las políticas⁶ de energía y transición verde.

Identificar métodos y prácticas que permitan a las ciudades y territorios tomar o recuperar el control de su política energética es clave. Pero puede que no baste con “copiar y pegar”. El ejemplo de Loos ha demostrado que la transición energética no consiste solo en aplicar procedimientos y buenas ideas, sino de concebir un proyecto político fuerte que tenga en cuenta la historia de la ciudad, y la realidad social y económica de sus habitantes. “Demostrar que puedes conseguir todo esto pese a ser un pueblo pobre envía un mensaje muy claro a favor del empoderamiento”, explica el alcalde de Loos-en-Gohelle, quien ha demostrado que un humilde pueblecito sin recursos puede liderar la transición verde. “La transición ecológica y social es inviable sin la transición económica y el resurgir democrático”. De hecho, puede que la clave sea alejarse de las políticas públicas compartimentadas y apostar por políticas que se centren en el empoderamiento individual y colectivo para avanzar hacia una economía más verde.

[6] https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/demonstrateur_loos-en-gohelle_8709.pdf

Rennes, la ciudad francesa que protege sus aguas impulsando la agricultura local

BARNABÉ BINCTIN

Cuando la ciudad francesa de Rennes se propuso servir alimentos procedentes de la agricultura local en sus comedores escolares, se topó con las limitaciones de la contratación pública que hacían jurídicamente imposible introducir una cláusula de agricultura local en la licitación. Gran paradoja teniendo en cuenta que la zona es de las más ricas de Francia desde el punto de vista agrícola: la mayor productora de leche del país y una de las principales de carne de cerdo y pollo. Sin embargo, la productividad del sector agrícola de Bretaña también se cobra su precio. La agricultura intensiva tiene una consecuencia sobradamente conocida y documentada: la grave contaminación de las aguas con nitratos y agroquímicos. Para hacer que el agua vuelva a ser potable se necesita una costosa tecnología de purificación. A pesar de ello, la ciudad de Rennes ha visto en este doble contra-tiempo una oportunidad de eludir la prohibición sobre criterios geográficos en los contratos públicos.

¿Cómo lograrlo? Su respuesta fue reformular el objetivo. Una ciudad tiene competencias sobre protección de su propio medio ambiente, incluyendo sus aguas. En el caso de Rennes, que desprivatizó su empresa de agua en 2014, había una justificación económica directa para evitar la contaminación en origen. El suministro de alimentos para sus comedores escolares era una forma de conseguirlo. El contrato público no exige, por ejemplo, que los “yogures sean de la región de Rennes”, algo que sería ilegal según las leyes de licitación pública de la Unión Europea (UE), pero sí establece que el “yogur debe proteger la calidad de las aguas en la región de Rennes”.

Nadège Noisette, vicealcaldesa responsable de adquisiciones en el ayuntamiento de Rennes, lo explica: “Pedimos a los agricultores que nos vendan una garantía de calidad del agua en lugar de un producto alimenticio. En lugar de comprar un bien, estamos comprando un servicio que puede tener criterios locales”. Esta novedad jurídica permite matar dos pájaros de un tiro: los alimentos de los comedores escolares son de procedencia local y las fuentes de agua se protegen, lo que incentiva el cambio en los métodos agrícolas en la región.

Todo ello supone que los agricultores se consideran responsables por la contaminación de las aguas. “Hemos encargado un análisis legal que podemos presentar en los tribunales si alguna vez se impugna esta licitación”, dice Daniel Helle de Eau du Bassin Rennais (EBR), el organismo intercomunitario encargado de abastecer

de agua a 56 ciudades de la región de Rennes (donde habitan alrededor de medio millón de personas). Sin embargo, para este ingeniero la cuestión no es culpar a los agricultores. Y agrega: “Les estamos pidiendo que cambien sus métodos, pero a cambio les ofrecemos nuevos canales de venta. Lo que proponemos es una especie de alianza, un paradigma completamente nuevo. La idea no es hacer que el sector agrícola sea el único que cargue con los cambios, sino involucrar al ciudadano-consumidor”.

La iniciativa se basa en este concepto de “las dos partes ganan”. “Ofrecer una salida a sus productos es un incentivo para los agricultores y para nosotros significa que podemos llevar alimentos sostenibles de origen local a los comedores escolares. Hemos establecido criterios y condiciones muy precisos para la protección de las aguas que implican un cambio en los métodos agrícolas”, añade Nadège Noisette. Obviamente, solo los agricultores de las cuencas hidrológicas de Rennes son candidatos, pero representan 2.000 granjas en más de 1.500 kilómetros cuadrados, una zona tan extensa como París. Más que suficiente para abastecer los comedores escolares del área urbana de Rennes, que sirven unas 11.000 comidas al día. Esta política no hubiera sido posible si la ciudad hubiera elegido, como otras de Francia, confiar sus comedores escolares a una empresa privada como Sodexo o Elior, que obtienen sus alimentos a granel de regiones de todo el país y prefieren las comidas precocinadas. En Rennes, las comidas todavía las elabora cada día un equipo de 37 chefs municipales.

La ciudad lleva más de 10 años trabajando en esta iniciativa. En 2009, Eau du Bassin Rennais se unió a Réseau du Grand Ouest, una red de compradores públicos de la región comprometidos con el abastecimiento responsable. Se creó un grupo de trabajo dedicado a los comedores escolares, que desarrolló este mecanismo con la ayuda de abogados y expertos en abastecimiento. En 2015, se realizó un experimento piloto mediante una licitación de 50.000 euros de leche y carne de cerdo, con tres agricultores. La prueba fue un éxito y Rennes y otras ciudades vecinas fueron un paso más allá en 2018. Firmaron un segundo contrato de abastecimiento de 300.000 euros con 20 agricultores que se extendió a los productos de pan y hortalizas.

Hoy, una gran parte de las manzanas, el pan, la leche y el jamón que se sirve en los comedores escolares de Rennes proviene de regiones locales, alrededor del 60 por ciento del yogur y 10 comidas con carne de cerdo al año también. Ahora esta campaña se ampliará a una escala aún mayor con la creación de la etiqueta Terres de sources (Tierras de Origen), gracias a una subvención del gobierno nacional. El nuevo objetivo es hacer que estos productos agrícolas (debidamente etiquetados) estén disponibles para todo el mundo en las tiendas y supermercados locales.

Aunque el modelo de Rennes contrasta con las nuevas “granjas municipales” construidas en ciudades como Vannes o Mouans-Sartoux (nos referimos a ello en otro

artículo de esta publicación), los objetivos son los mismos. Elegir entre ajustar las normas de contratación pública o la producción directa de alimentos dependerá de los recursos municipales y de la cantidad de alimentos que realmente necesiten. Pero no son incompatibles. “Estamos estudiando la viabilidad de construir una granja municipal en el escaso terreno agrícola de la ciudad”, explica Nadège Noisette. “Quizás podríamos producir alimentos que no están disponibles en el mercado local, como variedades de frutas, legumbres o semillas que ya no se cultivan por aquí. Sería una forma interesante de complementar nuestra contratación pública”.

“Por un lado, la contratación pública es un medio poderoso de transformar los métodos agrícolas y las cadenas de suministro. Y por otro, las granjas municipales garantizan un abastecimiento seguro y abren nuevas posibilidades a los agricultores”, resume Daniel Helle. Según él: “Ambas iniciativas permiten a las autoridades locales recuperar cierto control sobre las políticas alimentarias y agrícolas”.

Ciudades escaparate, ciudades plaza

Una visión de Barcelona construida sobre la solidaridad

GUERNICA FACUNDO

Una ciudad globalizada como Barcelona puede optar por continuar su camino actual para convertirse en una “ciudad de exhibición”, esa que está ansiosa por complacer a turistas e inversores, o reconstruirse en base a la idea de una ciudad “ágora”, centrada en las necesidades y aspiraciones de su gente. La economía social y solidaria (ESS) tiene propuestas que la orientan en la dirección correcta.

Recientemente, un grupo de personas reflexionaban sobre esta economía en Barcelona bajo el peso de las tendencias globales y cómo se podía enmarcar una futura estrategia para su desarrollo en la ciudad en los próximos diez años. El documento borrador del que se partía, elaborado por Jordi Estivill¹, recoge la idea de una ciudad como Barcelona que se debate entre ser “vitrina” y ser “ágora”.

En base a esa disyuntiva y el reto de abordar el papel de la ESS ante la globalización de la capital catalana, se reflexiona sobre el tipo de ciudad en la que deseamos vivir: una ciudad escaparate, desarrollada, orientada y expuesta a las decisiones y acciones de quienes no viven en ella; o una ciudad plaza, capaz de generar una realidad social y económica basada en la proximidad, enfocada en las necesidades y aspiraciones de las gentes que vivimos y trabajamos en ella.

[1] Invitació a l'economia solidària. Una visió des de Catalunya. Jordi Estivill. Col·lecció Eines 2, Xarxa d'Economia Solidària. Pol·len Edicions, 2019.



SONSE, CC BY

Considerando la apuesta que hace la ESS por un modelo de ciudad plaza, se identifican algunos de los procesos que la Barcelona escaparate genera en las vidas de sus ciudadanas y ciudadanos, en especial aquellos provocados por la contundente presencia de las multinacionales y, cómo no, del turismo. A modo de reflexión final, se describe qué estrategias está siguiendo la Red de Economía Solidaria de Cataluña, la XES, para el desarrollo de las ciudades plaza.

Ciudades escaparate, ciudades plaza

A menudo vivo mi ciudad y me siento orgullosa, me hace feliz y se me eriza la piel; en otras ocasiones la sufro y me asquea, me entristece o me rebela.

Siento orgullo y alegría cuando las avenidas y las plazas se llenan de intérpretes y música; cuando personas a las que admiro comparten su palabra y sus pensamientos en espacios abiertos; cuando ocupo la calle con desconocidos para celebrar de forma festiva reivindicaciones de todo tipo; cuando gentes diversas enarbolan banderas de cualquier color y consignas de cartón; cuando voy en bici y el arcén también es mío, corriendo con las bombas puestas o andando, gritando y cantando a pulmón por donde siempre pisan las ruedas a motor; cuando voy al mercado a comprar los sábados, y a diario saben de mí la panadera, el repartidor de correo y el portero de la escalera vecina.

Siento rabia y una profunda tristeza cuando veo a personas, y no son pocas, viviendo en la calle, durmiendo delante de oficinas de bancos que parecen tomarnos el pelo con su café de multinacional; cuando a Ciudad Meridiana la llaman “ciudad desahucio” y a La Mina (ese barrio desechado por la capital) “ciudad sin ley”; cuando

veo un nuevo edificio convertido en hotel o un local vacío en casa de apuestas; cuando escucho por la radio los embotellamientos de las siete de la mañana y las aceras repletas de artefactos que no te dejan caminar; cuando recuerdo sitios en los que ya no paseo por la saturación y el turisteo; cuando la brutalidad policial se ceba en quien a ras de suelo menos puede defenderse; cuando el clasismo se viste de racismo, cuando las plazas sin bancos acogen decenas de terrazas...

La construcción de los espacios físicos se explica por las prácticas que se desarrollan en ellos. Así, las relaciones sociales que se producen en una ciudad son a la vez creadoras de esa ciudad que las propicia. Y en la ciudad hay quienes hacen de la calle un lugar de encuentro y hay quienes hacen de ella un lugar de extracción económica.

David Harvey, en una entrevista reciente para el Observatorio del Cambio Rural en Ecuador², decía que a las ciudades las hacen sus gentes, pero en medio de procesos de circulación de capital que, de forma creciente y exponencial, necesita “moverse” comprando y vendiendo suelos, construyendo edificios, generando nuevas infraestructuras, definiendo los estándares de movilidad o recogiendo datos para venderlos en el futuro.

Esos procesos interfieren en nuestras vidas, pese a que no tengan ningún sentido económico, social, ni por supuesto, ambiental. Sólo sirven para especular “y para perpetuar las relaciones capitalistas de clase”. Tanto para él como para Henri Lefebvre, el derecho a la ciudad (definido ya desde 1968³) necesita de un combate teórico y práctico contra la urbanización capitalista y, más aún, contra el modo de producción que ésta contribuye a perpetuar.

En resumen, mi ciudad plaza me hace feliz; mi ciudad escaparate me rebela. Y en esa contradicción permanente vivimos muchas de las gentes de Barcelona, mientras intentamos ejercer nuestro derecho a la ciudad. Un derecho que, como afirma Harvey, no es material o territorial sino político: es el derecho a la autodeterminación y a transformar el ambiente en el que vivimos. Para él la pregunta que deberíamos hacernos es: “¿Qué tipo de ciudad queremos?”. Una pregunta inseparable de estas otras: “¿Qué tipo de personas queremos ser? y ¿Qué tipo de relaciones sociales queremos priorizar?”.

Barcelona, breve radiografía de la ciudad escaparate

Barcelona, una de las diez ciudades más “instagrameada” de Europa en 2018, es vista por muchos como ciudad souvenir, ciudad beneficio o ciudad especulación. Para radiografiar brevemente la Barcelona escaparate al servicio de las multinacionales, me enfocaré en la tríada tecnología, turismo y urbanismo: tres sectores estrechamente vinculados.

[2] <https://www.youtube.com/watch?v=ySFWeukQJy8>

[3] Le droit à la ville. Éditions Anthropos, 1968. El derecho a la ciudad. Península, 1969.

En febrero de 2018 se presentó el estudio *Barcelona als ulls del món 2018*⁴. Según este, la capital catalana cosecha una imagen positiva: de ciudad rica para desarrollarse, invertir y hacer negocios; con una industria tecnológica y biomédica emergente; vinculada a la creatividad, vibrante e ideal para “urbanitas inquietos” culturalmente.

La nueva proyección de Barcelona, donde es “compatible el crecimiento personal y profesional con el disfrute de una vida plena en todos los sentidos y en todos los momentos vitales”⁵, se apoya en seis pilares: conexión, iniciativa, alma, contrastes, talento y compromiso. Me centraré en el pilar de la conexión, que considero el más ilustrativo de algunas de esas desigualdades que esa ciudad escaparate provoca. Sobre él se afirma, en primer lugar, que “la privilegiada ubicación geográfica de Barcelona y sus infraestructuras hacen que sea una ciudad bien conectada con el mundo”. A lo que yo añadiría: y succulenta para las grandes inversiones privadas.

La Diosa Tecnología

Barcelona fue líder mundial en la celebración de congresos internacionales en 2017. En ese año se dieron 195 citas de este tipo y 2.134 reuniones estatales de negocios⁶, con un total de 674.890 participantes. Todo ello sin contar el World Mobile Congress, el “supercongreso” de la telefonía móvil que más participantes reúne (109.000 en 2018) y que convoca a las grandes multinacionales del sector.

La ciudad concentraba en 2017 el 18,3 por ciento de empresas de tecnología de Catalunya y el 48,4 por ciento de puestos de trabajo⁷. Sin embargo, mientras Barcelona es reconocida por la instalación de empresas de tecnología, persisten brechas digitales entre barrios, edades y niveles de estudios⁸: el 16% de las viviendas de la ciudad no tienen acceso a Internet (el 38,3% en Torre Baró, Ciutat Meridiana y Vallbona) y el 3,7 por ciento no puede permitirse tenerlo.

Barcelona está considerada —junto a Ámsterdam, Bristol, París, San Francisco y Seúl— una de las ciudades más colaborativas del mundo; es decir, una de las ciudades donde se “se establecen iniciativas públicas y privadas que favorecen la economía colaborativa, que otorgan más poder a las personas, que intentan terminar con las desigualdades sociales y que permiten mejorar la calidad de vida”⁹.

[4] El estudio 'Barcelona als Ulls del Món 2018' se basa en encuestas a visitantes vacacionales y de negocios (online y presenciales), a barcelonesas y barceloneses, a periodistas de algunos de los principales países emisores de viajeros, a expertos y expertas en creación de marca y a empresarias y empresarios. Suman más de 3.000 entrevistas entre finales del 2017 y principios del 2018 y el análisis de 260.000 conversaciones de Twitter sobre Barcelona, Ámsterdam, Singapur o Miami. https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2019/01/Barcelonaalsullsdemon_sintesi.pdf

[5] AlwaysBarcelona, <https://www.always.barcelona/identitat-posicionament-barcelona-un-relat-coral-brand-book.pdf>

[6] http://bcb_development.barcelonaturisme.com/es/section/news-room/6.html

[7] “Barómetro del sector tecnológico en Cataluña 2018”, <http://www.ctecno.cat/wp-content/uploads/2018/07/Bar%C3%B3metro-sector-tecnol%C3%B3gico-2018-castell%C3%A0.pdf>

[8] “La brecha digital en la ciudad de Barcelona”, <https://mobileworldcapital.com/escletxa-digital/>

[9] <https://blogs.20minutos.es/capeando-la-crisis/tag/compartir/>



FESC, CC BY-SA

Hasta ahí todo bien. El problema viene cuando confundimos el tocino con la velocidad y metemos en el mismo saco modelos socialmente respetuosos que impulsan la innovación y el bienestar colectivo desde el principio del compartir (espacios de cotrabajo, grupos de consumo, bancos del tiempo, monedas complementarias, intercambios de productos de segunda mano, entre otros), con las grandes plataformas tecnológicas de servicios (en turismo, movilidad, vivienda...) que extraen beneficio económico del intercambio entre personas.

Se trata de empresas agresivas, masivas, que especulan con los datos, que cuentan con inversiones estratosféricas... ¡qué no son rentables^[10]!, que intentan esquivar las regulaciones estatales y locales y tienen claros impactos negativos en la vida de la gente. Las llaman “unicornios”. Por todo ello, 42 ciudades del mundo se dieron cita en Barcelona en 2018 y firmaron la “Sharing Cities Declaration”^[11] (que en español podría traducirse como Declaración de Ciudades que Colaboran), con el objetivo de poner límites a los despropósitos que las ciudadanas y ciudadanos viven como consecuencia del capitalismo de plataforma, como lo denomina Nick Srnicek^[12].

El Dios Turismo

Saida Palou explica en su tesis “Barcelona, destinació turística”^[13] como, desde principios del siglo XX, ésta ha sido una ciudad que se promociona a sí misma, proyectando un imaginario y valores a la vez que mirándose y relatándose en función

[10] <https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/9878444/05/19/Jose-Cobos-NYSE-El-mercado-se-siente-comodo-invirtiendo-en-tecnologicas-no-rentables-porque-apuestan-por-su-potencial.html>

[11] <http://www.share.barcelona/declaration/>

[12] Platform Capitalism. Polity, 2016.

[13] <http://hdl.handle.net/10803/21771>

de cómo la ven desde el exterior. Y ese relato no ha sido fortuito, sino producto de una connivencia permanente (o pugna, según las épocas) entre los modelos políticos de ciudad y los intereses económicos particulares y corporativos de sus clases dominantes.

Seguramente, es por ese motivo que todos los gobiernos locales, sin excepción, se han alineado (o rendido) a la “necesaria” promoción (por no decir venta) económica de la ciudad, y han encargado a organismos municipales el desarrollo de la misma. Estas instituciones de promoción turística, de promoción económica, de captación de inversiones... se han convertido, no en pocas ocasiones, en bastiones de contrapoder a las propias políticas municipales.

La conectividad permite alardear de que “Barcelona dispone de uno de los puertos más importantes del Mediterráneo, una alta velocidad ferroviaria [...] y uno de los aeropuertos internacionales de mayor crecimiento en vuelos, pasaje y conexiones en los últimos años” (50 millones de pasajeros en 2018 y 70 millones estimados para 2026¹⁴). Y así, entre otros logros, hemos conseguido acuñar el neologismo “barcelonización”¹⁵, para referirnos a morir de éxito por el turismo. Según explica Carlos García¹⁶, en publicaciones internacionales Barcelona lleva tiempo apareciendo como ejemplo de las consecuencias del overtourism y la Organización Mundial de Turismo (OMT) la eligió entre otras siete ciudades para estudiar el fenómeno y proponer medidas para contrarrestarlo.¹⁷

El Dios Urbanismo

Y Barcelona als ulls del món 2018 continúa explicando que la ciudad potencia la conexión “gracias a un entramado de vida de barrio y con el resto de las ciudades de su área metropolitana. [...] dispone de espacios mixtos donde conviven comercios, viviendas y negocios, y promueve iniciativas y plataformas que hacen que sea una ciudad inteligente y avanzada.” Gerardo Pisarello, concejal del Ayuntamiento de Barcelona por la candidatura municipalista Barcelona en Comú (BeC), decía en la presentación del estudio que “Barcelona no es una ciudad para especular”, pero las multinacionales saben que en realidad sí lo es.

La que es hoy la mayor especuladora inmobiliaria del mundo, Blackstone¹⁸, se aprovecha de la disponibilidad de vivienda vacía de vida y llena de deudas, así como de la atracción de compradores de todo el mundo con poder socioeconómico elevado y deseos de una ciudad cosmopolita, con referentes culturales mundiales y bares

[14] https://www.viaempresa.cat/economia/aeroport-barcelona-passatgers-inversio_209668_102.html

[15] “No, no creo que se produzca esa barcelonización [...] en Madrid el turismo no es tan invasivo como en Barcelona. Aquí no se produce una invasión cada vez que llega un crucero”. Manuela Carmena en La Vanguardia 23/02/2019

[16] <https://www.carlosgarciaweb.com/overtourism-o-masificacion-turistica/>

[17] https://www.e-unwto.org/pb-assets/unwto/Overtourism_Factsheet.pdf

[18] https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/en-la-calle/tupida-red-mayor-fondo-buitre-espana-1_14188_102.html

y restaurantes a su servicio en cualquier esquina. Y así, la ciudad con la segunda calle más cara de todo el Estado para comprar una casa¹⁹, es también donde la vivienda supone, con diferencia, la principal preocupación de sus habitantes²⁰.

Y la preocupación está fundada porque Blackstone es sólo la punta del iceberg; existe una fuerte presencia de inversores en las compraventas inmobiliarias. “La escasa rentabilidad que ofrecen otros productos de inversión, la caída de la bolsa en el último año y la buena marcha del mercado de la vivienda (cuyos precios no dejan de subir tanto en compra como en alquiler) han provocado que los inversores se hayan desplazado, casi de manera masiva, hacia los activos inmobiliarios. Operaciones que apenas necesitan financiación y que están ayudando a alimentar los precios.”²¹

La vivienda en Barcelona no es para vivirla, es para enriquecerse. Y ello tiene consecuencias. Un estudio del Centre d’Estudis Sociològics de 2018 recogía que el 27 por ciento de los barceloneses han abandonado la ciudad o piensa hacerlo y que sus principales razones son económicas²².

Y aunque hoy la capital catalana quiera ser un “modelo de progreso que haga compatible el crecimiento personal y profesional, a la vez que disfrutar de una vida plena en todos los sentidos y en todos los momentos vitales”,²³ es también un espacio de desigualdades socioeconómicas flagrantes (por ejemplo, el problema de acceso a la vivienda se manifiesta en la ciudad desde finales del siglo XIX), hoy provocadas en buena medida por la intromisión de las multinacionales (que la propia ciudad atrae, en especial desde 1992) en nuestra vida cotidiana.

Propuestas desde la ESS para el desarrollo de ciudades plaza

La XES, con sede principal en Barcelona, promueve un modelo de ciudad plaza en el que los vínculos socioeconómicos entre sus ciudadanas y ciudadanos se desarrollen para satisfacer sus propias necesidades, apoyados en las relaciones locales y la generación de un mercado social, no en las necesidades del capital.

Para poder lograrlo, la XES desarrolla una estrategia en tres dimensiones. Una es la de la sensibilización y visualización. Otra es la de autoreconocimiento y dotación de herramientas de mejora en la propia red. Finalmente, una apuesta a la incidencia en las políticas públicas para que se potencie al máximo la economía solidaria e incluso se asuman sus valores.

[19] <https://www.lavanguardia.com/economia/20190820/464187796214/calles-caras-espana-vivienda-comprar-barcelona-madrid.html>

[20] Enquesta de serveis municipals 2018, Ajuntament de Barcelona. https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2018/10/r18021_ESM_Encreuaments_Evolucio_1989_2018_v1_0.pdf

[21] https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/nueva-burbuja-inmobiliaria-en-barcelona_11708_102.html

[22] https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/barcelona-gente-ido-gente-ira_11663_102.html

[23] AlwaysBarcelona, <https://www.always.barcelona/identitat-posicionament-barcelona-un-relat-coral-brand-book.pdf>

En la línea de la sensibilización y visualización de la ESS, las dos herramientas estrella que la XES utiliza son la Feria de Economía Solidaria de Cataluña (FESC)²⁴ y el sitio web PamaPam²⁵. PamaPam es la herramienta colectiva de visualización de las iniciativas de economía solidaria en un mapa, para que la población pueda realizar un consumo crítico y responsable y ser parte de la comunidad abierta que detecta y entrevista a estas iniciativas, y también las mapea.

Para el autoreconocimiento y el apoyo mutuo las herramientas son el Balance Social²⁶, el Informe del Mercado Social en Cataluña²⁷ (anual) y las redes locales de economía solidaria. El Balance Social es un instrumento de rendición de cuentas y medida de impacto social, ambiental y de buen gobierno en las organizaciones de economía solidaria. Se utiliza desde 2007 (y ha tenido una evolución significativa en cuanto a complejidad, programación tecnológica y rigor técnico). Hoy se ha convertido en una herramienta de referencia de la economía solidaria catalana. En 2018, lo utilizaron 188 empresas y entidades catalanas (450 en el conjunto del Estado español) y en 2019 lo utilizaron 231²⁸.

Por su parte, las redes locales de economía solidaria en Cataluña constituyen una herramienta fundamental para el autoreconocimiento y el apoyo mutuo entre las organizaciones de un territorio (barrio, municipio, comarca). Hasta 2018 se habían consolidado once redes, cuatro en Barcelona y siete en el resto de Cataluña, y se encontraban en proceso de creación ocho más, tres de ellas en barrios barceloneses. Estos espacios representan un muy buen ejemplo de construcción de ciudades y pueblos plaza; articulan y dan un sentido colectivo al trabajo entre iniciativas cooperativas, iniciativas populares comunitarias, medios de comunicación locales y alternativos, organizaciones transversales (como Som Energia, Fiare o Coop57), movimientos sociales y vecinales (como la PAH²⁹, las asociaciones de vecinas, el movimiento agroecológico o la economía por el bien común), espacios de autogestión cultural (ateneos populares, casales...) y planes comunitarios. Asimismo, suponen islas de resistencia frente a los negocios de las empresas transnacionales desde el trabajo autogestionado, el consumo colectivo, la defensa del derecho de ciudadanía, las dinámicas de apoyo mutuo, entre otras.

Finalmente, las propuestas desde la ESS para el desarrollo de ciudades plaza también contempla una estrategia de incidencia política directa. Dos han sido las herramientas promovidas por la XES: el Balance Comunitario³⁰, una herramienta de rendición de cuentas y mejora continua de los procesos de gestión comunitaria-

[24] <http://fesc.xes.cat/fira>

[25] <https://pamapam.org>

[26] <http://mercatsocial.xes.cat/ca/eines/balancsocial/>

[27] <http://mercatsocial.xes.cat/ca/pdf-estat-mercat/>

[28] <http://mercatsocial.xes.cat/noticies/231-entitats-participen-al-balanc-social-2019/>

[29] Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

[30] <http://mercatsocial.xes.cat/ca/eines/el-balanc-comunitari/>

ria de equipamientos o espacios públicos, y la declaración “15 medidas hacia la Economía Social y Solidaria en los municipios”³¹.

El Balance Comunitario (con equivalencias con el balance social) aspira a ser un elemento que favorezca y facilite la justificación de la política local de patrimonio ciudadano, ya que permite medir el impacto y retorno social a la comunidad. Constituye una herramienta más al servicio de la ciudad plaza. La declaración “15 medidas hacia la Economía Social y Solidaria en los municipios” es la línea de trabajo más reciente de la XES y sirve para impulsar políticas locales de desarrollo de la ESS en Cataluña.

Al inicio del artículo exponía que, ante la globalización de la capital catalana, la ESS apuesta por un modelo de ciudad plaza. Ello lo hace no sólo desde la denuncia de los efectos del peso de las multinacionales en nuestras vidas, sino especialmente desde la praxis: proponiendo alternativas de autogestión, consumo consciente y producción democrática; desarrollando herramientas de mejora para las propias organizaciones de economía solidaria e influyendo en las políticas públicas, especialmente las locales. Desde lo personal y lo colectivo, la economía solidaria nos propone una forma de ser y una forma de relacionarnos socialmente para poder vivir en una Barcelona “plaza”. Un modelo de relaciones sociales contrapuesto radicalmente a la Barcelona “escaparate” de las empresas transnacionales, que nos habla de qué ciudad queremos vivir y, sobretudo, como propone Harvey, de qué personas queremos ser.

[31] http://xes.cat/wp-content/uploads/2019/04/15mesures_2019.pdf

Buenas noticias desde el borde del abismo

La historia de Horní Jiřetín, una humilde localidad del norte de Bohemia, que desafió a la industria del carbón

RADEK VRABEL

Horní Jiřetín, un pequeño municipio de la República Checa, iba a ser borrado del mapa y reemplazado por una mina de lignito. La caída del gobierno comunista y la privatización de la compañía de carbón no iban a cambiar su destino. Pero la comunidad local y la sociedad civil unieron fuerzas y lo consiguieron. Ahora, la ciudad está viva y coleando y tiene planes de transición energética con los que no solo pretende cerrar la mina de carbón, sino también acabar con su dependencia de los combustibles fósiles.

Antes de que estallara la Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia en 1989, Horní Jiřetín era un municipio que, pese a su relevancia histórica por hallarse en una región imperial, iba a quedar totalmente destruido por una mina de lignito a cielo abierto. Con 2.500 habitantes, el régimen comunista estaba más interesado en explotar sus combustibles fósiles que en preservar sus valores históricos y culturales. Tenía previsto borrarla del mapa.

La década de 1970 fue dura: más de cuarenta aldeas y ciudades de Bohemia del Norte ya habían tenido ese destino, pero Horní Jiřetín y el asentamiento adyacente de Černice se salvaron de la destrucción total. Y fue gracias a la movilización de varias personalidades, como políticos regionales, geólogos, profesionales y, no menos



PETER TKAC, CC BY-NC-SA

importante, de asociaciones y organizaciones incansables que, en una época de represión y en plena era de la “normalización” (tras la invasión de Checoslovaquia por los miembros del Pacto de Varsovia en agosto de 1968), no siempre pudieron defenderse de la propaganda procedente de las altas esferas.

Tras la Revolución de Terciopelo, el carbón se privatiza

Incluso después de noviembre de 1989, cuando Checoslovaquia volvió a ser libre tras más de cuarenta años, lograda la autodeterminación y acabadas las injerencias soviéticas, los problemas de Horní Jiřetín continuaron. La compañía de carbón que amenazaba la existencia de la ciudad fue privatizada y pasó a llamarse Mostecká uhelná společnost a. s. (Empresa de Carbón de Most). Menos de un año después de que la República Checa se convirtiera en estado independiente, en 1992, la mina sepultó otra aldea del norte de Bohemia, Libkovice. El yacimiento de este pueblo, víctima de la extracción y la quema de lignito, no se ha explotado hasta la fecha.

La nueva empresa privada de carbón apenas encontró escollos para extender su destructiva actividad más allá de los “límites mineros” establecidos por el primer gobierno democrático tras el fin del comunismo, y que aún protegen una parte significativa de Bohemia del Norte de la extracción actual, incluido el territorio de Horní Jiřetín y Černice. Estos límites mineros debían ser una garantía permanente de seguridad para una región devastada por el desarrollo industrial y para sus habitantes que se habían visto obligados a trasladarse de un lugar a otro y estaban condenados a una existencia incierta.

La compañía de carbón Mostecká uhelná (absorbida más tarde por Czech Coal, ahora Sev.en Energy) es propiedad del polémico multimillonario Pavel Tykač desde 2006. Su papel fue clave en los planes de energía del gobierno y en la decisión de

impulsar la minería del lignito. Publicó numerosos estudios de expertos que se entregaron al sector público como documentos oficiales, a pesar de que era una empresa privada que solo estaba interesada en el lucro. Los medios de comunicación calificaron las operaciones de la compañía como necesarias para la independencia energética y la seguridad de la República Checa, pese a que la mayor parte del carbón se exportó a un precio inferior al valor de mercado.

Todavía no se sabe nada del proceso de privatización de la empresa. Los tribunales checos siguen estudiando el caso más de una década después del inicio de los procedimientos. Los artífices de la privatización de la compañía fueron condenados a años de prisión por corrupción y fraude en Suiza.

Salvada por la sociedad civil

Mientras, la localidad de Horní Jiřetín también experimentaba una gran transformación. Antes de 1989, imperaba la resignación, como en toda la sociedad checoslovaca. Pero para los habitantes de Horní Jiřetín, convencidos de que la ampliación de la mina de carbón era una “necesidad”, la incertidumbre era exacerbada. Sin embargo, entre 1989 y 2003, la mayoría de los lugareños se dio cuenta de que debían enfrentarse al poder político y económico de las corporaciones del carbón y que podían ganar la lucha.

La comunidad del pueblo gravitaba en torno a figuras políticas y activistas que defendían las viviendas de los ciudadanos, su entorno, su espacio vital y la dignidad humana en general. Los planes de demoler Horní Jiřetín provocaron su transformación social y política. El objetivo común de salvar la ciudad unió a la gente, lo que a su vez condujo al restablecimiento de las relaciones sociales y al surgimiento de una sociedad civil vibrante. Los lugareños empezaron a colaborar con organizaciones no gubernamentales como Greenpeace y con grupos ecologistas checos como Hnutí Duha (Amigos de la Tierra de República Checa), Brontosaurus y, más reciente-

Sev.en Energy (Czech Coal)

Ingresos: 789 millones de euros (2018)

Presidente: Lubos Pavlas (consejero delegado)

Principal accionista: Pavel Tykač

Sede: Schaan, Liechtenstein

Fundación: 2005

Sectores: energía, minería

Empleados: 3.200 (2018)

Datos clave:

- * Al igual que otros grupos energéticos checos como EPH, Sev.en Energy es propiedad de un multimillonario con un dudoso historial, Pavel Tykač.
- * El grupo controla aproximadamente la mitad de las reservas de lignito de la República Checa y defiende la explotación de estas reservas más allá de los “límites mineros” aprobados en 1991.
- * Sev.en Energy inició su expansión internacional en 2018, con la compra de centrales de gas en Reino Unido y Australia.

mente, *Limity Jsme My* (Los límites somos nosotros). Este último se creó expresamente para evitar la expansión de las minas de lignito en la República Checa y ahora desarrolla actividades de justicia climática en toda Europa.

El gran avance fue la relación de confianza que se entabló entre los lugareños y las organizaciones no gubernamentales, que llegó a cambiar la percepción de las personas sobre el activismo ambiental y de derechos humanos. Los lugareños empezaron a respetar y a valorar el importante papel desempeñado por estas organizaciones. El resultado fue una comunidad próspera y segura unida por algo más que combatir la minería del carbón. Los eventos culturales, los deportes y los clubes de aficionados jugaron un papel importante al unir a la gente con la comunidad en general. Se formaron varios grupos con el objetivo de abordar diversos problemas sociales, y ello creó un espacio de comprensión común. Un ejemplo es el club de teatro independiente, “SchachTa” (un juego de palabras en checo con las palabras “mina” y “pozo”). Este club de teatro escribe sus propias obras sobre temas sociales controvertidos de la comunidad y la sociedad en general. Incluso se recuperaron varias tradiciones y celebraciones desaparecidas bajo el régimen comunista.

El político y activista Vladimír Buřt ha sido una figura clave en la transformación de la ciudad. Es el actual alcalde de Horní Jiřetín y Černice, pero nació en el pueblo de Albrechtice que ya no existe. Fue destruido por las minas a cielo abierto, junto con otros cuarenta asentamientos, bajo el régimen comunista. Entró en política en 1998 para luchar contra los lobbies del carbón, y desde entonces no ha dejado de tener un papel activo en la transformación política de la ciudad, junto con muchos otros habitantes de Horní Jiřetín, amenazados también por el desplazamiento forzado y la explotación de la mina. Buřt se convirtió en portavoz de los habitantes y denunció la deshonestidad de la corporación del carbón. El pueblo de Horní Jiřetín depositó una enorme confianza en él, lo que reflejaba la necesidad de continuidad política en un momento de complicadas negociaciones y de lucha por el derecho a la existencia de la ciudad.

Horní Jiřetín tiene futuro

El 2015 fue un año marcado por numerosas manifestaciones, acontecimientos y actuaciones en Horní Jiřetín, pero también en la región circundante, en la República Checa y en otras ciudades europeas como Bratislava, Viena y Bucarest. Hubo protestas contra los planes de demolición de la ciudad y conmemoraciones de otras ciudades, pueblos y vidas humanas que habían sido destruidas. Lo más importante es que estas acciones sirvieron para buscar soluciones alternativas de autosuficiencia energética en el ámbito público y en los medios de comunicación.

Aunque las relaciones sociales se habían visto obstaculizadas mucho tiempo, por la historia política de la región y por los duros intentos de los lobbies del carbón

de crear una brecha entre las personas, los lugareños claramente redefinieron sus intereses en torno a los valores de construir y no de destruir, y los defendieron unidos. Tras la renovación de la comunidad local, muchas personalidades nacionales —actores, músicos, geólogos, expertos en energía, políticos y entendidos en una multitud de disciplinas— dieron su apoyo a la ciudad y apelaron al público en general y al gobierno checo para salvar la ciudad. Este amplio apoyo a la causa tuvo un papel esencial, ya que el carbón sigue siendo la piedra angular de la política energética checa.

Tras 20 años de lucha desgarradora por salvar las ciudades de Horní Jiřetín y Černice, las elecciones municipales de 2018 demostraron que una fuerza en apariencia mucho más fuerte (al menos, en términos económicos) podía ser vencida. Los partidarios de la compañía de carbón ni siquiera presentaron candidatos para las elecciones. El partido comunista también fue expulsado del Concejo Municipal, pues sigue defendiendo demoler la ciudad para acceder al carbón enterrado bajo sus casas. Como el gobierno no hizo ningún movimiento legal para reclamar los depósitos de carbón de la ciudad, el ayuntamiento ideó su propio plan para poner fin a la dependencia del carbón, y la comunidad local puso en marcha un plan de desarrollo de energía verde. El activismo político tuvo un papel clave en ello. La ciudad sentía la necesidad existencial de ser “libre de fósiles” (o dejaría de existir) y se alcanzó el consenso.

La fecha fijada para el cierre de la mina de carbón de Horní Jiřetín y de Černice está programada para 2024 a más tardar. El gobierno actual ha prometido encarar estudios de recuperación de la tierra devastada por las minas de carbón y las inmediaciones, proyecto que contribuiría a mejorar la calidad de vida. La región todavía tendrá acceso a electricidad, ya que las minas serán inundadas y transformadas en una central hidroeléctrica. Si todo sale según lo previsto, esta región que una vez fue famosa en todo el mundo por su belleza podría recuperar el esplendor perdido, y a la vez abastecerse de energía limpia y renovable.

Horní Jiřetín y Černice están trabajando para ser cien por ciento libres de fósiles. El actual alcalde, Vladimír Buřt, ha activado un plan de desarrollo estratégico cuyo objetivo es conseguir que para 2023 ninguna instalación de la ciudad se alimente de energías fósiles, y seguir extendiendo las fuentes de energía limpia en los hogares con la ayuda de subvenciones regionales, nacionales y europeas. El plan también incluye varios proyectos ambientales: techos verdes, métodos de conservación de energía y aislamiento térmico son algunas de las iniciativas que se están tomando para que la ciudad sea autosuficiente. Horní Jiřetín también quiere añadir la energía eólica a su mix de energía limpia.

Esta historia refleja la creciente tendencia de las comunidades locales a hacerse cargo de los problemas a medida que la necesidad de un medio ambiente más limpio y de soluciones sostenibles se vuelve cada vez más urgente. El caso de Horní Jiřetín



© IBRA IBRAHIMOVIC

demuestra que la transición a la energía renovable es tanto necesaria desde el punto de vista existencial como factible, independientemente del contexto, y que puede unir a las comunidades de diferentes espectros políticos. Más que una revolución política en toda regla, es la consecuencia de una transformación social orgánica nacida en el seno de una comunidad e impulsada por las fuentes de energía en las que la comunidad elige confiar. En lugar de la política tradicional desde arriba hacia abajo, son las soluciones políticas desde abajo hacia arriba las que originan un cambio sustancial del discurso político y una transformación de la mentalidad de una comunidad. “Pensar globalmente, actuar localmente” podría ser el lema de un cambio social transformador.

Transición energética

Un pequeño distrito alemán señala el camino

DÉBORAH BERLIOZ

Aunque Alemania no ha cumplido con sus objetivos climáticos y las empresas eléctricas siguen aferrándose al carbón, un pequeño distrito del norte de Berlín está abriendo el camino. El compromiso de las autoridades locales y la ciudadanía con las energías renovables ha dado sus frutos y las renovables ya cubren el 133 por ciento de las necesidades energéticas de los habitantes.

En septiembre de 2019, más de 200.000 personas salieron a las calles de Berlín para protestar contra el cambio climático: sentían que el gobierno federal no estaba haciendo lo suficiente para combatir la crisis climática. Y las cifras les daban la razón: Alemania está muy lejos de su compromiso climático. No ha cumplido su objetivo de reducir para 2020 las emisiones de CO₂ en un 40 por ciento respecto a los niveles de 1990 (se ha quedado en 32 por ciento).

Si Alemania no toma medidas, el objetivo de reducirlas en un 55 por ciento para 2030 será otro fracaso. La incapacidad del país para reducir las emisiones se debe en gran medida a las centrales eléctricas de carbón que todavía operan en su territorio. Las empresas que gestionan las centrales eléctricas y minas de carbón del país, los grupos RWE, EnBW y EPH (propiedad del multimillonario checo Daniel Kretinsky) no tienen ningún interés en favorecer la eliminación del carbón. El año pasado, una comisión nacional declaró que Alemania dejaría de usar carbón para 2038. Pero para los y las activistas medioambientales, es demasiado tarde porque las ciudades y pueblos han demostrado que no hay motivo para retrasar tanto la transición hacia las energías renovables.



© TORSTEN STAPEL

El distrito de Barnim, al norte de Berlín, demostró que sí se puede cuando lograron su objetivo de reducir un 40 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero para 2011. El distrito de 180.000 habitantes ya se había fijado una estrategia de cero emisiones en 2007. “Comenzamos estudiando los recursos energéticos de la región y descubrimos que Barnim podía ser autosuficiente en energías renovables”, recuerda Ina Bassin, quien trabaja en el desarrollo de renovables del distrito. El 44 por ciento de la energía de la región ya provenía de fuentes renovables en 2008, gracias a sus extensas llanuras perfectas para las turbinas eólicas y a otros espacios abiertos ideales para paneles solares.

Estas condiciones le llevaron a estar muy por encima del promedio nacional del 13 por ciento. Pero no se conformó con eso y obtuvo casi un millón de euros en fondos federales para este propósito. Se creó un departamento para estudiar la cuestión y, en 2013, el distrito fundó y dirige su propia empresa, la Barnimer Energiegesellschaft mbH (BEG), donde actualmente trabaja Ina Bassin. La empresa ofrece asesoramiento a los pueblos y empresas locales y pone en marcha iniciativas para ayudarles a reducir sus emisiones de CO₂.

La energía verde cubre el 133 por ciento de las necesidades de electricidad

La estrategia está dando frutos: en el distrito ya hay 2.300 instalaciones que generan energía verde (entre turbinas eólicas, paneles solares y plantas de biogás) y cubren el 133 por ciento de las necesidades de electricidad de los habitantes. En 2017, las autoridades locales fundaron una nueva empresa, Kreiswerke Barnim, con la vocación no solo de ofrecer asesoramiento, sino también de desarrollar

sus propios proyectos. La energía verde puede convertirse en una industria muy rentable en Alemania. La Ley Alemana de Fuentes de Energía Renovable (EEG) del año 2000 garantizó una tarifa de alimentación por energía verde durante 20 años. Aunque, lógicamente, las tarifas de alimentación disminuyen con el tiempo y con las revisiones de la EEG, la electricidad generada por las renovables de Barnim se vendió en 2018 por 85.200 millones de euros.

“Antes, las turbinas eólicas estaban en manos de particulares o de empresas que no eran del distrito”, explica Thomas Simon, CEO de BEG. “Usaban o, mejor dicho, explotaban nuestro espacio sin pagar impuestos aquí, algo que no fomenta una actitud muy positiva hacia las energías renovables. Sin embargo, cuando los proyectos son administrados por las autoridades regionales, los contribuyentes sí se benefician directamente. Las ciudades pueden invertir ese dinero para construir

infraestructuras como colegios y gimnasios”. Las ciudades también recurren a comerciantes y empresas locales para sus proyectos.

Además, se ha creado una red de comerciantes que ofrece formación a quienes quieran especializarse en energía verde. En 2016, el Instituto de Tecnologías de Energía Descentralizada (IDE) de Alemania llevó a cabo un estudio para evaluar el valor añadido y qué parte de él repercutía en la economía local de dos proyectos similares de energía eólica, uno realizado por una empresa de

EnBW

Ingresos: 20.600 millones de euros (2018)
Presidente: Frank Mastiaux (consejero delegado)
Sede: Karlsruhe, Alemania
Fundación: 1997
Sector: Energía
Empleados: 21.775 (2018)

Datos clave:

* EnBW es, junto con RWE y E.On, uno de los gigantes energéticos de Alemania (los “tres grandes”). Su actividad siempre ha estado asociada al carbón y a la energía nuclear, por lo que se ha visto muy afectada por la transición energética alemana. Junto con los otros dos gigantes de la energía, ha ejercido intensas presiones en Alemania y en la UE para proteger sus intereses.

energía externa y otro por una empresa municipal. Concluyó que el segundo proyecto aportaría entre ocho y diez veces más valor añadido a la localidad que el “privado”.

La estrategia de Barnim va mucho más allá de generar electricidad. Barnimer Kreiswerke está mejorando el alumbrado público de varios municipios mediante la instalación de bombillas LED que son mucho más eficientes que las convencionales. Uno de los aspectos más complejos es, sin duda, la calefacción. Actualmente la energía renovable solo cubre el 22 por ciento de las necesidades de calefacción del distrito. El calor es difícil de transportar y las instalaciones de calefacción requerirían grandes inversiones. Sin embargo, el gobierno local está decidido a marcar el camino. En 2007, el Consejo del distrito trasladó sus oficinas a la casa

de Paul Wunderlich en Eberswalde, el centro administrativo del distrito. Además de estar perfectamente aislado, el sistema de calefacción y ventilación del edificio con paneles de madera funciona con energía geotérmica y utiliza un setenta por ciento menos de energía que un edificio de oficinas con energía convencional.

Mientras que la fundación de BEG, cuya función principal es asesorar, fue bastante consensuada políticamente, la fundación de una empresa energética de distrito como Kreiswerke necesitó bastante más debate. Llevó dos años convencer a todos los partidos políticos de la localidad. Las grandes compañías eléctricas como RWE y E.ON tampoco estaban muy contentas con el nuevo competidor. La compañía del distrito quiere, por ejemplo, hacerse cargo de la red eléctrica local, que por el momento está gestionada por una empresa que pertenece en un 33 por ciento a los ayuntamientos y en un 67 por ciento a E.ON.

Coches eléctricos compartidos

En materia de transporte, el distrito está trabajando para promover los vehículos eléctricos gracias a los fondos adquiridos del Ministerio Federal de Transporte para instalar más estaciones de carga. Parte de la flota de automóviles del Ayuntamiento también es eléctrica. Como estos vehículos de la compañía no se usan fuera del horario de oficina, en junio se puso en marcha un plan para compartir vehículos denominado BARshare con el objetivo de sacar el máximo de ellos. Los habitantes de Eberswalde ahora pueden contratar estos vehículos eléctricos por las tardes y fines de semana desde una app en sus teléfonos móviles. “Ya se han apuntado 300 personas”, dice Ina Bassin satisfecha.

Sin embargo, el distrito quería hacer algo más que demostrar a los residentes las bondades de una política de energía renovable. También quería que tuvieran un papel activo en él. Para ello, las autoridades locales apoyaron la creación de una cooperativa energética llamada Barnimer Energiewandel eG. Esta cooperativa recibió 45.000 euros en fondos, suficiente para contratar a dos empleados a tiempo parcial, uno de los cuales es Madlen Haney, quien asegura: “Poner en marcha una cooperativa puede ser un proceso complicado y lento. Cuando solo hay voluntarios, puede ser difícil administrar el proceso y poner en marcha proyectos”.

La cooperativa unirá fuerzas con Kreiswerke, lo que permitirá que sus socios apoyen financieramente ciertos de proyectos y amorticen sus inversiones. Pero no todo es dinero: la cooperativa también quiere participar activamente en las energías renovables. Tiene planes para instalar paneles solares en el techo de una pequeña empresa de una aldea de la región. También vende paneles solares para balcones. Equipados con un pequeño inversor y un cable, estos pequeños paneles fotovoltaicos generan electricidad que alimenta directamente a la red doméstica. “El precio para nuestros socios es de 333 euros”, dice Madlen Haney. “Ya hemos vendido unos diez, lo que permite a los hogares reducir su factura de electricidad y no depender de las grandes empresas”.

Una política federal que no ayuda todo lo que debiera

Esta apasionada defensora de la transición energética quiere ver más apoyo del gobierno federal. Está muy decepcionada con los radicales recortes en subvenciones a la energía solar tras la revisión en 2012 de la Ley de Fuentes de Energía Renovable (EEG). Por entonces la energía solar estaba en auge y el gobierno consideró que todo el gasto público que absorbía era una razón para frenar las subvenciones. Cada mes, la tarifa de alimentación para la electricidad generada por paneles fotovoltaicos disminuye entre 0,5 y 1 por ciento. Esto significa que las instalaciones solares construidas hoy aportan 10,18 céntimos de euro por kWh frente a los 28,74 céntimos de 2011.

Al mismo tiempo, el precio de los paneles solares ha bajado notablemente. El gigante energético EnBW (en parte propiedad de Land of Bade-Wurtemberg) tiene planes de construir un enorme parque solar en Barnim sin subvenciones del gobierno. Aunque todavía gestiona varias plantas de energía nuclear y centrales eléctricas de carbón, EnBW pretende diversificarse en energías renovables a expensas de las empresas municipales o cooperativas. Como explica Madlen Haney “Pueden comprar paneles solares al por mayor, lo que significa obtener mejores precios que una pequeña cooperativa que tiene que pasar por un minorista. Las revisiones a la EEG han traído más incertidumbre a las pequeñas compañías de energías renovables. Todavía es difícil, por ejemplo, encontrar especialistas en el montaje de paneles solares. Por tanto, aunque el precio de los paneles puede haber bajado, instalarlos es otra cuestión”. Sin embargo, la cooperativa tiene ahora 31 socios y otros 80 están suscritos a la newsletter, que los mantiene informados de los avances.

Para respetar la estrategia de cero emisiones, el distrito no solo tiene que convencer a los adultos, también a las generaciones más jóvenes. “Los niños son el futuro”, dice Ina Bassin. El BEG no tardó en crear un «fondo medioambiental» para formar a los profesores de primaria en cuestiones ambientales y concientizar a los pequeños. También hay un centro ambiental en Eberswalde que los grupos escolares pueden visitar, con una exposición interactiva que informa de cómo funcionan las turbinas eólicas y la gestión de residuos.

Una universidad que abraza los objetivos del distrito

Los jóvenes que quieran hacer carrera en energía renovable no tendrán que ir muy lejos. La Academia de Desarrollo Sostenible de Eberswalde, una universidad pública, abrió sus puertas en 1992. Imparte cursos de materias tan diversas como la agroecología, el turismo sostenible y la planificación urbana y territorial. Sus alumnos también han tenido un papel importante en la innovación ecológica: tres graduados de esta institución fundaron la empresa Öklo, que construye y alquila inodoros de compostaje portátiles. Estos inodoros son muy innovadores porque reciclan algunas de las sustancias excretadas, como el fósforo, presente en la orina en grandes cantidades, para reutilizarlas. Kreiswerke Barnim se ha asociado con

Öklo y con varias universidades e institutos para fabricar un nuevo inodoro de compostaje destinado a hogares que también reciclaría el fósforo. “Cada vez que tiramos de la cadena, gastamos entre seis y nueve litros de agua potable”, señala Thomas Simon. “Este recurso es cada vez más escaso, tenemos que acabar con este despilfarro”.

Pero el último gran proyecto tiene que ver con el hidrógeno. “Estamos produciendo más energía verde de la que usamos y hemos tenido que encontrar una forma inteligente de usar el excedente”, comenta Thomas Simon. “Vamos a instalar electrolizadores en varias turbinas eólicas que transformarán la corriente eléctrica en hidrógeno. Este gas alimentará los autobuses y trenes de la zona”. Se espera que los primeros trenes alimentados de hidrógeno funcionen entre Berlín y Eberswalde en los próximos dos o tres años.

Entre tanto, el gobierno federal ha activado un plan climático para tratar de cumplir con sus objetivos climáticos. Ina Bassin, Thomas Simon y Madlen Haney están de acuerdo, sin embargo, en que el plan no es lo bastante ambicioso como para que Alemania reduzca suficientemente sus emisiones de CO₂. Pero no se desaniman. “Esperamos que muchos otros distritos sigan nuestro ejemplo”, dice Thomas Simon, quien ha estado en contacto con otros distritos interesados en fundar su propia compañía eléctrica.

Ciudades con causa

¿Podría la normativa de la UE ser un obstáculo al avance de la contratación pública progresista?

OLIVIER HOEDEMAN

En Europa hay varias ciudades dispuestas a aprovechar su capacidad de gasto (a través de concursos públicos) para promover la justicia social y los objetivos medioambientales. Pero esta materia (la contratación pública) está regulada por directivas de la UE de signo neoliberal concebidas para favorecer un único mercado de contratación pública en el que los contratos se adjudican al licitador que ofrece el precio más bajo.

En los últimos años han proliferado las ciudades europeas que, a través de los concursos públicos, utilizan su capacidad de gasto de forma más proactiva y estratégica para favorecer la justicia social y los objetivos medioambientales. Al frente de esta tendencia están los ayuntamientos que se definen como municipalistas: contrarios al neoliberalismo y comprometidos con la democracia urbana para impulsar un cambio progresista, concreto y radical en sus ciudades.

Algunas ciudades han revisado las políticas de contratación pública para reducir la dependencia de grandes corporaciones e impulsar un desarrollo económico local más sostenible, algo que suele provocar conflictos entre las ciudades y las multinacionales. El importe total de los servicios, trabajos y suministros adquiridos por las ciudades de la UE asciende a casi 2 mil millones de euros al año (en torno al 14 por ciento del PIB), por lo que el potencial transformador de las políticas progresistas de contratación pública es inmenso.¹

[1] Estas cifras se basan en cálculos de la Comisión Europea. Véase: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/618990/IPOL_BRI\(2018\)618990_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/618990/IPOL_BRI(2018)618990_EN.pdf)



SEBASTIEN BERTRAND, CC BY

Sin embargo, muchas de estas políticas de contratación pública basada en valores se rigen por las neoliberales directivas de contratación de la UE, concebidas para favorecer un único mercado donde los contratos se adjudican al licitador que ofrece el precio más bajo. Estas directivas han favorecido a las grandes multinacionales a costa de las empresas locales, y también han contribuido al dumping social y a otros problemas. Aunque la legislación de la UE ha mejorado, sigue planteando numerosos obstáculos a políticas de contratación municipalistas ambiciosas. Para sortearlos, las ciudades están desarrollando nuevas estrategias.

El proceso de unificación europea, que se aceleró en los años 80 y 90 con la creación del mercado único, supuso inicialmente una grave restricción a la contratación pública con fines progresistas. La contratación pública se abrió a la competencia internacional, incluso a través de la licitación obligatoria para contratos por encima de cierto volumen en toda la UE. Por otra parte, el Tribunal Europeo de Justicia (caso Telaustria) decretó que las reglas fundamentales del Tratado de la UE deben aplicarse a todos los contratos públicos, incluyendo el principio de no discriminación (prohíbe la discriminación por razón de nacionalidad). Las directivas de

contratación de 2004 tenían una clara orientación neoliberal: el “precio más bajo” y la “oferta más ventajosa económicamente” eran los criterios principales, lo que daba poco margen a políticas progresistas de contratación pública.

Este hecho ha dado más cuota de mercado a las multinacionales, grandes beneficiarias de las economías de escala, a costa de la pequeña empresa local. También ha contribuido al dumping social y medioambiental, ya que los concursos públicos se adjudicaban a las empresas que ofrecían la propuesta más barata, vulnerando las normas laborales y medioambientales. Si bien la revisión de estas directivas en 2014 permitió incorporar criterios sociales y medioambientales en la adjudicación, el 55 por ciento de los procedimientos de contratación siguen basándose en el precio más bajo como único criterio.²

Antes de citar ejemplos de políticas de contratación progresistas, es fundamental mencionar la tendencia, muy relacionada, a desprivatizar los servicios públicos. Cada vez más municipios deciden poner fin a la privatización o a la externalización mediante contratos públicos con empresas privadas y apuestan por los servicios internos, por la gestión pública directa. Sectores como el del agua, energía, gestión de residuos y transporte es donde la desprivatización se ha generalizado especialmente, como reveló el Transnational Institute en su informe “Remunicipalización: Cómo ciudades y ciudadanía están escribiendo el futuro de los servicios públicos”.³

Cuando los servicios son asumidos por la administración pública, los ayuntamientos no están obligados a publicar el anuncio de los concursos públicos en toda la UE. No obstante, si bien la normativa de la UE sobre contratación pública permite la administración pública, la realidad es que existen obstáculos para que los municipios elijan esta vía.⁴

Preston y el fomento de la riqueza de la comunidad

Uno de los ejemplos más interesantes de cómo los gobiernos municipalistas utilizan la contratación pública como herramienta estratégica es Preston, una ciudad del noroeste de Inglaterra. Este municipio de 140.000 habitantes apuesta por la “contratación progresista de bienes y servicios” como parte de su estrategia de “fomento de la riqueza de la comunidad”. Es una de las comunidades más pobres de Inglaterra y ha decidido destinar su presupuesto de contratación al apoyo de la pequeña empresa local y de las empresas con orientación social. Un ejemplo: en el concurso convocado para reformar el mercado, el contrato se fraccionó en

[2] Esta cifra procede de la estrategia de contratación pública de la Comisión Europea de octubre de 2017 (ver página 5). <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/25612/attachments/1/translations/en/renditions/native>

[3] “Remunicipalización: Cómo ciudades y ciudadanía están escribiendo el futuro de los servicios públicos”: <https://www.tni.org/en/collection/remunicipalisation>

[4] Véase, por ejemplo, el informe de seminario “Limitaciones del municipalismo progresista en la UE neoliberal”, online: https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/progressive_municipalism_within_a_neoliberal_eu_-_report_final.pdf

contratos más pequeños para permitir que oferten las pymes locales, con la inclusión de cláusulas sociales como salarios dignos para las personas trabajadoras. Esta medida ha impulsado la economía local y ha reducido la dependencia en las corporaciones multinacionales.

Los críticos han acusado a Preston de alimentar el «proteccionismo municipal», pero la ciudad lo niega. El Ayuntamiento insiste en que cumple plenamente con la ley de contratos públicos de la UE y del Reino Unido gracias a que aplica un sistema ponderado para la adjudicación de contratos. Este sistema tiene en cuenta otros criterios además del precio, como la “calidad, el compromiso con la formación, la actitud hacia la adquisición de competencias y la capacitación, la contratación de mano de obra local, la estrategia con los subcontratistas y la longitud de las cadenas de suministro”, además de la huella de carbono. Según Sarah McKinley, del grupo de reflexión Democracy Collaborative, “el 80 por ciento del dinero que Preston recuperó procedía de multinacionales con sede en Londres. Por tanto, no fue el condado vecino el que perdió, sino las grandes multinacionales”.⁵

El modelo de Preston es uno de los experimentos municipales más adelantados de Europa, pues ha aprovechado con valentía la enorme laguna de interpretación de la ley de contratos. Los resultados que Preston ha logrado hasta ahora son impresionantes. El CLES (Centre for Local Economic Strategies o Centro de Estrategias Económicas Locales) está promoviendo activamente una estrategia de «fomento de la riqueza de la comunidad» en otras regiones del Reino Unido, y cada vez son más ciudades las que aplican esta medida y otras similares.

Nápoles frente a las multinacionales y la mafia

El gobierno municipalista de Nápoles se enfrenta a un doble desafío: combatir “la injerencia no solo de las multinacionales, sino también de la mafia” en la contratación pública de la ciudad, explica la concejala Eleanora de Maio. La situación de las ciudades progresistas del sur de Italia podría compararse a “una carrera de obstáculos entre el poder de las multinacionales interesadas en invertir en ciudades en rápida mutación y el riesgo de corrupción”. Aunque la ley de contratación pública dificulta el mantenimiento de estos “poderes de explotación legales e ilegales”, la ciudad está haciendo todo lo posible y ha logrado grandes avances desde 2011, año de la llegada al poder de la coalición municipalista. Al igual que en Preston, las convocatorias a concurso se regulan de manera de ofrecer oportunidades genuinas a proyectos y empresas locales, a la vez que deja fuera de juego a los aliados del crimen organizado. Algunas convocatorias a concurso incluyen cláusulas sociales, como la obligación de contratar un porcentaje elevado de personal local.

[5] Fuente: “Progressive Protectionism – An Oxymoron or a Viable Development Strategy for Europe?” Julia Eder, Department of Politics and Development Research, Institute of Sociology, Johannes Kepler University Linz - <https://afep-ippe2019.sciencesconf.org/248892/document>

El gobierno municipal también se ha fijado el objetivo de excluir a las multinacionales cómplices de crímenes de guerra o de violaciones de los derechos humanos. Eleanora de Maio cita el ejemplo de Pizzarotti, una empresa constructora de estaciones de tren y metro y cómplice de violaciones de derechos humanos en Palestina. Aunque lo ideal sería elaborar una lista negra de empresas que tuvieran prohibido el acceso a la contratación pública municipal, es probable que listas negras de este tipo vulneren la legislación vigente de contratación de la UE, un claro obstáculo a la contratación pública basada en valores.

Barcelona y su apuesta por la contratación pública basada en valores

El ayuntamiento municipalista de Barcelona, liderado por Ada Colau del partido Barcelona En Comú (alcaldesa elegida por primera vez en 2015 y reelegida en 2019), apuesta por una estrategia muy ambiciosa: utilizar la contratación pública (el 19 por ciento del presupuesto de la ciudad) como herramienta estratégica del cambio. El gobierno municipal ha incorporado en los contratos públicos de la ciudad valores tales como la igualdad de género, los derechos laborales, los objetivos de economía social, los derechos de los colectivos vulnerables y otras cláusulas éticas, además del respeto por el medio ambiente. Pero como afirma Álvaro Porro González, comisionado de economía social, “todo eso es sobre el papel: lo difícil es llevarlo a la práctica”.

Para que las nuevas políticas funcionen, se debería trabajar en una nueva cultura interna en la administración de la ciudad y desarrollar herramientas que ayuden a los funcionarios. La ciudad ha tomado varias medidas para agilizar la aplicación de estas nuevas políticas, como proporcionar formación exhaustiva y elaborar una guía de cláusulas sociales para que las utilicen los funcionarios cuando preparan convocatorias de concurso. Asimismo, se han creado servicios internos de evaluación para vigilar si se están respetando los compromisos sociales y medioambientales en los contratos públicos. Como en Preston, los concursos de gran envergadura se fraccionan en otros más pequeños para favorecer a las pymes. Y aunque el precio sigue siendo un criterio importante, ahora hay otros factores que pesan mucho más que antes.

También las políticas progresistas de contratación pública de Barcelona se han topado con varios obstáculos legales. El ejemplo más sangrante es probablemente el de Endesa: esta empresa privada, líder del sector eléctrico, denunció al ayuntamiento por la cláusula de pobreza energética que se incluyó en un concurso. Alegando la Directiva sobre procedimientos de recursos de la UE, impugnó la obligación de proteger a los consumidores pobres de los cortes eléctricos y el tribunal le dio la razón al reconocer que esta cláusula vulneraba la ley de contratos.

Tribunales parciales

Mientras preparaban el lanzamiento de la empresa de titularidad pública comercializadora de electricidad Barcelona Energía, venció el contrato vigente con Endesa. La ciudad necesitaba un contrato puente de corta duración para cubrir las necesidades de energía del municipio. En el anuncio del concurso, el ayuntamiento incluyó dos cláusulas: energía verde y pobreza energética. La cláusula de pobreza energética obligaba a la empresa a cumplir con la ley catalana de pobreza energética y a firmar un convenio de «pobreza energética» con el ayuntamiento. El último día del proceso de licitación, tanto Gas Natural como Endesa presentaron una queja ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público.

El tribunal dio la razón a las eléctricas y rechazó la cláusula de pobreza energética. Barcelona tuvo que repetir el concurso y Endesa se adjudicó el contrato. Y aunque la ciudad resolvió esta cuestión creando una compañía municipal de energía y ya no necesitará convocar concursos públicos en esta área, el problema sigue existiendo en otros dominios. Las políticas municipales progresistas están siendo frustradas por la interpretación judicial de la ley de contratos: los jueces se centran casi exclusivamente en el objeto principal del contrato y no tienen en cuenta otras consideraciones.

Además, los tribunales españoles son muy erráticos en sus resoluciones. Mientras Madrid obtuvo luz verde en un concurso público que exigía a los candidatos el suministro de energía cien por ciento verde, Valencia perdió un caso idéntico. Como la apelación es gratuita y los tribunales suelen dar la razón a las compañías, los licitadores que pierden suelen recurrir. Esto hace que el proceso de licitación sea muy lento, algo que las ciudades deben tener en cuenta en sus concursos.

La Directiva de 2007 de la UE sobre procedimientos de recursos otorga, a cualquier compañía que crea que la oferta que presentó es mejor que la del competidor que ha ganado, la posibilidad de recurrir ante organismos consultivos administrativos o judiciales en todos los países de la UE.

Grenoble en la búsqueda de alimentos locales y orgánicos en los comedores escolares

Grenoble es otra ciudad que se ha topado con obstáculos legales por la naturaleza de sus leyes de contratación pública. Su ciudadanía quería alimentos orgánicos locales en los comedores escolares y la ciudad deseaba impulsar la economía local apoyando a los agricultores orgánicos. “Básicamente, estamos tratando de acercarnos lo más posible al objetivo de cien por ciento de alimentos locales orgánicos en los comedores escolares”, afirma la concejala Anne-Sophie Olmos. Y agrega que

según la ley de contratación pública de la UE es ilegal incluir criterios geográficos en los concursos públicos, lo que dificulta que las autoridades locales cumplan con la voluntad perfectamente democrática de la ciudadanía.

Pero Grenoble no se rinde y lucha por encontrar una fórmula para sortear este obstáculo: “En Grenoble hemos decidido adoptar una política de contratación pública que sea realmente ‘pública’. Eso significa que el precio no es el único factor a tener en cuenta al adquirir productos y servicios. También tenemos en cuenta los criterios ambientales y sociales para favorecer que, a la pequeña empresa, a menudo local, se le adjudiquen contratos”, puntualiza.

La ciudad lleva tres años organizando un evento anual en el que los compradores públicos informan a los posibles candidatos sobre sus requisitos sociales y ambientales, y presentan sus planes de contratación del próximo año. De esta forma, las empresas, muchas de ellas locales, entienden mejor las necesidades de los compradores del sector público.

Otro obstáculo a los alimentos locales y cien por ciento orgánicos en los comedores escolares es el hecho de que la política agrícola común de la UE ha perjudicado la autosuficiencia local. La competencia de las grandes explotaciones agrícolas industriales, que acaparan la mayor parte de las subvenciones agrícolas de la UE, ha destruido muchas pequeñas granjas locales, sobre todo de las regiones montañosas. Por ello, señala la concejala: “Estamos recurriendo a medidas complementarias, como proyectos de cultivo de alimentos y políticas de zonificación para proteger la tierra de cultivo a fin de reconstruir gradualmente el sector alimentario local”.

¿Es conveniente elaborar una lista negra de empresas evasoras de impuestos?

La evasión fiscal es otro problema que podría abordarse mediante un nuevo enfoque de la contratación pública. Las corporaciones y los particulares ricos que esconden dinero en paraísos fiscales debilitan el estado de bienestar y despiertan un profundo sentimiento de injusticia en países de toda Europa. Según un estudio de Datlab: “en 2006-2017, las empresas constituidas en paraísos fiscales obtuvieron el cinco por ciento de los concursos públicos en todos los países de la UE. Ello significa que estas empresas son adjudicatarias de un volumen que ronda los 100.000 millones de euros anuales”.⁶

En mayo de 2016, el ayuntamiento de Barcelona aprobó un decreto que prohibía la contratación de empresas vinculadas a paraísos fiscales. El concejal del Ayuntamiento, Gerardo Pisarello, explica los motivos de la decisión: “El municipalismo es un arma para ganar soberanía fiscal, y hoy por hoy la soberanía fiscal es imposible

[6] Fuente: <https://blog.datlab.eu/eu-tenders-to-tax-havens/>



ARTUR LUIZ, CC BY

sin una lucha decidida contra la evasión, que constituye una amenaza real para la democracia”. Barcelona es una de las 37 ciudades del Estado español que se ha declarado «zona libre de paraísos fiscales». Ahora incluye una cláusula contra los paraísos fiscales en todos sus contratos públicos. Pero, por desgracia, hasta el momento estas cláusulas han tenido un carácter básicamente simbólico. Ni un solo contrato ha sido paralizado por motivo de evasión de impuestos porque las ciudades carecen del poder para hacer cumplir tales cláusulas. Las empresas que se postulan a concursos públicos declaran no tener dinero en paraísos fiscales y no estar involucradas en actividades ilegales, pero la ciudad no tiene forma de exigir pruebas de ello.

En Copenhague, el ayuntamiento quiso excluir a las empresas evasoras de impuestos de los contratos públicos, pero el departamento de economía de la ciudad se opuso argumentando que incumpliría la ley de contratos danesa y de la UE. La ley solo permite a los ayuntamientos excluir a las compañías que han sido condenadas por incumplir la ley fiscal. Por desgracia, recurrir a paraísos fiscales y a otras especulaciones relacionadas con los impuestos no es ilegal en la mayoría de los casos. Tanto en Malmö como en Helsinki, los miembros progresistas del concejo municipal se toparon con los mismos obstáculos cuando reclamaron que la política de contratos de la ciudad excluyera los paraísos fiscales y recompensara a los proveedores que hacen públicos sus datos fiscales país por país (lo que permite conocer la cantidad de impuestos que paga la empresa en cada país en el que opera y saca a la luz la evasión fiscal). Además, no existe una base de datos oficial de evasores fiscales probados que puedan consultar los funcionarios de contratación.

Es evidente la necesidad de un nuevo régimen jurídico que obligue a las empresas a demostrar que no recurren a paraísos fiscales. En la primavera de 2019, el informe Tax3 del Parlamento Europeo instó a la Comisión a revisar la Directiva de contratación

pública de la UE para hacer posible “la aplicación de las disposiciones fiscales como los criterios de exclusión o incluso criterios de selección en la contratación pública”.⁷

Combatir el dumping social

La ley de contratos públicos de la UE ha creado numerosos problemas de dumping social: empresas que se adjudican contratos porque proponen ofertas baratas gracias a que pagan salarios más bajos, desentendiéndose de la protección que debe ofrecer como empleador y atentando contra los derechos de las personas trabajadoras, lo que ha causado una indignación comprensible. La revisión en 2014 de las directivas de contratos pública aportó más margen para introducir cláusulas sociales. Penny Clarke, de la Federación Sindical de Servicios Públicos (EPSU), lamenta que muchas ciudades sigan siendo reticentes a aprovechar las oportunidades que ofrecen las directivas tanto para prestar los servicios ellos mismos en vez de externalizarlos como para favorecer la contratación progresista, incluso a través de cláusulas sociales.

Muchas ciudades han tomado medidas e introducido cláusulas sociales ambiciosas en sus procesos de licitación pública. Es el caso de ciudades españolas como La Coruña, Zaragoza, Palma, Madrid y, por supuesto, Barcelona.⁸ Copenhague también es un buen ejemplo de cómo la contratación pública se puede utilizar para proteger los derechos laborales. La capital danesa ha puesto en marcha una doble estrategia: incluir cláusulas laborales en los contratos públicos y velar para que las empresas adjudicatarias de contratos públicos proporcionen condiciones de trabajo y salarios justos. En 2017, el ayuntamiento decidió crear un Comité de Vigilancia Contra el Dumping Social, con sede en el departamento de contratos de la ciudad. Para hacer cumplir las cláusulas laborales, este comité realiza «comprobaciones exhaustivas basadas en el diálogo» con los proveedores, incluyendo inspecciones en los centros de trabajo. Cualquier incumplimiento de las cláusulas puede dar lugar a sanciones, incluso a la rescisión del contrato. Otro aspecto de esta política es la obligación de colocar letreros en los lugares de obra para concientizar sobre el compromiso de la ciudad por combatir el dumping social.

El camino a seguir

Ciudades de toda Europa están demostrando que existe un enorme potencial para utilizar la contratación pública como ayuda a las políticas progresistas.

[7] El informe Tax3 también señala que “los Estados miembros deben vigilar y garantizar que las empresas u otras entidades jurídicas involucradas en licitaciones y contratos de públicos no incurran en fraude fiscal, evasión fiscal y planificación fiscal agresiva. ... Pide a la Comisión que publique una propuesta que obligue a los Estados miembros a garantizar que los operadores económicos que participan en procedimientos de contratación pública cumplan con un nivel mínimo de transparencia en materia de impuestos, en concreto, haciendo públicos sus datos fiscales país por país y favoreciendo estructuras de propiedad transparentes”. http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/161562/TAX3%20Final%20Report_A8-0170_2019_EN.pdf

[8] Ver “Atlas del Cambio”, <http://ciudadesdelcambio.org/politica-publica/clausulas-sociales-de-contratacion>



CONGRESS OF LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES, CC BY-ND

Pero si bien a nivel municipal se puede hacer mucho si existe voluntad política, también es claro que existen grandes obstáculos legales y que se necesita un entorno legal y político mucho más favorable. La revisión de 2014 de la Directiva de la UE abrió nuevas posibilidades, pero los fundamentos del neoliberalismo siguen vigentes.

Durante la campaña a las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019, la plataforma ciudadana Barcelona en Comú publicó un folleto con propuestas sobre cómo «municipalizar Europa». Uno de los capítulos trata de los contratos municipales basados en valores: “Queremos una economía local justa y plural, pero actualmente la UE limita la capacidad de las instituciones públicas para incluir estos criterios en la contratación pública. Vamos a pedir que se revisen las directivas de contratación pública para que se diferencie entre contratos nacionales y municipales, dando a los municipios una mayor flexibilidad para incluir cláusulas sociales y ambientales”.⁹

Aunque algunos cambios necesarios para crear un entorno que fomente la contratación pública municipal basada en valores requerirían una nueva revisión de la directiva, otros no. La Comisión Europea puede y debe trabajar en aras de la claridad elaborando regularmente directrices y guías sobre áreas específicas de contratación pública. Esto tranquilizaría a los municipios, ya que podrían apostar por la contratación basada en valores sin temor a sanciones. La preparación de estas directrices positivas debe hacerse en consulta con los municipios progresistas, con los sindicatos y con las organizaciones de la sociedad civil, lo que por desgracia no siempre es el caso. Pero debería ir mucho más allá de la contratación ecológica y social: también debe incluir el apoyo a una lista negra de empresas o corporaciones evasoras de impuestos o involucradas en violaciones de derechos humanos.

[9] Barcelona en Comú ha celebrado seis debates públicos titulados “Del barrio a Europa”. Estos debates tuvieron lugar en varios barrios de Barcelona; ¡Municipalicemos Europa! Barcelona en Comú, noviembre de 2018. https://barcelonaencomu.cat/sites/default/files/document/municipalize_europe.pdf

Además de la directiva de contratos, también la Directiva sobre procedimientos de recursos necesita una revisión. Actualmente las corporaciones utilizan esta directiva para amenazar a las ciudades y, como ocurre en el Estado español, para cuestionar las decisiones de licitación a gran escala. La directiva debe actualizarse para descartar reclamaciones frívolas y acabar con los procedimientos legales que las grandes empresas utilizan como arma de presión.

La concejala de Grenoble, Anne-Sophie Olmos, resumió así su punto de vista: “Para mí, lo primero que debe hacer Europa es dar a las autoridades locales y regionales independencia en cuestiones de necesidades básicas como los alimentos, el agua y la energía. En estos aspectos, las autoridades públicas deberían poder favorecer lo local si demuestran que ello favorece la autonomía de la comunidad”. Esta circunstancia apunta a la necesidad de revisar uno de los principios fundamentales de las directivas de la UE: no está permitido promover el desarrollo económico local mediante la contratación pública. Esto impide que los municipios utilicen la política de contratos para perseguir objetivos políticos legítimos o les obliga a estudiar medidas creativas e indirectas para lograr estos objetivos.

Pero mientras los concejales y activistas progresistas de la ciudad exigen más espacio democrático para que los municipios den forma a sus políticas de contratación pública, hay fuerzas poderosas que presionan en sentido contrario. BusinessEurope, organización patronal europea creada por organizaciones patronales de la UE, argumenta que “la contratación pública debería ser más favorable a las empresas”.¹⁰ Ha pedido a la Comisión Europea que actúe contra “los peligros [...] de la contratación estratégica”, como las cláusulas medioambientales y sociales. BusinessEurope afirma que “la existencia de barreras injustificadas” puede “impedir el acceso a los mercados de contratación pública” y advierte contra “condiciones de licitación y criterios de adjudicación excesivamente prescriptivos o que persigan objetivos sociales no relacionados”. “El incumplimiento con las normas de contratación pública “debe sancionarse rigurosamente”, reclama el grupo de presión.

No hay duda que los gobiernos municipales progresistas y los movimientos sociales municipalistas de toda Europa necesitan presionar más para defender su espacio democrático. Es poco probable que la directiva de contratación pública de la UE se revise a corto plazo: algunos países han integrado muy recientemente la directiva actualizada de 2014 en su legislación nacional. El Estado español lo hizo en 2018. Pero lo que está claro es la necesidad de revisar las directivas para eliminar los obstáculos neoliberales que se interponen en el camino de la contratación municipal basada en valores. Estos cambios deberían hacer que la contratación pública favorezca la transición hacia economías locales más justas, más ecológicas y más dinámicas.

[10] “Comments on the Commission’s ‘Public Procurement Package’”, BusinessEurope, 4 de abril de 2018. https://www.buseneseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/internal_market/2018-04-04_public_procurement_package.pdf

La contratación pública del Ayuntamiento de Barcelona, propuestas para asumir la responsabilidad extraterritorial y actuar ante la vulneración de los derechos humanos y del medio ambiente en el Sur Global¹

MÓNICA VARGAS (TNI), LINA MARÍA GONZÁLEZ (NOVACT)

Uno de los espacios desde donde se puede avanzar en la redición de cuentas a las empresas se ubica en la contratación pública, más aún cuando se plantea desde la perspectiva de la coherencia de políticas. Aquí es donde las ciudades pueden tener un rol fundamental². En Europa, a partir de la nueva reglamentación sobre contratación pública, se han ido multiplicando casos de políticas y prácticas de contratación pública social y ambientalmente responsable, tal y como lo ilustran los casos del Acuerdo Marco para el suministro de energía de 2018 establecido por el Ayuntamiento de Madrid³, o bien el reglamento de la comuna de Molenbeek-Saint-Jean (Bélgica). Éste último se sustenta en la perspectiva según la cual las obligaciones del derecho internacional sobre los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho de los pueblos a la autodeterminación tienen un carácter *erga omnes* (se deben aplicar a todos los actores sin excepciones). Por tanto, si una empresa contribuye a actividades que violan los derechos humanos y/o el derecho internacional, comete una falta profesional grave, por lo que puede ser excluida del proceso de contratación pública⁴.

La ciudad de Barcelona es considerada pionera en Europa en este aspecto, al haber realizado avances consecuentes en el reconocimiento de la responsabilidad extraterritorial del metabolismo social urbano, en particular en cuanto afecta a los países del Sur Global. Además de caracterizarse por el importante grado de

[1] Este artículo se basa en el informe “La contratación pública del Ayuntamiento de Barcelona, un análisis de responsabilidad extraterritorial, vulneración de los derechos humanos y del medio ambiente en el Sur Global”, Dirección de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona, 2019 (por publicarse).

[2] El informe cuenta con un benchmarking de diferentes países y ciudades que se han destacado por el carácter innovador en la contratación pública.

[3] Setem y Opcions. *La inclusió d'aspectes ambientals, socials i de bon govern a la contractació pública*. 2018. Disponible en: http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/casos-compra-publica.pdf

[4] Comuna de Molenbeek-Saint-Jean. Extracto del registro de las deliberaciones del Consejo Comunal. Sesión del 26 de abril 2017. Disponible en: <http://www.molenbeek.irisnet.be/fr/fichiers/conseil/motion/2017/motion-marches-publics-fr.pdf>

transparencia en lo que atañe al gasto público, se ha dotado de normativas innovadoras, bajo la forma de los Decretos de Alcaldía aprobados desde 2016, y de guías e instrucciones aplicables a diferentes sectores de la contratación. A la vez, existe un gran campo de acción para asegurar el seguimiento de los contratos y sus impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente.

En 2017, el Grupo Municipal (Ayuntamiento y entes incluidos) registró un gasto de más de 1.265 millones de euros por concepto de contratación pública. Si consideramos únicamente los datos de 2017 del Ayuntamiento (sin los entes municipales), en lo que atañe a los perfiles de los contratistas, se observa que, de un total de 5.381 proveedores, el 87,79% tenían el domicilio social registrado en la provincia de Barcelona. Además, el 68,96% eran autónomos, micro y pequeño empresario/as, mientras que 17,28% eran entidades sin ánimo de lucro⁵.

No obstante, si observamos el volumen del gasto público, constatamos que se concentra en un número reducido de grandes empresas:

- Entre los más de 5.000 proveedores, los cinco que más pagos recibieron representaron el 49% del gasto total de la contratación realizada por el Ayuntamiento⁶.
- Una sola empresa, FCC, fue beneficiada por el 20% del gasto total.
- Cuatro de estas empresas son transnacionales o filiales de grupos transnacionales: Grupo FCC, Grupo Ferrovial, Grupo ACS y Grupo ENEL (Endesa).

El examen de los proveedores beneficiados por los 22.564 contratos por el Grupo Municipal en 2017, por un valor de más de 1.068 millones de euros, revela que: 152 son empresas transnacionales o pertenecen a grupos transnacionales que han sido denunciados por la sociedad civil por la vulneración de los derechos humanos y del medio ambiente, representando en volumen el 20% del total de los contratos adjudicados (más de 211 millones de euros)⁷. Estas empresas pertenecen a 81 grupos transnacionales.

El órgano que más recursos ha adjudicado a las empresas vinculadas con algún tipo de vulneración de los derechos humanos y el medio ambiente en el Sur Global, es el Ayuntamiento de Barcelona. En algunos entes municipales, como Mercabarna, más de la mitad de los contratos adjudicados beneficiaron a este tipo de empresas.

Si bien la legislación estatal sobre contratación pública no estipula que se puedan exigir responsabilidades al grupo empresarial al cual pertenece una empresa, otras autoridades locales han explorado esta pista de cara a conseguir una contratación

[5] Ayuntamiento de Barcelona. Memòria 2017. Contractació Pública. Grup Municipal de l'Ajuntament de Barcelona. 2018. Disponible en: https://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/sites/default/files/2017_memoria_contractacio_aj_bcn_i_grup_mpal.pdf

[6] Los cinco principales proveedores por importe ejecutado en 2017 son: FCC, CESA S.A., UBASER S.A., Corporación CLD Servicios Urbanos y Endesa Energía.

[7] Para el estudio, se elaboró una base de datos de empresas denunciadas por algún tipo de vulneración de los derechos humanos y el medio ambiente.

social y ambientalmente responsable. Además, si una empresa que es beneficiada por la contratación pública forma parte de un grupo cuyas prácticas no son compatibles con los derechos humanos, los derechos laborales o el respeto del medio ambiente -principios considerados por el Ayuntamiento como pilares en la política de contratación-, existe una incoherencia a la vez que una oportunidad para avanzar en la rendición de cuentas de las empresas transnacionales.

Toda medida que se tome para la aplicación de la coherencia en el ámbito de la contratación pública puede tener repercusiones considerables, pudiendo influir en las condiciones de comercio y la propia conducta de las empresas, de los subcontratistas, y otros proveedores en las cadenas de suministro. Por ello, y para avanzar en la inclusión de criterios de respeto de los derechos humanos y del medio ambiente, en el estudio recomendamos la implementación de los tres siguientes mecanismos:

1. Creación de un organismo complementario de investigación, apoyo y formación. Recomendamos la creación de un organismo que genere pautas para la introducción de cláusulas sociales, medioambientales y de innovación, y que incluya criterios de evaluación de la extraterritorialidad y los derechos humanos. Para facilitar el trabajo en red entre diferentes administraciones, el organismo podría ser creado desde la Generalitat de Cataluña, pero contando con el papel protagonista del Ayuntamiento de Barcelona.
2. Herramientas de seguimiento. La Administración debe dotarse de herramientas para un adecuado seguimiento de los contratos, contando con mecanismos que les permitan evaluar la cadena de suministro, y que pueden ser integrados como criterios de solvencia en el proceso de contratación.
3. Mecanismos de transparencia por parte de las empresas. Recomendamos exigir a las empresas que incrementen la transparencia para un mejor seguimiento de los contratos, incluyendo información sobre el grupo empresarial en el cual se integran. Las faltas a la verdad que se puedan detectar en la información suministrada podrán ser catalogadas como una infracción grave y, en consecuencia, derivar en una penalidad proporcional o incluso, llevar a la resolución del contrato y a una prohibición de contratar en el futuro.

(RE)MUNICIPALIZAR

Dejando atrás la privatización del agua

Paris, Grenoble y la llegada del movimiento por la remunicipalización del agua en Francia

OLIVIER PETITJEAN

¿Cómo se convirtió Francia, pionera en la privatización del agua, en un semillero de remunicipalización? Ciudades como París y Grenoble no solo pusieron fin al dominio sobre el sector de las grandes empresas como Veolia y Suez, sino que fueron claves en la invención de una nueva generación de servicios públicos de agua, tanto en Francia como en el extranjero. Pero la lucha no ha terminado.

En 2019, la ciudad de París celebró el décimo aniversario de la municipalización de su servicio de agua: por entonces, la gestión y las operaciones que hasta ese momento estaban a cargo de empresas privadas pasó a una recién nacida empresa pública, Eau de Paris. La desprivatización del agua en París ha sido revolucionaria por muchos aspectos: primero, por el gran tamaño de la ciudad y su importancia simbólica. Segundo, porque la ciudad es sede de las dos empresas de agua más importantes del mundo, Veolia y Suez (que compartieron el contrato allí). Y por último y quizás más importante, por la forma en que se concibió y llevó a cabo el proceso de remunicipalización. Su intención no era deshacerse de las empresas privadas por descontento con ellas, sino promover el servicio público, sus valores y, en última instancia, su capacidad de ser más eficiente e innovador que las privadas, y de responder a los desafíos sociales y medioambientales que deben afrontar las empresas del agua.

Diez años después de la remunicipalización, es difícil encontrar a alguien que cuestione los logros de la nueva empresa municipal del agua Eau de Paris. En 2017, recibió el prestigioso Premio de Naciones Unidas al Servicio Público. Cuando el agua fue remunicipalizada, el precio del agua se redujo en un 8% gracias a que se ahorraron las transferencias financieras a empresas privadas y sus accionistas. En 2020, los precios siguen siendo más bajos que antes de la remunicipalización y son los más bajos de toda la región de París. También introdujo mecanismos innovadores de transparencia y procesos de gobierno democrático, como el Observatorio del Agua de París, una comisión de ciudadanos y representantes de la sociedad civil con un importante papel consultivo en el funcionamiento de la empresa.

Por otro lado, la empresa tiene entre sus principios el de facilitar el acceso al agua de los hogares más desfavorecidos y las personas sin hogar (incluidos migrantes y refugiados sin hogar en los últimos años). Ha aumentado la cantidad de fuentes de agua públicas en toda la ciudad y ha puesto en marcha campañas para ahorrar agua. Como otras ciudades de Francia y el extranjero, París también ha forjado alianzas con el sector agrícola para proteger sus cuencas hidrográficas. Con ello se da apoyo financiero y técnico a los agricultores para que evolucionen a métodos orgánicos, que a la larga reducirán la cantidad de pesticidas y nitratos en las aguas subterráneas y superficiales y, con ello, las inversiones necesarias para potabilizar el agua.

Eau de Paris sale bastante bien parada cuando se la compara con su archirrival SEDIF (Syndicat des eaux d'Ile-de-France), la empresa intercomunal de una gran parte de los suburbios de París, que también es el mayor contrato de Veolia en el mundo. Además de cobrar el agua mucho más cara que Eau de Paris, SEDIF es muy criticada por varias entidades, incluido el tribunal de cuentas regional, por su falta de transparencia. Otra diferencia importante entre Eau de Paris y las empresas privadas es su énfasis en la tecnología: estas últimas tienden a priorizar las soluciones tecnológicas para potabilizar el agua o para tratar las aguas residuales, porque es más lucrativo y porque les asegura contratos como proveedor de servicios (son propietarios de estas tecnologías). Estas soluciones también se pueden extender a los diferentes contratos que tienen. En cambio, Eau de Paris ha elegido centrarse en la prevención y limitar las inversiones, concentrándose solo en lo necesario.

Pero París no es pionera de la remunicipalización del agua en Francia; se le adelantó otra ciudad: Grenoble, en los Alpes franceses. Al igual que la capital parisina, Grenoble no solo anuló un contrato de privatización del agua por corrupción, también construyó un servicio público de agua adaptado a las necesidades y desafíos futuros de la ciudad y sus ciudadanos. Se proporcionó agua de mejor calidad a un precio más barato y se introdujeron mecanismos de gobernanza democrática. El éxito de la nueva empresa de agua propició la ampliación del programa de remunicipalización y “ecologización” de los servicios públicos así como la priorización de las empresas locales.

Grenoble y París no solo tienen en común que pusieron fin a la privatización del agua y apostaron por un servicio público de agua con gran éxito; también ayudaron a promoverlo en otras ciudades de Francia y el extranjero. Funcionarios, políticos y expertos de la sociedad civil de Grenoble ayudaron a lograr la remunicipalización en París. Y a su vez, funcionarios, políticos y expertos de París ayudaron a otros líderes municipales, grupos de ciudadanos y sindicatos a plantar cara a los planes de privatización en sus ciudades o emprender sus propios proyectos de remunicipalización. Los mecanismos de gobierno participativo introducidos en Grenoble cuando remunicipalizó su servicio de agua se imitaron y ampliaron en París, y sirvieron de inspiración para otras ciudades.

Los lobbies del sector privado calificaron esta “campana” de remunicipalización como motivada ideológicamente. Los artífices de la remunicipalización en Grenoble y París estaban convencidos de las virtudes y del potencial del servicio público, y desconfiaban del afán de lucro en el sector del agua. Pero su decisión de convertirse en defensores activos de la remunicipalización puso de manifiesto los muchos obstáculos a los que se enfrentaron (y a los que aún se enfrentan) cuando intentaron ir contra los intereses de poderosas empresas. Comprendieron que las ciudades debían unir fuerzas si querían que la alternativa de servicio público tuviera éxito a largo plazo.

Veolia

Ingresos: 25.900 millones de euros (2018)
Directivos: Antoine Frérot (consejero delegado y presidente)
Sede: París, Francia
Fundación: 1853 (Générale des eaux)
Sectores: Agua, residuos
Empleados: 171.495 (2018)

Datos clave:

- * Veolia es, junto con Suez, líder mundial en privatización del agua y los residuos. Francia, por sus grandes contratos en la región de París (Sedif), Lyon y Marsella, todavía representa casi la mitad de sus ingresos en el sector del agua.
- * Ha sido criticada por varias ONG y condenada por tribunales por su práctica de cortar el agua a los hogares desfavorecidos en Francia.
- * Veolia ha interpuesto varios procedimientos de arbitraje internacional (ISDS), o amenazado con hacerlo, contra las autoridades públicas que han intentado remunicipalizar los servicios privatizados.

Revertir la tendencia a la privatización del agua

La década de los noventa marcó el apogeo de la privatización del agua. Durante bastante tiempo, prevaleció la idea de que la gestión privada del agua era la única solución viable. Veolia y Suez acumulaban nuevos contratos en todo el mundo (y también otras compañías como Bechtel, Thames Water o RWE, que veían el agua como una industria con mucho potencial). Ciudades de Estados Unidos, Europa y el hemisferio sur, desde Argentina hasta Indonesia y Filipinas, cedían sus servicios de agua a empresas privadas, atraídas por las promesas de eficiencia, innovación

tecnológica y ahorro, y en muchos casos presionados por instituciones financieras internacionales. Hasta entonces, la gestión privada del agua había sido una excepción. Solo Francia y, en menor medida, España permitieron que las empresas privadas metieran sus tentáculos en la gestión de los servicios de agua y saneamiento. Después vino la oleada neoliberal de la década de 1980 y fue cuando Chile (con el general Pinochet) y Reino Unido (con Margaret Thatcher) privatizaron el sector del agua por completo. Durante un tiempo parecía que el resto del mundo estaba a punto de entrar en una nueva era de gestión privada del agua.

Pero no pasó. En unos años, la oleada de privatizaciones del agua se detuvo en seco. Muchos grandes contratos de agua firmados en la década de 1990 fueron anulados: en Buenos Aires, La Paz, Atlanta, Berlín y Dar es Salaam. Varios factores explican este fracaso: el más importante fue la crisis económica de Asia y América del Sur, al igual que el colapso del sistema financiero de Argentina en 2001-2002, que destruyó la ecuación económica de muchos contratos de agua. El segundo factor fue la resistencia popular a la privatización, que siempre venía acompañada de aumentos de precios. La “guerra del agua” en Cochabamba (Bolivia), donde semanas de protestas forzaron la salida de la compañía estadounidense Bechtel y el regreso a la gestión pública del agua, sigue siendo el símbolo de este rechazo generalizado a un servicio de agua dominado por intereses privados. En Cochabamba en ese momento, al igual que en ciudades francesas como París y Grenoble, esta oposición también se había transformado en una fuerza positiva: el movimiento de “remunicipalización”, que no solo buscaba oponerse a las empresas y a la privatización, sino también reformar y democratizar los viejos servicios de agua.

Desde entonces, el paisaje internacional del agua ha estado dominado por una especie de guerra de bloques. Por un lado, las empresas (con dominio de Veolia y Suez) siguen buscando nuevas conquistas, a menudo con el apoyo de donantes e instituciones internacionales, pero con éxito desigual. Suelen encontrarse con una gran resistencia de una coalición variopinta formada por sindicatos, movimientos sociales, grupos de la sociedad civil y políticos. La lucha contra la privatización del agua en Grecia, impuesta por la infame “Troika”¹ europea y sus medidas de austeridad en la década de 2010, es un buen ejemplo.

En Francia, la lucha contra la privatización del agua fue aún más radical. Además de Grenoble y París, decenas de ciudades francesas, tanto grandes (Rennes, Niza y Montpellier) como pequeñas remunicipalizaron sus servicios de agua entre 2005 y 2015. A día de hoy, ninguna de ellos ha optado por volver a privatizar sus servicios de agua, y no hay un solo ejemplo de ciudad que haya conservado la gestión pública de su agua por varios años y luego haya querido pasar a la gestión privada². Sin

[1] Formado por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

[2] Sin embargo, grandes organismos de agua intercomunales han absorbido varias pequeñas empresas públicas de agua con una gestión privatizada del servicio.



JEANNE MENJOULET, CC BY-ND

embargo, es cierto que algunas grandes ciudades francesas como Lyon, Marsella, Toulouse y Burdeos optaron por renovar con Suez y Veolia cuando expiraron sus contratos de agua, pese a las campañas ciudadanas en contra. Lo justificaron alegando los importantes recortes en el precio del agua que ofrecían las empresas privadas (más adelante hablaremos de ello). Ya sea por renovaciones de contratos o por los contratos vigentes en la región de París, como SEDIF, las empresas privadas todavía suministran agua a la mayoría de la población francesa (pero no a la mayoría de las ciudades francesas).

La conexión francesa (del agua)

¿Qué ha hecho que Francia sea el motor de la remunicipalización del agua? La respuesta es fácil: es el país con más experiencia en privatización de este preciado recurso. Los funcionarios y ciudadanos franceses han tenido más experiencias negativas con la privatización del agua y ha habido más contratos de agua que remunicipalizar. Según numerosos estudios realizados por organizaciones de consumidores, el precio del agua era más alto en las ciudades privatizadas que en las ciudades con gestión pública. La oleada de remunicipalizaciones en Francia la propició una ley estatal aprobada en los años noventa. Tras varios escándalos relacionados con la financiación ilegal de partidos políticos por parte de empresas privadas, en 1993 se aprobó una ley de transparencia histórica, la loi Sapin, que introdujo cláusulas de transparencia en los contratos públicos y de privatización, y también limitó la duración de los mismos. Básicamente, la ley obligaba a los alcaldes y a otros políticos locales, que hasta entonces podían decidir sobre los contratos

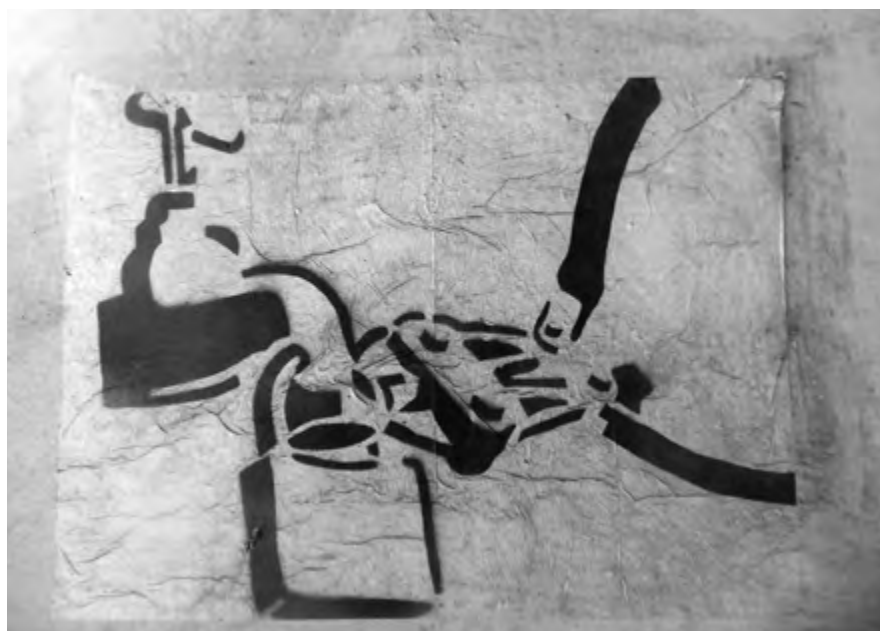
por su cuenta, a llevar a cabo una evaluación transparente antes de adjudicar o renovar los contratos de servicio público. De repente, la gestión privada del agua ya no era un hecho consumado.

El movimiento por la remunicipalización del agua en Francia nunca ha tenido una fuerte base ciudadana. Tanto el público general como la sociedad civil siempre han expresado su apoyo a la gestión pública del agua, incluidos los grupos anti-corrupción, las asociaciones de consumidores y residentes y las organizaciones medioambientales. Pero casi nunca se consideró un asunto de alta prioridad. Tampoco conservar la gestión pública del agua o desprivatizarla era una prioridad en la agenda de los políticos locales, aunque era un símbolo político claro, sobre todo de la izquierda. “En general, los ciudadanos prefieren que el agua la gestionen los organismos públicos”, declara Anne Le Strat, principal artífice de la remunicipalización de París, “Algo que solo se materializa cuando hay ejemplos de éxito concretos, como el de París”.

Se necesitan líderes que se hicieran cargo del asunto con el apoyo de la sociedad civil y la opinión pública, mientras recalcan la importancia simbólica tanto del agua como del servicio público para lograr sus fines. “Lo importante es construir alianzas”, asegura Jean-Claude Oliva, coordinador en la Coordination Eau Ile-de-France, grupo de la sociedad civil y uno de los principales defensores de la remunicipalización. En una ciudad como Aviñón, un fuerte movimiento ciudadano respaldaba la remunicipalización y el alcalde estaba dispuesto a lograrlo, pero no encontraron la manera de vencer a la oposición. En Grenoble, la sociedad civil tuvo un papel clave para acabar con la corrupción del sector del agua y presionó por la remunicipalización. En París, la llegada de una mayoría progresista al ayuntamiento en 2001 y la política ecologista Anne Le Strat a cargo de la cartera de agua de la ciudad tendrían un papel decisivo. En Niza, la remunicipalización se logró gracias a la resistencia de los alcaldes de los pueblos montañoses (que iban a ser absorbidos por la aglomeración mayor de Niza) dispuestos a todo por conservar sus sistemas de agua públicos. Este logro es especialmente meritorio teniendo en cuenta que Veolia llevaba gestionando el servicio de agua de Niza desde el siglo XIX y que el alcalde era muy conservador.

Curiosamente, el movimiento de remunicipalización en Francia también fue impulsado en parte por personas de mentalidad técnica que no necesariamente tenían buena opinión sobre los méritos de la gestión pública-privada, pero que tampoco estaban satisfechos con el abuso del poder absoluto de Veolia, Suez ni de otra empresa más pequeña, SAUR. Para ellos, la remunicipalización era una forma de inyectar un poco de competencia saludable, pero tampoco tenían inconveniente en asociarse con funcionarios y activistas con intereses políticos.

Otro problema eran los trabajadores del sector del agua y sus sindicatos. Al principio, muchos se opusieron a la remunicipalización, debido en parte a que estaban



ITHMUS, CC BY-ND

satisfechos con los salarios y las condiciones ofrecidas por las empresas privadas. A los trabajadores no les entusiasmaba la incertidumbre que suponía el cambio de propiedad. Además, muchos defensores de la remunicipalización no eran nada diplomáticos en su discurso público sobre las empresas privadas, al no diferenciar entre trabajadores (que solo hacían su trabajo) y directivos y accionistas (interesados en obtener beneficios). Con el tiempo, los contratos sustanciosos del agua empezaron a escasear, lo que obligó a las empresas de agua privadas como Veolia a reducir plantilla y recortar prestaciones sociales a los trabajadores, la opción menos atractiva. Según los contratos municipales, los trabajadores al menos pueden estar orgullosos de defender los valores del servicio público.

El imperio contraataca

Pueblos y ciudades han sido el gran motor del movimiento de remunicipalización. En Francia y en todo el mundo, la remunicipalización del agua ha enfrentado a las “ciudades” (políticos y funcionarios, junto a movimientos sociales y grupos de ciudadanos) contra gobiernos nacionales e instituciones internacionales, en este caso, la Unión Europea (UE). Estas últimas no son partidarias de la privatización de forma abierta: mantienen una postura de aparente neutralidad mientras adoptan políticas que favorecen de facto al sector privado.

La ley de competencia que rige la adjudicación de contratos públicos suele favorecer a las empresas. Esta ley tiende a tratar a las empresas privadas con alcance nacional o europeo como los actores “normales”, mientras que a las empresas más

pequeñas, locales o estatales (empresas municipales de agua o remunicipalizadas) las trata como excepciones que hay que justificar. Otra área política que es proclive al sector privado es la relacionada con la gestión de los recursos hídricos en general y con las condiciones en que se prestan los servicios de agua. Por último, las políticas de cooperación y ayuda exterior también favorecen la expansión de las empresas de agua francesas y europeas a otras regiones del mundo. Cada vez más planes destinados a financiar el acceso al agua conllevan “asociaciones público-privadas”. Dicho claramente, los contribuyentes de la UE son los que financian los nuevos contratos privatizados con empresas como Suez o Veolia.

No hace falta decir que las empresas de agua invierten grandes sumas en lobbies (grupos de presión) tanto a nivel nacional como de la UE para garantizar que el régimen jurídico siga favoreciendo sus intereses. Sin embargo, además de los lobbies, hay dos razones que explican por qué los responsables nacionales y de la UE favorecen a las empresas privadas de agua. La primera es la obsesión por la austeridad fiscal, lo que los lleva a eliminar el agua de los presupuestos públicos. La segunda es un afán por apoyar a los «campeones nacionales» (o europeos) tanto en sus propios mercados como en el extranjero.

¿Cuál ha sido la reacción de las empresas de agua a la remunicipalización? Perder el contrato de París fue un shock para Veolia y Suez, obligadas a responder a la difícil pregunta de por qué su propia ciudad de origen les daba la espalda. Su respuesta ha sido reducir drásticamente los precios del agua entre un 20% y un 25% en ciudades como Lyon, Marsella y Toulouse, lo que en la práctica significa prestar un servicio de agua de “bajo coste”, con menos mantenimiento e inversiones, que muchos temen pronto será insostenible tanto para las empresas como para los servicios que prestan. Jean-Claude Oliva también advierte que la información sobre el precio del agua es engañosa: “Es necesario analizar toda la estructura tarifaria, no solo el precio del agua por 120 m³ de agua, que es la referencia habitual, pero que es mucho. Si tomáramos un volumen más pequeño, comprobaríamos que la rebaja de precios es mucho menor”.

Suez y Veolia también tienden a buscar contratos más modestos, como la construcción y manejo de plantas de agua que son menos lucrativas pero también menos arriesgadas, lo que podría considerarse como una forma de privatización encubierta e insidiosa. Ambas compañías también se han replanteado su estrategia y se han centrado en su capacidad para ofrecer a las entidades locales una gama de servicios en todos los sectores, jugando con las posibles sinergias en la gestión del agua, el saneamiento, los residuos, la calefacción o las instalaciones públicas, a menudo vendiendo las bondades del big data o la smart city. Ahora se venden como proveedores integrados de “soluciones de sostenibilidad” para las ciudades. Evidentemente, se centran en soluciones tecnológicas listas para usar y en la reparación, más que en políticas de prevención como el cero desperdicio. Un lavado de cara que huele peligrosamente a fachada.

“Podemos llegar aún más lejos y hacerlo aún mejor”

Tras años de éxito de la remunicipalización, ¿ha alcanzado el sector del agua francés un equilibrio entre la gestión pública y la privada? Esto es, al menos, lo que el sector privado del agua y sus aliados quieren dar a entender, pues tienden a sugerir que ya no hay diferencia entre lo público y lo privado. Los casos de remunicipalización parecen haberse reducido en los últimos años, aunque en 2018 hubo un gran golpe al contrato de SEDIF con alrededor de 20 miembros que abandonaron el organismo intercomunal para fundar empresas públicas. La privatización del agua en su forma “pura y cínica” ya no está en la agenda. No obstante, pese a su cambio de discurso y estrategia, las compañías privadas de agua siguen persiguiendo los mismos objetivos. La remunicipalización es una carrera cuesta arriba, como siempre ha sido. “Lo que hemos ganado, no lo hemos vuelto a perder”, declara Anne Le Strat. Y concluye: “Se podría decir que hemos ganado la guerra de las ideas, pero solo una parte de la batalla política. Las compañías privadas de agua siguen siendo poderosas, pero ya no tienen todo el control sobre el juego”.

Con la crisis climática y la cantidad de problemas sociales y ecológicos a los que se enfrentan las ciudades, los esfuerzos por reinventar servicios públicos sostenibles y democráticos y por preservar los valores de los servicios públicos son más urgentes que nunca. “Todavía podemos ir más allá y hacerlo mejor”, señala Anne Le Strat. “El agua pública aún tiene mucho potencial político, sobre todo ahora que el acceso a los recursos naturales y la atención de las necesidades básicas es tan acuciante. Y no será el sector privado el que aportará las soluciones”.

Ciudades contra poderes establecidos

Neomunicipalismo en Nápoles

ELEONORA DE MAJO

Tras la infame “emergencia de la basura” de 2008, los ciudadanos de Nápoles eligieron a un alcalde municipalista que apostó por una ambiciosa política de remunicipalización y democracia urbana participativa. Pero las ciudades siguen solas en su lucha contra los poderes establecidos y contra la austeridad impuesta por la Unión Europea y los gobiernos nacionales.

El giro neomunicipalista de Nápoles se fraguó en 2011. En 2016, el alcalde Luigi de Magistris fue reelegido para un segundo mandato de otros cinco años. Él y la coalición (de la que yo, como concejala, soy miembro) todavía gobiernan la tercera ciudad más grande de Italia (tras Roma y Milán) y la undécima de Europa por número de habitantes.

Para comprender realmente lo que significa el neomunicipalismo en una ciudad como Nápoles, y como esta experiencia implica enfrentarse a grandes poderes nacionales y europeos, conviene repasar su historia reciente y el contexto que generó el caldo de cultivo de este gobierno municipal radical.

Nuestra historia neomunicipalista se gestó entre 2008 y 2011, un trienio oscuro para la ciudad de Nápoles a causa de la corrupción y la malversación de todos los partidos políticos históricos, desde los de centroizquierda, que entonces gobernaban a nivel municipal y regional, a los de centroderecha, que gobernaban el país con Berlusconi. Estas facciones políticas aparentemente opuestas eran en realidad cómplices en la gestión de los asuntos locales y en la protección de los intereses de los poderosos. Ello incluía, en muchas ocasiones, al crimen organizado.



JANNAKIS, CC BY

Experimento municipalista tras la “emergencia de la basura”

Su complicidad se puso de manifiesto cuando estalló la “emergencia de la basura”. Los lobbies de la gestión de basuras, junto con grupos mafiosos y algunos políticos nacionales y locales, inventaron una “emergencia” artificial, amontonando toneladas de desperdicios y montañas de bolsas de basura en las calles. Por todo el mundo se difundieron imágenes de Nápoles colapsada. De repente, ser napolitano era ser ciudadano de una urbe peligrosa, sucia y abandonada, rehén de la mafia y de la corrupción política. El rechazo a la ciudad y a sus habitantes se exacerbó en esos años. Decenas de miles de jóvenes abandonaron la ciudad en busca de una vida mejor en el norte de Italia o en el extranjero.

Creció la desconfianza y la indignación de la ciudadanía hacia los partidos y políticos tradicionales. Intoxicados por los basureros legales e ilegales, muy abundantes en la periferia, los y las ciudadanas clamaban por un cambio radical mediante una vía democrática radical.

En la campaña a las elecciones locales de 2011, una coalición de comités ciudadanos, asociaciones y grupos de la sociedad civil celebró varias reuniones para hablar de la posibilidad de presentar candidatos que no pertenecieran al sistema político tradicional. Miles de personas votaron a Luigi de Magistris, a la sazón miembro del Parlamento Europeo. De Magistris se hizo popular por su famosa investigación “¿Por qué no?” a políticos italianos corruptos, tanto de izquierdas como de derechas.

Durante la campaña electoral, las encuestas no mostraban nada que indicara que podía ganar un recién llegado. Pero el día de las elecciones, los partidos tradicio-

nales tuvieron que aceptar, para su gran pasmo, que los ciudadanos de Nápoles se habían hartado de su arrogancia y los habían expulsado. Así fue como de Magistris se convirtió en alcalde de Nápoles. En 2016 comenzó un segundo mandato de cinco años, con el apoyo de los nueve concejales de DemA, una plataforma por la democracia y la autonomía que aglutina iniciativas de la sociedad civil y de partidos radicales de izquierda.

Proteger los servicios públicos y combatir los dogmas neoliberales

La nueva coalición neomunicipalista heredó una ciudad sucia, endeudada y deprimida, por lo que sus primeros años en el poder fueron complicados. El objetivo principal de la coalición siempre ha sido defender los intereses de los ciudadanos frente a los grandes poderes y las empresas privadas. Para atajar el problema de la basura, cortamos inmediatamente todas las relaciones con empresas privadas de gestión de residuos, a menudo vinculadas al crimen organizado. La gestión de los residuos pasó a control municipal con el fin de evitar las injerencias de la mafia.

La misma estrategia se adoptó con la empresa privada Romeo Gestioni SpA, que administraba las propiedades en alquiler de todo el municipio, incluyendo las viviendas sociales. Decidimos anular el contrato entre esta empresa y el ayuntamiento y, como habíamos hecho con la basura, traspasar sus propiedades a control municipal. Fue una tarea titánica: la empresa había acumulado miles de documentos sobre las propiedades, que tuvimos que llevar a nuestros archivos y clasificar de cero.

Remunicipalizar las propiedades en alquiler significaba para los ciudadanos precios de alquileres más asequibles y el fin del clientelismo que había proliferado al amparo de la gestión de las propiedades. Y lo que es más importante, significó declararle la guerra al dogma neoliberal de vender los bienes inmobiliarios, y proteger a los que necesitan vivienda urgentemente.

El pacto fiscal europeo y otras políticas de austeridad fueron un ataque directo a las autoridades locales, un ataque que ahogó los esfuerzos por remunicipalizar los servicios controlados por empresas privadas o corruptas. La falta de fondos que trajo consigo la política de austeridad frenó estas intervenciones y el suministro de servicios. Una parte importante de nuestra estrategia fue buscar la participación ciudadana a través de asambleas públicas y reuniones con grupos cívicos: la democracia participativa es un instrumento clave del neomunicipalismo pues permite lograr un consenso por la protección de los servicios públicos.

Otro ejemplo de nuestra lucha contra las multinacionales fue la decisión de apoyar el referéndum italiano de 2011 sobre la gestión del agua. Millones de italianos votaron para que el agua fuera reconocida como un derecho humano fundamental. También votaron por remunicipalizar toda la cadena de suministro y distribución

del agua en las ciudades. Hasta ahora, Nápoles es la única gran ciudad italiana que ha respetado el resultado del referéndum. La empresa municipal del agua pasó de ser una asociación público-privada a ser completamente pública. Este ente, llamado Acqua Bene Comune (Agua Bien Común), apuesta por la gestión participativa, con un consejo de ciudadanos administrado por comités y asociaciones ecologistas. Ya han conseguido una factura del agua de las más bajas del país y la total prohibición de cortar el agua a los más desfavorecidos.

La bestia negra de las ciudades: la deuda ilegítima

Más recientemente libramos otra batalla contra lo que llamamos la “deuda ilegítima”. La mayoría de las ciudades italianas están endeudadas hasta el cuello con el gobierno nacional, con empresas privadas, fondos especulativos, etc.

Antes del pacto fiscal europeo, todas las ciudades se administraban y gobernaban mediante un sistema de deuda y crédito. Aunque era la única forma de garantizar los servicios, también conllevaba especulación privada y clientelismo. Después de 2010 y el cambio de enfoque radical impuesto por la UE, las ciudades se vieron obligadas a cambiar de política y cerrar los presupuestos de cada año con déficit cero. Tras el pacto fiscal europeo se modificó la constitución italiana y los déficits municipales son ahora imposibles. Los gobiernos locales deben elegir entre el recorte de los servicios sociales o la desobediencia.

Este brusco cambio obligó a muchas autoridades locales a recortar los servicios sociales, el bienestar y las políticas a favor de los más desfavorecidos. Nuestra situación era especialmente difícil porque heredamos una deuda de cientos de millones de los gobiernos anteriores. Y la deuda siguió creciendo a causa de las leyes financieras estatales y de productos financieros tóxicos. Por si fuera poco, Nápoles todavía está pagando dos préstamos astronómicos por el terremoto de 1980 y la emergencia de la basura de 2008. Estas deudas tienen intereses abusivos que han llevado a la ciudad al borde de la bancarrota.

Para abordar la cuestión de la deuda ilegítima decidimos crear un Comité Consultivo Permanente de Deuda Municipal. Esperamos que se unan otras ciudades que también quieran combatir este chantaje financiero. Nuestro objetivo es poner en marcha una campaña europea contra la deuda ilegítima y el pacto fiscal europeo, que imponen una austeridad desastrosa para las ciudades.

“Las ciudades están solas”

La lucha de las ciudades contra las multinacionales es una batalla interminable por la igualdad y la justicia. Las empresas y los intereses privados siempre están al acecho en nuestro trabajo administrativo. Es un desafío tanto en materia de contratación pública como de grandes proyectos de rehabilitación urbana, como

el de Ex Taverna Del Ferro, un famoso barrio postindustrial que se convirtió en el objetivo de la especulación de una empresa de cemento y de varias cadenas hoteleras. Por suerte, el ayuntamiento pudo intervenir y poner fin a los planes del gobierno para el vecindario. El plan de rehabilitación urbana fue revisado tras hablar con organizaciones comunitarias y ciudadanos. El ayuntamiento ha tenido que intervenir varias veces para neutralizar la especulación privada en otras partes de la ciudad.

El problema es que las ciudades están solas en su lucha. Los gobiernos nacionales han convertido a las autoridades locales en instituciones impotentes y sin autonomía financiera. Por ello las ciudades deben unir fuerzas a nivel europeo y luchar juntas si quieren ser efectivas. Es urgente que el Parlamento de la UE reconozca a las ciudades como autoridades locales y les permita administrar los programas financieros europeos para evitar la corrupción y la malversación de los fondos públicos.

Las luchas feministas en defensa de la vida en las ciudades

Quitar los servicios de cuidados de las manos corporativas

BLANCA BLAYAS

Los trabajos de cuidados esenciales para la vida de la ciudad, como los servicios de atención a las personas o la limpieza, están cada vez más monopolizados por grandes multinacionales que ofrecen salarios míseros y condiciones de trabajo muy precarias. Pero las trabajadoras, mujeres también discriminadas por ser migradas, racializadas, por su diversidad funcional o edad, están luchando por sus derechos.

El 5 de marzo de 2007, las trabajadoras de Clece de la ciudad de Girona —encargadas de la limpieza de hospitales públicos¹, centros escolares y otras dependencias municipales— iniciaban una huelga indefinida largamente recordada en la ciudad por el impacto que supuso y la solidaridad que despertó. Para entonces ya se revelaba una reivindicación de fondo: la (re) municipalización de los servicios. Esa huelga duró 37 días y logró en su momento algunas de sus reivindicaciones, como el compromiso de transformación de contratos temporales en indefinidos, y con ello el aumento la plantilla fija en los centros de trabajo.

[1] Concretamente, el hospital de Josep Trueta y el de Santa Caterina. En este artículo se utiliza el término (re)municipalización para referir tanto a casos de servicios que anteriormente han sido de gestión pública y que se busca vuelvan a serlo (remunicipalización) como a los que nunca fueron públicos y donde el objetivo es su municipalización.

Más de diez años después, las denuncias y movilizaciones de las trabajadoras de Clece siguen sucediéndose de manera continuada en todo el territorio del Estado español². Las mismas demandas por parte de las trabajadoras ante los mismos atropellos de la empresa. O peores.

Solo en los nueve meses que han transcurrido en 2019 se han hecho públicos diversos abusos por parte de la empresa. Uno de los ejemplos más recientes, en septiembre, ha sido la denuncia a Integra, subcontrata de Clece, por parte de varias personas trabajadoras del Palacio Real en la ciudad de Madrid. Denunciaban jornadas laborales por encima de lo que marcaban sus contratos —11 horas diarias por 545 euros al mes—, entre otras vulneraciones de derechos. Trabajadoras, además, con diversidad funcional, razón por la cual podían requerir condiciones adaptadas a su trabajo³.

Los que lucran con el cuidado: el caso de Clece

Si resides en el Estado español es prácticamente imposible que Clece no se cruce en algún momento de tu existencia para “cuidarte”. Es una empresa multiservicios que opera en el país desde 1992 —y en los últimos años en Reino Unido y Portugal—, filial del Grupo Actividades de Construcción y Servicios S.A. (ACS) y propiedad de Florentino Pérez, también presidente del club de fútbol Real Madrid. Está presente en el ámbito sociosanitario, hospitalario, educativo, hotelero, deportivo, aeroportuario, industrial y financiero. En concreto, vende servicios de cuidados, mantenimiento, limpieza, restauración, jardinería, logística interna y seguridad. ¿Dónde? En hospitales, escuelas, residencias, centros de acogida, servicios sociales, hoteles, aeropuertos, bancos, entre otros. Trabaja con diferentes sectores de la sociedad en contextos de exclusión, desde personas sin hogar hasta mujeres en situación de violencia machista. Incluso ofrece servicios de seguridad en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla⁴.

Clece sabe que en el corazón de lo que se mueve en una ciudad y de lo que sostiene la vida están los cuidados, y ha desarrollado una extensa red para “cubrir” esas necesidades. Lo integran en su eslogan: “una empresa de personas para personas”. Florentino Pérez hasta la definió como “una ONG (...), se dedica a dar satisfacción a la gente que lo necesita”⁵.

Lo cierto es que Clece gestiona la vida de las personas: progresivamente ha ido penetrando en todos los servicios relacionados con la reproducción social. Al

[2] Zaragoza, Valencia, Madrid, Córdoba, La Rioja, Las Palmas, Granada, La Coruña, Badalona, Viladecans, entre otras ciudades.

[3] https://elpais.com/ccaa/2019/09/26/madrid/1569526007_058174.html

[4] En Clece destaca una evolución del área de seguridad con un 38,7 por ciento más de empleados dedicados a esta actividad que en 2016. Sobre los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla ver: <https://www.naciodigital.cat/noticia/185011/lucratiu/negoci/florentino/perez/amb/centres/immigrants/ceuta/melilla>

[5] Comparecencia en la Comisión de Investigación del Proyecto Castor en el Parlamento de Catalunya, 17 de junio de 2019.

tratarse de servicios básicos acapara muchos contratos de las administraciones públicas (locales, regionales y estatales). Ello supuso alrededor de 1.200 millones de euros en 2018, el 80 por ciento del negocio de la empresa⁶. Cuando se presenta a los concursos hace propuestas económicas imbatibles, que esconden sueldos muy precarios para las trabajadoras que implementan los servicios. En los últimos años ha terminado desplazando a ONGs del ámbito social que solían cubrirlos⁷. Su estrategia apunta a llegar a todos los servicios públicos y asegurar su rentabilidad a costa de las arcas públicas. Al fin y al cabo, el lucro de Clece lo pagamos entre todas y todos con nuestros impuestos.

La “ONG” de Florentino Pérez es, sin duda, de lo más lucrati-

va. Y ha convertido los cuidados en una mercancía preciada. En 2018, Clece registró unas ventas totales de sus servicios por valor de 1.504 millones de euros que se tradujeron en importantes y crecientes beneficios en los últimos años. El personal de la empresa en ese año era de 74.411 empleados/as, 82 por ciento mujeres y 49 por ciento en la franja de edad de 45 a 60 años⁸. Es decir, una plantilla claramente feminizada y con edades cercanas a la jubilación, dedicadas especialmente a servicios de limpieza y servicios sociales —las actividades más intensivas en empleo— que representan un 77,6 por ciento del total del personal.

Clece presume de emplear a mujeres que han estado en situación de violencia machista, personas con diversidad funcional o de 50 años en adelante “por su dificultad de inserción”. Así es como las trabajadoras de estos colectivos, además

ACS/Clece

Ingresos: 36.700 millones de euros (2018)

Presidente: Florentino Pérez (consejero delegado y presidente)

Sede: Madrid, España.

Fundación: 1997

Sectores: construcción, infraestructuras, servicios.

Empleados: 195.461 (2018)

Datos clave:

* Especialista en construcción, infraestructuras y servicios, el Grupo ACS ha prosperado gracias a sus estrechos vínculos con políticos españoles locales y nacionales. Florentino Pérez ha sido clave en el fortalecimiento de estos vínculos, la mayoría de las veces desde su palco privado del estadio del Real Madrid.

* A través de su filial Clece, el Grupo ACS apuesta por la privatización de los servicios de mantenimiento, limpieza y sociosanitarios por parte de las autoridades locales y nacionales. La plantilla de Clece está compuesta principalmente por trabajadoras mujeres, a las que se discrimina por edad u origen, con salarios míseros y condiciones laborales precarias.

[6] El 80 por ciento del negocio proviene del sector público y el 20 por ciento del privado, según datos de la misma empresa: <http://memoria2018.clece.es/>

[7] Éste fue el caso del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) en Barcelona en 2016. La ONG Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD) —especializada en la atención a colectivos en situación de vulnerabilidad y que ofrecía estos servicios en la ciudad— perdió el concurso público frente a Clece y Valoriza, que forma parte de Sacyr Facilities, otra gran empresa multiservicios. https://www.ara.cat/societat/Florentino-Sacyr-latencio-domiciliaria-Barcelona_0_1561643866.html

[8] <http://memoria2018.clece.es/>

de que ya se encuentran en situación de exclusión en un contexto de capitalismo neoliberal, ven vulnerados aún más sus derechos por las políticas de abuso recurrentes. Porque de despidos, contratos precarios, sueldos de miseria, falta de personal y de medios, de eso trata Clece, como lo demuestra su extenso historial de denuncias por parte de sus trabajadoras.

Las mujeres que sostienen las ciudades, y que sostienen la vida

La mayoría de las que limpian, alimentan, cuidan y, por lo tanto, sostienen la vida en las ciudades europeas son mujeres empobrecidas, migradas y racializadas. Mujeres anónimas, venidas de lugares lejanos, países periféricos, y que trabajan en el ámbito de los cuidados a cambio de sueldos bajos, que dejan a su vez a mujeres todavía más empobrecidas realizando estos trabajos en sus países de origen. Es la denominada “cadena global de cuidados”, una de las lógicas de la división sexual e internacional del trabajo que sustenta el capitalismo.

Esto se hace evidente en el trabajo doméstico y de cuidados en hogares y establecimientos particulares, muy feminizado en el caso del Estado español, y donde más del 42 por ciento del total de afiliadas al Sistema Especial de Empleados de Hogar son mujeres de nacionalidad extranjera. El salario que perciben las trabajadoras de este sector es un 59 por ciento inferior al salario medio bruto total y el importe medio de las pensiones es también el más bajo de todo el Sistema de la Seguridad Social⁹.

Esta realidad también se hace extensiva a los trabajos precarizados en el ámbito de todo lo relacionado con servicios a las personas. Es así que empresas como Clece, pero también muchas otras grandes corporaciones del ramo — Eulen, Ferrovial Servicios, Acciona, Sacyr Facilities, OHL Ingesan, Ilunion o FCC— obtienen importantes beneficios económicos a costa de precarias y abusivas condiciones laborales. Pertenecen a la esfera internacional y reproducen sus lógicas de acumulación de capital a costa de los derechos laborales y de la calidad de los servicios que realizan en los países donde operan.

Y nos preguntamos entonces ¿cuál es la base que sostiene este contexto? La actual gestión política prioriza el pago de la deuda financiera¹⁰, lo que supone graves medidas de austeridad y una consecuente desinversión en ámbitos tan importantes como la salud, la educación o los servicios sociales. Esto genera fuertes impactos en la población y se traduce en la dedicación de miles de horas de trabajo de cuidados de mujeres que hacen de “colchón” de los recortes sociales. El trabajo de cuidados

[9] Datos de un reciente informe del sindicato UGT: <http://www.ugt.es/sites/default/files/informe-trabajo-domestico-y-de-cuidados-para-empleadores-particulares-ugt.pdf>

[10] En el caso español, la base legal que la hace efectiva se hizo a través de la reforma del artículo 135 de la Constitución en 2011, aprobada por el PP y el PSOE, y de una de las Leyes Montoro –Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)–, en 2013.



ELA SINDIKATUA, CC BY-SA 2.0

se externaliza y mercantiliza —para quien lo puede pagar—, creando un modelo de negocio con el que lucrar; o se internaliza —para quien no lo puede costear—, aumentando la presión de horas de trabajo en el ámbito de la reproducción social. En síntesis, existe una acumulación por desposesión¹¹ del tiempo y trabajo de muchas mujeres que se viene agravando en los últimos años, y que ha provocado una importante crisis de cuidados en la etapa actual de capitalismo financierizado¹².

Este conflicto capital vs. vida no es reciente, sino intrínseco al sistema económico y social, ha desembocado en los últimos años en movilizaciones de las trabajadoras en el sector de cuidados por el cambio en sus condiciones laborales. Las luchas se canalizan a través de organizaciones de mujeres en sus lugares de trabajo, asociaciones y sindicatos. Es el caso de “Las Kellys”¹³, una asociación a nivel del Estado español conformada en el 2016 por camareras de piso de hoteles y apartamentos turísticos que tiene el objetivo de defender sus derechos laborales frente a la situación de abuso en este sector. Al visibilizar su realidad y su lucha han conseguido recibir un importante apoyo por parte de la sociedad.

Existen experiencias de huelgas laborales históricas en ámbitos de trabajo de cuidados, lideradas y participadas casi exclusivamente por mujeres, con las que se

[11] Concepto acuñado por el geógrafo y teórico David Harvey, que desarrolla como la práctica depredadora de la acumulación originaria y, por tanto, de concentración de capital, se mantiene, actualiza e, incluso, aumenta, en contextos de crisis de sobreacumulación despojando de esta manera a grandes sectores de la población.

[12] Más información en: https://odg.cat/wp-content/uploads/2017/09/odg_deute_de_cures_esp_def_0.pdf

[13] El nombre “Las Kellys” proviene de un popular juego de palabras: “la Kelly, la que limpia”; en su caso, limpieza de hoteles.



GARABATA, CC BY-SA

han conseguido importantes logros. Es el caso de las trabajadoras de residencias de Bizkaia. Estas mujeres hicieron huelga durante 370 días, entre 2016 y 2017, y lograron con su lucha importantes mejoras en su jornada y salario, entre otros¹⁴.

Las huelgas feministas en las ciudades por la defensa de la vida

Donde se reproduce la vida, y frente a las corporaciones y sus beneficios, se libran las batallas. Así se manifiesta también en las que conocemos como huelgas feministas de los últimos años: desde que en 1975 las mujeres de Islandia protagonizaron una huelga, que secundó hasta el 90 por ciento, y consiguieron paralizar el país por completo. En lugar de ir a trabajar fuera de la casa o dedicarse a las tareas domésticas, las mujeres salieron a las calles para manifestarse. La convocatoria tenía el objetivo de demostrar que, sin el trabajo de las mujeres, productivo y reproductivo, la sociedad no podía funcionar.

En el Estado español, la idea de una huelga general feminista se recuperó en 2014 y 2015, la “huelga de todas”, y convocó a miles de mujeres a salir a las calles en el territorio catalán. Los años posteriores se realizaron paros cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pero no fue hasta el impulso de las huelgas feministas en Argentina y del movimiento “Ni Una Menos”, con la consigna “Si

[14] <https://www.ela.eus/es/gizalan/noticias/ela-logra-un-acuerdo-historico-que-pone-fin-la-huelga-de-residencias-la-mas-larga-de-la-historia-de-bizkaia>

nuestra vida no vale, produzcan sin nosotras” que las últimas convocatorias, en 2018 y 2019, se han internacionalizado y han generado una repercusión masiva.

Las huelgas feministas pretenden visibilizar que las mujeres sostienen el mundo no sólo con el trabajo doméstico no remunerado que mayoritariamente realizan ellas en los hogares, sino también con los trabajos asalariados precarizados que mantienen en pie oficinas, fábricas, residencias, escuelas, hospitales... ciudades enteras. Han sido convocadas por el movimiento feminista a nivel de la producción, la reproducción y el consumo y de las estudiantes. Se realizaron piquetes, acciones descentralizadas y otras movilizaciones en más de 170 países en la huelga del 8 de marzo del 2019. Esto supuso un jaque al sector corporativo, especialmente afectado por el importante número de mujeres en la plantilla de las empresas que dejó de producir, y por la huelga de consumo que denunciaba los intereses de las multinacionales y las condiciones precarias detrás de los productos que se compran. Siguen existiendo muchos retos en estas movilizaciones, como la participación de las mujeres más precarizadas —muchas de ellas migrantes y/o racializadas— que no han podido secundarlas o han cuestionado la concreción de las propuestas por no tener en cuenta la diversidad de realidades. Muchas otras mujeres han recibido represalias por haberla realizado, en sus puestos de trabajo¹⁵ o en sus casas.

Las luchas en las ciudades se libran donde se da la vida... y las alternativas también

Frente a un modelo que vende los cuidados al mejor postor en forma de mercancía, algunas propuestas desde las ciudades para poner la vida en el centro pasan por las (re)municipalizaciones y colaboraciones público-comunitarias en las que participe la organización autónoma de mujeres. Las reivindicaciones de las (re)municipalizaciones y la lucha por lo público y lo común¹⁶ se libra donde se da la vida: en las luchas por la vivienda, por el agua y por la energía, pero también por otros servicios muy vinculados a los cuidados que sostienen las ciudades.

Ya existen precedentes de municipios que se han posicionado, para empezar, en contra de los abusos de gestiones como la de Clece. En la ciudad de Córdoba se querelló contra la empresa que pretendía dejar provisionalmente sin asistencia de atención domiciliaria al municipio y a la plantilla en situación de desempleo. Ello después de que el Ayuntamiento la presionara ante las demandas de las trabajadoras del servicio¹⁷.

[15] <https://www.elsaltodiario.com/huelga-feminista/eulen-despide-a-una-limpiadora-por-secundar-la-huelga-feminista-del-8m>

[16] Nos referimos a los comunes, bienes y servicios de acceso universal y gestión democrática, cuyo uso se sostiene en el tiempo y es de titularidad colectiva. Se diferencia de lo público, que centra en el ámbito de los gobiernos la gestión y la decisión de quien tiene acceso a los bienes.

[17] <https://cordopolis.es/2018/10/26/el-ayuntamiento-le-gana-un-pleito-a-clece-y-evita-pagarle-129-millones-de-euros/>
<https://amap.cat/ca/barcelona-impulsa-una-plataforma-per-facilitar-els-processos-de-remunicipalitzacio/>

En Catalunya existe la amenaza de la inminente aprobación de una ley de externalización de los servicios a las personas —salud, educación, ámbito social—, la denominada Ley Aragonés, precedida de la Directiva 24/2014 de la Unión Europea (UE) sobre contratación pública. La norma se centra en regular y estructurar el modelo de externalización de estos servicios públicos —incluyendo algunos que nunca fueron privatizados— en lugar de incluir opciones público-comunitarias. En síntesis, esta normativa supondría abrir aún más la puerta a futuras privatizaciones y legitimar las actuales en ámbitos que cubren derechos básicos y fundamentales. En este momento tiene lugar una lucha para detener la aprobación de esta ley por parte de movimientos sociales y sindicatos alternativos, organizados en la Plataforma Aturem la Llei Aragonès.

Modelos más esperanzadores en defensa de lo público y de lo común son las (re)municipalizaciones y la gestión directa de los servicios. Estas opciones han repercutido en una importante mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras, como lo son el aumento de sus sueldos y una mayor estabilidad y beneficios en sus contratos. Además, representan una mayor calidad y calidez de los servicios y recursos ofrecidos a las personas que los reciben. Es importante remarcar que las (re)municipalizaciones han sido impulsadas por las mismas trabajadoras de los servicios a través de su organización y movilización.

En este ámbito, en los últimos cinco años se han (re)municipalizado en Barcelona tres guarderías, la atención sanitaria a domicilio en fin de semana y festivos, los puntos de información y atención a las mujeres (PIADs) y el servicio de atención, recuperación y acogida de mujeres víctimas de violencia. Otros municipios han seguido el mismo camino con el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD): Pamplona, Chiclana, Jérez de la Frontera, Atarfe y Albolote¹⁸. De la misma manera, en los últimos años también se (re)municipalizaron servicios relacionados con la limpieza, como la viaria y la de edificios públicos en varios municipios¹⁹.

Las (re)municipalizaciones son opciones compatibles con una gestión ciudadana y cooperativas de la economía social y solidaria (a través de colaboraciones público-comunitarias-cooperativas). Éstas son opciones que se sustentan en el compromiso colectivo entre instituciones y ciudadanía; colaboraciones que integran autonomía de las comunidades y garantía de la función pública de los recursos bajo criterios de acceso, sostenibilidad, arraigo territorial y gobernanza democrática de los servicios públicos y los comunes²⁰. Por tanto, se contraponen al modelo de las concesiones público-privadas que representan básicamente la lógica privatizadora²¹. Un ejemplo

[18] <https://www.noticiasdenavarra.com/2016/12/21/vecinos/pamplona/el-ayuntamiento-recupera-todo-el-servicio-de-atencion-a-domicilio-y-contrata-166-empleadas>

[19] <https://www.elsaltodiario.com/remunicipalizacion/casi-cien-servicios-remunicipalizados-66-municipios-2011-2019-agua-publica>

[20] <https://www.elcritic.cat/opinio/laia-forne/el-dificil-equilibri-sumar-autonomia-i-funcio-publica-23907>

[21] Las concesiones público-privadas (CPPs) implican una amenaza para las finanzas públicas, la democracia y los derechos fundamentales. Más información en: <https://odg.cat/es/colaboraciones-concesiones-publico-privadas-cpp/>

en el ámbito de cuidados para cubrir servicios públicos es la propuesta que ofrece la cooperativa de trabajo de Servicio de Atención Domiciliaria, SAD Mujeres Pa'lante, creada en Barcelona por la asociación de mujeres del mismo nombre e integrada en gran parte por mujeres migradas y racializadas²².

El logro de estas opciones alternativas a la gestión privada en manos de empresas subcontratadas y las prácticas de abuso asociadas se ha conseguido, sin duda, gracias a la lucha de las trabajadoras por sueldos dignos y por una atención de calidad. Y así, ante la utilización de los cuidados y de las ciudades como una mercancía por parte del capital, se posicionan propuestas desde la economía social y feminista para la defensa de vidas que sean dignas de ser vividas.

[22] La cooperativa también realiza servicios de catering, tiene un taller de costura y realiza distintas formaciones —en violencia de género, mediación intercultural y economía feminista—, entre otras actividades.

Los ciudadanos de Berlín en pie de guerra por el derecho a la vivienda

RACHEL KNAEBEL

Enfrentados a alquileres astronómicos y a poderosos imperios inmobiliarios, los berlineses no se rinden. Han obligado al gobierno de la ciudad a dar solución al problema congelando los precios de alquileres y protegiendo los apartamentos de los especuladores. Ya está en marcha una campaña (con referéndum incluido) que pretende llegar más lejos todavía: la desprivatización de todas las viviendas de Berlín que actualmente son propiedad de multinacionales.

El 15 de julio de 2019, los inquilinos de 670 apartamentos de Karl-Marx-Allee, una gran avenida de Berlín Este, respiraron aliviados. Después de varios meses de pasar nervios, el alcalde de Berlín anunciaba que el nuevo propietario de su vivienda no sería un gigante inmobiliario como estaba previsto, sino el estado de Berlín. A principios de noviembre de 2018, los residentes de un complejo cercano a la Alexanderplatz conocieron la noticia de que sus apartamentos se convertirían pronto en propiedad del gigante de los bienes inmuebles Deutsche Wohnen, que ya posee más de 100.000 propiedades de alquiler en la capital alemana. Se apresuraron a tomar medidas, formaron un colectivo, colgaron pancartas de protesta en sus ventanas y exigieron una solución al gobierno de la ciudad. La empresa tiene una reputación pésima en Berlín: los inquilinos saben muy bien cómo se las gasta. Tan pronto como se hace con las propiedades el alquiler se dispara y muchos de los inquilinos, sobre todo los más desfavorecidos, se ven obligados a mudarse de la ciudad.

Antes de su privatización a principios de los 90, los apartamentos de Karl-Marx-Allee pertenecían a una empresa de vivienda pública. Con el objetivo de “sanear” las finanzas públicas, Alemania no dudó en vender las propiedades municipales a grandes compañías inmobiliarias y grupos de inversión. Entre 1990 y 2005,



UWE HIRSCH, CC BY-NC-SA

más de 200.000 pisos del ayuntamiento de Berlín fueron vendidos a empresas privadas. Y en 2004, la capital alemana privatizó su principal empresa municipal de la vivienda, GSW. Primero fue vendida al grupo de inversión estadounidense Cerberus, antes de terminar en manos de Deutsche Wohnen en 2013. “El único objetivo de las empresas capitalistas que compran estos apartamentos es ganar dinero y repartirlo entre sus accionistas”, asegura Katalin Gennburg, diputada del partido de izquierdas Die Linke en el parlamento de Berlín¹.

La mayoría de la gente quiere alquilar en Berlín. Más del 80 por ciento de los apartamentos ya están alquilados, una quinta parte de ellos a empresas privadas que ven la vivienda como un mercado más con el que lucrar. Sin embargo, ante la expansión de la población berlinesa (sobre todo desde 2010), la sobrecarga del mercado de alquiler y el aumento de los alquileres, cada vez más gente opina que la privatización es mala idea. Entre 2011 y 2016, el precio de los nuevos contratos de arrendamiento aumentó la desproporcionada cifra de ¡un 75%! Y aunque la ley alemana impone límites al aumento de los precios, las grandes compañías inmobiliarias recurren a la excusa de las “renovaciones” para subirlo un 30 o incluso un 50%. “La gente ya no puede más”, se lamenta Katalin Gennburg. Por ello proliferan en toda la ciudad iniciativas lideradas por inquilinos (actualmente rondan el centenar).

Campaña para desprivatizar la vivienda

La nueva campaña de la vivienda comenzó en 2012 en un bloque de pisos que antes eran del ayuntamiento y fueron privatizados, esta vez en el barrio de Kreuzberg. Los inquilinos, amenazados por aumentos astronómicos que les obligarían a abandonar sus hogares, decidieron movilizarse: ocuparon el barrio, convocaron

[1] Die Linke forma parte de la coalición de izquierdas que gobierna en Berlín desde 2016, junto con los socialdemócratas y los verdes)

manifestaciones y se reunieron con concejales. En 2017, el ayuntamiento compró una parte de estos apartamentos por 56 millones de euros, y ahora un consejo de inquilinos ayuda a administrar las propiedades junto con la empresa municipal de vivienda. El contraataque también valió la pena en Karl-Marx-Allee. “Fuimos nosotros los que aportamos la solución, no el senado de la ciudad”, señala Norbert Bogedein, residente de Karl-Marx-Allee desde 1996. Y continúa: “Así es como debería funcionar la política, de abajo arriba. Queremos que el ciudadano de a pie pueda vivir en el centro de la ciudad y pagar alquileres razonables”.

Los residentes no están de brazos cruzados: a finales de 2018, llegaron a pedir un referéndum para expropiar a Deutsche Wohnen y a otras grandes inmobiliarias que poseen más de 3.000 propiedades en alquiler en Berlín. Para ello sería necesario que el ayuntamiento volviera a comprar 200.000 viviendas de su antigua propiedad, pero a un precio inferior al valor de mercado, y después estableciera un sistema democrático de gestión. Hay muchas posibilidades de que la iniciativa salga adelante. “Hace años, la idea de la expropiación habría parecido una locura. Pero ahora nuestra iniciativa ha calado mucho en la gente”, dice Rouzbeh Taheri, uno de sus fundadores. Acérrimo activista de la vivienda desde hace años, en 2015 se convirtió en el portavoz de una campaña de residentes por un referéndum ciudadano para proteger la vivienda social.

Al final, no hubo necesidad del referéndum. El Senado de la ciudad admitió a trámite su propuesta. La iniciativa de expropiar a las compañías inmobiliarias ya ha recogido 77.000 firmas y fueron presentadas al Senado de la ciudad el pasado junio, quien deberá estudiar la propuesta y podrá estimarla o negociar una alternativa. Si las partes no llegan a un acuerdo la campaña deberá reunir en cuatro meses las 180.000 firmas necesarias para celebrar un referéndum. Y si lo logran, deberá convocarse a elecciones cuyo resultado será vinculante (siempre que participe al menos el 25 por ciento de los censados en las listas electorales de Berlín).

Los buitres del alquiler en Berlín

“Deutsche Wohnen no tiene ninguna simpatía en Berlín”, afirma Rouzbeh Taheri mientras asegura que “El motivo es que utiliza cualquier excusa para subir el alquiler y que ha invertido muy poco en obras de mejora” y debido a ello “la calefacción suele estropearse en pleno invierno y los ascensores dejan de funcionar cada dos por tres”. Además, Deutsche Wohnen suele recurrir a varias maniobras legales para burlar el sistema de control de alquileres de Berlín. “La gente se acuerda de cómo era antes de que se privatizaran sus apartamentos y cómo es ahora”, añade el activista. En los últimos diez años las empresas privadas se han concentrado en la capital alemana. En 2019, Deutsche Wohnen poseía 115.000 de las propiedades en alquiler de Berlín en comparación con las 25.000 que tenía en 2012. En 2017, la compañía creada por Deutsche Bank en 1998 repartió entre sus accionistas más de 260 millones de euros, 80 millones más que el año anterior. En siete años el valor de sus

acciones se ha cuadruplicado. Sin embargo, no es la única que está en el punto de mira de la campaña de vivienda. Hay al menos otras seis involucradas, y todas poseen más de 6.000 propiedades en alquiler en Berlín: Vonovia, ADO Properties, Covivio, Akelius, TAG Immobilien, Grand City Properties¹²... La mayoría de ellas no tienen más de veinte años de existencia, todas cotizan en Bolsa, su valor se ha disparado a un ritmo mayor que los alquileres de Berlín en los últimos años, y muchas son propiedad de multimillonarios.

Vonovia, que tras varias fusiones fue fundada en 2015, en la oleada de privatizaciones posteriores a 1990, se ha convertido en una de las inmobiliarias más importantes de Alemania, con más de 40.000 propiedades en alquiler en toda la capital. Grand City Properties, empresa constituida en Luxemburgo y propiedad del multimillonario Yakir Gabay (con un patrimonio neto de más de tres mil millones de dólares según Forbes), posee 84.000 propiedades de alquiler en todo el país, de las cuales 7.500 están en Berlín. Covivio, que tiene más de 15.000 propiedades de alquiler en Berlín, está vinculada al multimillonario italiano Leonardo del Vecchio (con un patrimonio neto de más de 22 mil millones de dólares según Forbes, a través de su empresa familiar Delfin, que tiene una participación del 25 por ciento en Covivio (varias filiales de los bancos franceses Crédit Agricole Assurances y Crédit Mutuel Assurances también tienen acciones en Covivio). BlackRock tiene acciones en Deutsche Wohnen (su participación asciende al 10 por ciento de la compañía), en Vonovia y en TAG Immobilien (más de 9.900 propiedades de alquiler en Berlín).

Otro peso pesado es Akelius, una empresa activa en Berlín desde 2006 y que actualmente posee más de 13.000 propiedades de alquiler en la capital alemana. A través de empresas con sede en Chipre el grupo está vinculado a la Fundación

Deutsche Wohnen

Ingresos: 1.100 millones de euros (2018)

Presidente: Michael Zahn (consejero delegado)

Accionistas principales: BlackRock, MFS y el Fondo Soberano Noruego

Sede: Berlín, Alemania

Fundación: 1998

Sector: inmobiliario

Empleados: 1280 (2018)

Datos clave:

* Deutsche Wohnen fue fundada por Deutsche Bank para aprovechar la privatización de varias empresas de alquiler de vivienda en Alemania. Hoy, es propietaria de 165.500 viviendas y 2.700 negocios comerciales.

* Tras absorber a GSW, la mayor empresa de alquiler de viviendas privatizadas de Berlín, Deutsche Wohnen ha denunciado en múltiples ocasiones al gobierno de la ciudad por intentar proteger el derecho a la vivienda. Por ello y por su pésima reputación como arrendador, hoy es el principal objetivo de la campaña para remunicipalizar la vivienda en Berlín.

[2] Es de notar también la presencia de Blackstone, el fondo buitre que ya metió garra al sector inmobiliario español. Blackstone es dueño de unas 1250 viviendas en Berlín. Véase Christoph Trautvetter, Sophie Bonczyk, Profitmaximierer oder Verantwortungsvolle Vermieter? Grosse Immobilienunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin im Profil, Studie, Rosa-Luxemburg-Stiftung, 2019.

Akelius, con sede en Bahamas, un paraíso fiscal con peor reputación que Luxemburgo³. De todas, Akelius es la que cobra los alquileres más altos. Tanto es así que sus inquilinos crearon un colectivo en 2019 y redactaron un informe de 150 páginas sobre la empresa y sus dudosas prácticas en Berlín.⁴

Activistas contra multinacionales: David contra Goliat

Estas empresas son capaces de ocultar sus operaciones durante muchos años. Hasta que los inquilinos se movilizan no salen a la luz sus identidades, los accionistas y sus modus operandi. De hecho, tuvo que ser un grupo de activistas que se reunía en el Syndikat, un bar de barrio con más de treinta años de existencia, quien dio a conocer el problema. Después de investigar un poco, descubrieron que el gigante inmobiliario británico Pears había extendido sus tentáculos en Berlín y de qué manera.

Tras recibir un aviso de desahucio en julio de 2018, los dueños del Syndikat trataron de negociar un nuevo contrato de arrendamiento con la empresa que hacía de intermediaria entre ellos y la multinacional propietaria del local desde 2014. Como los intentos resultaron infructuosos, los gerentes del bar comenzaron a investigar a la empresa que había comprado el local y descubrieron que se trataba de Properties SARL, con sede en Luxemburgo. También destaparon una docena de compañías con nombres similares, con la sede en el mismo país y todas inmobiliarias propietarias de edificios en todo Berlín. Tirando del hilo llegaron a Pears, el imperio inmobiliario británico propiedad de una familia de multimillonarios: habían creado un puñado de empresas ficticias para comprar miles de propiedades de alquiler en Berlín.

La prensa tomó el relevo de las investigaciones y descubrió que Pears capitalizaba sus inmobiliarias registrándolas no solo en Luxemburgo, sino también en Chipre y en las Islas Vírgenes Británicas, reconocidos paraísos fiscales. Según el sitio Pears Global de 2017, parece que Pears poseía más de 6.000 propiedades de alquiler en la capital alemana. Sin embargo, antes de que el bar descubriera el pastel, nadie en el Senado de Berlín tenía la más remota idea de que este imperio inmobiliario estaba operando en su ciudad.

Proteger a las ciudades de los especuladores

Pero ¿qué puede hacer una ciudad ante estos buitres inmobiliarios cuyo único interés es lucrar? Berlín ha dado un paso al frente en los últimos años y ha comenzado a reconstruir complejos de viviendas sociales. “Pero no basta con construirlos; también deben protegerse de la especulación”, declara la concejala de Die Linke, Katalin Gennburg. Y parece que este es el objetivo de la capital alemana.

[3] Informe anual 2018 de Akelius Residential Property AB, pág. 138.

[4] Véanse también las investigaciones del periódico alemán Tagespiegel y de la red de investigación Correctiv.

En 2017, creó derechos preventivos sobre la ciudad y sus barrios para evitar que las empresas compren las viviendas sociales de los inquilinos. A raíz de la decisión de nacionalizar parte de Karl-Marx-Allee, el alcalde socialdemócrata Michael Müller pretendía que el ayuntamiento recomprara unas 60.000 antiguas viviendas sociales, pero a precios de mercado, hoy son mucho más altos que hace quince años cuando se privatizaron. “Si compramos propiedades a Deutsche Wohnen, la empresa ganará aún más dinero porque las venderá a un precio mucho más alto de lo que las compró. Y también existe el riesgo de que aproveche este dinero para seguir haciendo lo mismo en otras ciudades alemanas”, dice Katalin Gennburg. O incluso en otros países, como hizo la inmobiliaria líder en Alemania, Vonovia, que ya tiene en mente un nuevo objetivo: Francia.

Por ello que la iniciativa ciudadana de “expropiar a Deutsche Wohnen and co.” es tan importante. Esta campaña se basa en dos artículos de la Ley Básica Alemana. El artículo 14 establece que: “la expropiación solo será permisible cuando sea en aras del bien público”, mientras que el artículo 15 dispone que: “a efectos de la nacionalización, la tierra, los recursos naturales y los medios de producción podrán pasar a propiedad pública o a empresas públicas mediante una ley que determinará la naturaleza y el alcance de la compensación en aras del bien común”.

“El artículo 15 se aprobó poco después de la Segunda Guerra Mundial cuando la nacionalización todavía estaba en la agenda”, dice Rouzbeh Taheri, pero nunca se ha aplicado en Alemania. Es similar a la ley francesa de 1945 que establece la requisa de propiedades, pero que casi nunca se ha llevado a cabo tampoco. “El artículo 15 supone más que un simple cambio de titularidad. Creemos que la expropiación de las grandes inmobiliarias debe ir acompañada de la participación de los inquilinos y del Senado de Berlín”, añade el activista.

Según los responsables de esta iniciativa, a la ciudad le costaría entre 8.000 y 14.000 millones de euros volver a comprar las propiedades y nacionalizarlas. Según Rouzbeh Taheri, “Parte de esta cantidad podría abonarse mediante préstamos que se saldarían con los alquileres de las propiedades renacionalizadas. Las empresas municipales de la vivienda de Berlín gozan de muy buena salud financiera”.

Aunque la iniciativa no llegue al referéndum, ha tenido un impacto notable en las políticas de la ciudad y se está debatiendo. En junio de 2019, Berlín anunció que congelaría los alquileres durante cinco años. Una vez votado, la congelación de los alquileres tendrá una fecha retroactiva (18 de junio), para evitar el aumento de los alquileres mientras se ratifica la ley. El actual gobierno de izquierdas también quiere evitar que las personas con menos recursos sean relegadas a las afueras de Berlín. Rouzbeh Taheri explica que “Berlín es una ciudad con gran diversidad social: un albañil puede tener de vecino a un profesor universitario en la zona centro. Esta diversidad sigue viva y con buena salud, pero está amenazada. Por eso seguimos luchando”.

Apagar el oligopolio eléctrico en el Estado español

Tres propuestas para dismantelar el poder corporativo de las grandes eléctricas españolas

ALFONS PÉREZ

En el Estado español, como en otros países, el sector eléctrico sigue dominado por un puñado de grandes empresas lo suficientemente poderosas como para imponer sus intereses y obstaculizar la transición energética. Los movimientos contra la pobreza energética y las cooperativas verdes muestran un camino hacia una mayor democracia energética, pero también se necesita un tercer pilar: la remunicipalización de las redes eléctricas.

El Estado español es un ejemplo paradigmático de cómo las empresas privadas pueden constituirse en un auténtico cartel y controlar un sector estratégico como el de la energía eléctrica, mientras perpetúan un modelo fósil y nuclear y aseguran beneficios millonarios a través de unas facturas eléctricas abusivas. Disputar la hegemonía al oligopolio eléctrico (Endesa, Naturgy —antes Gas Natural Fenosa—, Hidrocarburos, Iberdrola y Viesgo) en el Estado es palabra mayúscula, pero diferentes propuestas desde la sociedad civil empiezan a ganar terreno y cuestionan su omnipresente poder. De ahí que el presente artículo pretenda explicar cómo se entrelazan las propuestas de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), la Xarxa per la sobirania energètica (Xse) y las cooperativas eléctricas verdes, en términos de construcción de contrapoder en el sector eléctrico del Estado español.

Quizás, para empezar, hace falta aclarar que tiene de particular el poder eléctrico corporativo en el Estado español respecto a otros países europeos ¿Es mayor el poder que tienen las empresas privadas españolas que las alemanas o las francesas? Ciertamente, sí. Y es importante entender que la situación actual viene de un proceso histórico en el cual las empresas privadas siempre han tenido un rol central forjado en los inicios de la electrificación.

A pesar de que los años treinta del siglo pasado habían abrieron paso en toda Europa a tesis favorables a la nacionalización del sector eléctrico, especialmente con el interés de ejecutar grandes obras públicas que pudieran reactivar la economía y generar trabajo después del

crack del 29, en el Estado español la iniciativa del sector eléctrico fue principalmente privada. La creación de la Empresa Nacional de Electricidad, S.A. (ENDESA), en 1944, y de la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorza (ENHER), en 1949, fueron las únicas herramientas del régimen franquista para mantener cierto control.

Sin embargo, en los años ochenta empezaron las privatizaciones y desaparecieron estas grandes empresas públicas eléctricas. Se podría decir, entonces, que el oligopolio eléctrico se forja en dos dictaduras: se crea y conforma durante la dictadura nacional católica y se consolida e internacionaliza durante la dictadura del capital. Esto, sin duda, imprime carácter. Su control cuasi centenario le ha permitido no solamente influir, sino coescribir leyes del sector, ignorar leyes autonómicas contra la pobreza energética, contratar a políticos de primera línea, manipular el mercado, presionar a las empresas subcontratadas y un largo etcétera de prácticas fraudulentas.

Por tanto, hay que tomar consciencia de que cualquier tipo de propuesta de transformación del sector que no quiera quedarse en los márgenes se va a topar con la “iglesia”: el oligopolio eléctrico. Y enfrentar el poder corporativo es verdaderamente complicado.

Endesa

Ingresos: 20.200 millones de euros (2018)

Presidente: Andrea Brentan (consejero delegado)

Sede: Madrid, España.

Fundación: 1944

Sector: Energía

Empleados: 9.706 (2018)

Datos clave:

- * Empresa pública privatizada en 1988 y actual propiedad de la multinacional italiana Enel. Tiene una posición dominante en el sector eléctrico de España y Portugal, y también es muy activa en América del Sur. Posee varias centrales nucleares y de carbón que la convierten en el mayor emisor de gases de efecto invernadero de España.
- * Como otras grandes empresas del sector, acostumbra a fichar a antiguos líderes políticos, como el ex presidente conservador José María Aznar o la ex vicepresidenta socialista Elena Salgado.
- * Se ha opuesto vehementemente a los esfuerzos de las autoridades públicas locales para combatir la pobreza energética y prohibir los cortes del servicio.

Sin embargo, en los últimos años han surgido experiencias muy resaltables que van horadando su fortificado poder. Quizás una de las más destacadas por su resultado es la aprobación por unanimidad de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética en el Parlament de Catalunya. Este pequeño, asombroso y celebrado milagro surgió del impulso de una iniciativa legislativa popular por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE). Ambas son consecuencia directa de los estragos de la crisis económica y han conseguido organizar personas afectadas por los créditos hipotecarios y por las facturas de servicios básicos, en un momento de incremento vertiginoso del desempleo y de caída de los ingresos de las familias.

El componente de pobreza energética de la Ley 24/2015 contemplaba un principio muy sencillo: el principio de precaución. Las empresas eléctricas no podían cortar el suministro a sus clientes sin antes comprobar su situación económica en servicios sociales, una especie de presunción de inocencia de los impagos: “la gente no paga porque no puede pagar. Si no es así, demuéstalo”. Cabe decir que en ese momento el azote de la crisis económico-financiera de 2008 disparó las cifras de pobreza energética en el Estado tanto por el incremento exponencial del desempleo —con un pico del 27 por ciento en 2013 y cuasi un 60 por ciento para las jóvenes— como por el incremento desaforado del precio de la energía eléctrica que la situaba entre las energías eléctricas más caras de Europa.

La ley 24/2015 ha conseguido frenar los cortes de servicios básicos y ha sido el instrumento perfecto para poner en evidencia las prácticas corporativas de las empresas. Su reacción inicial fue ignorarla —por ser ésta autonómica—, luego cumplirla parcialmente y, en estos momentos, amenazar con cartas a los ayuntamientos presionándolos para compartir el pago de la deuda acumulada o en su defecto cortar el suministro de las personas que no hayan pagado.

Este frente de pugna directa y de tutela de derechos básicos se complementa con las propuestas para crear alternativas que desplacen a las empresas del oligopolio de la centralidad en el sistema eléctrico. Claramente, las cooperativas verdes son la parte más visible de esas alternativas.

Paradójicamente, la mayoría de cooperativas verdes surgen gracias a la liberalización del sector eléctrico y la división de éste en cuatro actividades básicas: comercialización, distribución, transporte y generación. Aunque algunas de ellas tienen proyectos de generación, su trabajo principal se centra en la comercialización, una actividad exclusivamente de mercado: compran energía en el mercado y la venden a sus clientes. De hecho, en 2011 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia registraba poco más de 100 comercializadoras y en septiembre de 2019 la cifra llegaba a las 558 en el Estado. Sin embargo, ello no es garantía de nada. Lo destacable de las cooperativas verdes para el tema que nos ocupa es la



NACHO, CC BY-NC-ND

cantidad de personas que, “energéticamente hablando”, se han alfabetizado bajo ese paraguas y participan activamente en la toma de decisiones, la dirección y el rumbo de las cooperativas.

Ese nuevo grupo de militantes por y para la transición energética conocen de buena mano las artimañas corporativas, las critican, las denuncian y piden a la población que abandone el oligopolio y se pase a las cooperativas. Este “departamento comercial voluntario”, que sería la envidia de cualquier Business School, ha conseguido multiplicar el número de personas socias de manera fulgurante. Som Energia, la cooperativa más exitosa del Estado en número de personas socias y contratos, tenía 12.000 en 2013 y 60.000 en septiembre de 2019 y, en consecuencia, las personas trabajadoras han pasado de 12 a 73 en estos años. Además de esta iniciativa, actualmente existen más de 10 proyectos con una filosofía parecida entre las que se encuentran Noxa Enerxía, LaCorriente, Megara Energia, GoiEner, La Solar, AstuEnerxía y Energética.

Es importante destacar de estas experiencias que el número de personas que experimentan y ejercen la democracia energética aumenta, y ese es el valor político más tangible de la actividad de las cooperativas: muchísimas personas interesadas en transformar el mundo de la energía desde abajo. En el caso de Som Energia, además, los valores de la cooperativa han ido más allá del sector eléctrico y se han convertido en una “marca” que ha contagiado a otros proyectos. Por ejemplo, Som Mobilitat, una cooperativa dedicada a la movilidad eléctrica tiene un sistema de participación y gobierno muy parecido al de Som Energia; Som Connexió actúa en el mundo de las telecomunicaciones, y Som Biomassa, que se creó recientemente para la producción local de pellets en los Pirineos. Sin duda, este efecto

contagio es otro de los éxitos del modelo: las cooperativas devienen instrumentos democratizadores que consiguen generar confianza entre un sector creciente de la población harto del trato y abuso de las grandes empresas.

Otro tema ciertamente relevante es que, pese a que podamos poner en valor la generación de masa crítica democratizadora, las empresas del oligopolio no parecen demasiado preocupadas por la penetración de esta ola renovadora. Como decíamos anteriormente, en el Estado hay 588 comercializadoras y el lucrativo negocio de las grandes empresas continúa ¿Por qué? Porque el margen de beneficio en la comercialización suele ser muy pequeño, del 3 al 5 por ciento, y no supone tener el control estratégico del sector. La generación y la distribución son mucho más lucrativas y, en términos estratégicos, la distribución eléctrica tendrá gran importancia en el presente y futuro de la transición energética.

La distribución es la actividad del sistema eléctrico que comprende el cableado que discurre por el subsuelo y las fachadas de las casas, en nuestros pueblos y ciudades, hasta el contador. Tiene un papel fundamental en la generación eléctrica distribuida renovable (y lo tendrá aún más en un futuro de mayor electrificación, de movilidad eléctrica, de autoconsumo, y de gestión de los datos de los contadores inteligentes Smart Meters) porque son las distribuidoras quienes conceden la conexión a la red (una actividad controlada en un 98 por ciento por el oligopolio), y porque son ellas las que, en última instancia, realizan el corte de suministro.

Pero quizás lo más relevante es que la distribución eléctrica es una actividad regulada. Ello significa que las empresas distribuidoras saben a principio de cada año, vía Boletín del Estado, los ingresos que recibirán por cada una de las operaciones de renovación, mantenimiento y ampliación de las redes. Es decir, las empresas saben por anticipado cuanto van a ganar y suelen minimizar los gastos para maximizar las ganancias con prácticas abusivas sobre las personas trabajadoras, en su gran mayoría empresas subcontratadas, y sobre sus clientes. Asimismo, son especialmente beligerantes ante cualquier asignación de responsabilidad respecto a la pobreza energética.

Por otro lado, las empresas del oligopolio también saben que la distribución va a jugar un papel clave en la transición energética y eso significa poder y lucro. Curiosamente, pese a ser actores del capitalismo global y precursoras de la privatización y del libre mercado, se sienten muy cómodas con una actividad regulada por el Estado, muy bien remunerada, y que ofrece estabilidad en sus balances anuales.

En resumen, tener el control de la distribución es tener el joystick de la generación eléctrica distribuida y de la relocalización de la energía. De ahí que la Xarxa per la sobirania energètica (Xse), un frente político de transformación de la energía creado en 2013 en Catalunya (integrado por organizaciones, colectivos y cooperativas verdes), ha planteado la necesidad de recuperar la propiedad y gestión de las redes

de distribución remunicipalizando la actividad. De hecho, la ciudad de Cádiz tiene su propia distribuidora (55 por ciento de propiedad municipal) y también pueblos como Centelles y Almenar en Catalunya, además de las cooperativas locales de Crivillent, Alginet y otras muchas en el País Valencià.

A todo esto, los debates técnico-jurídicos sobre la remunicipalización se dan de bruces con un marco legal del Estado español que cierra con candado las posibilidades de recuperar la distribución. La Xse ha organizado diversos debates en el ámbito local e internacional y ha realizado un estudio con posibilidades legales y legítimas para emprender el camino de la remunicipalización, pero los esfuerzos en materia energética de las diferentes “Ciudades del Cambio”, —las candidaturas transformadoras y rupturistas que irrumpieron en el panorama municipal español en 2015, entre las que se encuentra Barcelona en Comú de Ada Colau en Barcelona—, no estaban enfocados en la recuperación de las redes de distribución. Independientemente de ello, sigue siendo de suma importancia abrir el camino para arrebatar los activos físicos del sistema eléctrico al oligopolio.

Estos tres ejemplos, —la Alianza contra la Pobreza Energética y la ley 24/2015, las cooperativas verdes y la creación de masa crítica democratizadora, y la remunicipalización de la distribución de la Xse—, constituyen un conjunto de propuestas que, directa o indirectamente, restan poder a las grandes empresas. Ya sea desde el activismo de subsistencia que practica la APE con la defensa de derechos básicos de personas empobrecidas, o desde el activismo de proyecto emancipador, de las cooperativas y la Xse, estos frentes de lucha y muchos otros marcan un camino de largo plazo para dismantelar el poder corporativo en el sector eléctrico del Estado español. Otra cosa es la voluntad política de las instituciones; las puertas giratorias hacen mella en la separación de poderes. Esas voluntades inducidas se transforman con una mayoría social que presione desde la incidencia política, pero que vaya más allá. Ello requiere establecer alianzas con otros sectores y otros actores; construir una movilización coordinada que reclame los sectores básicos y estratégicos en manos de alianzas público-comunitarias. Lo público no es garantía de nada. Lo comunitario puede ser garantía de todo.

Los nuevos “granjeros municipales” de Francia

BARNABÉ BINCTIN

Casi cuatro mil millones de comidas se sirven cada año en las cocinas de los comedores escolares y de las guarderías de Francia. Empresas de catering como Sodexo dominan este mercado, pero sus comidas suelen tener escaso valor nutricional y ninguna consideración medioambiental. Varias ciudades de Francia se han revuelto contra este sistema y cultivan sus propios productos destinados a los comedores escolares.

A primera vista, la guardería Richemont del centro de la ciudad francesa de Vannes, no muy lejos de los muelles, se parece a cualquier otro centro infantil: toboganes de plástico y dibujos en las paredes, cajas llenas de pantuflas y botitas, colores brillantes por todas partes que le imprimen una sensación cálida y acogedora... Pero los padres que acuden a recoger a sus hijos al final de la jornada en una tarde de septiembre parecen un poco más tranquilos y menos estresados que los demás. “Cuando vengo a buscar a Suzanne, sé que ha comido bien, ingredientes frescos y saludables”, asegura Laëtitia, madre de esta pequeña rubia de dos años y medio. “Incluso está descubriendo nuevos alimentos que yo nunca cocino, como el calabacín y el hinojo... Es una forma fantástica de que aprenda cómo es la naturaleza y las estaciones”. En las últimas semanas, varios productos nuevos han hecho aparición en la guardería: frutas y verduras cultivadas por los agricultores oficiales de la ciudad que las entregan frescas dos veces por semana.

Todos están de acuerdo en que poder servir productos de calidad, idealmente locales, debe ser una prioridad. El director de la guardería lleva años trabajando para hacer realidad este sueño: “Es una realidad innegable. Los padres quieren que sus hijos tomen alimentos orgánicos sin procesar”, dice Bérengère Picard. Pero encontrar a un proveedor dispuesto a suministrar las cantidades correctas resultó complicado. “Dar de comer a niños pequeños es muy diferente a hacerlo



RIEUL TECHER, CC BY-SA

con adultos, porque las porciones son mucho más reducidas. Con 75 niños de entre dos meses y tres años, las necesidades de la guardería son limitadas. No encontramos a nadie que nos suministrara cantidades tan pequeñas de productos frescos. Nadie está interesado en vender cuatro kilos de frijoles frescos”, señala el director.

Entre tanto, el ayuntamiento de Vannes sufría problemas similares con sus comedores escolares: pese a su intención de llevar productos locales frescos a los comedores escolares y a que ofrecía tierras para cultivarlos, nadie se presentó al concurso: ningún huerto local estaba interesado en abastecer a nuestros comedores escolares. “Estamos hablando de un contrato público, lo que significa tener que garantizar una cierta cantidad todos los días, y entregarla a tiempo, con estándares de calidad y control muy estrictos... Es mucho para un solo agricultor. Y además, está todo el proceso de licitación que lleva mucho tiempo y es complicado, todo esto puede terminar desanimando al candidato más motivado”, explica Bérengère Trénit, director medioambiental del Ayuntamiento de Vannes. Con este panorama, es inevitable que las grandes empresas acaben ganando terreno a los pequeños agricultores.

¿Puede un ayuntamiento convertirse en productor de frutas y verduras orgánicas?

De este aparente estancamiento surgió un proyecto ambicioso a principios de 2018: si nadie en la región de Vannes estaba interesado en vender frutas y verduras a los comedores escolares, el ayuntamiento de Vannes tendría que cultivarlas él mismo. Buscó una hectárea de sus propiedades hortícolas y encargó a GAB 56, una red de agricultores orgánicos, que realizara un estudio de viabilidad. “Necesitábamos

realizar un análisis agrícola del terreno y elaborar un calendario de cultivos, y calcular el terreno que necesitaríamos para un huerto diversificado, teniendo en cuenta las necesidades predeterminadas y las cantidades requeridas”, comenta Maëla Peden, asesora de proyectos de GAB56.

El proyecto se está probando en tres guarderías públicas, con una media de 350 comidas al día (170 almuerzos y 170 meriendas), a fin de evaluar las implicaciones concretas de un proyecto a mayor escala. Y por lo que se ve no es tarea fácil: “Estamos acostumbrados a prestar este tipo de apoyo técnico a productores particulares, pero es la primera vez que lo hacemos para un gobierno local”, explica la ingeniera. “En estas condiciones, con un terreno que no se ha trabajado en varios años y que se pretende dedicar a varios cultivos orgánicos, necesitábamos encontrar un agricultor con bastante experiencia”. En la primavera de 2019, un candidato destacó por encima del resto. Encajaba perfectamente en el perfil y fue contratado. En poco tiempo aparecieron las azadas, picos y palas y se construyó oficialmente la granja municipal de Vannes.

Aunque es una idea muy nueva en Francia, no es del todo desconocida. Desde hace casi diez años, la ciudad de Mouans-Sartoux, en el departamento de Alpes Marítimos, se enorgullece de haber sido pionera en la construcción de una de las primeras granjas municipales. Y no fue una tarea fácil para una pequeña ciudad de 10.000 habitantes enclavada entre Grasse, Antibes y Cannes. Sumando los habitantes de Niza, a treinta kilómetros de distancia, 1,2 millones de habitantes viven en la conurbación. Enclavado en este paraíso, Mouans-Sartoux aparece como un pueblecito antiguo con cuatro hectáreas de cultivos en el área de Haute-Combe. Pero el experimento ha sido fructífero, y no solo en sentido figurado: cada año se cosechan y sirven 25 toneladas de frutas y verduras orgánicas en guarderías y comedores escolares (1.300 comidas para tres colegios y tres guarderías y para algunas pocas personas del Conejo). El 85% de los productos proviene de la granja municipal. Aunque un pequeño porcentaje de productos orgánicos viene de otras fuentes, Mouans-Sartoux es famoso por ser el primer ayuntamiento en Francia que garantiza que sus comidas escolares y de guardería sean 100% orgánicas.

El clima de la región tiene mucho que ver en el éxito del proyecto. Aunque parezcan villas gemelas, Cannes y Vannes tienen climas muy diferentes. A principios de octubre todavía luce el sol en la Costa Azul y los cultivos lo agradecen, aunque no son los únicos que se benefician del calor: una enorme culebra se escabulle entre la hilera de coles que crecen bajo red, a pocos metros de Gilles Pérole. “¡Es señal de que la biodiversidad está vivita y coleando!”, dice el concejal y diputado de educación y primera infancia sin inmutarse. Él ha sido en gran parte responsable de poner en marcha el proyecto desde su inicio en 2009.

“Si todos estamos de acuerdo en que lo orgánico es tan bueno, ¿por qué conformarnos con el 20 por ciento [los objetivos oficiales franceses]?”, pregunta Gilles

Pérole. “Pronto nos dimos cuenta, sin embargo, de que muchas veces los productos orgánicos tienen que recorrer un largo camino para llegar aquí, lo que encarecía su precio. Se necesitaba una estrategia coherente y pragmática. Si queríamos que todo fuera orgánico, tendríamos que obtenerlo de la región”. Pero el sol no es garantía de éxito. Pese a su magnífico clima, tampoco en el sur de Francia es fácil encontrar un productor interesado en un contrato público de abastecimiento de comedores escolares, por las mismas razones que en Bretaña: “Por la incertidumbre de la actividad, ningún agricultor puede comprometerse a suministrar una cierta cantidad de verduras para determinado número de comidas todos los días durante un año”, dice el concejal de Mouans.

Bueno para los alumnos y bueno para los agricultores

La idea de una granja municipal no se discutía en una ciudad donde muchos de sus servicios son de propiedad y gestión públicas: los comedores escolares, el agua potable, los servicios sanitarios y de salud, el transporte escolar y los servicios funerarios están gestionados por el ayuntamiento de Mouans-Sartoux, convencido de la importancia de lo público. “Subcontratar los servicios públicos no solo significa perder el control sobre la gestión y la calidad de un servicio, también sobre su coste. Sobre todo en la industria agrícola, donde los proveedores no tienen reparos en aplicar costes adicionales. Siempre están buscando maneras de aumentar el precio sin preocuparse por la calidad”, comenta Gilles Pérole.

Con ese objetivo se concibió la granja municipal: librarse de estas grandes empresas que dictan las leyes y los precios en el mercado del catering. Actualmente, dos tipos de empresas dominan el sector: empresas de catering especializadas en vender comidas a colegios y guarderías, con cocinas externalizadas a empresas privadas (Sodexo y Elior son las dos más importantes de Francia, con más de 500 millones de comidas servidas en 2018) y mayoristas de alimentos que hacen lo contrario a los servi-

Sodexo

Ingresos: 20.400 millones de euros (2018)

Directivos: Sophie Bellon (presidenta), Denis Machuel (consejero delegado)

Sede: Marsella, Francia

Fundación: 1966

Sectores: catering, servicios

Empleados: 460.663 (2018)

Datos clave:

- * Además de su histórica actividad de catering, Sodexo se está expandiendo a los servicios para gobiernos o empresas, incluyendo la gestión de prisiones privatizadas o de servicios de “motivación de trabajadores”.
- * Sodexo es uno de los principales compradores de alimentos de Francia, lo que lo convierte en un gran importador de soja o aceite de palma, pero también es una de las empresas menos transparentes de Francia en materia de impacto medioambiental.
- * Ha protagonizado varios escándalos de seguridad alimentaria, como la intoxicación de miles de escolares alemanes en 2012 con fresas importadas de China.

cios prestados por la ciudad. Pomona o Brake France son las más importantes. “Por toda Francia se ven los mismos camiones”, suspira Gilles Pérole. Y la comida que entregan estos camiones no tiene fama por su calidad precisamente. Con 3.700 millones de comidas entregadas al año y una facturación de 17.000 millones de euros, existe un enorme potencial para que las redes agrícolas locales se involucren en el mercado del catering.

La promesa de la granja municipal no solo busca llevar comida sana a los comedores. También beneficia a los agricultores. Franck Kerguéris, un agricultor de la localidad de Pérenno, a seis kilómetros del centro de la ciudad, va directo al grano: “A mi edad, no haría cualquier cosa”. Este padre de tres hijos con cincuenta y dos años está perdiendo el pelo, pero ha conservado el don de palabra. Habla continuamente de su pasión por la agricultura, a la que tuvo que renunciar por el agotamiento y la frustración tras constatar que extenuantes días de trabajo apenas “daban para comer”. En 2014, cerró su negocio de horticultura que había comenzado en una granja familiar de 25 hectáreas —en Plouhinec, a 40 kilómetros de Vannes— donde cultivaba desde hacía veinte años y que en 2000 recibió el certificado de orgánica. “Ser agricultor hoy significa ganar un salario de miseria y adeudarte hasta límites insostenibles”, lamenta.

Cuando vio por casualidad la convocatoria del ayuntamiento de Vannes, se le encendió la bombilla: “Sentía que me faltaba algo, que quería volver a mi antigua actividad”. De los varios factores que lo convencieron, uno de los más importantes fue la idea de servir a su propia localidad o lo que él llama “saber a dónde va mi producto”. Hasta ahora, tenía poco acceso a este mercado como agricultor. “Trabajé para TerreAzur (un mayorista de alimentos perteneciente al grupo Pomona) que abastece a varias comunidades con productos frescos. Pero no duró mucho: las condiciones eran imposibles para un pequeño agricultor. Trabajar con el ayuntamiento también es importante, porque entra dentro de una estrategia que tiene sentido para él. Pero no niega que las condiciones de trabajo también influyeron en su decisión de volver: “¡Recibir un salario cada mes es increíble! El 80 por ciento de las ventas de un huerto tienen lugar seis meses al año, los otros seis se dedican a buscar liquidez. Pero con el ayuntamiento el salario va llegando durante todo el año.

“Definitivamente es un modelo muy interesante”, dice nuestro hombre que ahora se hace llamar “agricultor municipal”. Sin embargo, Franck Kerguéris todavía no es funcionario de pleno derecho. Con un contrato de contratista de plazo fijo renovable, Franck Kerguéris se está planteando seriamente presentarse al examen de francés que le otorgaría la condición de funcionario público, con la seguridad y las favorables condiciones que lo acompañan. “Los agricultores reciben una pensión de 700 euros después de cotizar cuarenta años”, dice Kerguéris, que no se cree la cantidad de vacaciones que tendría que tomarse antes de fin de año. Mientras tanto, su salario mensual es de 1.500 euros.



RIEUL TECHER, CC BY-SA

No es mucho teniendo en cuenta todo lo que se espera de él. Se espera que para 2021 y trabajando solo, cultive treinta frutas y verduras distintas en la hectárea de terreno, que pronto contará con un invernadero de 1000 m² y un tractor. Por ahora, todavía crecen calabazas junto a grandes hojas de ruibarbo. Como ocurre en toda Francia, el verano no ha sido fácil este año, pero al final la sequía ayudó a Kerguéris a ponerse al día con los cultivos plantados. A las fresas, lechugas y calabacines que se planearon para 2019, se sumaron melones, sandías, tomates, pimientos y frijoles. Además de proteger de las enfermedades, el invernadero también debería ayudar a aumentar la producción y mejorar los rendimientos. Así sería más fácil lidiar con la dura realidad de los productos de temporada, el verdadero reto para ser autosuficiente. “La naturaleza no es tan compasiva a la hora de cubrir nuestras necesidades: cuando más producimos es precisamente cuando la demanda es más baja porque los niños están de vacaciones de verano”, bromea el agricultor.

Una nueva relación con los alimentos

El ayuntamiento de Mouans-Sartoux respondió a este problema congelando los productos frescos, para lo que invirtió en instalaciones de congelación y envasado. “Aunque todavía no estamos produciendo todas las frutas y verduras, no es por falta de espacio, sino por las estaciones. Todo es mucho más difícil en invierno”, añade Gilles Pérole. “Pero calculamos que con cuatro o cinco toneladas de productos congelados por año, podremos ser completamente autosuficientes”. Los dos concejales coinciden en la importancia de que todo sea orgánico. “Aunque tuviéramos que hacerlo nosotros mismos, no hubo mucha discusión sobre este punto: hubo unanimidad en que el producto debía ser de la más alta calidad, ¡y eso significaba orgánico!”, dice Bérengère Trénit.

Nadie le quita la razón, pero para el agricultor supone una demanda añadida. “Una granja orgánica solo tiene que sustituir los productos sintéticos con mano de obra. Pero esto requiere experiencia real: erradicar las malas hierbas, conocer la técnica de desbrozado de cada vegetal, etc. Y este conocimiento no se adquiere

de la noche a la mañana”, asegura Franck Kerguéris. También señala que “los precios de los productos orgánicos se están disparando, con lo que proporcionan el doble de beneficios que los convencionales. Esto significa que se importará más producto de todas partes. Aquí puedo garantizar el coste de la producción y puedo seguir produciendo un kilo de puerros por un euro hasta el día de mi jubilación. Para la comunidad es más rentable que pagar tres euros hoy y cuatro euros mañana, ¿verdad?”

La granja municipal también ha mejorado las condiciones de trabajo de Isabelle Marty. Para la jefa de cocina de la guardería Richemont, casi parece un nuevo trabajo: “Tener frijoles frescos no tiene nada que ver con abrir una lata... Tener todos estos deliciosos productos frescos nos obliga a idear nuevas recetas y dar rienda suelta a nuestra creatividad”. En el menú del almuerzo de hoy hay pescado, ensalada y compota de frutas. En la pizarra está escrito que la ensalada es de “verduras de la huerta”, elaborada con los ingredientes que Isabelle considere oportunos. Como había menos pepino de lo esperado, la preparó con tomates, pimientos y cebollas rojas. Y parece que a los niños les gusta, aunque sean muy pequeños para decirlo. “Ya no se dejan las verduras en el plato, ¡sino la pasta o el arroz!” dice Isabelle. Los pequeños también echan una mano pelando las vainas de guisantes y cosas así, una tarea nada aburrida para ellos. “En realidad, es muy importante por la forma en que los niños se relacionan con la comida. No se trata solo del sabor, también el olor y la textura, los colores y la sensación en la lengua ¡Preparar los alimentos forma parte del ritual previo a la comida!”, señala Isabelle Marty.

Sin embargo, el proyecto municipal no ha cambiado el sistema general de comedores escolares en Vannes. Los mismos mayoristas siguen trabajando con los mismos contratos y aún suministran la carne, la leche, el pan y la mayoría de las frutas y tubérculos. Pero el precio que pagan los padres por la comida tampoco ha cambiado. Los productos de la nueva granja municipal son, por ahora, un pequeño reclamo, algo extra y especial. En Vannes, la granja municipal es, junto con la apicultura y el pastoreo ecológicos, una declaración de intenciones del alcalde más que un cambio real hacia la autosuficiencia. “Todavía estamos muy lejos de nuestro objetivo”, reconoce Bérengère Trénit. “No tenemos suficiente terreno disponible, lo que significa que si incrementamos la cantidad, el coste aumentará. En una ciudad pequeña como Mouans-Sartoux puede funcionar, pero ¿es realmente posible y rentable a mayor escala? Todavía no lo tenemos claro”.

¿Deben los alimentos ser una excepción en las leyes de contratación pública?

El Ayuntamiento de Mouans-Sartoux encontró espacio para su proyecto agrícola entre las residencias de lujo y los edificios de apartamentos que proliferaban como setas. El precio de la tierra también aumenta y es de los más altos de Francia. El ayuntamiento tuvo que sacar su billetera: un millón de euros debió desem-



bolsar por el terreno y la mansión que ahora acoge el Centro de Educación Alimentaria Sostenible. Más tarde, el ayuntamiento tuvo que ir a los tribunales y ganó una demanda contra los promotores inmobiliarios y propietarios anteriores. “Por nuestro afán de poseer tierras y proteger

áreas naturales, somos bastante originales en la zona”, asegura Gilles Pérole. Pero el pueblo no iba a conformarse con esto. En 2012, la cantidad de tierra reservada para fines agrícolas del plan de desarrollo de Mouans-Sartoux aumentó de 40 hectáreas a un total de 112 hectáreas.

Sin embargo, Gilles Pérole tampoco cree que llevar comidas orgánicas locales a los comedores solo sea posible a través del modelo del Ayuntamiento: “Depende de la región y de cada situación: en Mouans-Sartoux, el modelo del Ayuntamiento funcionó bien porque no existían otros productores. Pero en zonas donde ya existen productores, puede haber otras estrategias válidas en cuanto a capacidad de producción”. Se trata de lograr la “soberanía alimentaria”, término que prefiere al de “autosuficiencia”. Según su visión: “Es más realista, porque es mucho más difícil de conseguir con los cereales o los productos lácteos. La soberanía consiste en decidir qué queremos comer y su procedencia”.

“Se trata de empoderar a las ciudades y comunidades para conectar sabiamente la naturaleza, la agricultura y la alimentación a través de un elemento tan importante como son los comedores escolares”, resume François Collart-Dutilleul¹, profesor emérito, miembro de la Academia Francesa de Agricultura y especialista en seguridad alimentaria y democracia. En su opinión, la idea de hacer de “los alimentos una excepción en el mercado de contratación pública” debe profundizarse más, ya que representa una forma de evitar que productos no locales lleguen a los mercados de suministro de las comunidades. A día de hoy, las sagradas leyes de la competencia nos atan de pies y manos: la legislación de la UE prohíbe que el origen geográfico de un producto sea un criterio en una licitación. “Es necesario que existan leyes especiales para los alimentos, que no es un ‘producto básico’ cualquiera; un suministro de tomates no es igual que uno de bolígrafos”, añade Gilles Pérole.

Con la ayuda del profesor, este concejal tiene pensado llevar el asunto al Parlamento Europeo (PE) en los próximos meses, y defenderá, por ejemplo, la inclusión de una cierta cuota negociada de productos locales: “Muchas veces los productores locales se han ofrecido a vendernos sus calabacines y hemos tenido que rechazarlos, con lo que han acabado en la basura. Todo esto es ridículo. Además de evitar este tipo

[1] Extracto de un artículo publicado en el diario francés Libération, 19 de febrero de 2017: https://www.liberation.fr/debats/2017/02/19/au-menu-des-elections-cantines-scolaires-et-service-public_1549563

de situación esperpéntica, promocionaríamos una visión completamente diferente de la agricultura.

“¿Qué pasaría si convirtiéramos los comedores escolares en un servicio público?” se pregunta François Collart-Dutilleul. “Se fortalecería el derecho básico a la alimentación, reconocido por la ONU en Europa y en Francia. Sin las leyes de competencia de la OMC, que no se aplican a los servicios públicos, no habría obstáculo a que los alimentos de origen local fueran una prioridad en los comedores escolares. Y convertirlo en un servicio público sería una oportunidad para poner en marcha una política de alimentación saludable y educar sobre nutrición, diferentes culturas alimentarias y sabores, y sobre la importancia de evitar el desperdicio”².

Mientras tanto, estos primeros experimentos de granja municipal han inspirado a otras ciudades en Francia (Gonfreville L'Orcher en Normandía y Cussac-Fort-Medoc en la Gironde). Visto el creciente interés (diez ayuntamientos lo han expresado abiertamente), Gilles Pérole tiene la intención de crear una red de granjas municipales con el propósito de reunir habilidades y compartir conocimientos. Al igual que el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán³, firmado por Mouans-Sartoux y más de 200 pueblos y ciudades de todo el mundo, este movimiento forma parte de una revolución mayor hacia una alimentación más sostenible, que ya se está sintiendo a escala internacional. Buenas noticias para las calabazas y las culebras del mundo, cuyo futuro parece ahora más halagüeño.

[2] Ibid.

[3] Protocolo firmado en 2015 por varias ciudades de todo el mundo, el Pacto de Política Alimentaria Urbana es una especie de foro de intercambio donde se comparten experiencias y buenas prácticas en materia alimentaria. Sus compromisos principales son tres: proteger las tierras agrícolas, priorizar las redes alimentarias locales y reducir el desperdicio. La quinta conferencia se celebró en Montpellier en octubre de 2019.

MÁS ALLÁ : PERSPECTIVAS SOBRE EL MUNICIPALISMO

Municipalismo público-comunitario para la defensa de los bienes comunes

LAIA FORNÉ

¿Qué lecciones podemos extraer de la experiencia de las “ciudades rebeldes” del Estado español en términos de confrontación con los poderes establecidos? Y, sobre todo, ¿cómo construir estrategias para un cambio efectivo y duradero con los movimientos sociales y la ciudadanía, más allá de la conquista del poder a nivel municipal?

El movimiento social en el Estado español 15M/Indignados del 2015 abrió la posibilidad de asaltar el poder institucional a diversos actores sociales que no formaban parte ni de la “clase política” ni del poder económico. Intrusos ellos en el sistema político institucional, pero a su vez herederos del legado de las luchas sociales y los movimientos vecinales. Parte de este nuevo movimiento desembocó en distintas “candidaturas ciudadanas” que impulsaron un cambio político en las instituciones y fueron protagonizadas por actores provenientes del cooperativismo, el feminismo, el ecologismo, el asociacionismo y el sindicalismo social; que entienden que un municipalismo transformador va más allá de la dimensión institucional y requiere de una apuesta real por la democracia radical.

En mayo de 2015 estas candidaturas ganan en ciudades importantes como Madrid, Zaragoza, Valencia o Barcelona y se constituyen los llamados “ayuntamientos del cambio”. De este modo, se inicia un nuevo ciclo político con grandes retos por delante: cómo construir otra manera de gobernar los recursos públicos que permita una mayor redistribución económica, mecanismos reales de democracia directa y un mayor control ciudadano. En definitiva, cómo diseñar instituciones “de lo



JESUSITO, CC BY-SA

común” que amplíen las formas de gestión pública con modelos de colaboración público-comunitarios.

Claramente, representa un reto contraintuitivo en un contexto de ciudades fuertemente globalizadas y mercantilizadas. Y es que la gobernanza urbana de nuestras ciudades se basa en una colaboración entre el sector público y el privado que ha supuesto la privatización de bienes fundamentales como el suelo, la vivienda, el agua o el patrimonio municipal, al mismo tiempo que se han producido estructuras de gobierno opacas y poco democráticas. La gobernanza impuesta ha sido la de las concesiones público-privadas, en las que lo privado absorbe los beneficios de macroproyectos especulativos y el riesgo lo asume el sector público.

Sin embargo, aún con la creciente mercantilización de las ciudades, han coexistido prácticas comunitarias que ante la desprotección del Estado han generado modelos alternativos de gobernanza y procesos de autoprotección social bajo lógicas de cooperación no mercantil. Estas geografías del contrapoder han producido ciudad a través de las luchas y conquistas sociales, prefigurando políticas municipalistas para defender los bienes comunes desde espacios sociales autogestionados, con prácticas para la cooperativización del trabajo, los servicios y los cuidados, o de reclamo del control democrático de recursos como la energía, el agua o la cultura.

De hecho, las políticas más redistributivas en ciudades como Madrid o Barcelona provienen de las luchas vecinales, muchas de ellas centradas en la construcción de infraestructuras en las periferias urbanas. Un ejemplo de ello es el Plan de Remodelación de Barrios en Madrid (1976-1988), con el que el movimiento vecinal

forzó grandes inversiones en más de 28 barrios necesitados y la construcción de más de 15.000 viviendas públicas¹, así como los planes de reforma de los distritos de mediados de los años ochenta, que aportaron grandes mejoras a los barrios obreros y migrantes de Barcelona.

Más tarde, a principios de los 2000, surgieron plataformas ciudadanas contra la precariedad y los problemas de acceso a la vivienda vinculadas a las redes de centros sociales autogestionados, a movilizaciones de barrios y a redes de cooperativismo y economía social.

Todo este legado y acumulación autogestionaria tuvo una nueva explosión en 2011, que se tradujo en la ocupación de plazas en todo el mundo. Contagiadas las unas por las otras, se respiraba un aroma de cambio que dibujaba otra manera de gobernar los recursos comunes y que ponía en entredicho el orden político y económico establecido.

El “municipalismo” es, pues, una palabra vacía sin las prácticas y el poder transformador del cooperativismo republicano, las luchas sociales, el movimiento feminista y el tejido asociativo y vecinal. Si estas luchas confrontaban la alianza capital-estado que ha hecho tambalear el derecho en la ciudad, hablar de municipalismo en la actualidad significa consolidar alianzas público-comunitarias que se enfrenten al establishment y que innoven en formas de “ser” y “hacer” institución pública.

Este texto intenta compartir algunas de las prácticas y reflexiones desde la experiencia del municipalismo barcelonés. En primer lugar, sitúa algunas de las principales dificultades del gobierno local en el contexto socioeconómico global para implementar medidas concretas y, seguidamente, desarrolla cuales han sido los distintos formatos de la colaboración público-comunitaria para imaginar algunas de las posibles claves de esta nueva “institución”.

¿Cuáles son los obstáculos en materia de legislación y poder corporativo?

Si uno de los retos del municipalismo es generar instituciones público-comunitarias que velen por la función pública y el acceso universal a los recursos, las dificultades a la hora de pensar en la creación de instituciones de lo común son múltiples: carencia de competencias municipales y de recursos económicos; grandes oligopolios y fondos buitres globales que operan en el territorio local sin control democrático ni político y, finalmente, carencia de marcos jurídicos que respondan a estímulos y métricas distintas de las lógicas mercantiles.

La política municipal se encuentra ante una paradoja difícil de resolver a corto plazo: aun siendo la administración más próxima a la ciudadanía es la que menos

[1] Moreno Martínez, R. Y Forné Aguirre, L. (2019) “Bienes comunes y municipalismo. Pasado y presente de una conquista popular” Ciudades democráticas <http://ciudadesdemocraticas.tecnopolitica.net/>

capacidad tiene para actuar a nivel local. Si bien la crisis ha supuesto un incremento de las demandas sociales, ello no ha venido acompañado de una mayor capacidad de intervención a escala local. La cartera de competencias elementales de los ayuntamientos es bastante limitada. En el caso de Barcelona, muchas de las competencias sobre derechos básicos como la salud, la educación o la vivienda son de ámbito autonómico. Por otro lado, el gobierno central se reserva competencias que son capitales para transformar el modelo de ciudad: las políticas laborales, ámbitos importantes de la regulación de la actividad económica y financiera y mecanismos de control y sanción sobre la inversión local. La política municipal se encuentra, por lo tanto, supeditada a la normativa autonómica o estatal, que en muchas ocasiones se ve también condicionada por directivas europeas.

La falta de financiación propia y, sobre todo, de capacidad de generar ingresos, es uno de los otros grandes problemas de la gestión municipal. Ello ha provocado que muchos ayuntamientos se endeuden por encima de sus posibilidades o que se descapitalicen vendiendo el suelo público a grandes capitales privados. La política de restricción del gasto y austeridad europea, iniciada en tiempo de crisis económica, ha puesto la soga al cuello a muchos ayuntamientos que dedican todo su presupuesto disponible a liquidar la deuda. También lo ha hecho la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)— del grupo de leyes conocidas como “Leyes Montoro” —, que ha provocado una reconcentración del poder en el gobierno central al tiempo que traslada responsabilidades hacia los municipios.

De esta manera, mientras que en la ciudad los grandes capitales globales operan sin restricciones, los ayuntamientos se encuentran paralizados a la espera de legislaciones que no llegan y bajo la mirada controladora de la Unión Europea, que da cobertura a los fondos buitres para que operen en el anonimato y sin ninguna clase de control democrático ni de rendición de cuentas.

El ámbito de la vivienda es un buen ejemplo. Aún con la voluntad del gobierno barcelonés para regular el mercado de alquiler, esto ha sido imposible. Por un lado, porque es necesario un cambio en la Ley de Arrendamientos Urbanos² —que depende de la legislación estatal—, así como una ley autonómica que regule el precio de los alquileres. Ni el cambio de una ni la creación de la otra han logrado los consensos políticos necesarios para ser modificadas. Por otro lado, tampoco ha tenido a su alcance intervenir en el libre mercado y poner límites a los grupos inmobiliarios que compran y venden el suelo sin rendir cuentas a nadie, amparados por regulaciones internacionales y acuerdos políticos que previamente han abonado el terreno para que puedan actuar.

[2] Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU): Ley estatal aprobada en 1994 que rige el mercado de alquiler privado. Ha sufrido diversas modificaciones, la última de ellas en 2013, que supuesto una creciente liberalización del mercado y ha beneficiado a los grandes operadores inmobiliarios. Más información en: <https://sindicatdellogateres.org/>

Es, pues, un callejón sin salida de difícil solución. El Ayuntamiento en este caso puede construir viviendas (si tiene la financiación y suelo público suficientes) e intervenir mínimamente en la regulación del suelo a través del urbanismo. No obstante, la capacidad de desarrollar una política pública integral que dibuje un horizonte real de acceso a la vivienda es algo que no está directamente en sus manos.

Otro ejemplo son los procesos de externalización de los servicios públicos de obras, servicios o suministros. La colaboración público-privada ha supuesto la creación de nuevos monopolios que han acaparado la gestión de los servicios municipales. Este procedimiento, que ha operado bajo el paradigma de la “eficiencia” y “la eficacia”, ha conllevado casos de corrupción con el beneplácito de actores públicos y de políticos. Un caso paradigmático es la gestión del agua bajo el monopolio de AGBAR, con un contrato fraudulento y del que obtiene beneficios anuales millonarios a expensas de la factura de los barceloneses y barcelonesas. El caso de la consulta por la remunicipalización del agua en Barcelona³ ha sacado a la luz la necesidad de revisar la gestión de los recursos municipales.

Desde que el Ayuntamiento de Barcelona anunció que se llevaría a cabo una consulta ciudadana para preguntar sobre la gestión del agua, a petición de más de 26.000 firmas recogidas, AGBAR ha desplegado un repositorio de recursos jurídicos y administrativos utilizando todos sus tentáculos en el establishment económico y político para impedir la consulta ciudadana. De hecho, hasta el momento todavía no se ha podido realizarla, aun con el acuerdo vigente del Pleno Municipal para hacerla efectiva.

Ante este ataque titánico a la soberanía local, las posibilidades de romper los marcos jurídicos y económicos nos devuelve, una vez más, a la consolidación de marcos público-comunitarios que obliguen a cambiar las reglas del juego. La apuesta público-comunitaria supone entrar en conflicto directo con una gobernanza que centraliza recursos y poder en actores privados y fuerzas políticas que actúan en escalas supramunicipales. Antes de batallar esta partida es imprescindible asumir cuál es el tablero de salida y saber nombrar las fichas por su nombre; también será necesario componerse con otros actores municipales y supramunicipales que permitan operar a nivel internacional.

El municipalismo hoy: distintas formas de relación público-comunitaria en Barcelona

El relato sobre la gobernanza urbana de las ciudades toma un nuevo sentido en las últimas décadas del siglo XX, cuando cobra bastante fuerza la idea de que el diseño de las políticas públicas y la toma de decisiones debe llevarse a cabo incor-

[3] Moviment per l'Aigua Pública i Democràtica (Movimiento ciudadano por una gestión pública y democrática del agua en el Área Metropolitana de Barcelona). En 2018, recogió más de 25.000 firmas para impulsar una consulta ciudadana sobre la gestión del agua en la ciudad. @aiguaBCN



SYLVIA FREDRIKSSON, CC BY

porando todos los actores institucionales, políticos, sociales y económicos. Se pasa así de un gobierno vertical a una “gobernanza” participativa, de cariz horizontal y plural. Al menos esta fue la promesa de líderes políticos europeos y entidades como el Banco Mundial (BM) o la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos (OCDE)⁴. Pero la realidad no ha sido esta. Si observamos la práctica real, las ciudades no se han construido sobre una base de equidad y cooperación entre las partes. La llamada gobernanza ha privilegiado los intereses de los actores privados respecto de los social-comunitarios.

En Barcelona, la gobernanza participativa ha tenido y tiene algunas singularidades que la diferencian del resto de ciudades vecinas. La gran riqueza asociativa (con más de 4.500 asociaciones) y la sobredimensionada arquitectura institucional participativa, han facilitado vasos comunicantes entre la calle y la institución. Aun así, esta relación histórica no ha sido siempre orgánica ni se ha traducido en una gobernanza participativa real, sino que a menudo ha servido para “cooptar” al movimiento asociativo y neutralizar el control ciudadano.

Si nos centramos en el ciclo más reciente desde el asalto institucional de 2015, durante estos cuatro años la relación entre las demandas vecinales y la acción de gobierno se ha dado de maneras diversas. A veces, por canales informales, otras, usando los mecanismos institucionales establecidos. A modo de síntesis, se pueden destacar cuatro tipologías. A cada una de ellas se la ha dado un nombre para hacer más comprensible la lectura, pero sin la intención de “sentar cátedra”. A continuación, se explican e ilustran con algunos ejemplos.

[4] OECD: Organization for Economic Co-operation and Development

La primera es la relación por “transferencia”. En estos casos, la Administración ha hecho suya la agenda política de los movimientos en aquellos ámbitos donde estaba configurada previamente. Principalmente, este sería el caso de la economía social, la movilidad, el cambio climático y los feminismos. El ejercicio ha sido convertir las demandas históricas de los movimientos en una política pública municipal que sea capaz de sostenerse en el tiempo. El resultado ha sido diverso (el análisis corresponde hacer el análisis a los distintos actores sociales), pero la intención de fondo era ensanchar y abrir los márgenes de la institución, utilizando la Administración como mera ejecutora de un legado colectivo.

Una segunda tipología es cuando se produce una relación de “cooperación” entre movimiento e institución. Se da cuando la suma de las partes se hace imprescindible para aprobar medidas que a priori no cuentan con el consenso del consistorio. Un ejemplo de ello es la recién aprobada ordenanza urbanística que obliga a los grandes promotores privados a destinar el 30 por ciento de las promociones inmobiliarias a construir vivienda pública. Mientras que el Ayuntamiento ha puesto el conocimiento técnico que ha permitido encontrar el resquicio en la legislación, los movimientos de lucha por la vivienda han generado opinión pública y han ejercido suficiente presión política como para romper la lógica partidista.

La tercera es la relación por “apropiación”. Es cuando los movimientos utilizan las herramientas de participación institucionales para conseguir sus fines. Cabe destacar los intentos de los gobiernos del cambio por crear nuevos canales de democracia directa, hasta ahora inexistentes, para la participación decisiva de la ciudadanía sobre temas importantes de la ciudad. Este sería el caso de la consulta para la remunicipalización del agua impulsada por el Moviment per l’Aigua Pública i Democràtica que despertó a los poderes económicos y políticos de la ciudad. Estos, al ver sus beneficios amenazados, intentaron impedir por todos los medios que la consulta se realizara, a pesar de haber sido aprobada de acuerdo al procedimiento establecido por el nuevo reglamento de participación.

La cuarta y última tipología es la relación de “corresponsabilidad”. Un ejemplo de ello es la creación del Programa de patrimonio ciudadano por el uso y gestión comunitaria de los bienes públicos⁵, impulsado conjuntamente por el Ayuntamiento y las entidades gestoras de equipamientos municipales. Tiene como objetivo crear nuevos marcos innovadores entre ciudadanía e institución para la gestión de los recursos públicos tales como equipamientos, huertos urbanos, espacio público u otros servicios de carácter social.

Este programa debe permitir la consolidación y mejora de la gestión comunitaria de equipamientos de proximidad, legitimar la cesión de patrimonio municipal a comunidades locales sin ánimo de lucro, y apoyar los servicios de iniciativa ciudadana para democratizar la gestión de los servicios municipales. Asimismo, debe repensar los modelos de gestión pública de bienes básicos como el agua y la



energía, que contemplen la participación de los usuarios y usuarias y mecanismos de control democrático⁵.

El Programa de patrimonio ciudadano incluye el desarrollo de un censo de bienes públicos (inexistente en la actualidad) para crear un catálogo de parcelas y edificios susceptibles de ser gestionados por las comunidades, y la figura del “balance comunitario”⁶. El balance se concibe como una nueva métrica y herramienta de autoevaluación que responde a parámetros no mercantiles partiendo de la observación de procesos como la corresponsabilidad social, la gestión democrática, la participación ciudadana, la orientación a las necesidades humanas, el compromiso con la comunidad y el retorno social.

Una victoria del programa es el caso de Can Batlló. Un convenio de cesión a favor del Espai comunitari i veïnal autogestionat de Can Batlló de más de 13.000 metros cuadrados, por un periodo de 50 años. Es un caso inédito en el Estado español y seguramente también en Europa. Por primera vez se aplica la fórmula de la concesión de uso privativo a un proyecto social sin ánimo de lucro al considerar que el retorno aportado por Can Batlló a la ciudad es social y no mercantil, gracias a su proyecto de dinamización comunitaria, social y cultural.

[5] Regidoria de Participació i Territori (2019), “Pla estratègic patrimoni ciutadà 2019-2023”. Ajuntament de Barcelona.

[6] Balance Comunitario: herramienta de autoevaluación de la gestión comunitaria <http://mercatsocial.xes.cat/ca/eines/el-balanc-comunitari/>

Todas estas tipologías ayudan a imaginar qué formatos puede tener una nueva gobernanza urbana que permita compartir responsabilidades y establecer mecanismos de seguimiento, balance y control de la gestión pública en un marco de relación público-comunitario.

Autonomía social y función pública: una ecuación posible

Por último, para cerrar haciendo sumario de lo que hemos visto, algunas reflexiones. Vemos, pues, tres procesos que se dan en las ciudades contemporáneas. En primer lugar, un proceso de neoliberalización, donde las ciudades y su acción pública quedan integradas en los intereses de actores privados, como es el caso de la gestión del agua en Barcelona. Seguidamente, un proceso de subsidiarización, donde los ayuntamientos tienen que responder a mayores demandas sociales, pero con las mismas competencias y sufriendo sanciones y controles ejercidos por parte de poderes supralocales, políticos y financieros, como el ejemplo de las políticas de vivienda. Y, en tercer lugar, un proceso de democratización, donde los movimientos urbanos y las comunidades locales defienden formas de gestión colectiva y derechos sociales y, en ocasiones, se alían con el poder público local para intentar consolidarlos.

En la línea del Programa de patrimonio ciudadano, estos procesos se dan de forma coetánea y conflictiva. El tipo de ciudad en que vivimos depende de la fuerza, alianzas y estrategia de los distintos actores que protagonizan cada proceso. Hasta ahora, la hegemonía público-privada persevera y los oligopolios locales-globales lideran los procesos de neoliberalización, comandan la subsidiarización e intentan disciplinar la democratización.

Cómo medir la capacidad de revertir los procesos de expropiación a través del municipalismo y la defensa de los bienes comunes no es una ecuación sencilla. Las fórmulas solo se pueden encontrar siguiendo el hilo de las luchas históricas que han empujado los procesos de transformación social.

Las experiencias situadas nos muestran que hay resquicios en la legislación actual para poder democratizar los reglamentos municipales, un ejemplo de ello es el caso de Can Batlló. También, que los poderes fácticos harán todo lo posible para que esto no suceda, como en la consulta por la gestión del agua. Es imprescindible seguir consolidando marcos de relación público-comunitarios que construyan una nueva gobernanza urbana para la gestión de los recursos comunes: seguir apostando por mecanismos de democracia directa que permitan a la ciudadanía intervenir en la gestión municipal y activar mecanismos de redistribución, control y transparencia de los recursos y servicios públicos.

En definitiva, un municipalismo transformador y democrático supone un cambio radical que pase por una nueva forma de hacer y ser institución pública; que

sepa conjugar espacios de autonomía social con la función público-estatal, una autonomía que brinde la capacidad a las comunidades para llevar a cabo políticas emancipatorias, sumada a la capacidad de la función pública de los ayuntamientos. Sin esta radicalidad democrática que amplíe los márgenes de la colaboración público-comunitaria y una mirada supramunicipal capaz de enredarse con otras realidades locales, será difícil construir un municipalismo que ponga en vanguardia políticas transformadoras y construya instituciones del bien común.

Democracia local y feminismo: herramientas claves contra el neoliberalismo

NURIA ALABAO

La noción de la “feminización de la política” es central en el movimiento municipalista del Estado español ¿Qué significa en términos de enfoques económicos y de la confrontación con el poder de las multinacionales y del sector financiero sobre las ciudades?

En la estela del movimiento social 15M, aquella explosión democrática que tomó las plazas como consecuencia de la crisis financiera del 2008, y que fuera predecesor del movimiento Occupy, surgió en el Estado español lo que sería conocido como “movimiento municipalista”. A partir del 2014, grupos de ciudadanos y ciudadanas de diversa procedencia, aunque muchos de ellos vinculados a los movimientos sociales urbanos y de resistencia al neoliberalismo, se unieron para dar el salto a la política institucional a nivel municipal y constituyeron valiosos experimentos de nuevas formas de organización política.

La crisis de legitimidad institucional —común en muchos puntos del planeta— y la puesta en cuestión de los partidos tradicionales como mediadores de las demandas ciudadanas que se originaron durante el 15M, inauguraron lo que se llamó “ventana de oportunidad”. Es decir, la posibilidad de posicionar nuevos partidos en un escenario institucional, el del tradicional bipartidismo, que hasta ahora se había demostrado muy poco flexible a la participación de nuevos actores. Además, la experiencia de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), un movimiento que había alcanzado una gran capacidad de movilización y una enorme legitimidad social, pero que no consiguió ninguna modificación legislativa o cambio real en las políticas de vivienda, parecía demostrar la idea de un cierto “techo de cristal” de los movimientos.

Este bloqueo de unas instituciones poco permeables a las demandas de la ciudadanía organizada, así como la necesidad de llevar adelante políticas de contención del sufrimiento social consecuencia de la crisis y las políticas de austeridad, dio paso a nuevas estrategias de intervención política desde los movimientos de base que habían sido muy reacios a la participación directa en elecciones en las últimas décadas.

Así se crearon candidaturas municipalistas —como Barcelona en Comú (BeC) o Ahora Madrid— en muchas ciudades y municipios españoles. Si bien surgieron muy apegadas a las principales luchas del momento, entre ellas la de la vivienda, también se vincularon de manera más o menos formal con las plataformas por la remunicipalización de servicios públicos, las asociaciones de vecinos, las luchas contra la especulación urbana o el movimiento feminista. La propuesta se articuló a partir de la idea de “confluencia”, que implicaba un intento de superar las formas de organización partidaria tradicional —esas que se consideraba que habían entrado en crisis— para generar un espacio plural donde se aunarían activistas y personas ciudadanas sin adscripción previa con partidos de izquierda más tradicionales.

Esa confluencia que daría paso a la “nueva política” se entendía no como un pacto entre partidos donde se reparten cuotas de poder, sino como la posibilidad de creación de un espacio distinto, de funcionamiento democrático sobre la base de objetivos compartidos: el programa que ya estaba escrito en las demandas de los movimientos sociales urbanos.

Esta propuesta de “radicalidad democrática” estuvo atravesada desde el principio por un discurso que quería utilizar las enseñanzas del feminismo como palanca de transformación de la política clásica que se pretendía impugnar. Los contenidos y propuestas feministas ya habían estado muy vivos en las plazas durante el 15M; el municipalismo recogió y trató de incorporar ese legado. Ese legado, sumado tanto a las luchas históricas como a nuevos factores, daría lugar en los años posteriores a la eclosión de un movimiento feminista que atravesó toda la sociedad como un tsunami y generó una de las movilizaciones más importantes de las últimas décadas —fenómeno que también ha eclosionado en distintos países del mundo—. Por tanto, no se puede entender la política de carácter emancipatorio sin considerar ese sustrato.

Así, la reivindicación de la “feminización de la política” del movimiento municipalista implicaba apostar por una profunda transformación de las formas de hacer política y de las propias instituciones y no, simplemente, la presencia de mujeres en primera línea. Para la exconcejala de Ahora Madrid, Montserrat Garcelán, hablar de política “masculina” implica hablar de jerarquía, de obsesión con el mando y el poder. Es decir, la legitimación de que los que gobiernan lo hacen para otros; la política como tarea de expertos. Pero si algo nos ha enseñado el feminismo es a asumir la política en primera persona —“lo personal es político”— y desde ahí,

desde las opresiones que nos atraviesan, transformarnos y transformar el mundo. Trae la posibilidad de encarnar una agenda de democratización radical de las formas de hacer política, que implica crear modelos organizativos más horizontales y procesos más descentralizados de deliberación y de toma de decisiones.

“La democracia empieza por lo cercano”, podría ser el lema del municipalismo. Y esta propuesta de transformación desde el ámbito local es donde reside la verdadera potencia del municipalismo feminista. Por ello, el programa de estas candidaturas se escribió mediante procesos participativos que recogieron las experiencias de personas y movimientos sociales sobre sus ciudades y municipios. Y sus propuestas engarzan bien con la revolución que propugna la economía feminista: poner las instituciones al servicio de las personas y no de los mercados. Una revolución por la que el principal objetivo de la economía no sea como hasta ahora la producción de beneficios, sino la reproducción de la vida en condiciones dignas.

Ello trae la potencia política de dar forma a una nueva utopía, pero una que se concreta desde hoy en una apuesta por los servicios necesarios para que ello sea posible —como lo son los suministros urbanos. Y ello implica recuperar servicios esenciales como el agua, la energía o el transporte público, y servicios sociales básicos como la educación y la salud. También implica una apuesta por una relación diferente con nuestro medio natural y las medidas para preservarlo. En definitiva, un programa para transformar a los gobiernos locales de gestores de nichos de mercado —donde las inversiones públicas están destinadas a facilitar el beneficio empresarial— en espacios comprometidos con atender las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas.

Hoy ya sabemos que esa tarea no es sencilla. Las experiencias y la historia del municipalismo de base nos enseñan que desarmar las tramas de poder local y su alianza con el poder de las multinacionales implica duras confrontaciones políticas. No es suficiente con sostener los gobiernos municipales. De hecho, algunos como el de Madrid ya se perdieron. Durante este proceso hemos descubierto lo fundamental que es para estas experiencias sostener amplias alianzas con la sociedad organizada e incluso impulsar y construir comunidades políticas que acompañen las propuestas de cambio institucional. Todavía quedan batallas abiertas en ciudades como Barcelona, que dependen de las fuerzas que seamos capaces de aglutinar. Sin duda, será importante estar preparadas y organizadas para las batallas por venir.

AUTORES Y AUTORAS

1. **Max Carbonell Ballester** (@maxcarbonell) es miembro del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), donde investiga la industria turística. Ha sido activista en el movimiento antideuda del 15M en el Estado español y en la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD). Actualmente milita en el movimiento popular por la vivienda en el barrio del Raval.
2. Enamorada de Berlín, **Déborah Berlioz** se instaló en esta ciudad en 2009. Periodista independiente, trabaja para varios medios francófonos, entre otros, la emisión de Accents d'Europe, de Radio France Internationale, o el semanario Réforme.
3. **Igor Lasić** vive y trabaja en Zagreb, Croacia. Escribe como periodista para la publicación semanal *Novosti* y también colabora con otros medios de comunicación, entre ellos, el semanario de sátira política *Feral Tribune*.
4. Graduado en Historia y Sociología, **Kenneth Haar** (@KennethHaar) trabajó como editor de una revista danesa sobre asuntos europeos antes de sumarse al órgano de control de lobbies Corporate Europe Observatory, con sede en Bruselas, en 2008.
5. **Yago Álvarez Balba** (@EconoCabreado), activista y periodista, es el coordinador de la sección sobre economía del medio independiente y cooperativista *El Salto*. También es coordinador y promotor de la Red Municipalista contra la Deuda Ilegítima y los Recortes, ha dirigido el documental "¿Quién ha hipotecado mi ayuntamiento?" y publicado el libro *Descifra tu deuda. Guía de auditoría ciudadana municipal*.
6. **Maria Maggiore** (@maggiorebrux), lleva veinte años cubriendo noticias sobre Europa desde Bruselas para el diario *La Stampa*, la estación de radio italiana Radio Popolare y el canal televisivo Euronews. Forma parte del equipo de periodistas Investigate Europe.
7. Periodista con experiencia en noticias locales, actualmente **Benoît Collet** (@benoitcollet1) cubre como periodista independiente temas sociales y ecológicos en Francia y el resto de Europa, especialmente en la región de los Balcanes.
8. **Olivier Petitjean** es un periodista francés asentado en París (y a veces, mucho más lejos, en Nueva Zelanda). Es el cofundador del Observatorio de las Multinacionales, dedicado a investigar las corporaciones francesas y el poder corporativo en general.
9. **Rachel Knaebel** (@rachelknaebel) trabaja como periodista entre Francia y Alemania para medios como Bastamag, Politis y Le Monde diplomatique.
10. **Hazel Sheffield** (@hazelsheffield) es una periodista y productora de cine afincada en Londres. Fue editora de negocios del periódico británico *The Independent*, y actualmente escribe sobre negocios y economía para publicaciones como *Financial Times*, *The Independent* y *The Times*. En 2016 fundó Far Nearer, un proyecto periodístico que ha localizado más de cien economías locales en estos años de austeridad y Brexit.
11. Economista de formación, **Maxime Combes** (@MaximCombes) ha sido activista en el movimiento de justicia global desde finales de la década de 1990, especialmente dentro de la organización Attac France. Es autor de *Sortons de l'âge des fossiles! Manifeste pour la transition* (2015, editorial Seuil) y coautor de varios libros colectivos.
12. **Barnabé Binctin** (@BinctinBarnabe) es un periodista especializado en temas de ecología política y justicia social. Cofundó Reporterre, un sitio web con noticias diarias sobre ecología, y actualmente trabaja como profesional independiente para varios medios de comunicación franceses, como Bastamag y el Observatorio de las Multinacionales.
13. Tras trabajar para la administración pública, **Guernica Facundo Vericat** (@XES_cat) cofundó empresas vinculadas con el campo del desarrollo económico, social y local. Firme defensora de las mujeres emprendedoras, actualmente colabora con LabCoop, una cooperativa que se dedica a apoyar nuevos proyectos de emprendimiento social.

AUTORES Y AUTORAS

14. **Radek Vrábek (@vrabel_radek)** estudia Filosofía en la Universidad Carolina de Praga. Es organizador comunitario en la localidad de Horní Jiřetín sobre temas de energía y medio ambiente. También es miembro del ayuntamiento.
15. **Olivier Hoedeman (@olivierhoedeman)** es uno de los fundadores del Corporate Europe Observatory (CEO), grupo de investigación y acción con sede en Bruselas que trabaja para denunciar y cuestionar el acceso privilegiado y la influencia de las corporaciones y sus grupos de presión en la elaboración de políticas en la UE. También es cofundador de la Alianza para la Transparencia de los Lobbies y la Reglamentación Ética en la UE (ALTER-EU), una coalición de ONGs de todas partes de Europa.
16. **Lina María González Correa** es una socióloga e historiadora colombiana. En los últimos años, su trabajo de investigación y publicaciones se han centrado en el campo de los negocios y los derechos humanos, prestando especial atención a las contrataciones públicas y las empresas de seguridad. Actualmente trabaja en el Instituto Internacional para la Acción No Violenta (NOVACT).
17. **Mónica Vargas Collazos (@MonicaVarColl)** es una antropóloga social boliviana. En los últimos 15 años, su trabajo se ha centrado en temas como los efectos de las empresas transnacionales europeas en América Latina, las megainfraestructuras y el vínculo con el régimen de comercio e inversiones. En la actualidad es miembro del proyecto Poder Corporativo, del instituto TNI.
18. **Eleonora de Majo (@EleonoraMajo)** fue elegida concejala del ayuntamiento de Nápoles en 2016. También ha sido presidenta de la comisión de concejales “Derecho a la ciudad”. Doctora en Filosofía Política, desde 2008 participa en diferentes movimientos sociales. Es una activista del centro social Insurgencia.
19. **Blanca Bayas Fernández (@blancabf_)** es miembro del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), Barcelona. Investiga los efectos de las privatizaciones y otros ataques del sistema capitalista y patriarcal. Ha escrito varios artículos sobre estos temas y es autora de *Deuda de cuidados: El patriarcado y el capital a la ofensiva, la economía feminista como propuesta*.
20. **Alfons Pérez (@Alfons_ODG)** es miembro del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG). Ha centrado su trabajo en el mundo de la energía, el clima y las finanzas. También es miembro de la Red para la Soberanía Energética en Cataluña.
21. **Laia Forné (@LaLaieta_)**, socióloga urbana, es miembro fundadora de La Hidra Cooperativa. Especializada en temas de planificación urbana, democracia y bienes comunes, siempre desde la perspectiva feminista. Ha trabajado como activista en estos ámbitos y participado en diferentes movimientos urbanos de la ciudad; también ha trabajado como consultora y, recientemente, como asesora de la Concejalía de Participación del Ayuntamiento de Barcelona.
22. Licenciada en Periodismo y doctora en Antropología Social y Cultural, **Nuria Alabao (@nu_alabao)** es miembro de la Fundación de los Comunes. Columnista de opinión y analista especializada en política, feminismo, movimientos sociales y extremas derechas. Editora de la sección “Feminismos” del medio digital Ctxt, ha participado en libros colectivos y escrito una larga lista de artículos para distintas publicaciones.

BIBLIOGRAFÍA

OBRAS

LEFEBVRE Henri

El derecho a la ciudad

Barcelona: Península, 1975.

HARVEY David

Breve historia del neoliberalismo.

Akal, 2007.

HARVEY David

Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana

Akal, 2013.

BIEHL Janet y BOOKCHIN Murray

Las Políticas de la Ecología Social.

Municipalismo Libertario.

Edición conjunta Virus ed., Fundación Salvador Seguí, Colectividad los Arenalejos.

Barcelona, 1998

COLAU Ada, Barcelona En Comú (coord.)

Ciudades Sin miedo: Guía del movimiento municipalista global

Icaria, 2018.

INFORMES

Remunicipalisation. How cities and citizens are turning back privatisation

(« Remunicipalización. Cómo ciudades y ciudadanía están escribiendo el futuro de los servicios públicos »)

Transnational Institute et alii,

junio del 2017, 237 p.

— Consultar en línea :

<https://www.tni.org/es/publicacion/remunicipalizacion-1>

Limitations of progressive municipalism within a neoliberal EU

(« Limitaciones del progresismo municipalista dentro de la EU neoliberal »)

Corporate Europe Observatory,

Transnational Institute y Barcelona en Comú,

enero del 2018, 21p.

— Versión en inglés : https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/progressive_municipalism_within_a_neoliberal_eu_-_report_final.pdf

El turismo o la vida. Trabajo y precariedad en la ciudad neoliberal

Observatori del deute en la globalització,

diciembre del 2019, 60p.

— Consultar en línea : <https://odg.cat/wp-content/uploads/2019/12/ODG-TURISMEPRECARIETAT-ANG.pdf>

(No) Todo es mercantilizable. El entramado financiero en el sector del turismo

Observatori del deute en la globalització,

noviembre del 2019, 56p.

— Consultar en línea : <https://odg.cat/publicacio/financer-sector-turisme/>

SITOGRAFÍA

Ciudades Transformadoras

El “Premio del Público” anual se entrega a las ciudades más innovadoras en sectores como el agua, la energía, la alimentación o la vivienda

<https://transformativecities.org/es>

Mínim, Observatorio municipalista

Una página web colaborativa dedicada a ampliar la voz del movimiento municipalista

<https://minim-municipalism.org>

Commonspolis

Un «Think-do Tank» al servicio del fortalecimiento del municipalismo. Entre otros, ha co-producido la capacitación en línea sobre el municipalismo “La Comuna es Nuestra!” (la-commune-est-a-nous. commonspolis.org/)

<https://commonspolis.org/>

Barcelona en Comú

La página de la plataforma municipalista de Barcelona, que también tiene una rama “global” (medium.com/@BComuGlobal)

<https://barcelonaencomu.cat/ca>

Future is Public

Materiales e informes de la conferencia “The Future is Public. Democratic Ownership of the Economy”, Amsterdam, diciembre del 2019

<https://futureispublic.org>

LOS ÚLTIMOS NÚMEROS DE LA COLECCIÓN PASSERELLE

- N°19/2019 :** *(Dé)passer la frontière*
(Disponible en francés e inglés)
- N°18/2018 :** *Eau, Bien Commun. Climat, territoire, démocratie*
(Co-edición con Olivier Petitjean – Observatoire des Multinationales, disponible en francés e inglés)
- N°17/2017 :** *¡Feminismos! Eslabones fuertes del cambio social*
(Disponible en francés y español)
- N°16/2017 :** *La vigilance sociétale en droit français*
(Co-edición con Sherpa, disponible en francés)
- N°15/2016 :** *Desvelando el derecho a la ciudad*
(Co-edición con HIC, disponible en francés, inglés y español)
- N°14/2016 :** *Multinationales : les batailles de l'information*
(Co-edición con el Observatoire des multinationales, disponible en francés e inglés)
- N°13/2015 :** *Clima: elegir o sufrir la transición?*
(Disponible en francés, inglés y español)
- N°12/2015 :** *La Prochaine Révolution en Afrique du Nord : la lutte pour la justice climatique*
(Co-edición con Platform London y Environmental Justice North Africa, disponible en francés y en árabe, en versión impresa)
- N°11/2014 :** *Para una información e Internet libres: Periodistas independientes, medios comunitarios, y hacktivistas se comprometen*
(Disponible en francés, inglés y español)
- N°10/2014 :** *La tierra es nuestra! Por la función social de la tierra y la vivienda. Resistencias y alternativas*
(Co-edición con Aitec, disponible en francés, inglés y español)
- N°9/2013 :** *Paysages de l'après-pétrole ?*
(Co-edición con La Compagnie du Paysage)
- N°8/2012 :** *L'efficacité énergétique à travers le monde, sur le chemin de la transition*
(Co-edición con Global Chance)
- N°7/2012 :** *Le Logement en Europe, Délogeons la crise !*
(Co-edición con Aitec, disponible en francés y en inglés)
- N°6/2012 :** *Les biens communs, modèles de gestion des ressources naturelles*
(Versión actualiza, disponible en inglés y portugués)
- N°5/2011 :** *Le pouvoir des entreprises transnationales*

**Ritimo**

21 ter rue Voltaire, 75011 Paris

Tél : +33 (0)1 44 64 74 16

www.ritimo.org / www.coredem.info

Paris, febrero 2020

Realización y coordinación

Emma Avilés Thurlow (ODG), **Olivier Hoedeman** (Corporate Europe Observatory), **Olivier Petitjean** (Observatoire des multinationales), **Sol Trumbo Villa** (Transnational Institute), **con el apoyo de Caroline Weill** (ritimo) y **Rachel Knaebel** (Observatoire des multinationales)

Coordinación de las traducciones

Olivier Petitjean, Caroline Weill

Traducciones

Chloé Billon, Olivier Petitjean, Caroline Weill y Traducciones Agora

Edición de los textos en castellano

Claudia Torrelli

Concepción gráfica

Guillaume Seyral

Diseño portada y compaginación

Clara Chambon

Derechos de reproducción

La reproducción y/o traducción de los artículos de esta publicación no solamente está permitida sino animada, con la condición de no modificarlos, mencionar la edición original e informar que Ritimo es su editor. Todos los artículos de la Colección Passerelle están en línea en el sitio de la Coredem bajo la licencia CC BY NC ND (www.creativecommons.org).

Ilustraciones

Salvo mención explícita de lo contrario, todas las ilustraciones de esta revista son imágenes bajo licencia Creative Commons (CC) provenientes del sitio flickr: www.flickr.com/creativecommons

Foto de cobertura

Luc Mercelis, CC BY-NC-ND

El contenido de cada artículo es de exclusiva responsabilidad de su autorx u organización.

Cada vez más, las ciudades son un lugar crucial de la resistencia y de alternativas a las multinacionales y a la lógica económica insostenible (social y ecológicamente) que éstas encarnan.

Desde la privatización del agua hasta Airbnb y Uber, pasando por la lucha contra la contaminación provocada por el diésel y el tráfico, hasta el fomento de una economía “relocalizada” —que no suponga otra vía para llenar los bolsillos de accionistas remotos—, en Europa se está gestando una batalla que enfrenta a las ciudades y a la ciudadanía contra multinacionales y el poder del mundo financiero.

Esta publicación es un primer intento para ofrecer una mirada holística del enfrentamiento entre ciudades y el poder de las multinacionales, que está teniendo lugar en muchos sectores y de distintas maneras. Incluye artículos escritos por activistas, periodistas, personas funcionarias y personal docente universitario de diferentes países europeos.

Ritimo

La asociación **ritimo** es editora de la colección Passerelle. Ritimo es una red de información y documentación para la solidaridad internacional y el desarrollo sostenible. Ritimo está comprometido con la producción y difusión de una información plural y crítica, que privilegia las fuentes asociativas, alternativas y autónomas.

La redacción de esta publicación ha sido coordinada por:



La colección Passerelle
se realiza con el apoyo de
la Fundación
Charles Léopold Mayer
pour le Progrès de l'Homme. 

Precio: 10 euros ISBN : 978-2-914180-86-3